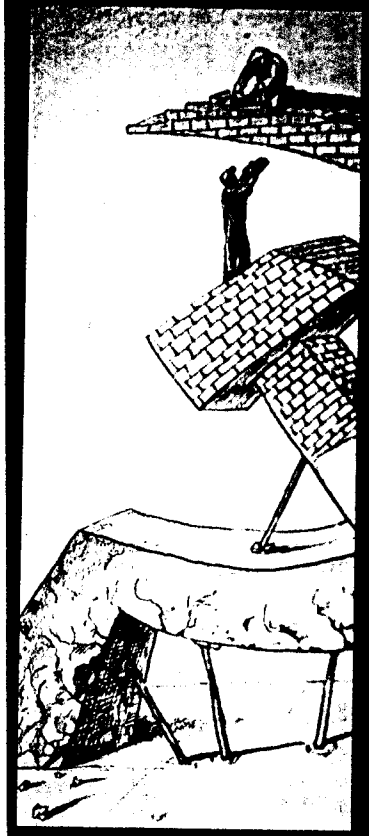
FIN DE SIGLO



ISBN 84-88413-11-4

RONSEL

LA DISOLUCIÓN DE LA URSS

Una introducción a la crisis terminal del sistema soviético

CARLOS TAIBO

RONSEL

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política y director del programa de estudios rusos del Instituto de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido editorialista en los diarios *El Independiente* y *El Sol,* y es columnista habitual en las páginas de *El País* y *El Mundo.* Ha escrito, entre otros libros, *La Unión Soviética de Gorbachov* (1989), *La Europa oriental sin red* (1992, 2ª ed), *La Unión Soviética 1917-1991* (1993), *Las fuerzas armadas en la crisis del sistema soviético* (1993) y *Europa sen folgos* (1994). En colaboración con José Carlos Lechado ha publicado también *Los conflictos yugoslavos* (1994, 2ª ed).

LA DISOLUCIÓN DE LA URSS

UNA INTRODUCCIÓN A LA CRISIS TERMINAL DEL SISTEMA SOVIÉTICO

CARLOS TAIBO

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MALAGA
6101194192
E.U. DE RELACIONES LABORALES
R. 4.606

RONSEL
EDITORIAL

FIN DE SIGLO ♦ ENSAYO

Director de colección:
Olegario Sotelo Blanco

© *Carlos Taibo, 1994*
© ***Ronsel S. L.**, 1994*

c/ Amílcar, 167, Barcelona 08032
Tel.: (93) 456 52 32
Fax: 436 67 37
Diseño de colección: Bautista Sotelo

ISBN: 84-88413-11-4
Depósito Legal: B-33.939-1994
Impreso en España / Printed in Spain
Libergraf, S.L. Constitució, 19
08014 Barcelona

Grupo gotelo blanco

El socialismo se desarrollará en todas sus fases, hasta sus últimas consecuencias, hasta sus últimos absurdos. Entonces, del seno titánico de la minoría revolucionaria brotará de nuevo el grito de la negación, y volverá a manifestarse una lucha a muerte en la que el socialismo ocupará el lugar del conservadurismo actual y será vencido por una revolución por nosotros desconocida.

A. HERZEN, 1849

Quien entrega al pueblo falsas leyendas revolucionarias, quien lo entretiene con historias melodiosas, es tan criminal como el geógrafo que levanta mapas mendaces para los navegantes.

H. LISSAGARAY

NOTA INTRODUCTORIA

En el momento en que este libro vea la luz poco faltará para que se cumpla el décimo aniversario del acceso de Mijaíl Gorbachov a la secretaría general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Aunque el ciclo histórico iniciado entonces no puede darse por concluido, parece que el decenio transcurrido tiene la suficiente entidad como para hacer un alto en el camino y bucear en las explicaciones de hechos que entre nosotros han levantado ya mucha polémica. Así las cosas, el objetivo primordial de este libro es analizar las claves explicatorias de la crisis terminal del sistema soviético, de su postrer intento de reforma y de los regímenes que han adquirido carta de naturaleza, inmersos en agudas convulsiones, en los últimos años. Es deseo del autor —acaso sólo medianamente satisfecho— que el texto sirva, de manera más precisa, para satisfacer dos tipos de aproximaciones: la de quienes deciden dedicar un tiempo a repasar, con ojo crítico, acontecimientos del pasado cercano, y la de quienes se proponen acometer un estudio más sistemático de esos mismos hechos.

Por lo demás, el texto se ha organizado en dos grandes partes. La primera quiere dar cuenta, en perspectiva cronológica, de lo ocurrido desde 1985 en la Unión Soviética y en los estados producto de su desintegración. Al respecto, y en seis capítulos, se estudian los rasgos fundamentales de la crisis del sistema soviético, la configuración inicial del proyecto de *perestroika*, la etapa terminal de esta última, el

golpe de agosto de 1991 y sus consecuencias, los problemas de la Federación Rusa como estado independiente y, en suma, el entramado de relaciones internacionales y de tesituras militares que se ha hecho sentir en los últimos años. Aunque ninguno de estos capítulos invoca en su título de manera expresa la «cuestión nacional», esta última atraviesa, como se verá, muchas de las argumentaciones desparramadas en sus páginas.

La segunda parte se interesa por materias que, en sustancia, atienden al objetivo de resituar de forma más precisa los principales problemas de ámbito internacional que se han hecho notar, en relación con la Europa central y oriental, en los últimos diez años. Así, los cinco capítulos que configuran esta parte analizan la naturaleza del «nuevo pensamiento» gorbachoviano, las limitaciones de las negociaciones de control de armamentos, las relaciones de la Unión Soviética con sus aliados centroeuropeos, los vínculos de la URSS en el Tercer Mundo y —considerémosla también, en su sentido más estricto, una materia de relaciones internacionales en un planeta interdependiente— la crisis ecológica contemporánea.

Como se puede apreciar, el libro remata con unas conclusiones de carácter general, que tanto aspiran a resumir su contenido como a pergeñar algunos horizontes de futuro. Cada capítulo incorpora prolijas bibliografías que es de esperar sirvan para acrecentar conocimientos y permitan buscar interpretaciones diferentes de las que se esgrimen en las páginas de esta obra. Con objeto de no sobrecargar el texto, el empleo de notas al pie se ha reducido al mínimo indispensable, de tal suerte que aquéllas se han reservado a argumentos directamente atribuidos, citas literales u observaciones de singular enjundia.

El volumen que el lector tiene entre sus manos obedece, en fin, a un viejo proyecto del autor: recopilar, en un todo con pretensiones de coherencia, materiales que en su momento aparecieron en otros libros más coyunturales o vieron

la luz en forma de artículos dispersos en revistas y publicaciones especializadas. Al respecto se han empleado textos publicados en varios libros: *La Unión Soviética de Gorbachov* (Fundamentos, Madrid, 1989), *Unión Soviética. La quiebra de un modelo* (La catarata, Madrid, 1991), *O castelo de fogos. Nove ensaios sobre o porvir da Europa do Leste* (Novo século, Iria Flavia, 1991), *La Europa oriental sin red* (La catarata, Madrid, 1992, 2ª edición), *Las fuerzas armadas en la crisis del sistema soviético* (La catarata-Bakeaz, Madrid-Bilbao, 1993), y *Europa sen folgos. Para entendérmo-los problemas das periferias europeas* (Sotelo Blanco, Santiago, 1994). También se han utilizado el texto «La desintegración de la URSS: política exterior y fuerzas armadas» (Centre d'estudis sobre la pau i el desarmament, Universidad Autónoma, Barcelona, 1994) y distintos trabajos publicados en las revistas *Viento sur* —«Rusia: ¿renace la industria militar?» (noviembre-diciembre de 1993)—, *Crisis* —«Rusia. El legado político del otoño» (enero de 1994)— y *El viejo topo* —«Militares e imperio» (abril de 1994). Como es lógico, en el proceso de elaboración de este libro se le ha conferido a todos esos textos una entidad nueva, ajustada a los objetivos enunciados unos párrafos más arriba.

La posibilidad de acopiar materiales que son, a la postre, el producto de diez años de trabajo la ha ofrecido Olegario Sotelo Blanco, quien desde meses atrás, y frente a las reticencias comunes en tantos editores, alentó la publicación del libro que el lector tiene entre sus manos. Vaya para él mi agradecimiento.

CARLOS TAIBO,
Santiago de Compostela, agosto de 1994

CRONOLOGÍA

1985

Marzo. Muerte de Chernenko; Gorbachov se convierte en secretario general del PCUS. Se reanudan las conversaciones en distintos foros de control de armamentos.

Abril. Los estados miembros del Pacto de Varsovia prorrogan la vigencia de éste durante veinte años.

Julio. Gromiko es sustituido por Shevardnadze a la cabeza del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Agosto. La URSS inicia una moratoria unilateral de pruebas nucleares.

Noviembre. Cumbre de Ginebra entre los EE UU y la URSS.

1986

Enero. Gorbachov presenta un plan de desnuclearización global para el año 2000.

Febrero-marzo. Se celebra en Moscú el XXVII Congreso del PCUS.

Abril. Grave accidente en la central nuclear de Chernóbil.

Agosto. Se autoriza la constitución de empresas conjuntas con capital extranjero.

Septiembre. Se introducen algunas medidas liberalizadoras del trabajo privado.

Octubre. Cumbre de Reykjavik entre los EE UU y la URSS.

Diciembre. Sájarov abandona su exilio de Gorki y se traslada a Moscú. Disturbios nacionalistas en Kazajstán.

1987

Febrero. La URSS pone fin a su moratoria de pruebas nucleares.

Mayo-junio. El ministro de Defensa, Sokolov, es destituido tras producirse en la plaza Roja de Moscú el aterrizaje de una avioneta pilotada por un joven alemán.

Junio. Se aprueba un proyecto de reforma económica concretado en la «Ley de empresas del estado».

Octubre-noviembre. Yeltsin, secretario del PCUS en Moscú, pierde su puesto en el Politburó.

Diciembre. Cumbre de Washington entre los EE UU y la URSS, que firman un acuerdo de desmantelamiento de fuerzas nucleares de alcance intermedio con base en tierra.

1988

Febrero. Graves disturbios en Nagorni-Karabaj; *pogrom* antiarmenio en Sumgait, en Azerbaiyán.

Mayo. Se firma en Ginebra un acuerdo que prevé la retirada de todas las tropas soviéticas presentes en Afganistán.

Mayo-junio. Cumbre de Moscú entre los EE UU y la URSS.

Junio-julio. Se celebra en Moscú la XIX Conferencia Extraordinaria del PCUS.

Diciembre. Gorbachov anuncia ante la Asamblea General de la ONU una reducción unilateral de tropas y dispositivos en Europa central y oriental. Grave terremoto en Armenia.

1989

Enero. Bush se convierte en presidente de los EE UU.

Febrero. Las últimas tropas soviéticas abandonan Afganistán.

Marzo. Elecciones al Congreso de Diputados Populares. Se inician en Viena nuevas conversaciones sobre reducción de fuerzas convencionales en Europa.

Abril. Dura represión de una manifestación nacionalista en Tbilissi, en Georgia.

Mayo. Gorbachov visita China.

Mayo-junio. Primera reunión del Congreso de Diputados Populares.

Julio. Una huelga en la minería se extiende por distintas partes de la URSS.

Agosto. Un miembro de *Solidarnosc*, Mazowiecki, se convierte en primer ministro polaco.

Octubre. Gorbachov visita la RDA.

Noviembre. Se abre el muro de Berlín. Es objeto de debate en la URSS un nuevo programa económico, conocido con el nombre de «plan Abalkin».

Diciembre. Cumbre de Malta entre los EE UU y la URSS. El Partido Comunista de Lituania opta por independizarse del PCUS. Muere Sájarov. Havel se convierte en presidente de la república checoeslovaca. En Rumania, una breve guerra civil concluye con la ejecución del presidente Ceausescu.

1990

Enero. Gorbachov anuncia en Lituania un procedimiento que permitirá ejercer el derecho de autodeterminación. El ejército soviético interviene violentamente en Azerbaiyán. Hungría reclama la retirada de las tropas soviéticas.

Febrero. El PCUS renuncia a su papel dirigente, contenido en la Constitución soviética. Los poderes de Gorbachov se ven sensiblemente reforzados.

Marzo. El parlamento lituano proclama la independencia de la república.

Abril. El parlamento soviético aprueba una «Ley de secesión».

Mayo. Yeltsin es elegido presidente del parlamento ruso.

Julio. Entra en vigor la unión económica, monetaria y social de las dos Alemanias; Gorbachov acepta que la Alemania unificada sea miembro de la OTAN. Se celebra el XXVIII Congreso del PCUS.

Septiembre. La RDA abandona oficialmente el Pacto de Varsovia.

Octubre. Entra en vigor la plena unificación de las dos Alemanias. Gorbachov recibe el premio Nobel de la Paz. El presidente soviético rechaza un programa económico conocido como de los «quinientos días».

Noviembre. Se firma en París un acuerdo de reducción de fuerzas convencionales en Europa. Gorbachov propone un Tratado de la Unión.

Diciembre. Pugo sustituye a Bakatin a la cabeza del Ministerio del Interior. Dimite el ministro de Asuntos Exteriores, Shevardnadze.

1991

Enero. Represión militar en las repúblicas bálticas. La URSS respalda las acciones norteamericanas contra Irak.

Febrero. Un 90% de los lituanos ratifica en referéndum la independencia de la república.

Marzo. En el transcurso de un referéndum sobre la Unión, un 76% de los soviéticos se pronuncia por el mantenimiento de ésta; la abstención es general, sin embargo, en algunas repúblicas.

Abril. Nueve repúblicas soviéticas inician en Novo Ogariovo, bajo la supervisión de Gorbachov, la discusión del Tratado de la Unión.

Junio. Tras imponerse en unas elecciones, Yeltsin se convierte en presidente de la Federación Rusa. Concluye la retirada de tropas soviéticas en Hungría y Checoslovaquia. Declaraciones de independencia de Eslovenia y Croacia.

Julio. Queda disuelto el Pacto de Varsovia. Gorbachov propone se abandone el «marxismo-leninismo». Los EE UU y la URSS firman en Moscú un acuerdo de reducción de fuerzas nucleares estratégicas (START-I). El ejército federal yugoslavo apoya a las milicias serbias en Croacia.

Agosto. Intento fallido de golpe de estado en la URSS. El PCUS es puesto fuera de la ley. Las repúblicas bálticas se declaran independientes.

Diciembre. Los ucranianos respaldan, en referéndum, la opción independentista avalada por el presidente Kravchuk. Nace la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en la que se integran todas las ex repúblicas soviéticas, excepto las tres del Báltico y Georgia. Desaparece formalmente la Unión Soviética.

1992

Enero. En la Federación Rusa se inicia la aplicación de un duro programa económico, el «programa Gaidar». Alto el fuego, respetado por las partes enfrentadas, en Croacia. El presidente de Georgia, Gamsajurdia, se ve obligado a abandonar el país.

Febrero. El parlamento de Estonia aprueba una «Ley de ciudadanía».

Marzo. De las veinte repúblicas que integran la Federación Rusa, dieciocho firman un Tratado de la Federación; Tatarstán y Checheno-Ingushetia se abstienen. El diario *Pravda* deja temporalmente de publicarse. Shevardnadze se convierte en presidente del Consejo de Estado de Georgia. Dimite el presidente azerí, Mutalíbov, quien es sustituido por Mamédov.

Abril. Se agravan las tensiones entre la Federación Rusa y Ucrania con motivo de la flota del mar Negro. Un conflicto armado se extiende por Bosnia-Herzegovina.

Mayo. Yeltsin crea un Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. El parlamento ruso cuestiona el valor jurídico de la entrega de Crimea, en 1954, a Ucrania. Sangrientos enfrentamientos armados en Tadzhikistán.

Junio. El parlamento ruso aprueba un programa de privatización. Varios partidos crean en la Federación Rusa una coalición, con el nombre de Unión Cívica. Graves enfrentamientos armados en Moldavia entre unidades rusas y moldavas. Los presidentes ruso y ucraniano alcanzan varios acuerdos, fundamentalmente económicos, en Dágomis.

Septiembre. Se acrecientan los enfrentamientos bélicos entre Georgia y la república de Abjazia. Se celebran elecciones generales en Estonia, con triunfo de las fuerzas de derecha.

Octubre. Se inicia el proceso de privatización en la Federación Rusa. El Partido Democrático del Trabajo, formado por antiguos miembros del Partido Comunista de Lituania, obtiene un claro triunfo en las elecciones generales celebradas en la república. Kuchma es designado primer ministro ucraniano. Shevardnadze se impone en las elecciones celebradas en Georgia. Fracasa un intento de golpe de Estado en Tadzhikistán, en un clima de guerra civil.

Diciembre. Chernomirdin se convierte en primer ministro de la Federación Rusa, tras desplazar al equipo de Búrbulis y Gaidar. Yeltsin consigue prorrogar sus reforzados poderes presidenciales. El presidente ruso visita China.

1993

Enero. Los EE UU y la Federación Rusa firman en Moscú un nuevo acuerdo de reducción de fuerzas nucleares estratégicas (START-II). Clinton se convierte en presidente de los Estados Unidos.

Febrero. Brazauskas se impone en las elecciones presidenciales lituanas.

Marzo. Yeltsin pierde parte de sus poderes presidenciales y reacciona restringiendo los poderes del Parlamento.

Abril. Cumbre de Vancouver entre los EE UU y la Federación Rusa; se acrecientan las ayudas económicas destinadas a esta última. Se produce un escape radioactivo en un complejo nuclear en Tomsk, en la Federación Rusa. Se inicia en Moscú el proceso contra los responsables del golpe de agosto de 1991. El presidente ruso, Yeltsin, obtiene una mayoría de votos en un referéndum-plebiscito. Ofensiva armenia en territorio azerí.

Junio. Se reúne en Moscú una polémica «conferencia constitucional». «Camino Letón», una coalición encabezada por antiguos dirigentes del Partido Comunista republicano, se impone en las elecciones generales letonas. Los mineros presionan con dureza sobre el gobierno ucraniano. Claros progresos de las milicias armenias, que ocupan todo Nagorni-Karabaj; en Azerbaiyán el presidente Elchibey huye, en un clima de guerra civil. Estonia congela su «Ley de ciudadanía». Conato de rebelión en la flota rusa del mar Negro. Serbia y Croacia proponen un plan de partición de Bosnia-Herzegovina.

Julio. Intensos combates en Abjazia. Se acentúan los enfrentamientos en Tadzhikistán. Polémica sustitución de billetes en la Federación Rusa.

Agosto. Un referéndum ratifica la posición de Alíev como hombre fuerte de Azerbaiyán. Concluye la retirada de tropas rusas en Lituania.

Septiembre. Yeltsin destituye, temporalmente, al vicepresidente ruso Rutskoi. Ucrania accede a traspasar a la Federación Rusa la flota del mar Negro y las cabezas nucleares en su poder, a cambio de diversas ayudas económicas. Gaidar retorna al gobierno de la Federación Rusa. Se recrudecen los enfrentamientos en Abjazia; las tropas georgianas pierden Sujumi. Yeltsin disuelve el parlamento ruso y anuncia elecciones generales anticipadas.

Octubre. Tras numerosos enfrentamientos callejeros, Yeltsin declara el estado de excepción y unidades militares atacan el edificio del parlamento ruso, produciendo decenas de muertos. Georgia solicita su ingreso en la CEI.

Diciembre. Se celebran en la Federación Rusa elecciones generales y un referéndum constitucional. En las primeras, con una amplia dispersión del voto, la formación política más votada es el Partido Liberal Democrático de Zhirinovskii; en las segundas, y en medio de acusaciones de irregularidades, la Constitución avalada por Yeltsin consigue superar los listones establecidos.

1994

Enero. El viceprimer ministro ruso, Gaidar, dimite de su puesto. El presidente Akáev recibe un apoyo masivo en un plebiscito celebrado en Kirguizia. Meshkov, un candidato pro-ruso, gana las elecciones presidenciales en Crimea.

Febrero. El parlamento ruso amnistía a los encausados por el golpe de 1991 y a los dirigentes encarcelados por los sucesos de octubre de 1993.

Abril. La Federación Rusa protesta por las acciones de aviones de la OTAN en Gorazde (Bosnia). Yeltsin promueve un «acuerdo cívico» entre distintas fuerzas políticas y sociales.

Mayo. Solzhenitsin, escritor exiliado desde los años setenta, regresa a Rusia.

Junio. La Federación Rusa se adhiere a la «Asociación para la paz».

Julio. Kuchma, vencedor en las elecciones, es elegido presidente ucraniano. Lukashenko, que había realizado una campaña basada en la lucha contra la corrupción, se impone en las elecciones presidenciales en Bielorrusia. Tras sucesivos desacuerdos, la Federación Rusa se compromete a retirar con urgencia sus tropas estacionadas en Estonia.

Agosto. Las últimas unidades militares rusas abandonan Estonia y la RFA.

I PARTE

I PARTE

LA CRISIS DEL SISTEMA SOVIÉTICO

El propósito de este capítulo inicial es ofrecer un panorama global de los términos de una crisis, la del sistema soviético, que se hizo manifiesta a finales de los años setenta. Por razones fáciles de comprender, el grueso de nuestra atención se centrará en el análisis de un buen número de problemas económicos, de tal suerte que dejaremos en un segundo plano las otras manifestaciones, más convencionales, de la crisis. En otros capítulos de este libro nos ocuparemos, en particular, de las dimensiones «internacionales» de la crisis que nos ocupa.

Antes de entrar en materia conviene, eso sí, decir algo sobre el entorno político de los fenómenos que nos van a ocupar. La culminación de un proceso de concentración del poder y el reconocimiento de las aspiraciones de un grupo dirigente cada vez más asentado fueron dos de los rasgos del sistema político que, bajo la férula de Brézhnev, se impuso en la segunda mitad de la década de 1960 y durante el decenio siguiente.

Aunque a partir de 1965 se verificó lo que en más de un sentido constituía un retorno a la era de Stalin, es innegable que entre la política de Brézhnev y la de su antecesor, Jrushchov, había un elemento común que marcaba diferencias con respecto al estalinismo: el terror de masas había desaparecido y había dejado expedito el camino a un sistema más tolerante o menos necesitado de recurrir a la violencia física contra capas importantes de la población.

Esta especie de «estalinismo sin terror de masas», que es lo que para algunos autores acabó siendo el «brezhnevismo», reclamaba, sin embargo, un aplastamiento de todas las iniciativas de reforma y una política de prevención ante la posible manifestación de una conducta autónoma por parte de los agentes sociales. El sistema se asentaba en la certeza de que el estalinismo no podía repetirse en los mismos términos y de que, en consecuencia, se habían debilitado las condiciones para un uso despótico de la maquinaria del estado y del Partido. Se perfilaban así algunas reglas de juego en el ejercicio del poder —recuérdese, por ejemplo, que Brézhnev hubo de tomarse su tiempo para acceder a una situación de dominio indisputado—, mientras los flujos de información, bien que lentamente, no dejaban de incrementarse.

Al tiempo que el Partido reconfiguraba su dominio sobre el conjunto de la sociedad, se producía en su interior una progresiva jerarquización que ponía fin a las tímidas veleidades liberalizadoras de Jrushchov. La Constitución de 1977 hizo del Partido la fuente única de dirección, en un escenario en el que los usos políticos reforzaban el peso de la figura de su secretario general. Los miembros de la cúpula directora lo eran, por lo demás, en su calidad de representantes de los distintos estratos de la burocracia gobernante, cuyas aspiraciones de seguridad y reconocimiento se vieron ampliamente satisfechas. La corrupción y un creciente culto a la personalidad fueron otros elementos que se manifestaron con vigor singular en el curso de unos años que fueron también los de un gigantesco esfuerzo militar: a la quiebra de los equilibrios sobre los que se asentaba la «economía civil» le acompañó la irrupción de un sector de «producción de medios de destrucción» con una capacidad tecnológica manifiestamente superior.

A duras penas podrá comprenderse la pervivencia del sistema soviético si se olvida el apoyo, bien que relativo, que recibió de parte de la población, seducida por un imaginario en el que se sumaban la liberación de la tiranía zarista, la victoria frente al invasor alemán, el orgullo de la superpotencia y, en otro plano, la satisfacción de unas necesidades sociales mínimas y cierto equilibrio entre una disciplina laboral mermada y un nivel de vida poco satisfactorio. Las expectativas de crecimiento y de bienestar toparon, sin embargo, con la crisis de un sistema que todavía no había iluminado las condiciones de su destino inmediato y en cuya cima apenas se vislumbraba la aparición de un revulsivo terminal.

La planificación central y sus problemas

Buena parte de los problemas inherentes a las economías de tipo soviético se derivaban de dos hechos: el control —excesivo y, al tiempo, ineficaz— sobre los factores de producción y la escasa fiabilidad de la información a ellos referida. La exposición que sigue se ocupa ante todo de describir la función de las «empresas» en su relación con otras dos instancias, que llamaremos «ministerios» y «organismos directores». Nos referiremos también a los papeles desempeñados por las «economías domésticas» y por una pujante «economía complementaria».

Kiva Maidanik ha descrito el funcionamiento de la planificación central del siguiente modo: «Se basa, en primer lugar, en un procedimiento de dirección autoritario, administrativo, de ordeno y mando. Todo está concentrado en manos de un aparato central, del estado. Todo es planeado desde el centro, reglamentado desde arriba hacia abajo, del Comité Estatal de Planificación y el Consejo de Ministros hacia los ministerios, de los ministerios hacia las agrupaciones de empresas, de éstas hacia las unidades de producción. Todo va en una sola dirección: desde arriba hacia abajo. Cada empresa recibe todo del estado, del ministerio (...). Este determina qué, cuánto y cómo debe producir, el volumen de personal, los salarios, el precio de los productos, a quién mandar cada pieza producida. El plan, que adopta la forma

de ley, lo detalla todo, y determina lo que es y lo que no es progreso técnico».[1]

a) *Las empresas*. En un sistema de planificación central las empresas eran objeto de dos flujos de comunicación. Por un lado, transmitían información a los ministerios correspondientes; por el otro, recibían de éstos, y de los comités estatales, instrucciones que afectaban a lo que se esperaba produjesen, al volumen y la remuneración de la fuerza de trabajo que debían emplear, a los recursos que tenían que invertir y a las fuentes en que podían encontrarlos. Su funcionamiento se resume diciendo que obtenían un beneficio si utilizaban adecuadamente los recursos a su disposición; si, por el contrario, se servían de ellos de forma deficiente, la situación no presentaba una extrema gravedad: recibían del estado ayudas y subsidios que les permitían proseguir con su actividad. En palabras de Otto Latsis, «el sistema es como una persona que no siente dolor. En términos médicos esto es muy peligroso y constituye una enfermedad, que puede ser fatal por cuanto las señales de dolor son fundamentales».[2]

Un sistema como el descrito partía de una premisa —la producción no debe ser objeto de traba alguna— y de un supuesto —las empresas adoptan siempre las decisiones correctas en cuanto a asignación de sus recursos. Así las cosas, se alentaba un volumen de inversiones superior al que podía ser asumido por los sectores de construcción y equipamiento, con lo cual los plazos de conclusión de las obras se postergaban y se producía un doble efecto: por un lado, un crecimiento lento y desacompasado, y, por el otro, un número excesivo de puestos de trabajo. Aparte, las empresas carecían de estímulos para producir nuevos bienes e introducir tecnologías; aun en caso de obtener autorizaciones al respecto, lo común era que no contasen con los suministros necesarios y que se expusiesen a no satisfacer las exigencias del plan. Al ser muy lenta la renovación del capital, se veían obligadas a destinar muchos recursos a tareas de reparación.

[1] Kiva Maidanik, *Perestroika: la revolución de las esperanzas* (Vanguardia, Managua, 1987). págs. 31-32.

[2] *Detente* (nº 9-10, 1988), pág. 7.

En la medida en que transmitían información a los ministerios, las empresas influían en la determinación de los objetivos del plan. Por lo común proporcionaban datos estadísticos retocados y solían solicitar un mayor volumen de fuerza de trabajo y de otros recursos del que precisaban. Acumulaban, además, reservas que alcanzaban niveles muy superiores a los necesarios, para así estar en posición de afrontar riesgos o cambios en el plan. Procuraban, en fin, que la producción no fuese excesiva, con el propósito de evitar, así, exigencias mayores de los órganos superiores. El vigor de índices de producción puramente cuantitativos facilitaba su tarea, toda vez que no había que atenerse a normas que exigiesen ciertos niveles de calidad o la economización de determinados recursos.

Las unidades de producción eran víctimas de un sistema que ha sido calificado como carente de «sentido común». En él, los precios, fijados administrativamente en virtud de procedimientos que ignoraban los costes reales y la naturaleza de la oferta y la demanda, no proporcionaban la información requerida para adoptar las decisiones económicas correspondientes. Las empresas carecían de un contacto directo con sus proveedores y con los usuarios de los bienes y servicios que producían y dispensaban; los lazos directos se hallaban muy restringidos y eran, por tanto, muy escasos. Aunque es cierto que los usuarios —a menudo unidades de producción— podían protestar por el incumplimiento de cláusulas contractuales o por la baja calidad de los bienes suministrados, las sanciones solían ser muy exiguas: los productores preferían afrontarlas antes que alterar su comportamiento económico. Según una estimación, en las economías de planificación central los usuarios retenían las dos terceras partes de los *stocks* de bienes, mientras que sólo una tercera parte

estaba en manos de los proveedores. Las posibilidades de adquisición de productos estaban, pues, muy limitadas. Consecuencia de esta situación fue la aparición de procedimientos y figuras más o menos tolerados que se encargaban de ultimar, al margen de los circuitos oficiales, acuerdos entre las empresas.

Antes se ha señalado que las unidades de producción preferían contar con un excedente de mano de obra y, así, se oponían por principio a cualquier reducción de personal. Las causas de este fenómeno eran varias. Entre ellas hay que mencionar el hecho de que algunas de las recompensas recibidas dependían del volumen de la fuerza de trabajo que, por lo demás, representaba un coste muy bajo. Esto aparte, la movilización de la manó de obra excedentaria era necesaria para desarrollar los servicios auxiliares antes mencionados y para hacer frente a las exigencias concretas de cumplimiento temporal del plan.

La dirección de las empresas correspondía a personas nombradas por los ministerios, ante los cuales eran responsables (y no ante los trabajadores). Los directores y cuadros superiores pertenecían a la *nomenklatura* y, en virtud de la aplicación del principio de «dirección única», gozaban de un poder absoluto de decisión, previa consulta con los órganos del Partido y de los sindicatos, que podían apelar ante instancias superiores (éstas estaban controladas, sin embargo, por el mismo aparato). Los niveles salariales dependían parcialmente de relaciones extralegales que, establecidas entre la dirección y los trabajadores, adoptaban su forma más significativa en las «propinas» percibidas por los segundos. Los sindicatos, dependientes también de la maquinaria partidaria, desarrollaban una defensa muy limitada de sus afiliados —garantizaban el cumplimiento de los contratos y la percepción de un salario «correcto», y acometían la resolución de conflictos menores— y se encargaban, en particular, de organizar la actividad productiva. Agrupaban por igual a trabajadores y cuadros, y las elecciones para cubrir sus cargos se

hallaban sometidas al control de la dirección y de la organización del Partido. Cualquier resabio de un sindicalismo libre estaba manifiestamente reprimido. El funcionamiento de las empresas era, en arquetipo, muy semejante al común en el mundo capitalista —clara división del trabajo, unidad de mando, producción en cadena...—, si bien con el tiempo, y como veremos, se había asentado un sistema caracterizado por la debilidad de los incentivos, los bajos ritmos y el absentismo generalizado.

b) *Ministerios y organismos directores.* Uno de los cometidos teóricos de los «ministerios» —que existían, en gran número, tanto en la URSS como en las distintas repúblicas— era trasladar a los «organismos directores» la información que las empresas proporcionaban (una información que los propios ministerios solían manipular con arreglo a sus intereses). Por lo demás, mantenían con las empresas una relación semejante a la que los organismos directores desarrollaban con ellos.

Aunque la decisión formal sobre la naturaleza de los planes correspondía a los organismos directores, las competencias de los ministerios al respecto eran muchas, y ello explica por qué se convirtieron en el asiento fundamental del dominio burocrático, con la complicidad de la dirección de las empresas. A este entramado se unía, naturalmente, la lasitud de los responsables de los organismos directores. Estos últimos no eran sino comités estatales con responsabilidades intersectoriales en determinados terrenos: la planificación *(Gosplan),* la construcción *(Gosstroi),* las normas de calidad *(Gosstandardt),* los suministros *(Gossnab),* los precios *(Goskomtsen)...* El *Gosplan,* que era el principal de estos organismos, fijaba anual y quinquenalmente las condiciones de producción, con previsiones que se asentaban en los resultados del plan inmediatamente anterior y con escasas capacidades de control sobre el grado de cumplimiento de sus instrucciones. Una idea de la magnitud de las activi-

dades del *Gosplan* y de las oficinas de los ministerios encargados de la planificación la ofrece un dato: daban trabajo a unos 15 millones de personas y manejaban cada año del orden de 850.000 millones de documentos. En conjunto, el sistema se ajustaba a la perfección a la descripción de la burocracia realizada en su momento por Marx: «Su jerarquía es una jerarquía de conocimientos. La parte superior confía a los niveles inferiores la comprensión de los detalles, mientras que los niveles inferiores creen en el conocimiento que la parte superior tiene de lo general, por lo que todos son mutuamente engañados».[3]

c) *Trabajadores y burocracia.* A las tres anteriores se puede agregar otra instancia: las economías domésticas. La característica de éstas que más nos interesa es la que se deriva de su comparación con las empresas: mientras que éstas contaban con el apoyo del estado, las economías domésticas se veían sometidas a restricciones sin cuento y apenas estaban en condiciones de hacer frente a la baja calidad de los bienes, por lo demás escasos, que se hallaban a su disposición o de ejercer presiones para propiciar el alza de los salarios. Así, había notorias diferencias entre las expectativas de la población y los intereses del aparato burocrático constituido por empresas, ministerios y organismos directores. Las decisiones sobre asignación de recursos —inversión o consumo, economía civil o economía militar— correspondían en exclusiva a ese aparato, que actuaba en beneficio propio y se ocupaba de cercenar las posibilidades de contestación. Las relaciones resultantes se asentaban en la monopolización de los medios de producción por un grupo —una clase— que no sólo dirigía la actividad de generación de bienes y servicios, sino que, por añadidura, se apropiaba de la plusvalía y la distribuía entre la acumulación de capital y su propio consumo improductivo. La clase (o clases) explotada

[3] Karl Marx y Friedrich Engels, *Collected works* (vol. 3), págs. 46-47.

asumía, entre tanto, un papel de mero ejecutante de decisiones y observaba cómo la diferencia existente entre el valor de lo producido y el coste de su fuerza de trabajo acababa en otras manos. La relación jurídico-formal que se establecía entre los trabajadores y el estado no era sino una abstracción: el estado era la burocracia y en realidad los trabajadores se relacionaban con esta última, que monopolizaba los medios de producción y los medios de coacción.

d) *La economía complementaria.* A la descripción anterior hay que agregar un dato más: las deficiencias de funcionamiento de la planificación central abocaron en la aparición de una «economía complementaria». Para llevar a término las estipulaciones de los planes era necesario violar parcialmente éstos, movilizando, allí donde el control del centro flaqueaba, los factores de producción y haciendo frente a las deficiencias en los suministros. En esta perspectiva se establecían acuerdos informales de trueque y de concesión de créditos entre empresas, se adquirían materias primas y bienes de equipo en mercados semiclandestinos o se acometía la creación de reservas al margen de las legalmente reconocidas. Todas estas prácticas —y otras afines, como el falseamiento de estadísticas y el incumplimiento de cláusulas contractuales referidas a fechas, calidad de los productos...— estaban implícitamente toleradas o, en el peor de los casos, se hallaban reprimidas con escasa severidad.

Por otro lado, los efectos del estado general de escasez eran varios, y abarcaban desde la realización semitolerada de trabajos privados hasta prácticas manifiestamente ilegales. Entre éstas se incluían la especulación —la compraventa de bienes con fines lucrativos—, la concesión de gratificaciones y la entrega de obsequios para obtener prebendas de diversa naturaleza, así como la sustracción de materias primas y equipos en las empresas estatales. Aunque a menudo la economía complementaria contribuía a satisfacer necesidades y mitigaba las rigideces del sistema, uno de sus efectos eviden-

tes era el desvío de recursos y la reducción del peso de la fuerza de trabajo empleada en la economía oficial. Según una estimación, una cuarta parte de los servicios eran el producto de prácticas clandestinas, en constante progreso en la era brezhneviana y en los años posteriores.

Los problemas demográficos

Los problemas que acosaban a la sociedad soviética tenían una de sus manifestaciones más claras en una crisis demográfica de perfiles muy marcados en esferas como las relativas al crecimiento de la fuerza de trabajo y al grado de bienestar de la población. Las décadas finales de la historia soviética reflejaron, en primer lugar, una reducción del crecimiento vegetativo en línea con lo que sucedía en casi todos los países industrializados. Si a finales de los cincuenta la población crecía con un ritmo de un 1,8% anual, en los primeros ochenta el porcentaje se había situado en torno a un 0,8% y las perspectivas apuntaban a índices todavía menores. Así las cosas, el número de personas que accedían al mercado de trabajo se hacía cada año menor: de acuerdo con las previsiones, si el crecimiento neto de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 59 años había sido de 30 millones de personas entre 1970 y 1985, en los tres lustros siguientes estaba llamado a ser de sólo 6 millones de individuos. Según una estimación, el crecimiento de la población laboral en el período cubierto por el XII plan quinquenal (1986-1990) iba a ser de sólo 3.200.000 personas; si no se verificaba un incremento en la productividad, ese crecimiento de la población en edad de trabajar apenas permitiría hacer frente a las exigencias del plan, por lo que se echaría en falta el concurso de nada menos que 22 millones de personas.

Causas concomitantes de esta situación eran el llamado «segundo eco demográfico de la guerra» —cada veinte años

se hacía notar el vacío de población dejado por la segunda guerra mundial—, el mayor número de trabajadores que se retiraban por razones de edad, la elevada mortalidad entre los varones con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años —muy relacionada con el consumo de alcohol— y la degradación del sistema sanitario. Algunos de estos fenómenos mucho tenían que ver con un proceso más caótico, acaso, que la propia industrialización: una aceleradísima urbanización. A mediados de los ochenta vivían en las ciudades 180 millones de personas, mientras la cifra correspondiente a antes de la segunda guerra mundial era de sólo 56 millones. Si en 1959 la población urbana era un 48% de la total, en 1970 el porcentaje se elevaba al 56% y en 1987 había alcanzado el 66% (un 70% en Rusia).

A todo lo anterior deben sumarse los desequilibrios «regionales». El crecimiento vegetativo era mucho más alto en el Asia central —en 1986, un 3,4% anual en Tadzhikistán, un 2,8% en Uzbekistán y un 2,5% en Turkmenistán— que en las europeas repúblicas eslavas —1,0% en Bielorrusia, 0,8% en Rusia, 0,4% en Ucrania. En términos globales, con una población cuatro veces menor que la del conjunto de las áreas eslavas, las repúblicas centroasiáticas exhibían un crecimiento demográfico equivalente a un 42% del registrado en el conjunto de la URSS. En el mismo año 1986, por cada 1.000 habitantes habían nacido entre 15 y 17 niños en las repúblicas eslavas y entre 25 y 42 en el Asia central. Como quiera que en esta última la industrialización, el control político y las tendencias migratorias presentaban una mayor debilidad, puede afirmarse que el crecimiento vegetativo más fuerte se verificaba en las regiones menos saturadas por el desarrollo industrial. Éste había beneficiado, por el contrario, a zonas en las que el «segundo eco demográfico de la guerra» se había hecho sentir con más fuerza.

Más ilustrativas de una aguda crisis social eran las derivas de los índices de mortalidad y esperanza de vida. Si entre 1950 y 1964 se produjo un claro descenso en la tasa de mor-

talidad, que pasó de un 9,7 por mil anual a un 6,9, entre 1964 y 1980 se hizo valer, en cambio, un crecimiento en su valor porcentual, que se situó en un 10,3 por mil en el último año mencionado. Aunque en los dos años siguientes se produjo un leve retroceso de la tasa que nos ocupa, en 1984 se alcanzó un hito histórico de la etapa posbélica, con un índice de un 10,8 por mil. Por lo que a la mortalidad infantil se refiere, con información fragmentaria y poco fiable, hay que recordar que entre 1974 (27,9 por mil) y 1983 (25,3 por mil), por razones fácilmente imaginables, no se publicaron datos al respecto. Por lo que parece, el índice pudo situarse en algún momento en un 30 por mil, con notabilísimas diferencias entre repúblicas.

Los datos relativos a esperanza de vida no eran más halagüeños. A un crecimiento lento, pero constante, de los índices entre 1955 (67 años de esperanza de vida al nacer) y 1972 (70 años) siguió un retroceso significativo: así, entre 1978 y 1985 la esperanza de vida al nacer se situó en torno a los 68 años, para elevarse efímeramente cuando se hicieron notar los efectos de algunas medidas auspiciadas por Andrópov y, más adelante, por el propio Gorbachov. Según una estimación, la esperanza de vida de la población masculina podía haber descendido a los 60 años en torno a 1980. Estos datos configuran una situación especialísima, que carece de antecedentes —sólo puede mencionarse al respecto lo ocurrido en otros países de la Europa central y oriental— en escenarios que no han debido afrontar conflictos bélicos o catástrofes naturales de importancia. Dejando al margen la degradación del sistema sanitario y de los servicios sociales, y la grave crisis de crecimiento, hay que mencionar como elemento directamente relacionado con esta situación el fenómeno del alcoholismo: en los setenta se contabilizaban más de 40 millones de alcohólicos, con un consumo anual por habitante que ya en 1973 se evaluaba en 4 litros de alcohol puro.

El factor nacional

Tras hacerse con el poder, los bolcheviques reconocieron el derecho, en muchas ocasiones puramente formal, de autodeterminación y, con él, la posibilidad de independencia de algunos de los territorios que conformaban el recién nacido estado soviético. Mientras las repúblicas del Báltico se acogieron a tal posibilidad, otras, reprimidas con dureza —levantamiento de Bujará, en el Asia central; ocupación militar de Ucrania—, temerosas de amenazas externas —Armenia— o simplemente acomodaticias, acataron el nuevo orden de cosas. Al poco se hizo notar, de cualquier modo, una homologación de caracteres entre el régimen surgido en 1917 y su antecesor, la Rusia zarista. Una vez que el estado soviético se consolidó desaparecieron algunas de sus concesiones iniciales, al tiempo que rebrotaba una versión singular del nacionalismo ruso y se mantenía en pie una peculiar organización administrativo-territorial producto de decisiones muchas veces arbitrarias. Poco antes de la segunda guerra mundial la URSS incorporó, *manu militari*, las tres repúblicas bálticas, en un escenario en que cobraban vigor problemas derivados de contenciosos fronterizos (Carelia, Moldavia...) o de la represión de comunidades étnicas enteras (judíos, alemanes del Volga, tártaros de Crimea...). Pese a todo, el estado soviético mantuvo cierto respeto hacia la diversidad nacional y permitió la manifestación de las diferentes culturas y el uso de sus lenguas.

Los elementos comunes entre las políticas desarrolladas en este terreno por Jrushchov y Brézhnev fueron muchos. Dejadas atrás las iniciales veleidades liberalizadoras del primero, tanto uno como otro impusieron medidas de tono claramente centralizador, que en el caso de Brézhnev se completaron con un reforzamiento de los privilegios de las oligarquías nacionales. La estructura del estado, que respondía a una relativa descentralización, se veía contrapesada por el aparato del Partido y por el sistema de planificación. Éste,

asentado en una organización por ramas, apenas se hacía eco de las demandas de los distintos organismos republicanos, regionales y locales, desprovistos de atribuciones y financieramente dependientes de Moscú. Según una estimación, en el marco de los 203 pasos necesarios para llevar a efecto las disposiciones del plan, la dimensión «republicana» sólo aparecía en el número 179, una vez que todas las decisiones de relieve ya habían sido adoptadas.

En el plano del tratamiento «conceptual» de los hechos, la era brezhneviana produjo su primer vástago en 1971, al hacer acto de presencia en las formulaciones oficiales «una nueva comunidad histórica de pueblos, el pueblo soviético». El año siguiente, el propio Brézhnev declaraba que el Partido consideraba «intolerables los intentos de detención del proceso de conjunción de las naciones o de reforzamiento artificial del aislamiento nacional, como contrarios a la dirección general de desarrollo de nuestra sociedad, a las ideas internacionales de los comunistas y a la ideología de los intereses de la construcción comunista».[4] Este planteamiento se veía acompañado por un énfasis en la preeminencia de la nación rusa. El principal instrumento jurídico promulgado en tiempos de Brézhnev, la Constitución de 1977, subrayaba la voluntad unitaria que guiaba al estado al tiempo que reducía a la nada las ya de por sí magras posibilidades de secesión. Con su intencionada confusión entre estado y Partido, en beneficio de este último, la Constitución hacía del «centralismo democrático» el principio rector de todo el sistema y le asestaba un duro golpe a la tradición federal que hasta entonces se había impuesto, bañada de retórica, en la literatura oficial. En comparación con la Constitución anterior, que databa de 1936, la de 1977 ampliaba notoriamente las competencias administrativas del centro y obviaba cualquier mención del derecho a disponer de formaciones armadas «nacionales» en las repúblicas. Al amparo de este giro, en

[4] *Pravda* (22 de diciembre de 1972).

los últimos años de la era brezhneviana se produjo también una sorda ofensiva contra las prerrogativas de las lenguas nacionales, siempre en claro beneficio del ruso. En paralelo, en los máximos órganos de poder se verificaba una reducción de la influencia de las naciones no eslavas.

El problema nacional tenía, con todo, otras vertientes. Una de ellas era la relacionada con disfunciones demográficas y diferencias de desarrollo económico. Desde décadas atrás, las repúblicas menos desarrolladas mostraban —ya lo hemos apuntado— un mayor dinamismo vegetativo, con una secuela importante: no dejaba de acrecentarse el peso porcentual de las naciones no eslavas en el conjunto de la población. Según una estimación, en el año 2000 uno de cada dos soldados soviéticos procedería de una de las seis repúblicas de cultura islámica que integraban la URSS.

Al margen de lo anterior, y pese a las innegables tendencias homogeneizadoras, las diferencias en cuanto a nivel de vida entre las repúblicas eran muy notables. Podían distinguirse acaso tres grandes grupos. En la posición de máximo privilegio estaban Estonia, Letonia y Lituania, mientras que parecían ocupar un lugar intermedio las tres repúblicas eslavas —Rusia, Ucrania y Bielorrusia—, junto con Georgia y Moldavia; en el último escalón, el de mayor pobreza, se hallaban Armenia y las repúblicas «islámicas», con ingresos que en ocasiones constituían como media la tercera parte de los registrados a orillas del Báltico. El proceso de urbanización seguía, por otra parte, un ritmo más lento en el Asia central: si en 1913 un 19% de la población de esta región vivía en las ciudades, en 1984 ese porcentaje había ascendido a un 41%, mientras que en Rusia los índices correspondientes eran de un 18 y un 70%.

Este rápido repaso tiene que ocuparse también de las funciones desempeñadas por las fuerzas armadas en el ámbito que nos ocupa. En la medida en que su funcionamiento escapaba por completo a la consideración de las diferencias nacionales, las fuerzas armadas eran un elemento

decisivo en la política del estado soviético. Si en lo que respecta a la configuración de las instituciones civiles había que realizar algunas precisiones —tampoco muchas— para dar cuenta de la presencia de elementos nacionales diversos en cada uno de sus órganos y niveles, en el ámbito militar bastaba una rápida constatación: sus cuadros se nutrían de manera abrumadoramente mayoritaria de rusos y, en un sentido más amplio, de eslavos. Así las cosas, el porcentaje de oficiales y suboficiales originarios del Asia central o del Báltico era extremadamente bajo. Tal y como lo ha sugerido Hélène Carrère d'Encausse, las fuerzas armadas no eran reflejo del quehacer de toda una sociedad, sino un instrumento en manos del poder central en el que se plasmaba el grado de asimilación y cooperación de los distintos grupos nacionales.[5]

Los indicadores globales de la crisis

El propósito de las líneas que siguen es analizar los datos que distintos indicadores económicos ofrecían sobre la hondura de la crisis soviética. Tomados de forma conjunta, esos indicadores pueden considerarse el punto de partida desde el cual los dirigentes soviéticos intentaron desplegar, en la segunda mitad de los ochenta, un programa de reformas.

a) *Crecimiento.* Aunque recogen datos muy diversos, las estimaciones sobre el ritmo de crecimiento de la economía revelaban un proceso inequívoco: ese ritmo se había ido reduciendo año tras año desde, al menos, la década de 1960. Una de esas estimaciones señalaba, por ejemplo, que mientras el crecimiento anual de la renta nacional en el lustro 1956-1960 fue de un 5,9%, en 1966-1970 se situó en un

[5] Hélène Carrère d'Encausse, *L'empire éclaté* (Flammarion, París, 1988), pág. 200.

5,2% y en 1976-1980 en un 2,7%, para aminorarse aún más en los primeros años ochenta. Según Aganbegyan, la tasa de crecimiento de la renta nacional se redujo dos veces y media entre 1971 y 1985.[6]

La *glásnost* obligó a poner en cuestión, por otra parte, la fiabilidad de algunos de los índices de crecimiento manejados por las autoridades. En febrero de 1988, Gorbachov señaló que en la época de Brézhnev esos índices habían sido inflados artificialmente por incrementos en las ventas de petróleo y de bebidas alcohólicas: «Si eliminamos la influencia de esos factores, resulta que durante cuatro quinquenios no hubo ningún progreso en el crecimiento absoluto de la renta nacional y que, a principios de los ochenta, ésta empezó incluso a decrecer».[7]

b) *Productividad.* Una de las causas de la reducción en el ritmo de crecimiento fue el retroceso operado en la productividad. El crecimiento de ésta en la industria se redujo en un 1-1,5% anual desde mediados de los setenta; al parecer, en 1981 y 1982 la productividad no sólo no se incrementó, sino que se redujo con un ritmo aproximado de un 1% cada año. Aganbegyan recoge crecimientos medios anuales de la productividad global de un 4,2% en 1971-1975 y de un 2,8% tanto en el quinquenio 1976-1980 como en el siguiente.[8]

La productividad se situaba en niveles entre dos y tres veces inferiores a los comunes en los países capitalistas desarrollados. Ello se debía en buena medida a los bajísimos resultados de la agricultura. La tendencia decreciente sólo se manifestó cuando, en los setenta, las fuentes tradicionales de desarrollo empezaron a agotarse. Antes, y también después, el problema se ocultaba tras aceptables índices de creci-

[6] Abel Aganbegyan, *The challenge: economics of perestroika* (Hutchinson, Londres, 1988), pág. 2.

[7] *International Herald Tribune* (26 de febrero de 1988).

[8] Aganbegyan, *op. cit.*, pág. 68.

miento y gracias a la existencia de reservas importantes de mano de obra. Los obstáculos a la innovación y al progreso técnico ya estaban, sin embargo, en el sistema.

Problemas afines, y causas, de la bajísima productividad eran el subempleo —por término medio se empleaba a un 30-50% más de trabajadores que en los países capitalistas desarrollados—, el absentismo laboral —varias decenas de millones de horas anuales perdidas—, el alcoholismo, el desarrollo excesivo de los servicios auxiliares y la escasa flexibilidad de la organización del trabajo.

c) *Inversión.* Según las cifras recogidas por Aganbegyan, la inversión creció un 8,8% anual en el período 1971-1975, un 4,6% en la etapa 1976-1980 y sólo un 3,4% entre 1981 y 1985.[9] Los recursos de inversión parecían, pues, en rápido agotamiento, al tiempo que la rentabilidad se reducía con un ritmo del orden del 14% en cada nuevo plan quinquenal. La renovación de los fondos fijos de producción era lenta, y en ella dominaba la tendencia a una acumulación puramente cuantitativa; dados los ritmos alcanzados, en la industria se habrían necesitado cuarenta o cincuenta años para permitir una renovación completa de esos fondos fijos.

Pese a lo anterior, y por razones ya expuestas, se ha afirmado que los sistemas de tipo soviético estaban principalmente orientados a la inversión, con el efecto de una permanente escasez. En la era de Brézhnev la inversión se concentró en los sectores de fabricación de medios de producción, en detrimento del consumo, la vivienda o los servicios sociales. La proporción de inversión en capital destinada a la construcción de viviendas descendió desde un 23% en 1960 hasta un 14-15% en el período 1981-1985. La educación absorbía el 10% de la renta nacional en 1950, pero sólo el 6% a principios de los ochenta; el gasto en sanidad se había situado, en fin, por debajo del 5% de la renta nacional.

[9] Estimación a partir de Aganbegyan, *op. cit.*, pág. 88.

d) *Empleo.* La URSS mostraba una tasa de actividad laboral (población activa/población en edad de trabajar) muy alta —más del 90%—, con una participación excepcionalmente importante de la mujer. Ello guardaba relación con una situación general de subempleo caracterizada como de «consumo excesivo de fuerza de trabajo para obtener una producción dada». Casi todos los sectores de actividad económica, y de manera singular la agricultura, empleaban un volumen de mano de obra que superaba sus necesidades reales.

Aunque las tesis oficiales sostenían que se dio siempre una situación de pleno empleo, la extraordinaria movilidad de la fuerza de trabajo generaba un paro estacional de relativa importancia. El 21% de la población laboral cambió de empleo en el curso de 1970; según algunas estimaciones, ese porcentaje alcanzaba en algunas zonas el 30%. Como quiera que los trabajadores en cuestión permanecían una media de 28 días sin trabajar, puede hablarse de la existencia de un paro que afectaba al menos a un 1,6% de la población activa.

e) *Inflación.* Los propios estudios soviéticos señalaban que las estadísticas oficiales no se hacían eco de tensiones inflacionistas de cierto relieve. El propio Gorbachov se refirió indirectamente a ellas al hacer mención de su desconfianza con respecto a algunas estadísticas oficiales. En 1988 se cifró la inflación en un 0,9-1,5%, mientras que otros portavoces elevaban esos porcentajes a un 5-7%.

Las tensiones inflacionistas nacían de la divergencia entre los ingresos monetarios de la población y los flujos reales de bienes y servicios, mucho menores. Desde 1953 se impusieron estímulos a la producción que se tradujeron en incrementos de los salarios por tres vías: revisiones en la remuneración del trabajo a destajo, subidas constantes del salario mínimo e incentivos en sectores prioritarios de la economía y regiones apartadas. Estos aumentos de los salarios no se veían acompañados de subidas paralelas en impuestos

y precios, y ello pese a que estos últimos se incrementaban de diversas formas (lanzamiento de nuevos productos, introducción de modificaciones leves que justificaban precios superiores, importación de bienes, encarecimiento de fuentes de energía y materias primas). En consecuencia, se puede hablar de una inflación disfrazada, muchos de cuyos reflejos en la economía real eran postergados u ocultados.

f) *Déficit público.* A partir de los años setenta se verificó un significativo crecimiento del gasto público, consecuencia ante todo de un aumento en las subvenciones a las empresas. Mientras, se producía una reducción en los ingresos del estado que, consecuencia ante todo de la disminución en los beneficios empresariales y en el volumen de divisas obtenidas por la venta de petróleo, se vio acelerada, a partir de 1985, por alguna de las medidas auspiciadas por la nueva dirección soviética, y en particular por las restricciones al consumo de alcohol. El resultado fue un crecimiento constante del déficit público, que fuentes soviéticas estimaron equivalía en 1989 a un 7,3% del producto nacional bruto (PNB). Algunas evaluaciones norteamericanas elevaron sensiblemente ese porcentaje.

La crisis en los distintos ámbitos de la economía

a) *La industria.* Aunque receptora de una gran parte de los recursos de inversión, la industria soviética exhibía muchos problemas. En buena medida éstos tenían su origen en un hecho: el sector consumía cantidades excesivas de combustibles y materias primas, evaluadas en un porcentaje un 30-40% superior al medio en los países capitalistas desarrollados. Según algunos estudios que se ocupaban de casos extremos, las plantas de producción de amoniaco utilizaban en los países occidentales más desarrollados el 5% de la energía y el 60% de la fuerza de trabajo empleadas en sus

homólogas soviéticas. Según otra estimación, para producir un mismo bien, en la URSS había que emplear un 75% más de acero, un 130% más de cemento y un 50% más de madera que en los EE UU.

Rasgo significativo de la industria soviética era el excesivo tamaño de las unidades económicas, frente a la microespecialización y a las pequeñas empresas que se imponían en otros escenarios. Ello era en parte consecuencia de los problemas de abastecimiento: las empresas se defendían procurando producir todo lo que necesitaban e incrementando su tamaño (y, claro, sus costes).

Conviene recordar que una de las mayores taras de la planificación central era que las unidades de producción se veían obligadas a aceptar suministros en malas condiciones, no en vano en los planes no se incluían previsiones para cubrir las deficiencias con nuevas remesas; otro problema afín era el de los retrasos en las entregas, que podían paralizar durante mucho tiempo empresas enteras. La reparación, el transporte y el almacenamiento se hallaban, por otra parte, sobredimensionadas, y daban empleo al 38% de los trabajadores de la industria (frente a sólo un 11% en el caso norteamericano). Entre tanto, la informatización encontraba grandes dificultades.

La centralización y la concentración de las actividades productivas eran también características del sector industrial, cuya distribución espacial no parecía la más ajustada a las condiciones del país. Este hecho lo pusieron de manifiesto estudios que analizaban los planes de evacuación y protección industrial en caso de ataque nuclear: además de subrayar las deficiencias del sistema de comunicaciones, señalaban que un total de sólo 150 plantas absorbía el 50% de la capacidad para producir metales de uso primario, productos químicos, equipos agrícolas y ferroviarios, caucho sintético y generadores de energía. Otras informaciones concluían que casi todas las plantas químicas se concentraban en 25 ciudades, o que las regiones central y del Volga recibían la mayor

parte de su electricidad de cinco instalaciones, mientras que los equipos de comunicaciones se manufacturaban en sólo cuatro lugares.

A partir de los setenta las perspectivas de desarrollo del sector industrial se vieron considerablemente trabadas por los costes crecientes de extracción de combustibles y materias primas. Los yacimientos más rentables se encontraban por lo general en Siberia, lejos de la URSS europea, área ésta en la que se concentraban el 80% de la actividad industrial, la mitad de las inversiones y del orden del 60% de la fuerza de trabajo. A este encarecimiento del proceso de producción se sumó una política de modernización basada antes en la creación de nuevas empresas que en la modernización de las existentes. Efecto directo de esa política, que absorbía buena parte de los recursos de inversión, fue la existencia de un gran número de proyectos no terminados. Cuando las empresas necesitaban asumir un proceso de conversión o innovación, no era frecuente que ello fuera tomado en consideración por el *Gosplan* y que se redujesen las exigencias en materia de producción.

La situación del sector de transporte no era muy diferente. Rasgos de su funcionamiento eran la baja calidad de los materiales, la escasa mecanización, la lentitud y la ausencia de coordinación y, en fin, el incumplimiento sistemático de los objetivos del plan. Aunque el sistema de transportes detraía muchos recursos, los servicios ofrecidos eran extremadamente deficientes y su efecto negativo se hacía notar en todos los sectores de la economía.

b) *La producción de energía.* La Unión Soviética se autoabastecía en lo relativo a energía y a la mayoría de materias primas. Poseía más gas natural, hierro, carbón y potasa que cualquier otro estado, y producía más petróleo que los EE UU o Arabia Saudí. Contaba con la mitad de los bosques de coníferas y era el tercer productor mundial de electricidad. Su sector energético, que recibía del orden de una

quinta parte del total de las inversiones, proporcionaba, a través de las exportaciones de petróleo y gas natural, el grueso de las divisas obtenidas.

El derroche de los recursos y los crecientes costes de extracción fueron dos características del funcionamiento del sector que nos ocupa. El grado de desarrollo tecnológico alcanzado y el tipo de relaciones existentes entre las instancias económicas se tradujeron en un notable despilfarro. Según una estimación, en la URSS se perdían anualmente 15.000 millones de m^3 de gas y 7 millones de toneladas de carbón, con niveles de rendimiento muy bajos. La dificultad de explotar yacimientos asequibles y las enormes distancias que había que salvar explicaban el crecimiento de los costes de extracción. Como quiera que cada vez era mayor el porcentaje de petróleo, gas y carbón procedente de Siberia, lejos de las principales zonas de consumo, buena parte de los recursos de inversión debían destinarse a salvar enormes distancias.

En el caso del petróleo, al incremento en los costes de producción se agregaron otras circunstancias desfavorables, como las sucesivas reducciones en los precios internacionales de este combustible y la caída del valor del dólar. Así las cosas, no fue posible mantener los niveles de ingreso de los años setenta. La URSS intentó diversificar sus exportaciones energéticas —incrementando notablemente el volumen de gas producido— y reducir el peso de las ventas de petróleo realizadas con precios inferiores a los internacionales (las realizadas, por ejemplo, a estados aliados). Otros problemas de relieve eran el ya mencionado del despilfarro y la dificultad para mejorar las tecnologías de prospección, que hizo de la industria petrolífera una de las áreas privilegiadas en cuanto a la importación de equipos extranjeros. El incremento en los costes de extracción, tal y como se ha señalado, fue muy notable. Según una estimación, para obtener una tonelada de petróleo se necesitaban en el período 1981-1985 inversiones nueve veces superiores a las requeridas en el plan quinquenal anterior.

La producción de gas natural experimentó un rápido desarrollo en los setenta, con cumplimiento de los objetivos del plan y adaptación aceptable a las presiones tecnológicas. Aparte su interés como fuente de divisas —las exportaciones, un 12% del total producido, crecieron un 25% entre 1982 y 1985—, el gas natural adquirió gran importancia como combustible de uso doméstico e industrial. La concentración de inversiones en el sector petrolífero propició, sin embargo, la repetición de viejos errores en lo que al gas se refiere: ausencia de objetivos a largo plazo y de medidas para salvaguardar los yacimientos, asignación de escasos recursos para la exploración y el mantenimiento de los campos... Tampoco aquí dejaron de crecer los costes de extracción y transporte. La expansión de las exportaciones, en fin, parecía llamada a chocar con una demanda endeble y con una reducción de los precios internacionales. Aunque se hicieron notar algunas dificultades en los suministros soviéticos, la empresa estatal a cargo de éstos parecía constituir, sin embargo, una feliz excepción en cuanto al cumplimiento de los contratos y la calidad de las prestaciones.

c) *La agricultura*. El sector agrario recibía una parte importante, y creciente, de las inversiones estatales. Si en 1961-1965 absorbía el 19% de aquéllas, en 1976-1980 ese porcentaje se había elevado a un 27%, y alcanzaba un 33% si se consideraban las industrias relacionadas. El incremento de los recursos destinados a mejorar el rendimiento agrario, en sí mismo reflejo del mal funcionamiento del sistema, no se había visto acompañado de una reducción significativa de la mano de obra: visiblemente excesiva, sólo se aminoró un 15% entre 1965 y 1980. Los costes del sistema agrario se dispararon, por otro lado, como consecuencia de aumentos importantes en los salarios, sin que por ello se incrementase el rendimiento del sector. En consonancia con lo ocurrido en el resto de la economía, el crecimiento de la producción fue cada vez menor y se fue aproximando a cero. La incidencia

de elementos naturales negativos, aunque evidente, no podía dar cuenta del hecho en su integridad; piénsese, por ejemplo, que la producción de un bien escasamente afectado por la climatología, como es la carne, no se incrementó entre 1975 y 1981, y que la de leche se redujo en el período 1974-1981. La productividad, entre tanto, experimentó un significativo estancamiento. En 1965 era un 14% de la norteamericana, y en 1981 un 12%; si en 1965 un agricultor soviético abastecía a seis personas y uno estadounidense a 43, las cifras correspondientes a 1981 eran, respectivamente, de 8 y 65. El mejor signo del fracaso de la organización agrícola soviética era el hecho de que la URSS tuviese que importar una parte importante de los productos agrícolas que consumía.

Las explotaciones agrarias y ganaderas eran por lo general demasiado grandes para propiciar el interés de los campesinos y el afianzamiento de una gestión eficiente. La irracionalidad de muchos de los objetivos fijados por el plan estaba en la base de esta situación; era frecuente, por ejemplo, que el plan midiese los resultados en términos de extensión arada, ahorro de combustible y minimización de reparaciones en la maquinaria, y permitiese, de esa forma, que un tractorista que arase de manera superficial la tierra cumpliese plenamente con las previsiones aun cuando su trabajo fuese poco menos que estéril. Otro dato notorio era el pésimo sistema de incentivos. En los períodos de recolección era difícil conseguir que los campesinos trabajasen más horas de las previstas, lo que en un año como 1981 se tradujo en la necesidad de movilizar temporalmente a 15 millones de personas, con una pérdida de más de 30 millones de jornadas de trabajo tan sólo en desplazamientos.

La eficiencia demostrada por las parcelas privadas revelaba bien a las claras la quiebra de las estructuras oficiales. Estas parcelas, que apenas recibían ayuda alguna, coexistían junto con unos 20.000 *sovjozi* (granjas estatales) y unos 26.000 *koljozi* (granjas colectivas). A finales de 1981 las parcelas privadas generaban el 26% de la producción, y ello

pese a ocupar tan sólo el 3% de la tierra arable y estar sujetas a numerosas trabas que afectaban a los sistemas de suministro, transporte, empaquetado y distribución. En 1979 proporcionaban el 60% de las patatas, el 42% de la fruta y el 40% de la carne de cerdo y de ave; a principios de 1983 contaban con algo más del 20% de las cabezas de ganado. Según una estimación, las parcelas privadas eran ocho veces más eficientes que las oficiales (bien es cierto que empleaban recursos de la economía oficial: una buena parte de la producción privada correspondía a explotaciones ganaderas que hacían uso de tierras colectivas). La inversión en las parcelas estatales era, sin embargo, mucho mayor: así, 4,7 toneladas de semillas por ha, por sólo 1,6 en las parcelas privadas.

La ausencia de relación entre los precios de los productos y sus costes reales era otro grave problema. Los precios de los productos básicos apenas subieron en los sesenta y en los setenta, período en que, sin embargo, se doblaron los ingresos de la población, que demandaba un mayor número de bienes de calidad. El hecho de que, por efecto de su bajo precio, se destinasen a alimentación animal productos como el pan o los cereales era un buen reflejo de esta situación. Otras circunstancias que explicaban el bajo rendimiento del sector primario eran el pésimo estado de las comunicaciones, las deficiencias de almacenamiento y equipamiento y la crónica ausencia de repuestos. Según el entonces primer ministro soviético, Nikolai Tíjonov, en 1982 se perdía «del orden de la quinta parte de los cereales, vegetales, frutas y bayas durante la cosecha, el transporte, el almacenamiento y el procesado industrial».[10] Las trabas tradicionales del sistema económico obligaban, pues, a importar bienes que el país realmente producía pero que se mostraba incapaz de conservar y le conferían un escaso atractivo a una vida campesina cuyo

[10] Cit. en D. Gale Johnson, «Agriculture», en James Cracraft (dir.), *The Soviet Union today* (Bulletin of the Atomic Scientists, Chicago, 1983), pág. 203.

rasgo más característico era la escasa movilidad social y, con ella, la tentación migratoria.

d) *La economía militar*. La naturaleza de la industria militar soviética ha suscitado dos grandes interpretaciones. Según la primera, el funcionamiento relativamente aceptable de aquélla era consecuencia de la absoluta prioridad de que gozaba en la asignación de recursos. Uno de los efectos del despilfarro consiguiente fue la sobredimensión de un aparato militar cuyo crecimiento escapaba a todo control (a ello no era ajena tampoco, claro, una visible presión exterior); este proceso se veía acelerado por la necesidad de renovar rápidamente dispositivos y por la lógica de la producción por la producción, imperante también en la economía civil. La industria militar presentaba muchos de los problemas que acosaban a ésta. Particular relieve alcanzaban las tendencias autárquicas de los ministerios y la separación funcional entre las organizaciones, que dificultaba la difusión de tecnologías. En suma, «el aparato militar es cualquier cosa menos un islote de eficacia en un mar de incompetencia: reproduce las características de la sociedad que lo dio a luz. Se encuentra en él la competición entre instituciones y agentes, y sus efectos, en forma de producción por la producción, desespecialización, redundancia de actividades».[11]

Los defensores de la segunda interpretación ponían el acento, en cambio, en la eficiencia del sector militar, y ello hasta el punto de reclamar una extensión de sus métodos de gestión a la economía civil. La industria de defensa desarrollaba —según esta opinión— sistemas de control de calidad, contaba con centros de investigación estrechamente ligados al aparato productivo, podía fijar prioridades a largo plazo y se beneficiaba, por encima de todo, de la existencia de un competidor externo en la figura del complejo industrial-

[11] Jacques Sapir, *Le système militaire soviétique* (La découverte, París, 1987), Pág. 302.

militar norteamericano. «La URSS no puede abandonar a su sector militar en la situación en que lo colocaría su vinculación a la primera economía (calidad aleatoria de los productos, retrasos en los suministros...). De ahí una serie de particularidades organizativas que configuran una "tercera economía", la única real y eficazmente planificada».[12]

Cualquiera que sea la interpretación por la que se opte, es evidente que la industria de defensa gozó de una clara prioridad en la asignación de recursos escasos y se vio obligada a colmar exigencias superiores. Es verdad, con todo, que una parte de su producción se destinaba a satisfacer demandas de la economía civil. En 1971 se había señalado que ésta era el destinatario del 42% de los bienes generados por la industria de defensa. Con arreglo a una evaluación, sin duda exagerada, la industria de defensa producía casi el 100% de los televisores, las radios, las grabadoras y las máquinas de coser, el 97% de los frigoríficos y el 77% de las lavadoras. Una tercera parte de la producción militar de buques y aviones habría tenido, por lo demás, un carácter civil.

Pese a lo que pudiera deducirse de lo anterior, el grado de permeabilidad entre los sectores civil y militar de la economía era —sobre estos problemas volveremos— muy escaso. Así lo testimonia el desfase tecnológico que el primero mostró en relación con el segundo, cada vez más evidente a medida que en la industria de defensa se verificaba una progresiva especialización. Aunque, espoleado por la competencia externa, el sector militar fue el principal núcleo de innovación tecnológica, los efectos de las capacidades adquiridas —y entre ellas las derivadas de la introducción de tecnologías foráneas— apenas se hicieron notar en una economía civil claramente postergada.

Otro problema que suscitó —suscita todavía— mucha

[12] Gérard Duchêne, *L'économie de l'URSS* (La découverte, París, 1987), pág. 110.

tinta fue el de las dimensiones del gasto militar. La propensión a ocultar el peso real del sector de defensa pareció encontrar, sin embargo, un freno en los últimos años del régimen soviético. En 1989 se anunció que el gasto de defensa correspondiente a ese mismo año ascendía a un 15,6% del presupuesto global, a un 9% del PNB y a un 12% de la renta nacional. Esas cifras no zanjaron la cuestión: la ausencia de un desglose pormenorizado, las distorsiones derivadas del sistema de precios y las dudas sobre la fiabilidad de los datos obligaban a mantener cautelas. En los años anteriores, las estimaciones sobre las dimensiones del gasto militar soviético habían arrojado resultados muy dispares. En 1955, la CIA estadounidense, muy permeable a los prosaicos intereses del gobierno norteamericano, había evaluado el peso del sector de defensa en un 11% del PNB; tres lustros después, en pleno auge militar bajo la férula de Brézhnev, el porcentaje descendía, sin embargo, a un 6,5%, para rebajarse aún más en los años de distensión y situarse en un 4-6%. En la segunda mitad de los setenta, la CIA modificó sustancialmente sus estimaciones. Tras una reevaluación de los costos en rublos, en 1976 anunció que el gasto en defensa soviético equivalía a un 12-14% del PNB; ya en los ochenta hizo valer una socorrida «inflación oculta» y emplazó el gasto en un 15-17% del PNB. No es difícil identificar un rasgo de los datos reseñados: para otorgarle argumentos a las políticas de rearme y modernización, en las etapas de crisis y de «guerra fría» la CIA generó estimaciones al alza del gasto militar soviético, mientras que en los momentos de distensión procuró ofrecer a la opinión pública una imagen contenida de aquél.

Los trabajos realizados por investigadores no vinculados a las grandes agencias de inteligencia ofrecen una banda de resultados muy amplia. Sus límites máximo y mínimo, referidos casi siempre a la primera mitad de los ochenta, podrían situarse en un 18 y un 10% del PNB. Más recientemente, para 1989, el SIPRI *(Stockholm International Peace*

Research Institute) evaluó el gasto militar soviético, al cabo de algunas reducciones presupuestarias, en un 11-12% del PNB.[13]

e) *El consumo doméstico.* Silvio Fagiolo ha señalado que era «la posición como consumidor en el sistema económico, más que la de ciudadano en el político, la que determinaba el estado de ánimo de la mayor parte de los soviéticos».[14] El crecimiento económico experimentado desde el final de la segunda guerra mundial creó unas expectativas de mejora en el nivel de vida que no se vieron satisfechas. En particular, las generaciones más jóvenes vivieron un período de incremento casi nulo en sus capacidades adquisitivas, sin que pudieran apreciarse cambios en la calidad y cantidad de los bienes ofertados. Uno de los rasgos de las décadas finales del sistema soviético fue la notable desaceleración en el crecimiento anual del consumo per cápita: tras alcanzar cotas del 5,1% en el período 1966-1970, se redujo a un 2,8% en 1971-1975 y a un 2,4% en el quinquenio siguiente, con niveles próximos a un crecimiento nulo, o incluso negativo, en los primeros años ochenta.

En términos generales existía una pobre oferta de bienes y un desfase entre el nivel de ingresos de la población, relativamente alto, y la posibilidad, escasa, de satisfacer sus demandas. Esta situación tuvo incidencias políticas de relieve, hasta el punto de que puede afirmarse que todos los cambios de dirección se vieron acompañados de tensiones relacionadas con el abastecimiento de bienes. La escasa calidad de éstos era otro problema; según una estimación, el volumen de mercancías no vendidas e invendibles había crecido mucho más deprisa que la producción industrial. Se hacían notar, en fin, diferencias significativas en los niveles de consumo de las distintas repúblicas; así, el consumo per

[13] *SIPRI Yearbook 1990* (Oxford University, Oxford, 1990), pág. 145.
[14] Silvio Fagiolo, *La Russia di Gorbaciov* (Franco Angeli, Milán, 1988), pág. 25.

cápita de carne en Uzbekistán era un 50% inferior al medio, y se hallaba tres veces por debajo del nivel alcanzado en Estonia.

Aunque en comparación con el consumo total, el porcentaje de gasto asignado a la adquisición de productos alimenticios no dejó de descender —era un 55% en 1960, pero un 46% en 1979—, seguía siendo superior al registrado en la mayoría de los países desarrollados. Otro aspecto significativo era la existencia de un consumo irracional de bienes subvencionados, que en 1975 se reflejaba —antes se ha mencionado— en la «asignación» de un 4% de la producción de pan y cereales para alimentación animal; las subvenciones eran una parte importante del presupuesto estatal y en su mayoría beneficiaban a los sectores que exhibían un nivel de vida más alto. Todas las fuentes señalaban, de cualquier modo, que el número de calorías ingeridas por habitante era más que suficiente, y ello aun cuando no faltasen problemas relativos a la composición de la dieta, caracterizada por un bajo consumo de carne animal, productos lácteos y vegetales.

Por lo que se refiere a los bienes «industriales» de consumo doméstico, uno de los mayores problemas era el ocasionado por la baja calidad y el deficiente diseño. Por citar un ejemplo, la poca resistencia de los materiales utilizados hacía que en la URSS se gastasen 3,2 pares de zapatos por persona y año. Algunos bienes eran, sin embargo, manifiestamente escasos, como lo evidenciaba la existencia de listas de espera de ocho años para adquirir un automóvil o el hecho de que sólo una cuarta parte de las viviendas urbanas y un porcentaje mucho menor de las rurales dispusiesen de teléfono. Y eso que en términos estrictamente cuantitativos la situación había mejorado de manera sustancial en la era brezhneviana: en 1985, el 95% de las familias soviéticas disponían de televisión, el 90% de frigorífico y el 70% de máquina lavadora. Pese a ello, las estadísticas seguían reflejando déficits importantes en algunos bienes de consumo doméstico: aparatos de música, acondicionadores de aire...

El sistema de suministros presentaba numerosas deficiencias, con una pésima distribución de los bienes y un número muy escaso de puntos de venta; esto aparte, el empaquetado y los autoservicios apenas estaban desarrollados, y otro tanto podía decirse de la automatización de las operaciones de cobro. En 1979, el comercio daba empleo en los EE UU a cerca de un 30% de la población, frente a sólo un 10% en la URSS, donde los servicios se consideraban parasitarios y no productivos. Además, el tiempo dedicado a la adquisición de bienes parecía experimentar un crecimiento constante. En los setenta se elevó desde 30.000 millones de horas anuales hasta 37.000 millones (unas 190 horas por adulto y año). Según una fuente soviética, el número de horas invertidas anualmente en estos menesteres equivalía a un año de trabajo de una población de 35 millones de personas. Como ya se ha señalado, las deficiencias de transporte y almacenamiento eran notorias. En 1986 se cifraron en un 20% de las disponibilidades, y en algún caso en un 30%, las pérdidas producidas por esas deficiencias.

Una consecuencia del mal funcionamiento del sistema, y en particular de la escasez de bienes, fue que los depósitos de ahorro no dejaron de crecer: si en 1960 alcanzaban 51 rublos por persona, en 1982 ascendían ya al millar de rublos. Según una estimación, en 1979 el valor de los depósitos de ahorro creció un 17% más que el de las ventas de bienes de consumo, y en el año siguiente se destinó a ahorro el 36% de los recursos disponibles para la adquisición de esos bienes. En 1984 las «intenciones de compra no realizadas» eran un 15% del volumen de comercio al por menor, y habían experimentado un crecimiento de un 60-70% desde 1980. Por otra parte, se apreciaba cierta concentración de los recursos; así, en Letonia, el 3% de los impositores parecían poseer la mitad de los fondos.

f) *Los ingresos*. En la era brezhneviana los ingresos de los sectores menos favorecidos experimentaron un incre-

mento importante, de tal modo que las diferencias entre los distintos grupos de perceptores se aminoraron. Los mayores beneficiarios fueron, al parecer, los trabajadores de la agricultura y de la industria, en tanto que los «cuellos blancos» asistieron a un deterioro de su nivel relativo de bienestar. Por otra parte, en el curso de esos años, los emolumentos de la población rural no dejaron de aproximarse a los de los habitantes de las ciudades: si en 1960 no superaban el 70% del ingreso medio nacional, en los ochenta alcanzaban ya un 90% de este último. Con todo, seguían subsistiendo diferencias entre el campo y la ciudad, entre las distintas repúblicas y entre los diversos sectores de producción. Así, por citar algún ejemplo, el nivel de ingresos en el Báltico era muy superior al de las repúblicas del Asia central, y había regiones —el Gran Norte, Siberia, Extremo Oriente— en las que salarios más altos se empleaban como incentivo para alentar la llegada de nuevos trabajadores. Hay que referir también los numerosos problemas ocasionados por un sistema de pensiones que apenas contemplaba la actualización de éstas; la penuria consecuente afectaba a una parte importante de la población, toda vez que la edad de retiro —55 años en el caso de las mujeres, 60 en el de los varones— era más temprana en la URSS que en la mayoría de los países capitalistas desarrollados.

Hay que agregar otros dos datos. Por un lado, muchas de las diferencias en la evaluación de los niveles salariales de los ciudadanos tenían su origen en la diversa consideración que merecían los llamados «ingresos no salariales», derivados del disfrute de servicios educativos, de transporte, de vivienda o de sanidad, y del consumo de alimentos subvencionados. Conforme a una estimación soviética, en 1984 estos elementos suponían el 69% del salario «nominal». En segundo término, el trabajo en la economía complementaria permitía la obtención de ingresos importantes. Un estudio realizado en 1970 con un grupo, por lo demás singular, de antiguos ciudadanos soviéticos —dos mil personas que habían

emigrado a Israel— puso de manifiesto que un 10-12% de sus ingresos en la URSS procedían de la economía paralela, a la que se orientaba el 18% de sus gastos.

En un marco más amplio, el análisis de la distribución de la riqueza obliga a tomar en consideración el problema del acceso a bienes y servicios especiales. La posesión de un trabajo no era una fuente significativa de desigualdades, pero sí lo era, en cambio, la posibilidad de acceder a bienes particularmente escasos. Si bien la configuración de un sistema de privilegios encontró obstáculos —limitaciones objetivas de los ingresos individuales, ideología favorecedora de cierto igualitarismo—, algunos factores propiciaron una creciente diferenciación social. Entre ellos hay que citar, en lugar singular, la concentración del poder en manos de un grupo reducido de personas y la ausencia de una información solvente manifiesta, por ejemplo, a través de la publicación de datos sobre niveles de ingresos. Otro elemento importante era un sistema fiscal que apenas presentaba rasgos de progresividad y que no contemplaba el establecimiento de impuesto alguno sobre el patrimonio.

La situación de las capas privilegiadas —altos funcionarios del Partido y del estado, una parte de la *intelligentsia*, la cúpula de las fuerzas armadas y los responsables del aparato de gestión económica— fue analizada en detalle por Mervyn Matthews, quien llegó a la conclusión de que a principios de los setenta los ingresos salariales medios de un miembro de la *élite* eran unas tres veces y media superiores al salario medio de la población y unas siete veces mayores que el salario mínimo.[15] Según otro estudio, el 2% más rico tenía unos ingresos casi ocho veces superiores a los del 2% menos favorecido, con diferencia aún mayor si se toman como elemento de comparación las unidades familiares. Un 5% de la población habría poseído un 23-28% de la riqueza, y un 10%

[15] Mervyn Matthews, «Top incomes in the USSR», en *Economic aspects of life in the USSR* (NATO, Bruselas, 1975), págs. 134-135.

un 40% de ésta. Además de los ingresos salariales, las capas superiores gozaban de distintos privilegios, entre los que se incluían pagas adicionales que en algunos casos doblaban el salario recibido, emolumentos en rublos-oro utilizables en tiendas especiales, dietas y viajes gratuitos, derechos especiales de uso sobre instalaciones (dachas, clínicas del estado...), acceso a mejores viviendas o utilización fácil de redes de influencia. Para Matthews, estas prebendas, y otras, difícilmente valorables, acaso hacían que la relación con respecto al salario mínimo se situase en 11-13 a 1.[16]

En términos absolutos, la situación de la *élite* soviética no era en forma alguna envidiable en comparación con la de las capas privilegiadas de los estados capitalistas desarrollados. La riqueza acumulada y los ingresos eran muy inferiores, y otro tanto podía decirse de la independencia política y económica: todas las posibilidades de promoción y de mejora se derivaban de la vinculación con el Partido o con el aparato estatal. Sin embargo, y en un sistema caracterizado por la dificultad de acceder a un buen número de bienes y servicios, la relativa opulencia de la *élite* soviética se hacía notar por doquier y se presentaba tanto más intolerable cuanto que ese sistema declaraba sustentarse en una ideología formalmente igualitaria. Las dificultades para ofrecer una explicación razonable al respecto se agregaban a las derivadas de la constatación de que, a mediados de los ochenta, y según fuentes soviéticas, un porcentaje superior al 20% de la población —43 millones de personas— vivía con menos de 75 rublos mensuales, el nivel considerado de «seguridad material mínima» en 1989.

g) *Sanidad, vivienda, educación.* Los índices de esperanza de vida y de mortalidad infantil, ya referidos, son la más clara ilustración de la degradación del sistema sanitario

[16] Mervyn Matthews, *Privilege in the Soviet Union* (Allen & Unwin, Londres, 1978), pág. 54.

soviético. Algunos de los rasgos de éste eran comunes, por lo demás, a los habituales en los países capitalistas desarrollados: masificación —amparada en la aplicación abusiva de índices cuantitativos, como es el caso del número de visitas realizadas—, falta de personal cualificado, corrupción... Como los demás servicios sociales, en los setenta y en los ochenta la sanidad se vio sometida a sensibles recortes presupuestarios: si en 1975 el gasto correspondiente era un 5,3% del total estatal, ese porcentaje se había reducido a un 4,6% en 1985 y a un 4,4% en 1987. Los desequilibrios espaciales eran, por otra parte, muy notables. Así, mientras el número de médicos por 10.000 habitantes era escasamente superior a 100 en Moscú, descendía a 84 en la capital de Kirguizia y se situaba en una veintena en numerosas zonas rurales de esta república del Asia central. Otro signo de la crisis era la ausencia de un control sanitario de la producción de alimentos. En 1988 el ministro de Sanidad, Yevguenii Cházov, señaló que «a causa del mal abastecimiento de agua y del bajo nivel higiénico de muchas empresas productoras de leche y carne (...), 1,7 millones de personas sufren anualmente enfermedades intestinales agudas».[17] De particular relieve era también, por cierto, la masiva realización de abortos (8 millones en 1988).

La situación de la vivienda era muy deficiente, y ello pese a que las mejoras habían sido sustanciales (8,9 m^2 por persona en 1960, por 14,1 en 1985). Según Aganbegyan, un 10% de las viviendas no contaban con agua corriente ni calefacción, y la situación era particularmente mala en las zonas rurales.[18] En 1986, Yeltsin, a la sazón secretario del Partido en Moscú, señaló que eran medio millón las personas que en la capital disponían de menos de 5 m^2 en sus casas, mientras que un millón de ciudadanos habitaban en viviendas con servicios higiénicos comunes.[19] El porcentaje del gasto doméstico

[17] *El País* (2 de julio de 1988).
[18] Aganbegyan, *op. cit.*, pág. 182.
[19] Cit. en Pilar Bonet, *Moscú* (Destino, Barcelona, 1988).

destinado a pagar alquileres, mantenimiento de inmuebles y servicios colectivos era muy bajo —inferior al 3%— y acaso daba cuenta de algunos de los problemas del sector, que presentaba, por lo demás, listas de espera de varios años. La inversión pública se había ido reduciendo paulatinamente, como lo demuestra el descenso en el número de viviendas construidas en los sucesivos planes quinquenales (4 millones en 1961-1965, 2 millones en 1971-1975, menos de 1,5 millones en 1981-1985). Las menguantes capacidades de la industria de la construcción eran motivo de preocupación de los responsables ministeriales, que preveían grandes dificultades para hacer frente a la demanda de viviendas privadas y de edificios de uso público.

Por lo que respecta al sistema educativo, que había cumplido con su misión de reproductor de la ideología oficial —en perjuicio, según los especialistas, de las disciplinas de naturaleza más técnica—, se identificaban en él insuficiencias semejantes a las habituales en los países capitalistas desarrollados: masificación, bajos salarios del profesorado, dificultades de adaptación a las demandas del mercado de trabajo... Pese al esfuerzo realizado, en los años ochenta un 76% de los trabajadores ocupaban puestos laborales no especializados o que requerían un bajo nivel de formación. La educación sustraía —ya lo hemos apuntado— un 6% del presupuesto estatal, bajo porcentaje si se toman en consideración las necesidades del país.

h) *La situación de la mujer.* Tal y como más adelante recordaremos, en la URSS sólo se hizo valer el primero de los dos grandes cambios —la imbricación en el aparato productivo y la socialización del trabajo doméstico— que, según la visión de Engels, debían contribuir a emancipar a la mujer. La URSS presentaba la más alta tasa de participación de mano de obra femenina en el trabajo: en 1973, el 51% del censo laboral soviético estaba constituido por mujeres, y diez años después trabajaba —al margen de las economías domésticas—

un 90% de la población femenina con edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Las mayores tasas de presencia de la mujer en el trabajo se registraban en la sanidad y los servicios sociales (85% del total de la población empleada), la banca y los seguros (75%), las comunicaciones (68%) y las tareas administrativas (63%). Un 82% de los economistas, un 74% de los médicos y un 72% de los profesores eran mujeres.

Pese a lo anterior, la presencia femenina era cada vez menor a medida que se ascendía en la pirámide de empleo. Las mujeres tendían a ocupar los escalones bajos y medios de la jerarquía laboral y realizaban por lo común las tareas más rutinarias; esto aparte, para conseguir una promoción necesitaban un tiempo tres veces superior al habitual en el caso de los varones. Es significativo que, frente a las cifras antes expuestas, sólo un 12% de los directores de empresa y de los ingenieros-jefe y un 14% de los responsables de establecimientos comerciales fuesen mujeres. La menor cualificación laboral de la mayor parte de la población femenina se traducía en salarios sensiblemente más bajos que los percibidos por los varones (un 30% inferiores, según una estimación).

La situación descrita en el párrafo anterior alcanzaba también a los organismos de representación política. En 1971 sólo un 3,8% de los miembros del Comité Central del PCUS eran mujeres, si bien la participación de éstas en el conjunto de la militancia del Partido alcanzaba un 22,2%. Una mujer, Aleksandra Biriukova, consiguió en los primeros años de *perestroika* un puesto en el Politburó, tras un vacío total de presencia femenina desde la década de 1960.

En general puede decirse que la mujer seguía siendo objeto de una visible discriminación laboral por efecto de condiciones semejantes a las que imperaban en tantos otros lugares: exigencia de desarrollo simultáneo de «otro trabajo» en el hogar, embarazos, cuidado de los hijos... Algunas de las características específicas de la vida soviética, como la dificultad de acceder a determinados bienes y la necesidad

consiguiente de dedicar una gran cantidad de tiempo a la búsqueda de éstos, agudizaban aún más esa situación y dificultaban una incorporación igualitaria de la mujer a las tareas colectivas.

La innovación tecnológica y sus problemas

El grado de desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología soviéticas ha sido objeto de numerosas, y a menudo muy dispares, evaluaciones. La existencia de grandes diferencias entre los niveles de perfeccionamiento tecnológico de los distintos sectores de la vida económica era acaso una de las explicaciones de tal hecho. Philip Hanson identificó al efecto tres grandes áreas que presentarían otros tantos estadios diferentes de desarrollo tecnológico.[20]

En la primera de esas áreas, de alta prioridad y larga tradición, la tecnología soviética era genéricamente equiparable a la occidental. El sector de defensa y el de producción, transmisión y abastecimiento de electricidad conformaban este ámbito en el pasado. Una segunda área de desarrollo tecnológico la configuraban industrias relativamente «tradicionales» que, también de alta prioridad y larga tradición, no eran objeto de «investigación intensiva» ni exhibían una clara base científica. Era el caso de las industrias del hierro y del acero y, en términos más generales, de la de fabricación de maquinaria; aunque con un nivel de desarrollo aceptable y capacidades de innovación ciertas, el rendimiento era desigual, con deficiencias significativas en cuanto a la calidad y la combinación de los productos, y retrasos importantes en la introducción y la difusión de innovaciones. Había, por último, sectores —la industria química, la automovilística o el sector del carbón, así como, en lugar notable, la informá-

[20] Philip Hanson, *Trade and technology in Soviet-Western relations* (Columbia University, Nueva York, 1981), págs. 41-42.

tica— en los que se revelaba un claro desfase tecnológico de la URSS. Con un retraso con respecto a Occidente evaluado en diez años, la industria informática no había conseguido alcanzar niveles de producción masiva y seguía dependiendo de forma significativa de las importaciones. En esta tercera y deprimida área había que incluir también actividades que, como la agricultura, el procesado de alimentos, la industria textil o la distribución comercial, no requerían un gran desarrollo tecnológico. De manera general, las carencias soviéticas se producían en menor medida en los estadios de la investigación y el desarrollo experimental, eran algo mayores en la innovación, y resultaban ser muy notables en la difusión de nuevas tecnologías.

Por lo demás, eran muchos los obstáculos que la economía soviética colocaba ante el proceso de innovación y difusión de tecnología. El primero era la escasez de los recursos destinados a estos menesteres, que hizo que sólo adquirieran un desarrollo significativo el complejo militar y disciplinas de marcado carácter teórico. El progreso tecnológico se concentraba, por otra parte, en el sector de bienes de producción —y dentro de él en el de «medios de destrucción»— y sólo a duras penas se extendía al de bienes de consumo: sectores mixtos como el electrónico o la industria del automóvil se caracterizaban por un desarrollo muy débil y no actuaban como impulsores de la innovación tecnológica y el crecimiento económico. Los efectos de la escasez de recursos se multiplicaban en la medida en que había una clara separación organizativa entre el trabajo en investigación y desarrollo y el diseño, por un lado, y la producción, por el otro. Era común que los centros de investigación ignorasen a qué tipos de empresas estaban destinados los dispositivos en que trabajaban, y el proceso de difusión de éstos era tan extremadamente lento que esta circunstancia se convertía en un verdadero contraincentivo.

Los incentivos salariales relacionados con la innovación también eran escasos. Según una estimación, el cumplimiento de los planes de producción deparaba bonos cuatro veces superiores a los que se derivaban de la satisfacción de los planes correspondientes a la renovación de los equipos. Tampoco la organización del trabajo, poco rigurosa y nada exigente, propiciaba la resolución de los problemas en este terreno. El excesivo tamaño de las unidades de producción podía ser también un elemento de freno, al menos si se emplea como modelo de comparación el occidental, en el que son las pequeñas empresas las que corren a cargo de la mayor parte de la innovación tecnológica. Conviene no olvidar que ésta, en el marco de una economía de planificación central, perturbaba el proceso normal de producción y podía llegar a comprometer la satisfacción de los objetivos fijados por el plan. Si el predominio de índices cuantitativos no favorecía la introducción de mejoras en la calidad, la rigidez del sistema de precios impedía que las empresas se beneficiasen directamente de los aumentos verificados en su productividad. El hecho de que los planes fuesen modificados con cierta frecuencia y de que las sanciones por su incumplimiento resultasen muy leves no tenía, por lo demás, y pese a lo que pudiera parecer, una repercusión positiva sobre la innovación tecnológica. La alteración de los planes remitía más bien a un objetivo de signo contrario: mantener incólume la relación de producción ya existente y evitar, por ejemplo, la sustitución de mano de obra por tecnología.

En otro plano, existía sobre las unidades de producción una presión para que adquiriesen nuevos y costosos equipos, a menudo en contra de sus propios intereses y en pésimas condiciones de infraestructura. Para las empresas se trataba de incrementar su prestigio y sus capacidades de innovación aun al margen de toda lógica económica. Al centro le correspondía autorizar las asignaciones que en su caso habían de permitir la introducción de nuevas tecnologías, mientras que sólo una parte mínima de la investigación se realizaba en las unidades de producción interesadas.

Varios estudios soviéticos subrayaron la lentitud del pro-

ceso de incorporación de nuevos dispositivos. Según uno de ellos, que databa de 1984 y analizaba 550 casos de innovaciones controladas por el comité estatal correspondiente, las empresas incorporaban a sus circuitos tecnologías que en el 60% de los casos tenían más de diez años de antigüedad (los criterios «internacionales» consideran caducos los dispositivos con más de siete años). Otro estudio soviético analizaba el tiempo medio de aplicación de los nuevos dispositivos, y lo cifraba en 10,9 años que se repartían así: 1,8 para el diseño experimental, 2,8 para el diseño del proyecto de aplicación, 1,5 de tiempo vacío hasta el inicio de la fabricación y 4,8 para la fabricación propiamente dicha. Una última investigación, también soviética, concluía que el tiempo invertido en el proceso global de diseño era en la URSS un 50% superior que en Occidente.

Hay que mencionar, por último, la influencia negativa que ejercía sobre la innovación tecnológica el hecho de que los bienes de equipo fuesen sistemáticamente reparados y mantenidos en activo, con un gasto enorme de recursos y unas dimensiones excesivas de la fuerza de trabajo dedicada a estas actividades (siete millones de trabajadores y un tercio del parque de máquinas herramientas). La vida activa de una máquina era entre tres y cuatro veces superior a la registrada en los EE UU, al tiempo que no dejaba de incrementarse el porcentaje de equipos con más de diez años de antigüedad (el 20% en 1971 y el 28% en 1980).

La mayor parte de los problemas reseñados se apreciaban también con las tecnologías foráneas. La recepción de éstas sólo parecía razonablemente adecuada en el sector militar. En el resto de la economía era, por el contrario, bastante deficiente, aun con excepciones en ámbitos —así, el del gas natural— en los que se hacían notar los efectos de la competencia exterior. El recurso a tecnologías foráneas planteaba, en primer lugar, el problema del excesivo tiempo empleado en su adquisición, instalación y utilización efectiva. Un estudio sobre la puesta en práctica de 26 proyectos que hacían uso de

tecnología británica en el ámbito de la industria química llegó a la conclusión de que el tiempo requerido al efecto en la URSS fue entre tres años y medio y cuatro años superior al habitual en Europa occidental (estimado éste en 2,5-3,5 años). Las empresas que incorporaban tecnología exterior no por ello dejaban de absorber cantidades excesivas de fuerza de trabajo: estudios realizados en la propia industria química señalaron que en la URSS se empleaba un volumen de mano de obra entre un 50 y un 70% superior al registrado en los países exportadores de la tecnología correspondiente. Consecuencia de todo lo anterior era, claro, que la rentabilidad de las tecnologías importadas resultaba ser mucho menor que la obtenida en los países de origen.

Otro de los problemas que planteaban las importaciones de tecnología era la propensión a adquirir equipos enteros con grandes cantidades de repuestos, en un intento de prevenir futuras dificultades de adquisición de estos últimos y de hacer frente a las deficiencias del proceso de innovación propio. Al margen de los enormes costes, el efecto era que los equipos se mantenían en funcionamiento durante períodos excesivos, al tiempo que se realizaban escasos esfuerzos para introducir tecnologías autóctonas. Esto aparte, la adquisición de equipos en el exterior no tenía las más de las veces otro objetivo que permitir la sustitución de importaciones de los bienes que esos equipos producían, con lo cual su efecto de renovación tecnológica y difusión interna era mínimo.

Tatiana Zaslávskaya: un análisis de síntomas

En un informe realizado en 1983, la socióloga soviética Tatiana Zaslávskaya identificó en el «anticuado sistema de relaciones productivas y dirección económica estatal»[21] la

[21] Tatiana Zaslávskaya, «Informe sobre la crisis económica y social en la URSS», en *Leviatán* (nº 15, primavera de 1984).

causa fundamental de la crisis económica y social que atenazaba a la URSS. El desmoronamiento del sistema en cuestión, configurado cinco décadas antes y apenas modificado desde entonces, se había visto acelerado por la irrupción de otros factores, como el crecimiento en los costes de extracción de las materias primas, los problemas demográficos, una climatología poco propicia, la manifestación de graves desigualdades estructurales, la escasa disciplina laboral o la inadecuación de los incentivos materiales.

Zaslávskaya resumió en nueve las características del sistema que nos ocupa: alto grado de centralización; planificación de la producción mediante órdenes directrices; debilidad de las relaciones de mercado, con la consiguiente inadecuación entre los precios de los bienes y su valor social; asignación centralizada de suministros a las empresas; ausencia de un mercado para los bienes de consumo; regulación central de los incentivos materiales; existencia de divisiones departamentales de control; limitación de los derechos económicos y de la responsabilidad en la dirección de las empresas, y restricción de las actividades no oficiales. Puede hablarse entonces de un «predominio de los procedimientos administrativos y centralizados de control sobre los métodos económicos y descentralizados»[22] El sistema económico se hallaba aislado de proveedores y de consumidores, pese a lo cual los responsables de esta situación estimaban que era posible conocer directamente las necesidades sociales, aun sin poder contar con la «ley del valor» o con los mecanismos de mercado. De acuerdo con la socióloga soviética, la gestión administrativa descentralizada debía sustituirse por factores «automáticos» de regulación, producto de una ampliación del papel del mercado. «Toda reglamentación administrativa del trabajo y de la actividad económica conlleva la centralización»,[23] y se aplica con independencia de las condiciones

[22] Zaslávskaya, *op. cit.*, págs. 15-16.
[23] Zaslávskaya, *op. cit.*, pág. 37.

concretas de cada región, sector económico o unidad de producción.

Otro rasgo del sistema era la relativamente pequeña participación que permitía a los organismos que representaban los intereses del estado —Zaslávskaya no explica cuáles son los unos y los otros— y a los agentes directos de producción. Las funciones del escalón intermedio (ministerios, subdepartamentos...) se hallaban privilegiadas, por lo que cualquier reforma debía encarar la reducción de sus atribuciones y del número de sus efectivos. Zaslávskaya estimaba que en el origen de todas las deficiencias estaba la «dirección administrativa» de la economía, cuyos efectos se habían hecho notar de forma injustificada más allá del tiempo que era el suyo. De esta manera, no cuestionaba si este tipo de dirección constituía realmente la única opción en los años treinta y cuarenta, con sus secuelas de una rápida y masiva industrialización y una colectivización forzada. Todo el peso de su crítica parecía recaer sobre la era de Brézhnev y eludía, así, una contestación radical del modelo de acumulación adoptado por el estado soviético. La consideración de las deseconomías implícitas en un sistema únicamente interesado en la aceleración de los índices de crecimiento escapaba, por lo demás, al análisis de la socióloga soviética, poco seducida por la idea de arrojar luz sobre un período que Roi Medvédev calificó como una «mezcla irrepetible de entusiasmo, tensión ideológica y terror».[24]

[24] Roi Medvédev y Giulietto Chiesa, *A URSS em mudança* (Dom Quixote, Lisboa, 1988), pág. 72.

BIBLIOGRAFÍA

La geografía de la Unión Soviética se estudia en las monografías de James H. Bater, *The Soviet Scene. A geographical perspective* (Edward Arnold, Sevenoaks, 1989); André Blanc, *Géographie de l'URSS* (Larousse, París, 1977); André Blanc y Henri Chambre, *La URSS* (Ariel, Barcelona, 1974); Michael J. Bradshaw (dir.), *The Soviet Union. A new regional geography?* (Belhaven, Londres, 1991); Denis Brand, *L'Union Soviétique* (Sirey, París, 1987); John P. Cole, *Geography of the USSR* (Penguin, Harmondsworth, 1971); Pierre George, *Géographie de l'URSS* (PUF, París, 1974); Roy E.H. Mellor, *The Soviet Union and its geographical problems* (Macmillan, Londres, 1986), y Leslie Symons (dir.), *The Soviet Union. A systematic geography* (Barnes & Noble, Totowa, 1980).

Textos generales de consulta son los de Archie Brown (dir.), *The Soviet Union. A biographical dictionary* (Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1990); Francis Conte, *Les grandes dates de la Russie et de l'URSS* (Larousse, París, 1990); Martin Gilbert, *The Dent atlas of Russian history* (JM Dent, Londres, 1993); John Paxton, *Companion to Russian history* (Facts on File, Nueva York, 1983); Warren Shaw y David Pryce, *Encyclopaedia of the USSR* (Cassell, Londres, 1990); Hans-Joachim Torke, *Historisches Lexikon der Sowjetunion 1917/22 bis 1991* (C.H. Beck, Munich, 1993); Stephen White (dir.), *Political and economic encyclopaedia of the Soviet Union and Eastern Europe* (Longman, Harlow, 1991), y VV AA, *Modern encyclopaedia of Russian and Soviet history* (Academic International, Gulf Breeze, 1978). A los anteriores hay que agregar el anuario *Naródnoye jotsiaitsvo SSSR* (Finansi i Statística, Moscú), publicado por el Gosudárstvennii Komitet SSSR po Statístike; en castellano aparecía una versión abreviada de esa publicación, con el título *La URSS en cifras*. El mismo comité estatal publicó también, con motivo del LXX aniversario de la revolución de Octubre, un anuario especial: *Naródnoye jotsiaitsvo SSSR za 70 let* (Finansi i Statística, Moscú, 1987).

Caracterizaciones teóricas, con diversa orientación, del sistema soviético se encontrarán en los libros de Rudolf Bahro, *La alternativa* (Materiales, Barcelona, 1979); Claude Berger, *Marx frente a Lenin. Asociación obrera o socialismo de Estado* (Zyx, Madrid, 1977); Cornelius Castoriadis, *La sociedad burocrática* (dos tomos) (Tusquets, Barcelona, 1977); Stephen Cohen, *Rethinking the Soviet experience* (Oxford University, Nueva York, 1985); Ferenc Fehér, Agnes Heller y György Markus, *Dictadura y cuestiones sociales* (FCE, México, 1983); Andras Hegedüs, *Socialismo y burocracia* (Península, Barcelona, 1979); David Lane, *El estado*

socialista industrial (Pirámide, Madrid, 1981); Claude Lefort, *¿Qué es la burocracia?* (Ruedo Ibérico, París, 1970); Anton Pannekoek y otros, *La contre-révolution bureaucratique* (dos tomos) (PUF, París, 1976); Bruno Rizzi, *La burocratización del mundo* (Península, Barcelona, 1980); Adam Schaff, *El comunismo en la encrucijada* (Crítica, Barcelona, 1983); Teodor Shanin (dir.), *El Marx tardío y la vía rusa* (Revolución, Madrid. 1990), y Aleksandr Zinóvev, *Le communisme comme realité* (L'Age d'Homme, París, 1981).

Entre las introducciones a la historia de la URSS merecen mencionarse las de Carsten Goehrke y otros, *Rusia* (Siglo XXI, Madrid, 1980); Michel Heller y Aleksandr Nekrich, *Utopia in power. A history of the USSR from 1917 to the present* (Hutchinson, Londres, 1986); Geoffrey Hosking, *A History of the Soviet Union* (Fontana, Londres, 1990); Michael Kort, *The Soviet colossus. A history of the USSR* (Routledge, Londres, 1990); Martin Mccauley, *The Soviet Union since 1917* (Longman, Harlow, 1981); Robin Milner-Gulland, *Rusia, de los zares a los soviets* (Folio-Del Prado, Madrid, 1992); Nicholas V. Riasanovsky y Sergio Romano, *Storia della Russia* (Bompiani, Milán, 1992); Georges Sokoloff, *La puissance pauvre* (Fayard, París, 1993), y VV AA, *L'URSS de Lénine à Gorbatchev* (GRIP, Bruselas, 1989). Aproximaciones rápidas, y muy sencillas, a la materia son las monografías de Tom Corfe, *Las revoluciones rusas* (Akal, Madrid, 1991); Ronald Hingley, *Russia. A concise history* (Thames and Hudson, Londres, 1991); Walther Kirchner, *Russian history* (Harper, Nueva York, 1991); Peter Mantin y Colin Lankester, *From Romanov to Gorbachev. Russia in the 20th Century* (Hutchinson, Londres, 1989), y John Robottom, *Modern Russia* (Longman, Harlow, 1988).

De los problemas demográficos se ocupan los trabajos de Aleksandr Avdéev e Irina Tróitskaya, *Contraception and abortion in the USSR* (Congrès démographique européen, París, 1991); Alain Blum, *Naître, vivre et mourir en URSS* (Plon, París, 1994); Murray Feshbach, *The Soviet population policy debate: actors and issues* (RAND, Santa Mónica, 1986); Vladímir Mukomel, *Demograficheskii diagnoz* (Progress, Moscú, 1990), y Aleksandr Tkachenko y Aleksandra Grishánova, *Demografía popular de la URSS* (Progreso, Moscú, 1990). El comité estatal antes mencionado, Gosudárstvennii Komitet SSSR po Statístike, publicaba un anuario demográfico: *Naseléniye SSSR* (Finansi i Statística, Moscú).

La naturaleza económica del sistema vigente en la URSS se estudia en los libros de Antonio Aponte, *La economía de los países socialistas* (Salvat, Barcelona, 1973); Luciano Cafagna, *La economía de la Unión Soviética* (Uteha, México, 1961); Henri Chambre, *La Unión Soviética y el desarrollo económico* (Mensajero, Bilbao, 1971); Bernard Chavance, *El sistema económico soviético* (Revolución, Madrid, 1987); Pawel H. Dembinski, *Les*

économies planifiés (Seuil, París, 1988); Gérard Duchêne, *L'économie de l'URSS* (La découverte, París, 1987); Philippe Frémeaux y Christine Durand, *Comprendre l'économie soviétique* (Syros, París, 1985); Pierre George, *L'économie de l'URSS* (PUF, París, 1974); Aureliano Jaguin y Gianfranco la Grassa, *Proceso productivo capitalista y socialismo en la URSS* (Pre-textos, Valencia, 1978); Michael Kaser, *La economía soviética* (Guadarrama, Madrid, 1970); Janòs Kornai, *Economics of shortage* (North Holland, Amsterdam, 1980); David Lane, *Soviet economy & society* (Basil Blackwell, Oxford, 1987); Marie Lavigne, *Les économies socialistes soviétiques et européennes* (Armand Colin, París, 1979); Marie Lavigne y Wladimir Andreff (dirs.), *La réalité socialiste* (Economica, París, 1985); Zhores Medvédev, *Soviet agriculture* (Norton, Nueva York, 1988); Alec Nove, *Historia económica de la Unión Soviética* (Alianza, Madrid, 1973), *El sistema económico soviético* (Siglo XXI, México, 1982) y *La economía del socialismo factible* (Pablo Iglesias-Siglo XXI, Madrid, 1987); Enrique Palazuelos, *La formación del sistema económico soviético* (Akal, Madrid, 1990); Eugenio Scalfari, *El poder económico en la URSS* (Seix Barral, Barcelona, 1965); Harry Schwartz, *La economía soviética desde Stalin* (Cultura Popular, Barcelona, 1967); François Seurot, *Las economías socialistas* (FCE, México, 1986); Georges Sokolov, *La economía de la URSS al desnudo* (Dopesa, Barcelona, 1977); Stanislaw Wellisz, *La economía en el bloque soviético* (Alianza, Madrid, 1966); Jan Winiecki, *Las distorsiones en las economías de tipo soviético* (Civilización, Barcelona, 1988), y VV AA, *La economía de la Europa del Este* (Banco Exterior de España, Madrid, 1982).

Sobre la realidad laboral pueden consultarse Jan Adam (dir.), *Employment policies in the Soviet Union and Eastern Europe* (Macmillan, Londres, 1982); Bob Arnot, *Controlling Soviet labour: experimental change from Brezhnev to Gorbachev* (Macmillan, Londres, 1990); David Lane (dir.), *Labour and employment in the USSR* (Wheatsheaf, Londres, 1986); Nathan Leites, *Soviet style in management* (Cran and Russak, Nueva York, 1985); J.L. Porket, *Work, employment and underemployment in the Soviet Union* (Macmillan, Basingstoke, 1989); Jacques Sapir, *Travail et travailleurs en URSS* (La découverte, París, 1986), y Leonard Schapiro y Joseph Godson (dirs.), *The Soviet worker* (Macmillan, Londres, 1984). Otras monografías sobre aspectos de la vida económica son las de Philip Hanson, *Trade and technology in Soviet Western relations* (Columbia University, Nueva York, 1981); Jovan Pavlevski, *Le niveau de vie en URSS* (Economica, París, 1975); Jonathan R. Schiffer, *Soviet regional economic policy* (Macmillan, Londres, 1989), y Emilio Soldevilla, *La empresa estatal soviética* (Nova Terra, Barcelona, 1977).

Estudios sobre la vida y la organización social en la URSS son los de

Jenny Brine, Maureen Perrie y Andrew Sutton (dir.), *Home, school and leisure in the Soviet Union* (George Allen & Unwin, Londres, 1980); Anthony Jones, Walter D. Connor y David E. Powell (dirs.), *Soviet social problems* (Westview, Boulder, 1991); Basile Kerblay y Marie Lavigne, *Les soviétiques des années 80* (Armand Colin, París, 1985); Janina Markiewicz-Lagneau, *Estratificación y movilidad social en los países socialistas* (Siglo XXI, Madrid, 1971); Mervyn Matthews, *Clases y sociedad en la Unión Soviética* (Alianza, Madrid, 1977), *Poverty in the Soviet Union* (Cambridge University, Londres, 1978), *Privilege in the Soviet Union* (Allen & Unwin, Londres, 1978) y *Patterns of deprivation in the Soviet Union* (Hoover Institution, Nueva York, 1989); James R. Millar (dir.), *Politics, work and daily life in the USSR* (Cambridge University, Nueva York, 1987); M. Rywkin, *Soviet society today* (M.E. Sharpe, Armonk, 1989); Michael Paul Sacks y Jerry G. Pankhurst (dirs.), *Understanding Soviet society* (Unwin Hyman, Winchester, 1988); Vladímir Shlapentokh, *Public and private life of the Soviet people* (Oxford University, Nueva York, 1989), y VV AA, *Economic aspects of life in the USSR* (NATO, Bruselas, 1975). Retratos de la vida cotidiana en la Unión Soviética son los de Gabrielle Froment, *La vida soviética* (Oikos-tau, Barcelona, 1971); Nina y Jean Kéhayan, *Rue du Prolétaire Rouge* (Seuil, París, 1978); Piero Ostellino, *Vivere in Russia* (Rizzoli, Milán, 1977); Christian Schmidt-Hauer, *Los rusos de hoy* (Planeta, Barcelona, 1981); Mary Seton-Watson, *Scenes from Soviet life* (Ariel, Londres, 1986), y Hedrick Smith, *Los rusos* (Argos Vergara, Barcelona, 1977).

La situación de la mujer se estudia en libros como los de Genia K. Browning, *Women & politics in the USSR* (Wheatsheaf, Brighton, 1987), y Alena Heitlinger, *Women and state socialism* (Macmillan, Londres, 1979). Estudios sobre materias específicas son, en fin, los de L.G. Churchward, *La «intelligentsia» soviética* (Revista de Occidente, Madrid, 1976); Nigel Grant, *Soviet education* (Penguin, Harmondsworth, 1972); Borís Kagarlitski, *The thinking reed: intellectuals and the Soviet state* (Verso, Londres, 1988); Patrick Meney, *La kleptocratie. La delinquance en URSS* (La table ronde, París, 1982), y Richard Stites, *Russian popular culture* (Cambridge University, Cambridge, 1992). De la naturaleza y problemas del medio urbano se ocupan Edmund Goldzamt, *El urbanismo en la Europa socialista* (Gustavo Gili, Barcelona, 1980); Henry W. Morton y Robert G. Stuart (dirs.), *The contemporary Soviet city* (Macmillan, Londres, 1984); Vieri Quilici, *Ciudad rusa y ciudad soviética* (Gustavo Gili, Barcelona, 1978), y Graham Smith, *Planned development in the socialist world* (Cambridge University, Cambridge, 1989).

Introducciones al sistema político soviético son los libros de Hélène Carrère d'Encausse, *El poder confiscado* (Emecé, Buenos Aires, 1983);

Martin Crouch y Robert Porter, *Understanding Soviet politics through literature* (George Allen & Unwin, Londres, 1984); Ian Derbyshire, *Politics in the Soviet Union* (Chambers, Londres, 1987); Jerry Hough y Merle Fainsod, *How the Soviet Union is governed* (Harvard University, Harvard, 1979); David Lane, *State and politics in the USSR* (Basil Blackwell, Oxford, 1985); Marie Lavigne y Anita Tiraspolsky, *L'U.R.S.S., pouvoir et societé* (Hatier, París, 1981); Michel Lesage, *Le système politique de l'URSS* (PUF, París, 1977) y *La administración soviética* (FCE, México, 1985); Mary Mcauley, *Politics and the Soviet Union* (Penguin, Harmondsworth, 1986) y *Soviet politics, 1917-1991* (Oxford University, Oxford, 1992); Michael Morozov, *Quién manda en Rusia* (Aymá, Barcelona, 1977); Richard Sakwa, *Soviet politics* (Routledge, Londres, 1989); Leonard Schapiro, *The government and politics of the Soviet Union* (Hutchinson, Londres, 1975); Gordon B. Smith, *Soviet politics* (Macmillan, Londres, 1988), y Stephen White, John Gardner y George Schopflin, *Communist political systems: an introduction* (Macmillan, Londres, 1982).

Sobre el PCUS y sus estructuras se leerán con provecho las monografías de Patrice Gélard, *Le Parti Communiste de l'Union Soviétique* (PUF, París, 1982); Ronald Hill y Peter Frank, *The Soviet Communist Party* (Allen & Unwin, Londres, 1986), y Leonard Schapiro, *The Communist Party of the Soviet Union* (Methuen & Co., Londres, 1985). El entramado ideológico-jurídico-institucional se analiza en obras como las de Thomas J. Blakeley, *La escolástica soviética* (Alianza, Madrid, 1969); Umberto Cerroni, *El pensamiento jurídico soviético* (Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1977); Jorge de Esteban y Santiago Varela, *La Constitución soviética* (Universidad Complutense, Madrid, 1988); Michel Heller, *El hombre nuevo soviético* (Planeta, Barcelona, 1985); Herbert Marcuse, *El marxismo soviético* (Alianza, Madrid, 1967); Françoise Thom, *Newspeak. La langue de bois* (Julliard, París, 1987); René Zapata, *La philosophie russe et soviétique* (PUF, París, 1988); Iliá Zemtsov, *Lexikon of Soviet political terms* (Hero, Fairfax, 1984), y VV AA, *Introducción al derecho soviético* (Progreso, Moscú, 1988).

El estilo de liderazgo y cuestiones afines se analizan en las obras de George Breslauer, *Khrushchev and Brezhnev as leaders: building authority as Soviet leaders* (Allen & Unwin, Londres, 1992); Archie Brown (dir.), *Political leadership in the Soviet Union* (McMillan-St. Anthony's, Londres-Oxford, 1989); Christel Lane, *The rites of rulers* (Cambridge University, Cambridge, 1981); David Lane (dir.), *Elites and political power in the USSR* (Edward Elgar, Aldershot, 1988); T.H. Rigby, *Political elites in the USSR* (Edward Elgar, Aldershot, 1990); Robert C. Tucker, *Political culture and leadership in Soviet Russia from Lenin to Gorbachev*

BIBLIOTECA RELACIONES LABORALES

(Wheatsheaf, Brighton, 1987), y Mijaíl Voslenski, *La nomenklatura* (Argos Vergara, Barcelona, 1981). Por las estructuras de poder local se interesan Jeffrey W. Hahn. *Soviet grassroots. Citizen participation in local Soviet government* (Princeton University, Princeton, 1988), y Everett M. Jacobs, *Soviet local politics and government* (George Allen & Unwin, Londres, 1983).

Textos relativos a la situación de los «disidentes» son los de la esposa de Andrei Sájarov, Yelena Bonner, *Alone together* (Collins Harvill, Londres, 1986); Fernando Claudín, *La oposición en el «socialismo real»* (Siglo XXI, Madrid, 1981); Vladímir Gedilaghin, *La oposición en la URSS* (Cambio 16, Madrid, 1977); Claude Lefort, *Un hombre que sobra. Reflexiones sobre «El archipiélago Gulag»* (Tusquets, Barcelona, 1980); Vladímir Maksímov y otros, *Literatura rusa clandestina* (Juventud, Barcelona, 1972); Roi Medvédev, *La democracia socialista* (Francisco de Aguirre, Santiago de Chile, 1974); Zhores Medvédev, *Ten years after Ivan Denisovich* (Penguin, Harmondsworth, 1975); Peter Reddaway, *¿Rusia sin censura?* (Dopesa, Barcelona, 1973); Andrei Sájarov, *Habla Sájarov* (Noguer, Barcelona, 1985), *Memorias* (Plaza y Janés-Cambio 16, Barcelona, 1990) y *Trevoga i nádezhda* (Interverso, Moscú, 1991); VV AA, *Los intelectuales y el poder soviético* (Unión, Madrid, 1976), y VV AA, *La Rusia contestataria* (Juventud, Barcelona, 1974). Puede consultarse también el informe de Amnistía Internacional, *Presos de conciencia en la URSS* (AI, Madrid, 1980). Algunos aspectos de la vida religiosa se estudian en William C. Fletcher, *The Russian Orthodox Church underground 1917-1970* (Oxford University, Oxford, 1971); Aleksandr Preobrazhenski (dir.), *The Russian Orthodox Church* (Progress, Moscú, 1988), e Igor Troyanovski (dir.), *Religion in the Soviet republics* (Harper, San Francisco, 1991).

Obras sobre la «cuestión nacional» son las de E. Bagrámov, *The CPSU's nationalities policy: truth and lies* (Progress, Moscú, 1988); Donna Bahry, *Outside Moscow: power, politics, and budgetary policy in the Soviet republics* (Columbia University, Nueva York, 1988); Giovanni Bensi, *Nazionalità in URSS* (Xenia, Milán, 1990); Yulián Bromlei, *Major ethnosocial trends in the USSR* (Progress, Moscú, 1988); Michael Bruchis, *The USSR: language and realities* (East European Monographs, Boulder, 1988); Roger Caratini, *Dictionnaire des nationalités et des minorités en URSS* (Larousse, París, 1990); Hélène Carrère d'Encausse, *L'empire éclaté* (Flammarion, París, 1979); Robert Conquest (dir.), *The last empire. Nationality and the Soviet future* (Hoover Institution, Stanford, 1986); Rachel Denber (dir.), *The Soviet nationality reader* (Westview, Boulder, 1992); Henry R. Huttenbach (dir.), *Soviet nationality policies* (Mansell, Londres, 1990); Rasma Karklins, *Ethnic relations in the USSR* (Unwin Hyman,

Londres, 1986); Víktor Kozlov, *The peoples of the Soviet Union* (Hutchinson-Indiana University, Londres, 1988); Serguéi Kuleshov y otros, *Relaciones entre las naciones de la URSS* (Nóvosti, Moscú, 1988); Bohdan Nahaylo y Victor Swoboda, *Soviet disunion. A history of the nationalities problem in the USSR* (Hamish Hamilton, Londres, 1990); Jean Radvanyi, *L'URSS: régions et nations* (Masson, París, 1990); Sergio Salvi, *La disunione sovietica* (Ponte alle grazie, Florencia, 1990); Graham Smith (dir.), *The nationalities question in the Soviet Union* (Longman, Londres, 1990); Ronald Wixman, *The peoples of the USSR. An ethnographic handbook* (Macmillan, Londres, 1984); VV AA, *La historia de las nacionalidades en la URSS* (Nóvosti, Moscú, 1989), y VV AA, *Pueblos de la Unión Soviética* (Nóvosti, Moscú, 1989).

Balances globales del sistema soviético en su fase final anterior a la *perestroika* son las obras de Félix Bayón, *La vieja Rusia de Gorbachov* (El País, Madrid, 1985); Seweryn Bialer, *The Soviet paradox* (Vintage, Nueva York, 1987); Robert F. Byrnes (dir.), *After Brezhnev* (Frances Pinter, Londres, 1983); James Cracraft (dir.), *The Soviet Union today* (Bulletin of the Atomic Scientists, Chicago, 1983); Alexander Dallin y Condoleezza Rice (dirs.), *The Gorbachev era* (Stanford Alumni Association, Stanford, 1986); Mark Frankland, *The sixth continent. Russia and Mikhail Gorbachov* (Hamish Hamilton, Londres, 1987); Adriano Guerra, *Dopo Breznev* (Riuniti, Roma, 1983); S. Hedlung y C. Gerner, *Ideology and rationality in the Soviet model: a legacy for Gorbachev* (Routledge, Londres, 1989); Ronald Hill, *Soviet Union: politics, economics and society* (Frances Pinter, Londres, 1985); Curtis Keeble, *The Soviet state* (Gower-RIIA, Aldershot, 1985); Martin Mccauley, *The Soviet Union after Brezhnev* (Heinemann, Londres, 1983); Kinya Niiseki (dir.), *The Soviet Union in transition* (Westview/Avebury, Boulder-Londres, 1987), y VV AA, *El sistema soviético hoy* (Pablo Iglesias, Madrid, 1984). Textos que analizan la crisis, cada vez más visible, son, en fin, los de Marcel Drach, *La crise dans les pays de l'Est* (La découverte, París, 1984); Marshall Goldman, *USSR in crisis: the failure of an economic system* (Norton, Nueva York, 1983); Jan Marczewski, *Crisis de la planificación socialista* (FCE, Madrid, 1975), y Jacques Sapir, *Pays de l'Est vers la crise généralisée* (Fédérop, Lyon, 1980).

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA *PERESTROIKA* (1985-1989)

Pese a incorporar claros elementos artificiales, hay argumentos suficientes para mantener en pie la distinción entre dos proyectos de reforma que se hicieron notar en la URSS a partir de 1985: si el uno afectaba al mecanismo de gestión económica, el otro hacía lo propio con el sistema político. Si el primero ocupó la mayor parte de la actividad renovadora en los años iniciales de la era de Gorbachov (1985-1987), el segundo —la reforma política— realizó una aparición fulgurante con motivo de la Conferencia Extraordinaria del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) celebrada en 1988.

El desfase cronológico entre esos proyectos puede explicarse de muy diversas maneras. Así, un análisis inicial recordará que el grueso de la reflexión crítica acometida por la nueva dirección soviética recayó sobre el mal funcionamiento del sistema de gestión económica y apenas se ocupó, al menos en un principio, de alterar estructuras políticas de honda raigambre que, entre otras cosas, habían permitido que los dirigentes reformistas llegasen al poder. En un segundo estadio puede señalarse que la evidencia de una resistencia «conservadora» pudo obligar a la nueva dirección a acelerar un proceso de mutaciones políticas con la vista puesta en un desplazamiento de los sectores más reacios a aceptar los cambios, aun a costa de aceptar la aparición de sólidos rivales del lado de un reformismo más radical. Una tercera explicación subraya que, a medida que el proceso de

reformas se fue perfilando, los dirigentes renovadores adquirieron una conciencia creciente de la necesidad de modificar el sistema político para adaptarlo a las condiciones del nuevo modelo económico en vías de introducción. Por último, los malos resultados económicos de los primeros años de reformas, y los escasos progresos reales de éstas, pudieron incitar a la dirección soviética a mostrar una actitud más concesiva en el terreno político, en la perspectiva, acaso, de tranquilizar a una población descontenta. Sea como fuere, y pese a que lo común ha sido afirmar lo contrario —y extraer al respecto alguna equívoca comparación diferenciadora con el «modelo chino»—, no parece aventurado afirmar que los elementos políticos tuvieron en las reformas, al menos en un primer momento, un carácter secundario y complementario de las medidas económicas, que en el designio inicial de la *perestroika* exhibieron un papel claramente preeminente.

Los rasgos generales de las reformas

a) *La crisis*. Las reformas fueron ante todo una respuesta a la situación de crisis —de «precrisis», según la terminología oficial— descrita en el capítulo anterior. En esencia debe hablarse de una crisis que respondía a una notabilísima reducción de la posibilidad de satisfacer de manera simultánea varios objetivos, entre los que se contaban la elevación de los niveles de consumo, el crecimiento de la inversión, la introducción de nuevas tecnologías y el mantenimiento del poderío militar y, con él, del *status* de gran potencia. A esta situación se sumaba la influencia de una pesada herencia en la que se daban cita los notorios desequilibrios característicos de un país inmenso, una «cuestión nacional» acallada, una estructura política asentada en una extrema centralización y escasamente flexible, o las rémoras derivadas de la presión exterior, de un sector militar sobredimensionado y de una agricultura de bajos rendimientos.

El progresivo agotamiento de los recursos, y su consiguiente escasez, hacían dificultosa la tarea de las reformas. Ferenc Fehér subrayó, así, que no eran de esperar soluciones milagrosas, como las que podrían derivarse del súbito descubrimiento de materias primas de elevado precio y demanda asegurada, de una masiva transferencia de tecnologías foráneas, de una expropiación de los recursos en manos del sector militar y de las «clases parasitarias», o de una reorganización efectiva de la producción en un plazo inmediato.[1] Las únicas perspectivas de superación de la crisis se vinculaban con un incremento significativo en la productividad de una población seducida por las promesas de prosperidad futura. En último extremo, las reformas se antojaban una especie de *new deal* que Meryl Kessler describió en los siguientes términos: «Los ciudadanos soviéticos tendrán que aceptar una menor seguridad a cambio de una economía más eficiente que produzca mejores bienes de consumo y proporcione servicios de mayor calidad».[2]

Contemplada en clave positiva, la crisis no era sino el producto del desarrollo de la sociedad soviética. Dada la frustración social generada por un sistema cada vez menos eficiente, algunos de los procesos en curso en las décadas anteriores —urbanización, educación masiva...— reclamaban un cambio general en el modelo de crecimiento y de gestión. Desde un punto de vista menos concesivo, la crisis era el reflejo de la quiebra de un modelo de acumulación que no se había detenido ante el esquilmamiento de los recursos en un esfuerzo irracional de desarrollo de las fuerzas productivas y de participación abierta en lo que se dio en llamar «carrera de armamentos». La crisis presentaba en este terreno un aspecto novedoso, por cuanto en buena medida se veía precipitada por la necesidad imperiosa de reducir un desfase tecnológico

[1] Ferenc Fehér, «La estrategia soviérica», en *Leviatán* (nº 25, otoño de 1986), págs. 65 y ss.

[2] Meryl Kessler, «The paradox of perestroika», en *World Policy Journal* (vol. V, nº 4, otoño de 1988), pág. 656.

que empezaba a adquirir una magnitud comprometedora. Sin esta dimensión de competición, y de urgencia, es difícil comprender muchas de las tensiones de un proceso marcado por la idea de que al estancamiento brezhneviano podía seguirle una imparable decadencia económica.

b) *El modelo*. La reivindicación de un «crecimiento intensivo» era ya un lugar común en las declaraciones de los dirigentes soviéticos en los últimos años de la era brezhneviana. En sus presupuestos teóricos, la reforma preconizaba la adopción de un modelo que, en oposición al «crecimiento extensivo» anterior, debía acarrear transformaciones cualitativas en el proceso de producción, acometiendo un uso racional de recursos que, como la mano de obra y las materias primas, eran cada vez más escasos.

Los principios directores de la reforma económica se recogieron en un documento aprobado por el Comité Central (CC) del PCUS en junio de 1987. Los enunciados básicos de ese documento fueron resumidos por Ed A. Hewett en los siguientes términos: (i) la economía debe seguir respondiendo a un sistema de planificación central, si bien ésta afectará sólo a las variables de importancia estatal, y no a las decisiones relacionadas con los niveles inferiores de la economía; (ii) el éxito o el fracaso de las empresas e individuos se determinarán de forma impersonal, conforme a reglas específicas e inviolables basadas en criterios económicos, y no en valores políticos; si en el viejo modelo beneficios y fracasos se socializaban, en el nuevo deben individualizarse; (iii) en lo relativo a sus decisiones operacionales las empresas gozarán de una total autonomía; (iv) los trabajadores están llamados a ejercer cierto grado de control sobre la dirección de las empresas y, en consecuencia, deben participar en la adopción de las decisiones que conducen al triunfo o al fracaso de aquéllas.[3]

[3] Ed A. Hewett, *Reforming the Soviet economy* (The Brookings Institution, Washington, 1988), págs. 349-350.

Una manera simplificada de describir la reforma es presentarla como el producto de la combinación de tres elementos: disciplina en el trabajo, introducción de nuevas tecnologías y ciertas dosis de economía de mercado, en un marco de difícil conciliación entre esta última y la lógica de la dirección central. Era de prever, en particular, y como más adelante analizaremos, un acercamiento a las condiciones laborales clásicas del sistema capitalista; creciente economización de costes de mano de obra, pérdida de seguridad en el empleo, exigencia de incrementos significativos en la productividad, reducción de las subvenciones a determinados bienes y servicios y, por último, mayores diferencias salariales. Otro elemento del que se ha hecho mención era la demanda de una rápida introducción de nuevas tecnologías que, junto con una inversión creciente en medios de producción —a expensas de la agricultura, la construcción o la industria ligera— y con el presumible incremento del rendimiento laboral, debía permitir un crecimiento anual de la renta del orden del 4%.

El panorama debe completarse con una constatación: el proyecto de reforma no presentaba un carácter acabado. Muy al contrario, parecía más bien una suma de medidas inconexas en su sentido general o en la secuencia de aplicación, con enunciados más o menos prolijos de objetivos y asunciones retóricas de carácter general.

c) *Los objetivos*. El objetivo primitivo de las reformas era propiciar una aceleración *(uskorénie)* que permitiese doblar el potencial económico en el año 2000, con un crecimiento de 2,3-2,5 veces en la «productividad social del trabajo» y un tránsito progresivo, como antes se ha señalado, a un modelo de crecimiento intensivo. El discurso oficial, que hizo de este concepto de «aceleración» el emblema del momento, recurrió a los conceptos de «subjetivismo» y «estancamiento» para dar cuenta, respectivamente, de las etapas de Jrushchov y Brézhnev.

Sobre el papel, el nuevo mecanismo económico debía entrar en vigor con el XIII plan quinquenal (1991-1995). El proceso de implantación comprendería, según la versión de Aganbegyan, tres fases: extensión del «experimento económico en gran escala», «responsabilidad económica plena» y cambios radicales en la línea del «socialismo de mercado».[4] Una vez alcanzada la última fase se habría accedido a un nuevo orden económico en el que se haría notar una coordinación horizontal entre las empresas y se habrían suprimido la planificación imperativa, el sistema tradicional de suministros y la «dictadura del productor». Hasta 1991, la economía se encontraría en un «estadio de prerreforma» que debía entrañar un cambio de perspectiva en la consideración del factor humano. Se trataba de alentar una mayor dureza en la aplicación de las disposiciones destinadas a incrementar la productividad; la propia jerarquía del Partido, de la mano de la progresiva introducción de una política de transparencia y de una reforma en los procedimientos electorales, debía asumir una mayor disciplina y responsabilidad. En el terreno económico, el objetivo en este estadio era doble: por un lado, generar nuevos recursos de capital; por el otro, canalizarlos hacia la metalurgia y la fabricación de maquinaria, que se presumía tendrían un efecto difusor en la economía. Las estrategias encaminadas a satisfacer el primer objetivo —consecución de préstamos exteriores y obtención de cierto nivel de «préstamo doméstico»— recibieron en un primer momento, al parecer, escasa atención: casi todos los esfuerzos se concentraron en el segundo, y en particular en la renovación y el reequipamiento de las empresas.

d) *El proceso político*. La reforma era el producto de un cambio en la concepción y la estrategia de la cúpula de un

[4] Cit. en Hans-Hermann Höhmann, «Gorbachev's approach to eoomic reforms», en *The Soviet economy: a new course?* (NATO, Bruselas, 1987), pág. 42.

aparato, el del PCUS, y no una reacción popular ante una situación crítica. La asunción de su necesidad ineluctable, por otra parte, sólo parecía clara en las instancias superiores del Partido, en las que, sin embargo, existían diferencias en cuanto al diseño del proyecto. El apoyo que éste recibía era acaso más incierto a medida que se descendía en el aparato, aun cuando se puede sostener que, de forma vaga, crecía en la base de éste y en el fermento de «sociedad civil» que estaba tomando cuerpo. La aplicación efectiva del detalle del proyecto dependía de las instancias locales y de sus responsables, sin que estuviesen visiblemente desarrollados los procedimientos de control; en consecuencia, el ritmo de introducción era muy diferente según repúblicas, regiones y ciudades.

Aunque era evidente que la reforma subrayaba la necesidad de acrecentar las capacidades de decisión de las empresas y, en menor medida, de las instancias regionales y locales, lo cierto es que, no sin paradoja, su sentido último era acrecentar el control ejercido por el centro. No olvidemos que la cúpula económica había perdido el conocimiento sobre los términos reales de la producción y la distribución de bienes. La impresión de que la nueva dirección deseaba dejar que las cosas discurriesen con arreglo a sus propias leyes era equivocada: las intervenciones del aparato dirigente no habían dejado de acrecentarse, y algunos de los temores atribuidos, por ejemplo, a la cúpula militar —descentralización peligrosa, dispersión de los centros de decisión— poco tenían que ver con la osamenta del proyecto reformista.

Para propiciar la aceleración del mecanismo económico, y una vez que la reforma dio sus primeros y vacilantes pasos, la dirección gorbachoviana asumió un proceso de «movilización controlada» de la población. Esta movilización se proponía obstaculizar las actividades, tanto de la «vieja burocracia» como de los «zares industriales» que debían aparecer al amparo de la independencia recién concedida a las empresas.

Se trataba, en otras palabras, de crear las condiciones para que se produjese cierta participación de la población en las reformas, sin por ello poner en cuestión los cimientos sobre los que se asentaban el Partido y el estado soviéticos. La revisión ideológica consiguiente, que en su estadio inicial en modo alguno contemplaba la emergencia de un poder alternativo al existente, reconocía, sin embargo, la necesidad de asumir una modernización del papel dirigente del PCUS. Así, se verificó una superación del discurso «naturalista» —los problemas tienen su origen en «desgracias naturales»: demografía, sequías, agotamiento de recursos— dominante en las décadas anteriores, en beneficio de una alocución con ribetes economicistas, que subrayaba los defectos del sistema de planificación y de los métodos administrativos de dirección. La irrupción de una crítica política radical que pusiese en cuestión, por ejemplo, la propia naturaleza del régimen soviético, todavía se encontraba en estado incipiente y ambiguo, muy lejos de los intereses y de las necesidades de una dirección que deseaba mantener una reserva de legitimidad. Se configuraba así una situación peculiar en la que la dirección de las reformas buscaba un apoyo popular para su política pero, al mismo tiempo, temía los efectos que podían derivarse de una progresiva independización de los movimientos nacidos en el caldo de cultivo por ella misma creado.

La secuencia temporal

En un medio en el que las tensiones se habían agudizado en los últimos años de la era brezhneviana y en los interregnos de Andrópov y Chernenko fue cobrando vigor la idea, por lo demás vaga, de que se hacía urgente la adopción de medidas que pusieran fin al trágico declinar de todos los índices de crecimiento y bienestar. La comprensión de este hecho alcanzó a la propia cúpula del PCUS, que depositó en

un nuevo secretario general, Gorbachov, una confianza que acaso estaba condenada a diluirse a medida que el proyecto de reformas adquiriese perfiles más concretos.

Las primeras manifestaciones de Gorbachov se caracterizaron por el empleo de un lenguaje muy próximo al de Andrópov, su antecedente en la introducción de un programa de cambios. Aunque en 1985 Gorbachov se refirió varias veces a los problemas de la economía, rara vez empleó el término «reforma». Sus ideas, más difusas, hablaban de la necesidad de alcanzar una «aceleración del desarrollo económico y técnico» y una «transformación profunda de la economía». Ni una ni otra se hicieron notar, por lo demás, en las primeras medidas instituidas, como es el caso del decreto de julio de 1985 que ampliaba los «experimentos» andropovianos, o de las disposiciones encaminadas a la creación de varios «superministerios» en el otoño del mismo año. De carácter inconexo y naturaleza más bien cosmética, estas medidas en modo alguno cuestionaban el sistema de planificación central ni avanzaban hacia la legalización de algunas prácticas de la economía complementaria.

En un terreno diferente, el de la política exterior, la URSS inició en 1985 una moratoria de pruebas nucleares. En ese mismo año se celebró, en Ginebra, una cumbre entre los máximos responsables de las dos superpotencias. A principios de 1986 vio la luz, por otra parte, un programa de desnuclearización global que abrió las puertas a una nueva cumbre, esta vez en Reykjavik. En febrero, durante el XXVII Congreso del PCUS, Gorbachov se refirió a la necesidad de instrumentar una «reforma radical». En la primavera —la primavera del accidente de Chernóbil y de la irrupción de una tímida transparencia— era evidente, sin embargo, que no existía una estrategia concreta para el nuevo mecanismo económico. Pese a ello acabaron por tomar cuerpo algunas medidas que en términos generales seguían respondiendo a una línea de profundización de la reforma andropoviana. La atención dispensada a los «temas conservadores» —cam-

paña antialcohólica, disciplina, patriotismo...— y la ambigüedad lingüística fueron los rasgos determinantes del período posterior al Congreso del PCUS, un período que acaso iniciaba un largo ciclo de sucesivos cambios de interlocutor en el discurso de la dirección soviética. Durante 1986 se hicieron visibles también los primeros roces entre ésta y el viejo aparato; la causa era la promulgación de leyes que se ocupaban de la reforma en la agricultura (marzo), la creación de controles de calidad (julio) y el trabajo privado (otoño).

Los relativamente buenos resultados económicos de 1986 —que concluyó con la liberación o el levantamiento del «exilio interior» de un buen número de disidentes, entre ellos Andrei Sájarov— no tuvieron continuación en 1987, el año en que, sin embargo, se manifestó por vez primera un proyecto de reforma más estructurada. En enero se celebró un pleno del CC del PCUS en el que se hicieron valer resistencias con respecto a posibles cambios en los procedimientos de designación de cuadros y en el sistema electoral. En mayo el aterrizaje de un joven alemán en la plaza Roja de Moscú provocó cambios drásticos en la cúpula del Ministerio de Defensa, con la destitución del propio ministro Sokolov. En junio, en fin, un nuevo pleno dio su aprobación a un conjunto de medidas que constituía el armazón de la reforma económica.

Antes, los sectores más «conservadores» del aparato habían recibido algunas garantías por parte de Gorbachov, quien había señalado, en particular, que el paro no era concebible en una economía como la soviética, que no existía riesgo de reaparición del capitalismo, y que no debía hablarse de mercado, y sí de «relaciones de intercambio de bienes por dinero, utilizadas de forma inteligente a través de los precios y del sistema financiero y de crédito».[5] Apoyándose en algunas tesis de Marx sobre la disolución del estado en el comunismo y en teorizaciones de Lenin sobre el

[5] *Pravda* (26 de junio de 1987).

«socialismo cooperativo», Gorbachov insistió, sin embargo, en la necesidad de redefinir el concepto de propiedad socialista de tal modo que diera cabida al trabajo privado y cooperativo. La dirección del PCUS consiguió evitar, por otra parte, la discusión de uno de los proyectos más conflictivos —el que preconizaba la constitución de empresas conjuntas con capital extranjero— e impidió que el CC debatiera en detalle la «Ley de empresas del estado». Al tiempo que se manifestaban estos problemas, la diplomacia soviética ponía en marcha un proceso de negociaciones en el terreno del control de armamentos que, tras la firma, con los EE UU, de un acuerdo de supresión de fuerzas nucleares de alcance intermedio con base en tierra, en diciembre de 1987, abrió el camino a un período de distensión concretado en nuevas conversaciones —tratado ABM, armas estratégicas, fuerzas convencionales...— y a aproximaciones en el ámbito de los conflictos regionales, con su manifestación más espectacular en un acuerdo sobre Afganistán.

Los sucesivos problemas planteados por el CC y la consolidación de diversas resistencias provocaron quizá en la dirección gorbachoviana una posición de retirada en lo relativo a algunos aspectos, de dimensión más bien política, del proceso de reformas. Reflejo de este movimiento lo fueron el *affaire* Yeltsin —la destitución de éste como máximo responsable del PCUS en Moscú— y el discurso, bien poco innovador, pronunciado por Gorbachov con motivo del LXX aniversario de la revolución de Octubre. De cualquier modo, el período en que los principales interlocutores de la dirección soviética fueron los sectores más reacios a aceptar las reformas tocó a su fin en los primeros meses de 1988. La carta que una profesora de Leningrado, Nina Andreyeva, publicó en el periódico *Sovétskaya Rossiya* en reivindicación de una reforma más pausada y de un mayor respeto hacia los «logros históricos» del sistema soviético sirvió de detonante de un nuevo cambio de interlocutor. La lucha por el nombramiento de delegados para la Conferencia Extraordinaria del

PCUS convocada para finales de junio de 1988 provocó la reaparición de un discurso más radical y menos preocupado por las reacciones de los sectores «conservadores» del aparato partidario y estatal. Aunque estos vaivenes parecían determinados por enfrentamientos «políticos», resistían también una lectura económica: la conciencia de los malos resultados de 1987, que se había ido forjando en el curso de ese mismo año, habría tenido consecuencias significativas. En particular se habría traducido en la sustitución del responsable del *Gosplan*, Nikolai Talizin, a principios de 1988, en un énfasis constante en la necesidad de profundizar en la reforma y en la búsqueda de nuevas fuentes de recursos en el exterior.

Como ya hemos apuntado, 1988 fue el año en que los proyectos de reforma política recibieron un impulso decisivo, de la mano de las resoluciones aprobadas por la XIX Conferencia Extraordinaria del PCUS: reconfiguración de las funciones del Partido y de los soviets, convocatoria de elecciones, constitución de un Congreso de Diputados Populares (CDP)... Quedaba así semicerrado otro ciclo, no ya de cambio de interlocutores, sino, ahora, de transformaciones en el elemento motor del proceso: 1985 y 1986 se habían caracterizado por la reivindicación de una modernización tecnológica acompañada de medidas disciplinarias, y 1987 había sido el momento de puesta en marcha de la reforma económica materializada en la «Ley de empresas del estado». El panorama de 1988 se completaba con la incertidumbre suscitada por los resultados económicos y con la manifestación de tensiones de carácter nacional que, en algún caso violentas, afectaban sobre todo a Armenia y a Azerbaiyán (contencioso sobre Nagorni-Karabaj) y a las repúblicas bálticas. Estas tensiones, que habían contado en 1986 con un antecedente en los enfrentamientos registrados en Kazajstán, y que en 1989 se extendieron a otras repúblicas del Asia central, en paralelo con distintos movimientos de reivindicación laboral, marcaban de manera decisiva el proceso de reforma política.

La XIX Conferencia sentó los cimientos de lo que al cabo de unos meses fue un proyecto de reforma política: sobre la base de una tímida transferencia de atribuciones desde el PCUS al estado, condujo a la postre a una renuncia formal de aquél a su «papel dirigente». A finales de 1988, y con Gorbachov convertido ya en presidente de la URSS —cargo que agregaba a su condición de secretario general del Partido—, se hizo notar un dato de relieve: aunque antes la Unión Soviética había desarrollado ya algunas iniciativas de carácter unilateral en el ámbito militar, el anuncio de reducciones unilaterales en los niveles de tropas y dispositivos convencionales realizado por Gorbachov ante la Asamblea General de la ONU marcaba un hito y servía de pantalla para nuevos progresos en los foros de control de armamentos. El anuncio de Gorbachov se completó unos meses después, ya en 1989, con la retirada de los últimos soldados soviéticos presentes en Afganistán.

En marzo de 1989 se celebraron las primeras elecciones en las que en muchos lugares se presentaban varias candidaturas. Aunque el aparato del PCUS se reservó un sinfín de privilegios, las elecciones catapultaron a algunos miembros de la oposición, y singularmente a Yeltsin, claro triunfador en Moscú. En abril se verificaba la destitución, en el marco del CC del PCUS, de un centenar de «almas muertas», representantes por lo común del aparato «conservador» del Partido, y en mayo se reunía por vez primera el CDP, del que poco después salió elegido un Soviet Supremo (SS). El resto del año se vio marcado por dos hechos: la extensión de las reivindicaciones de carácter nacional, en particular en el Báltico, y la consolidación del CDP y del SS como escenarios de debates hasta entonces inéditos. El año concluyó con el hundimiento, consentido por la URSS, de los regímenes aliados en la Europa central y oriental, ilustrado por el gesto simbólico de la apertura del muro de Berlín.

A finales de febrero de 1990, en fin, el SS de la URSS respaldó una propuesta de Gorbachov que reclamaba un

reforzamiento de los poderes del ejecutivo. Un mes después el propio Gorbachov creaba un Consejo Presidencial llamado a sustituir en muchos de sus cometidos a los organismos directores del Partido. Se entraba ya en la recta final que conducía a la convocatoria de un nuevo Congreso del PCUS, del que nos ocuparemos *in extenso* en el siguiente capítulo.

Las medidas económicas: empresas, cooperativas y disciplina laboral

En los primeros años de *perestroika,* la «Ley de empresas del estado», aprobada en junio de 1987 y parcialmente en vigor el 1 de enero de 1988, fue el principal instrumento de cuantos regulaban la actividad de las unidades de producción en el nuevo sistema de gestión. Conforme a esta ley, era competencia de las empresas fijar sus planes anual y quinquenal a partir de contratos libres con clientes y proveedores. Había que respetar, sin embargo, los objetivos a largo plazo del sector, las normas impositivas fijadas por el centro y otras limitaciones como los llamados «techos de inversión». Las unidades de producción estaban obligadas a acatar, por otra parte, los pedidos que el estado considerase conveniente realizar. Esta situación conllevaba riesgos indudables; así, los directores de las empresas podían sentirse más afectados por los indicadores «brutos» emanados del centro que por la necesidad de dar solución a los problemas de calidad de los bienes y conservación de los recursos.

La «Ley de empresas del estado» establecía, con todo, algunas garantías. Así, preveía la creación de unidades de control de calidad cuyo propósito era alentar una adecuación entre el trabajo, la remuneración salarial y la calidad del producto, evitando un cumplimiento artificial de las previsiones. Estas unidades, que dependían del Comité Estatal sobre Controles de Calidad y que permitían que los propios consumidores presentasen reclamaciones, tampoco se libraron, no

obstante, de las críticas. Algunos economistas subrayaron que el sistema era una mera solución administrativa y otorgaba competencias adicionales a los mecanismos burocráticos, en lugar de privilegiar el papel del «mercado» como instrumento de decisión y de presión. Se señaló también que el control se verificaba sólo al final del proceso productivo, con los efectos imaginables.

Las principales transformaciones que afectaban al papel y al entramado de relaciones de las empresas eran las que se derivaban del reforzamiento de su grado de autonomía en terrenos como la fijación de planes y la asignación de fondos para inversión y salarios. Esta autonomía conllevaba también una ampliación de las responsabilidades —obligación de satisfacer las necesidades de usuarios y clientes en un marco de mayor competencia— y una reducción de los privilegios —debían desaparecer las subvenciones estatales. En adelante las empresas gozarían de una mayor independencia y deberían «autofinanciarse» y «autogestionarse». Todos los gastos habrían de cubrirse con los ingresos, sin el concurso de ayudas gubernamentales. Las empresas, que tendrían que pagar directamente los recursos empleados, estaban obligadas a asignar, sin embargo, una parte de sus beneficios al presupuesto estatal. Los créditos bancarios debían constituir la fuente de financiación de las mejoras en el equipamiento productivo; para obtenerlos sería necesario demostrar los beneficios derivados de las nuevas inversiones. Estos beneficios se incrementarían a medida que creciesen la producción y la calidad de los bienes y a medida que se redujesen los recursos consumidos.

Alec Nove se refirió en su momento a algunos de los problemas derivados de la introducción de estas medidas.[6] Así, subrayó el hecho de que, en una situación de penuria de información, las empresas difícilmente podían predecir

[6] Alec Nove, «Soviet socio-economic reform. Progress and frustrations» (mimeo).

precios, costes y demandas futuros, de tal suerte que no estaban en condiciones de establecer planes de inversión, tanto más si carecían de un conocimiento suficiente de sus potenciales competidores y proveedores. Debían asumir, pues, grandes riesgos, que presumiblemente incitarían a reproducir buena parte de las reglas de juego del viejo sistema: era preferible acatar la imposición de objetivos muy detallados y buscar pedidos estatales para así garantizar los suministros, aun a costa de no satisfacer las previsiones de ahorro de recursos. Por otra parte, podían surgir desequilibrios e injusticias en la medida en que las empresas que trabajasen en los sectores más rentables estarían en condiciones de obtener beneficios que estarían negados, en cambio, a las que operasen en ámbitos de menor expansión o en abierta recesión. Si el sistema se aplicaba con rigor, estas diferencias se reflejarían en los niveles de beneficio y, naturalmente, también en los salarios.

Como puede deducirse, al suprimir los subsidios estatales, la «Ley de empresas del estado» alentaba el cierre de las unidades de producción deficitarias. La posibilidad de cierres masivos de unidades de producción estaba llamada a suscitar presiones de los ministerios, que, para evitar que entrasen en bancarrota entidades de importancia crucial, se encargarían de asegurar que las empresas correspondientes, y en particular las vinculadas al sector militar, siguiesen recibiendo ayudas. Se discutían, por lo demás, dos sistemas de distribución de las ganancias. Conforme al primero, tras satisfacerse las obligaciones financieras —y entre ellas los salarios—, trabajadores y directivos se repartirían los beneficios. De acuerdo con el segundo, se haría frente a las deudas y a los costes de producción, y las ganancias restantes se destinarían a la remuneración de trabajadores y directivos, con la consiguiente abolición del salario fijo: la remuneración pasaría a depender directamente de los resultados.

Hay que mencionar, por último, que la ley que nos ocupa preveía que las unidades de producción creasen sus propios

servicios de investigación y constituyesen empresas mixtas, se fusionasen, estableciesen cooperativas y colaborasen con pequeñas firmas familiares. El objetivo de todas estas medidas liberalizadoras era crear un embrión de «mercado socialista» y propiciar relaciones de competencia, con una ruptura de los «monopolios» existentes en algunos sectores de la actividad económica. Sobre el papel, la soberanía de los productores había concluido, y en adelante serían los consumidores quienes impondrían reglas y criterios.

Otra gran novedad del período inicial de la *perestroika* fue la «Ley de cooperativas» que, aprobada en mayo de 1988, permitía que los ciudadanos abandonasen sus empleos estatales y, en principio, no establecía límites a los beneficios ni obligaba a realizar determinada distribución de éstos. Por otra parte, facultaba a las cooperativas —en realidad poco más que fórmulas de trabajo privado en las que participaban tres o más socios— para establecer relaciones con empresas ubicadas fuera de la URSS. Por lo que parece, la ley pretendía fomentar las cooperativas de producción frente a las tradicionales de consumo y se proponía resolver a corto plazo algunos de los problemas de abastecimiento existentes.

La proliferación de cooperativas fue contemplada por una parte de la población como un medio que estaba encaminado a permitir, no siempre al margen de actividades delictivas, el rápido y fácil enriquecimiento de una minoría (y a convertirse así en fermento del capitalismo salvaje que vería la luz más adelante). Frente a ello se arbitraron algunas medidas que establecían controles sobre los precios, aumentaban los impuestos y prohibían los negocios cooperativos en algunos ámbitos. Desde el punto de vista de los cooperativistas el estado imponía numerosas trabas burocráticas —suministro de materiales, locales— y el sistema impositivo podía llegar a succionar hasta un 90% de los beneficios. De acuerdo con esta versión de los hechos, se estaba provocando, de manera paradójica, un desarrollo de la economía sumergida, lo que en última instancia generaba un efecto contrario al

deseado por los responsables económicos y acrecentaba la penuria de la economía oficial. La mayoría de las informaciones indicaba, por otra parte, que la «Ley de cooperativas», y con ella la de legalización del trabajo privado, estaba fracasando en su propósito de atraer hacia los circuitos legales a personas que desarrollaban una actividad laboral en el ámbito de la economía complementaria.

Esta rápida caracterización de las medidas económicas instauradas al amparo de la «primera *perestroika*» tiene por fuerza que recordar, en fin, las campañas desplegadas contra la corrupción y el consumo de alcohol, reflejo fiel de las limitaciones del proyecto inicial. Por lo que a la primera de ellas se refiere, Gorbachov prosiguió una política que, iniciada en 1983 por Andrópov y abandonada por Chernenko, tuvo sus hitos más destacados en acciones desarrolladas en diferentes partes de la URSS, como Uzbekistán, Kazajstán, Moldavia o la propia Moscú. El objetivo no parecía ser otro que servir de aviso con respecto a lo que podía llamarse «corrupción inadmisible». Un sentido semejante tenían las medidas de restricción de empleo de bienes públicos (automóviles, viviendas...), que según alguna interpretación aspiraban antes a evitar posibles abusos que a acabar con privilegios muy asentados o a establecer severas sanciones al respecto. De acuerdo con algunas informaciones, en junio de 1988 habían perdido su derecho a utilizar un vehículo oficial unos 400.000 funcionarios; un mes después se cerraba por vez primera una «tienda especial» en Moscú.

La nueva dirección prosiguió también la campaña que, diseñada en tiempos de Andrópov, se proponía hacer frente al notable consumo de alcohol. Los efectos de esta campaña fueron, en primera instancia, fulminantes: el consumo aparentó reducirse en un 30% en el segundo semestre de 1985 y en un 35% en 1986, con una paralela remisión en el número de delitos y en el absentismo laboral. Entre las medidas aplicadas se contaban la elevación de la edad mínima para ingerir alcohol, el encarecimiento de las bebidas, la limitación de

las ventas a unos pocos establecimientos —lejos de las fábricas y con horarios muy restringidos— y la reconversión de ciertas destilerías. Algunos economistas subrayaron, sin embargo, los efectos perniciosos de estas medidas: si por un lado reducían el consumo e incrementaban los fondos que los ciudadanos no podían emplear y se veían obligados a destinar al ahorro, por el otro aminoraban notablemente los ingresos que el estado obtenía por vía impositiva. Además, la proliferación de un sinfín de destilerías clandestinas hizo que algunas fuentes pusieran en duda la eficacia real de la campaña. Consecuencia acaso de ello fue el levantamiento, en 1988-1989, de muchas de las restricciones, con la ampliación, por ejemplo, del número y del horario de los puestos de venta.

Partido, soviets y elecciones

Durante siete decenios el principio director de la actividad del PCUS fue el «centralismo democrático», que entre otras cosas conllevaba la aplicación de una disciplina rigurosa, la obligación de acatar las decisiones emanadas de los órganos superiores y la sumisión de las minorías a las mayorías. Las tendencias estaban prohibidas, en un marco que no se caracterizaba precisamente por el federalismo y la descentralización. El procedimiento director de la elección de los cuadros se asentaba, por un lado, en el escrutinio indirecto —el secretario general era elegido en quinto o sexto grado— y, por el otro, en la propuesta de candidaturas por las instancias superiores, lo que hacía que el proceso más bien fuese una ratificación que una elección. El PCUS funcionó tradicionalmente con reglas casi militares, que permitieron la actuación de comisiones de depuración y, en su momento, el desarrollo de las «purgas» de los años treinta. Pese a ello, en agunos momentos hubo en las organizaciones de base y en la cúpula dirigente cierta libertad de discusión de los problemas

que apenas se hacía notar en los estratos intermedios y en los congresos que periódicamente se celebraban. Aparte lo anterior, la actividad del Partido acabó por impregnar todos y cada uno de los aspectos de la vida soviética y se verificó una identificación entre la maquinaria partidaria y la del estado, al tiempo que el PCUS asumía físicamente la dirección del sistema económico, a través de sus organizaciones de rama.

De acuerdo con las tesis aprobadas por la Conferencia Extraordinaria del PCUS celebrada en el verano de 1988, el objetivo de las políticas en proceso de introducción era «restaurar plenamente la concepción leninista del centralismo democrático» y garantizar la libre discusión hasta la adopción de las decisiones «por la mayoría».[7] Sólo en el marco de una reforma que no contemplaba una crítica de las posiciones de Lenin podían entenderse afirmaciones como la realizada por Gorbachov con ocasión de la Conferencia: en adelante el Partido debe ser «plenamente un partido de tipo leninista (...) renunciando de una vez por todas a los métodos dirigistas».[8]

La intención, claramente enunciada pero no concretada en medidas, de democratizar el funcionamiento del Partido se agregaba al propósito de delimitar de forma precisa los cometidos respectivos de aquél y del estado. En adelante los comités del Partido no debían impartir órdenes directas a los órganos estatales, sino hacer valer sus puntos de vista a través de aquéllos de sus miembros que perteneciesen a esos órganos: se trataba, pues, de un proyecto de control más sutil y complejo, y no de una genuina transferencia de atribuciones. La situación era semejante en lo relativo al aparato de gestión económica, en el que, en principio, el Partido debía dejar el terreno expedito a nuevos órganos «independientes».

[7] 19th All-Union Conference of the CPSU, *Documents and materials* (Nóvosti, Moscú, 1988), págs. 136-137.

[8] 19th All Union..., *op. cit.*, pág. 107.

La Conferencia Extraordinaria apenas se ocupó, sin embargo, de los proyectos que reclamaban la supresión de las organizaciones de rama del PCUS, que hasta entonces se encargaban del cumplimiento de las tareas económicas y que acogían al 50% del funcionariado del Partido (una sesión especial del CC del PCUS y del SS celebrada a finales de 1988 sí se pronunció, en cambio, por la desaparición de esas organizaciones). Por lo demás, las resoluciones de la Conferencia recurrían a una formulación vaga que ilustraba la escasa voluntad de restarle protagonismo a la maquinaria partidaria: «La estructura del aparato de los comités del Partido deberá atender a las tareas de reforzamiento de la dirección política y corresponder a las metas de la nueva etapa de la *perestroika*».[9] En este contexto de indefinición era poco menos que imposible deslindar qué papel estaban llamados a desempeñar en el futuro órganos como el Politburó, el Secretariado del CC y el CC mismo, que aun después de la primera reunión del CDP conservaban casi íntegras sus prerrogativas tradicionales.

La pérdida de atribuciones del Partido —como vemos más teórica que real— se completaba con un propósito, proclamado por las tesis de la Conferencia, de «restablecer el papel y la autoridad de los soviets de diputados populares como órganos de representación investidos de plenos poderes», toda vez que «en muchos casos ministerios y departamentos adoptan decisiones de carácter económico y social sin consultar a los soviets»,[10] convertidos en otros casos en escuetas máquinas de ratificación. Algunas propuestas presentadas por Gorbachov fueron calificadas, sin embargo, de equívocas, en la medida en que parecían ahondar en la sumisión de los soviets al Partido. Era el caso de la que señalaba que la presidencia de los primeros debía corresponder a los

[9] *El País* (12 de julio de 1988).

[10] Press release de la agencia de prensa Nóvosti, «Tesis del CC del PCUS para la XIX Conferencia del Partido», págs. 16-17.

secretarios de las organizaciones del PCUS, y ello en todos los niveles, incluido el máximo. La propuesta acaso respondía al doble objetivo de propiciar una fusión de atribuciones en la cúpula de soviets y Partido, y de facilitar cierto control de los primeros —más activos y con mayores atribuciones— por el segundo —que debería asumir, sin embargo, un «estilo de trabajo» más competitivo y una mayor tolerancia. Como puede comprenderse, este tipo de previsiones no fue recibido con malos ojos por los sectores «conservadores».

Propuestas como las mencionadas difícilmente hacían tambalear los cimientos de un aparato absolutamente controlado, incluso en el ámbito de los soviets, por el Partido. Sí que podían modificar, en cambio, la naturaleza de los órganos que en adelante poseerían las capacidades de decisión. Los secretarios del PCUS debían seguir disfrutando de una posición privilegiada en la medida en que a su condición aunarían la de presidentes de los soviets locales. El centro de gravedad se desplazaría del aparato del Partido a la cúpula de los soviets, aunque no por ello dejarían de ser los responsables del primero quienes se encargarían de dirigir los segundos. No parecía, pues, que en este estadio de la reforma se contemplase una resurrección de los «consejos» en su sentido «libertario» y «antipartidario». Más bien había que concluir que el Partido estaba en disposición de ejercer nuevas funciones a través de un sistema, el de los soviets, que era una mejor caja de resonancia de los problemas de la población y confería cierta legitimación a las actividades hasta entonces desempeñadas por el PCUS. En palabras de Gorbachov, «el restablecimiento de la plenitud del poder de los soviets no significa en forma alguna un retroceso del Partido en el sistema político. El Partido ha tomado la iniciativa de la reestructuración, es hoy el motor de la renovación y se renueva él mismo sobre la base de los principios leninistas».[11]

[11] *Pravda* (30 de noviembre de 1988).

El proyecto presentado por Gorbachov ante la Conferencia Extraordinaria abrió el camino, en fin, a la elección, en marzo de 1989, de un CDP formado por 2.250 miembros con dedicación exclusiva. De ellos 1.500 fueron elegidos en virtud de principios territoriales y nacionales; los 750 restantes provenían de diversas instituciones, entre las que se incluían el PCUS (100), los sindicatos (100), las cooperativas (100), las organizaciones juveniles (75), la Unión de Mujeres (75), los veteranos del trabajo y de la guerra (75), las instituciones académicas (75) y las uniones de artistas (75). De acuerdo con las previsiones, el CDP debía reunirse en dos sesiones anuales de 3-4 meses de duración cada una. Le correspondía elegir entre sus miembros, por un plazo de cinco años, a un SS, concebido a la manera de un parlamento permanente y profesionalizado formado por dos cámaras. Éstas, el Soviet de las Nacionalidades y el Soviet de la Unión, contaban cada una con 271 diputados —una quinta parte se renovarían cada año— y nombrarían a su vez un *presidium*. También sería competencia del CDP la creación de una Comisión de Vigilancia Constitucional y la elección del presidente del SS antes mencionado.

La naturaleza de las instituciones que nos ocupan fue criticada desde diversos flancos. La mayor parte de las críticas —que ya habían subrayado que la legislación permitía un control y una manipulación exhaustivos del proceso electoral por parte del PCUS— apuntaban al excesivo número de sus miembros, que debía ser un obstáculo para un funcionamiento ágil, y al hecho de que, aun reuniéndose dos veces al año, el CDP sólo podía elegir, al parecer, un presidente cada lustro. También se señaló que la existencia de 750 escaños reservados a «instancias intermedias» era una clara ventaja para los grupos organizados, y en particular para el PCUS.

El presidente del SS, por otra parte, no podía ostentar este cargo más de dos veces consecutivas, debía «dirigir la elaboración de las leyes y los programas socioeconómicos principales, así como las aspectos más importantes de la política

exterior, la defensa y la seguridad del país».[12] En buena medida, el proyecto prefiguraba un sistema que permitía que la secretaría general del PCUS y la presidencia del SS recayesen en una misma persona, lejos, pues, de cualquier veleidad de «dirección colectiva». En este mismo orden de cosas, un periodista soviético se permitió sentenciar: «Nos ha sido dado el derecho a elegir como presidente a quien queramos, siempre y cuando el presidente sea el secretario general».[13]

La glásnost *y sus límites*

No sin alguna exageración, Michel Tatu señaló en 1987 que el «gorbachovismo es una nueva política en materia de formación y de cultura y, hasta el momento, no mucho más que esto».[14] Lo que se conoció con el nombre de *glásnost* o transparencia implicaba, en primer lugar, una ampliación de las posibilidades de información y debate público con respecto a materias otrora postergadas. En 1987-1988 era amplio, por ejemplo, el tratamiento que la prensa dispensaba a las catástrofes naturales, y empezaban a publicarse datos poco antes considerados conflictivos, como los relativos a mortalidad infantil, suicidios, alcoholismo o drogadicción. Instituciones tradicionalmente al margen de la crítica se vieron sometidas a ésta, que incluso alcanzó, siquiera fuese de forma episódica, a los aparatos policial y militar. Para Tatu el objetivo de la política de transparencia era reintegrar en la vida del país a una *élite* cultural atávicamente marginada; el beneficiario fundamental, aunque no único, de la nueva política era la *intelligentsia*, cuyo concurso se estimaba indispensable para llevar a buen fin las reformas.

[12] *El País* (29 de junio de 1988).
[13] *Expresso* (9 de julio de 1988).
[14] Michel Tatu, *Gorbatchev. L'U.R.S.S., va-t-elle changer?* (Le centurion-Le monde, París, 1987), pág. 139.

Aunque los efectos positivos de la *glásnost* se hicieron notar de muchas formas —así, en un levantamiento en las restricciones a la publicación de revistas no oficiales, que no por ello dejaban de ser clandestinas, o en una clara apertura informativa en un buen número de medios de comunicación estatales—, seguían perviviendo trabas burocráticas, límites en las posibilidades de expresión y, en último término, una resistencia cierta a afrontar de manera abierta el tratamiento de algunos problemas. Pese a ello, la situación informativa en la URSS —donde la censura oficial, y en particular la militar, no había desaparecido— no siempre difería de la característica en la mayor parte de los países occidentales.

Al margen de lo anterior, la *glásnost* parecía ser patrimonio de algunos medios de comunicación de carácter estatal, en la medida en que apenas se apreciaba su influencia, por citar un ejemplo, en la prensa local, estrechamente controlada por la «vieja guardia» del Partido. Los propios órganos de expresión que eran la punta de lanza de la liberalización —*Moskóvskie nóvosti*, *Ogoniok*, *Novi mir*, *Druzhba naródov*, *Znamia*...— debían afrontar numerosos problemas derivados de la limitación de tiradas o de la naturaleza del público al que iban destinados (los intelectuales en unos casos, la opinión pública extranjera en otros). Era cierto, sin embargo, que diarios como *Pravda* o *Izvéstiya* y los diferentes canales de televisión se situaban, bien que no siempre de forma clara, del lado del proyecto reformista.

La *glásnost* ejercía un efecto doble y diverso: fuera del país permitía un conocimiento más cabal de una sociedad que tenía en ella un espejo para reflejar los cambios que experimentaba; en el interior, sin embargo, el resultado era más equívoco, no en vano la liberalización agudizaba los recelos de la población con respecto al propio régimen que la propiciaba. En los primeros años de las reformas, la política de *glásnost* no alcanzó, por lo demás, a aspectos importantes de la vida y de la historia soviéticas, que seguían en la penumbra. Era el caso de cuestiones relacionadas con el

ámbito militar, con la figura de Gorbachov o con el pensamiento político de Marx y de Lenin, personajes aún por entonces intocables. También parecían fuera de discusión el concepto de «socialismo» y la naturaleza socialista del estado soviético. Con ocasión de la XIX Conferencia del PCUS vieron la luz, por último, algunos textos levemente desmitificadores que se ocupaban de otro de los terrenos tradicionalmente protegidos: las relaciones exteriores.

Hay que recordar, en un ámbito afín, que la dirección gorbachoviana aprovechó la celebración, en 1987, del LXX aniversario de la revolución de Octubre para realizar una recapitulación de la historia de la URSS. La forma de afrontar los numerosos problemas implícitos en esa revisión puede calificarse de oscilante, no en vano coexistían posiciones de abierta crítica de políticas desarrolladas en el pasado y declaraciones de tono manifiestamente «conservador», como la realizada por Gorbachov al diario *L'Humanité* en febrero de 1986: «El estalinismo es una noción inventada por los enemigos del comunismo y actualmente explotada para ensuciar la imagen de la Unión Soviética y del socialismo en su conjunto».[15]

El discurso pronunciado por Gorbachov en conmemoración del aniversario mencionado reflejaba en todo su vigor uno de los aspectos a los que antes se ha hecho alusión: la *glásnost* apenas se hacía notar en forma de reconsideración del período histórico en el que, bajo la dirección de Lenin primero, y de Stalin después, tomó forma el estado soviético. Los primeros años de la vida de éste se presentaban con tonos acríticos que, en un marco de elogio de la figura de Lenin, reiteraban la vulgata oficial con respecto al yugulamiento del poder de los soviets, la represión de que fueron objeto otras fuerzas políticas en los años anteriores a la NEP o la reaparición de los métodos «capitalistas» de organización

[15] Cit. en Ernest Mandel, «Glasnost dans l'histoire?», en *Inprecor* (nº 251, 19 de octubre de 1987), pág. 16.

del trabajo. Las violaciones de la democracia interna del Partido no eran objeto de comentario, y no parecía apreciarse relación alguna entre las concepciones organizativas de los bolcheviques y la burocratización. La burocracia emergente se presentaba, por otra parte, como un fenómeno marginal, y ello cuando no era objeto de expresiones próximas a la admiración: «El núcleo director del Partido, encabezado por Stalin, salvaguardó el leninismo en la lucha ideológica».[16] El discurso de Gorbachov hacía uso de una manifiesta superficialidad cuando ponía manos a la tarea de juzgar la «fraseología seudorrevolucionaria de izquierda» de Trotski o el «escolasticismo» de Bujarin.[17] Las purgas de los años treinta no merecían sino una rápida mención, al tiempo que la industrialización y la colectivización forzada se valoraban como favorecedoras de la «consolidación del socialismo», sin prestarle atención a algunas de sus secuelas —o de sus causas, según se mire—, como la ausencia de democracia interna y el terror de masas. La represión ejercida en tiempos de Stalin recibía, en fin, el eufemístico calificativo de «gran error político».

El discurso de Gorbachov no entrañaba ningún propósito de discusión de la naturaleza del régimen soviético y exoneraba al PCUS de su responsabilidad en la configuración definitiva de aquél; en consecuencia, cercenaba todas las posibilidades de acceder a una comprensión cabal de en qué medida la URSS de los ochenta era el producto inevitable de decisiones adoptadas décadas atrás. Reproducía, además, algunas de las limitaciones de la revisión del pasado auspiciada en su momento por Jrushchov: condena del terror contra los cuadros del Partido, pero no contra los ciudadanos comunes; corrimiento cronológico de los crímenes estalinianos de forma que no restasen legitimidad a la colectivización; eventual

[16] Mijaíl Gorbachov, *Octobre et la restructuration: la révolution se poursuit* (Nóvosti, Moscú, 1987), pág. 21.

[17] Gorbachov, *op. cit.*, págs. 20-21.

concentración de responsabilidades en la figura de Stalin, con absolución de la maquinaria partidaria... Las menciones de los períodos de Jrushchov y Brézhnev, mucho menos explícitas, tampoco ponían en duda la legitimidad de la dirección del PCUS, aun cuando se referían a las limitaciones propias de cada uno de esos momentos: voluntarismo y falta de democracia en el caso de Jrushchov; «anomalías en la esfera social, intelectual y moral»[18] y ausencia de voluntad política para propiciar cambios en el de Brézhnev. El discurso de Gorbachov subrayaba, por otra parte, la permanente existencia de «fuerzas sanas» en el Partido que, cabía suponer, eran las que habían abierto el camino a la *perestroika*.

Primeros movimientos en la cuestión nacional

En el ámbito de los problemas nacionales, la nueva dirección soviética apenas acometió, en los primeros años de *perestroika*, cambio alguno con respecto a las políticas anteriores. Es verdad que algunas de las explicaciones a las que la prensa oficial recurrió para dar cuenta de los conflictos que iban surgiendo introducían, sí, elementos de novedad. *Pravda* subrayó en repetidas ocasiones que la exacerbación de las tensiones nacionales podía no ser otra cosa que un procedimiento para hacer olvidar problemas económicos y sociales no estrictamente relacionados con ellas. El máximo órgano de prensa del PCUS se hacía eco de un temor que sin duda acosaba a los dirigentes soviéticos: la posibilidad de que un conflicto nacional localizado desembocase en demandas generalizadas relativas a problemas comunes a todos los ciudadanos (escasez de artículos de consumo, condiciones de vivienda, degradación de servicios sociales...) o, en un plano distinto, fuese instrumentalizado por fuerzas reacias a las reformas.

[18] Gorbachov, *op. cit.*, pág. 36.

Aunque muchas de las tomas de posición del equipo gorbachoviano podían ser calificadas de inmovilistas, no por ello dejaron de suscitar reacciones hostiles en los sectores más «conservadores». Estos aducían, así, el «desorden» que se derivaba de la permisividad con respecto a la agitación nacionalista y disgregadora. En un sentido más preciso, los «conservadores» parecían sostener que las reformas, tecnologizadoras y occidentalizantes, no podían por menos que chocar con otra tradición nacional: la rusa. Según esta línea de pensamiento, la tradición rusa había inspirado el nacimiento y la consolidación del estado soviético merced a una crítica tenaz de las tendencias extranjerizantes y a la reivindicación de un modelo de desarrollo que no se dudaba en calificar de autárquico. El recelo con respecto a las demandas nacionales no faltaba tampoco entre los sectores «reformistas», algunos de los cuales interpretaban que era precisamente la integración plena de las diferentes naciones lo que permitiría la modernización y el desarrollo equilibrado de las repúblicas. Como en tantos otros terrenos, algunos modernizadores le tendían un puente a los sectores más «conservadores».

Por lo demás, no eran muchas las manifestaciones de los nuevos dirigentes, y en particular de Gorbachov, en relación con el «hecho nacional». Los primeros meses de ejercicio del nuevo secretario general se caracterizaron, sin embargo, por algunos deslices que tuvieron rápida acogida en la prensa occidental. Así, en mayo de 1985, en un acto de conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi, Gorbachov repitió un famoso brindis de Stalin que hacía referencia al «papel dirigente del gran pueblo ruso durante la segunda guerra mundial»; en junio de ese año, en conversaciones mantenidas en las calles de la capital ucraniana, Kíev, confundió por dos veces Rusia con la Unión Soviética, ofreciendo a continuación lo que la prensa calificó como una «torpe disculpa». En 1985, Gorbachov participó también en actos de marcado carácter nacionalista ruso, como el que se celebró con motivo del LXXX aniversario del nacimiento del escritor

Mijaíl Shólojov. De anécdotas como éstas es difícil extraer conclusiones sobre las ideas que inspiraban, en origen, la política nacional de la dirección gorbachoviana. Los textos programáticos no eran, entre tanto, más explícitos. El programa del PCUS presentado con ocasión de su XXVII Congreso, a principios de 1986, apenas incluía novedades en lo relativo al hecho nacional. Aunque en él se mantenía el brezhneviano concepto de «pueblo soviético», no se singularizaba como antaño, bien es cierto, el papel prominente del «pueblo ruso». Esto aparte, no había referencia alguna a una eventual ampliación de los derechos de las diferentes repúblicas. El tono retórico de las declaraciones, con una evidente resistencia a adoptar medidas concretas, se reveló también en las resoluciones de la Conferencia Extraordinaria del Partido de 1988. El lenguaje cauteloso en ellas utilizado sólo dejó paso a expresiones más duras a la hora de lanzar admoniciones contra los enemigos del sistema («el pueblo debe aprender a distinguir entre los intereses nacionales verdaderos y su perversión nacionalista»).[19] La endeblez de todos estos datos contrastaba con la apariencia de inflexibilidad que la nueva dirección soviética mostraba ante las reivindicaciones armenias sobre Nagorni-Karabaj y, con algún matiz, ante las propuestas de reforma constitucional que llegaban del Báltico. Aunque, pese a lo dicho en algún momento, es innegable que Gorbachov asumía una actitud más tolerante que sus antecesores, no lo es menos que al tiempo procuraba poner freno a las manifestaciones más radicales suscitadas por el problema nacional.

[19] 19th All-Union..., *op. cit.*, pág. 151.

BIBLIOGRAFÍA

Panoramas generales de los primeros años de *perestroika* son las obras de F. Carantoña y G. Puente (dirs.), *La perestroika, problemas y perspectivas de la reforma en los países socialistas* (Universidad de León, León, 1991); Fernando Claudín y otros, *La era Gorbachov. La perestroika* (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988); Fernando Claudín (dir.), *La perestroika. ¿A dónde va la Unión Soviética?* (Pablo Iglesias, Madrid, 1989); Jean-Marie Chauvier, *URSS: une societé en mouvement* (De l'aube, La Tour d'Aigues, 1988); Juan Pablo Duch y Carlos Tello (dirs.), *La polémica en la URSS. La perestroika seis años después* (FCE, México, 1991); Silvio Fagiolo, *La Russia di Gorbaciov* (Franco Angeli, Milán, 1988); F. Fehér y A. Arato (dirs.), *Gorbachev: the debate* (Polity, Cambridge, 1989); Marc Ferro, *Les origines de la perestroïka* (Ramsay, París, 1990); K.S. Karol, *Un año de revolución en el país de los soviets* (El País-Aguilar, Madrid, 1989); Basile Kerblay, *La Russie de Gorbatchev* (La manufacture, Lyon, 1989); Martin Mccauley, *The Soviet Union under Gorbachev* (Macmillan, Londres, 1987); Alberto Jacoviello, *Lettere dalla nuova Russia. I primi anni dell'era di Gorbaciov* (Arnoldo Mondadori, Milán, 1987); Ernest Mandel, *Beyond peretroika* (Verso, Londres, 1989); Roi Medvédev y Giulietto Chiesa, *L'URSS che cambia* (Riuniti, Roma, 1987) y *La rivoluzione di Gorbacev* (Garzanti, Milán, 1989); Peter J. Potuchnyj, *The Soviet Union. Party and society* (Cambridge University, Cambridge, 1988); Richard Sakwa, *Gorbachev and his reforms, 1985-90* (Philip Alan, Londres, 1990); Michel Tatu, *Gorbatchev: l'URSS, va-t-elle changer?* (Le centurion-Le monde, París, 1987); Françoise Thom, *Le moment Gorbatchev* (Hachette, París, 1989); Aleksandr Zinóvev, *Il gorbaciovismo* (Spirali, Milán, 1988), y VV AA, *Se vince Gorbaciov* (L'Unità, Roma, 1987). Puede consultarse también el monográfico publicado, sin título, por la revista *Debats* (nº 28, 1989). El entorno ideológico oficial queda bien reflejado en las obras, firmadas por Mijaíl Gorbachov, *La perestroika* (Plaza y Janés, Barcelona, 1987) y *Perestroika* (B, Barcelona, 1987). Sirvan como contrapunto las memorias de Yegor Ligachov, *Inside Gorbachev's Kremlin* (Pantheon, Nueva York, 1993), y Nikolai Rizhkov, *Perestroika: istóriya predatelstv* (Nóvosti, Moscú, 1992).

Ninguna de las biografías de Gorbachov —en su mayoría meras hagiografías— parece plenamente satisfactoria. Citemos entre ellas las realizadas por Thomas Butson, *Gorbachev* (Stein and Day, Nueva York, 1985); Dusko Doder y Louise Branson, *Gorbachev. Heretic in the Kremlin* (Futura, Londres, 1990); Michel Heller, *El séptimo secretario* (Tem-

pestad, Barcelona, 1991); Zhores Medvédev, *Gorbachev* (Basil Blackwell, Oxford, 1986); Fernando Mezzetti, *Gorbachov, la trama del cambio* (Espasa Calpe, Madrid, 1990); Dev Murarka, *Gorbatchev* (Ramsay, París, 1987); Gerd Ruge, *Gorbachev* (Chatto & Windus, Londres, 1991); Christian Schmidt-Hauer, *Mijaíl Gorbachov* (Gedisa, Barcelona, 1989); Gail Sheehy, *Gorbachev* (Mandarin, Londres, 1992); Anna Sproule, *Mijaíl Gorbachov* (SM, Madrid, 1991); Time, *Gorbachov: una biografía íntima* (B, Barcelona, 1988), e I. Zemtsov y J. Farrar, *Gorbachev: The man and the system* (Transaction, Oxford, 1989). Sobre los antecesores inmediatos, dos estudios de interés se ocupan de la figura de Andrópov: Zhores Medvédev, *Andropov. The rise to power* (Basil Blackwell, Oxford, 1983), y Jonathan Steele, *Andropov in power* (Martin Robertson, Oxford, 1983). Sobre la lucha por la sucesión de Andrópov y Chernenko, se leerán con provecho los libros de B.A. Hazan, *From Brezhnev to Gorbachev. Infighting in the Kremlin* (Westview, Boulder, 1987), y Richard Owen, *Crisis in the Kremlin. Soviet succession and the rise of Gorbachev* (Victor Gollancz, Londres, 1986); una versión de ribetes fantásticos de los mismos acontecimientos se encontrará en Vladímir Soloviov y Elena Klepikova, *Inside the Kremlin* (W.H. Allen, Londres, 1987). Directorios biográficos de las *élites* soviéticas en la época de *perestroika* son los volúmenes *The Tauris Soviet directory. The elite of the USSR today* (I.B. Tauris, Londres, 1989); *The Supreme Soviet: a biographical directory* (RFE/RL-The Center for Strategic and International Studies, Munich-Washington, 1989); *Kto est kto v perestroike* (Blaue Hörner, Marburg, 1990), y *El gobierno de la URSS* (Nóvosti, Moscú, 1990).

Los objetivos económicos de las primeras reformas se explican en Nikolai Rizhkov, *Sobre las orientaciones fundamentales del desarrollo económico y social de la URSS en 1986-1990 y hasta el año 2.000* (Paz y Socialismo, Praga, 1986). El texto de la «Ley de empresas del estado» se encontrará en *Rassegna sovietica* (nº 5, septiembre-octubre de 1988), y el de la «Ley de cooperativas» en *Zakon SSSR o kooperatsii v SSSR* (Yuridichéskaya literatura, Moscú, 1988). Una recopilación de la primera legislación económica es el volumen *O korennoi perestroike upravleniya ekonomikoi* (Eesti raamat, Tallin, 1988).

Estudios generales sobre los primeros pasos de las reformas económicas, y sobre los obstáculos con que se toparon, son las obras de Anders Aslund, *Gorbachev's struggle for economic reform* (Cornell University, Nueva York, 1989); Bernard Chavance, *Le système économique soviétique, de Brejnev à Gorbatchev* (Nathan, París, 1989); Padma Desai, *Perestroika in perspective: the design and dilemmas of Soviet reform* (Princeton University, Princeton, 1989); L. Geron, *Soviet foreign economic policy under perestroika* (Pinter, Londres, 1990); Paul R. Gregory, *Restructuring*

the Soviet economic bureaucracy (Cambridge University, Cambridge, 1990); Ed A. Hewett, *Reforming the Soviet economy* (The Brookings Institution, Washington, 1988); Leslie Holmes, *The end of communist power. Anti-corruption campaigns and legitimation crisis* (Polity, Cambridge, 1993); Jerry F. Hough, *Opening up the Soviet economy* (The Brookings Institution, Washington, 1988); Olimpiad Ioffe, *Gorbachev's economic dilemma* (Merrill/Magnus, St. Paul, 1989); W. Moskoff, *Perestroika in the countryside* (M.E. Sharpe, Armonk, 1990); Jacques Sapir (dir.), *L'URSS au tournant. Une économie en transition* (L'Harmattan, París, 1990), y los monográficos «Reforma y apertura de las economías del Este», en *Información Comercial Española* (nº 674, octubre de 1989), y «The USSR in the 1990s», en *The Economist Intelligence Unit* (nº 1.152, 1989). Pueden consultarse también las recopilaciones de las ponencias presentadas en las jornadas organizadas anualmente por la OTAN: *The Soviet economy: a new course?* (NATO, Bruselas, 1987) y *Soviet economic reforms: implementation under way* (NATO, Bruselas, 1989).

De los debates económicos internos de esos años dan cuenta las obras de Leonid Abalkin, *URSS: estrategia del desarrollo económico* (Progreso, Moscú, 1987), *Perestroika: puti i problemi* (Ekonomika, Moscú, 1988), *Las nuevas relaciones de propiedad fortalecerán el socialismo* (Nóvosti, Moscú, 1990) y *Ne ispolzobannii shans* (Politizdat, Moscú, 1991); Leonid Abalkin (dir.), *Sovétskaya ekonomika: novoe káchestvo rosta* (Politizdat, Moscú, 1988); Abel Aganbegyan, *The challenge: economics of perestroika* (Hutchinson, Londres, 1988) y *La perestroika económica* (Grijalbo, Barcelona, 1989); Mijaíl Gorbachov, *Tareas del partido en la reforma radical de la administración económica* (Nóvosti, Moscú, 1987) y *La política agraria del PCUS en la etapa actual* (Nóvosti, Moscú, 1989); Leonid Morózov, *Government regulation of the private sector in the USSR* (Progress, Moscú, 1989); Gavriil Popov, *Kak upravliat ekonomikoi* (Pedagogika, Moscú, 1989); Tatiana Zaslávskaya, *The second socialist revolution* (I.B. Tauris, Londres, 1989); B.N. Zhúkov, *Reforma vneshne-ekonomicheskoi deyatelnosti* (Ekonomika, Moscú, 1988); VV AA, *Jozraschet, samookupáemost, samofinansirovanie: problemi i opit* (Politizdat, Moscú, 1988), y VV AA, *La responsabilidad en el sistema de gestión económica* (Progreso, Moscú, 1988).

De los problemas de las reformas en el ámbito tecnológico se ocupan los trabajos de Fiódor Burlatski, *New thinking* (Progress, Moscú, 1988); Pierre Dubois y otros, *Innovation et emploi à l'Est et à l'Ouest* (L'Harmattan, París, 1990); Matthew Evangelista, *Innovation and the arms race* (Cornell University, Ithaca, 1988); Marshall Goldman, *Economic reform in the age of high technology: Gorbachev's challenge* (Norton, Nueva York, 1987), e Yves Logè, *URSS. Le défi technologique* (PUF, París, 1991).

Los proyectos iniciales de reforma política se recogen en diferentes declaraciones oficiales y materiales de discusión: *XXVII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética* (Paz y Socialismo, Praga, 1986); Mijaíl Gorbachov, *Informe político del Comité Central del PCUS al XXVII Congreso del Partido* (Nóvosti, Moscú, 1986), *La renovación y la política del Partido respecto a los cuadros* (Nóvosti, Moscú, 1987) y *Por la democratización hacia una nueva imagen del socialismo* (Nóvosti, Moscú, 1988). Otros textos de relieve se incluyen en *19 Conferencia del PCUS. Documentos y materiales* (Nóvosti, Moscú, 1988), de la que se ocupa también el trabajo *The CPSU Conference through the eyes of its delegates* (Nóvosti, Moscú, 1988). La normativa electoral aprobada en 1988 se reproduce en *Zakón o víboraj narodnij deputatov SSSR* (Izvéstiya, Moscú, 1988). Un trabajo sobre las elecciones de 1989 es el libro dirigido por V.M. Kotliakova, *Vesná 89. Geografiya i anatomiya parlamentskij víborov* (Progress, Moscú, 1989).

Debates teóricos sobre los problemas políticos del momento son los textos de Lena Krishtoff y Eva Skelley (dirs.), *Perestroika: the crunch is now...* (Progress, Moscú, 1990); Vladímir Mezhenkov y Eva Skelley (dirs.), *Perestroika in action* (Progress, Moscú, 1988) y *One way ticket to democracy* (Progress, Moscú, 1989); Aron Shchiglik, *Socialist self-government* (Progress, Moscú, 1988); Vladímir Terebílov, *Perestroika y reforma judicial* (Nóvosti, Moscú, 1988), y Aleksandr Tsipkó, *Le radici della perestrojka* (Ponte alle grazie, Florencia, 1991). Otras recopilaciones de textos de interés son los volúmenes *Broadening democracy in the party* (Nóvosti, Moscú, 1988); *Soviet Union: the revolution goes on* (Peace and Socialism, Praga, 1988); *Perestroika y derecho* (Nauka, Moscú, 1989), y *El Partido en renovación* (Nóvosti, Moscú, 1990).

El pulso político de esos años se analiza en obras como las de Tariq Ali, *Revolution from above. Where is the Soviet Union going?* (Hutchinson, Londres, 1988); Anthony Jones y David E. Powell (dirs.), *Soviet update, 1989-1990* (Westview, Boulder, 1991); Andrei Karaúlov, *Vokrug Kremlyá* (Nóvosti, Moscú, 1990); Michel Lesage, *L'URSS vers un état de droit* (La documentation française, París, 1989); Sergio Romano, *La Russia in bilico* (Il Mulino, Bolonia, 1989), y Nadine Marie-Schwartzenberg, *Le droit retrouvé? Essai sur les droits de l'homme en URSS* (PUF, París, 1989). También puede consultarse el informe de Amnistía Internacional, *URSS. Los derechos humanos en una época de cambio* (AI, Londres, 1989).

Algunos de los rasgos de la situación social en los primeros años de la *perestroika* se analizan en Anthony B. Atkinson y John Micklewright, *Economic transformation in Eastern Europe and the distribution of income* (Cambridge University, Cambridge, 1992); Susan Richards, *Epics of everyday life. Encounters in a changing Russia* (Penguin, Harmondsworth, 1990), y en el monográfico «Stalin est mort hier. L'émergence du social en U.R.S.S.», en *L'homme et la societé* (nº 88-89, 1988). Dos evaluciones soviéticas al respecto son *La revolución continua: sociedad soviética en la perestroika* (Nauka, Moscú, 1989) y *La sociología soviética en la perestroika* (Nauka, Moscú, 1990). Sobre la situación de los jóvenes hay abundante bibliografía: Nina Bachkatov y Andrew Wilson, *Los jóvenes y la perestroika* (Javier Vergara, Madrid, 1990); Roberte Berton-Hogge, *La jeunesse soviétique et la perestroïka* (La documentation française, París, 1988); William Briggs, *Tomorrow's people* (Progress, Moscú, 1988); Virginie Coulloudon, *Génération Gorbatchev* (JCLattès, París, 1988); Jim Riordan, *Soviet youth culture* (Macmillan, Londres, 1989), y V. Soule, *Avoir vingt ans à l'Est* (Seuil, París, 1989). Por algunas de las fórmulas asociativas comunes en los inicios de la *perestroika* se interesan *The Moscow Trust Group* (END, Londres, 1985), y *From below: independent peace and environmental movements in Eastern Europe* (Helsinki Watch Committee, Nueva York-Washington, 1987).

Introducciones generales a la política de «transparencia», y en su caso reflejos de esta última, son las obras de Yurii Afanásev y Marc Ferro (dirs.), *50 idées qui ébranlent le monde. Dictionnaire de la glasnost* (Payot, París, 1990); Roberte Berton-Hogge, *Le débat sur la liberté de l'information en URSS* (La documentation française, París, 1990); J. Graffy y G.A. Hosking (dirs.), *Culture and the media in the USSR today* (Macmillan, Basingstoke, 1989); James Muckle, *Portrait of a Soviet school under glasnost* (Macmillan, Londres, 1990), e Isaac J. Tarasulo, *Gorbachev and glasnost: viewpoints from the Soviet press* (Scholarly Resources, Wilmington, 1989). El efecto concreto en la prensa lo ilustran obras como las de Stephen Cohen y Katrina van den Heuvel, *Voices of Glasnost* (Norton, Nueva York, 1988); Irène Commeau-Rufin (dir.), *Lettres des profondeurs de l'URSS. Le courrier des lecteurs d'Ogoniok* (Gallimard, París, 1989); Vitali Korotich y Cathy Porter, *The Best of Ogonyok. The new journalism of glasnost* (Heinemann, Londres, 1990), y VV AA, *La perestroïka et la presse soviétique* (Progrès, Moscú, 1988).

Del renacimiento cultural dan cuenta Thomas Lahusen y Gene Kuperman (dirs.), *Late Soviet culture. From perestroika to novostroika* (Duke University, Durham-Londres, 1993); Alec Nove, *Glasnost in action: cultural renaissance in Russia* (Unwin Hyman, Londres, 1989), y Ann White, *De-stalinisation and the house of culture* (Routledge, Londres, 1990). Sobre la revisión de la historia pueden consultarse el breve texto de Mijaíl Gorbachov, *Octubre y la reestructuración* (Nóvosti, Moscú, 1987), los folletos *La revolución de Octubre y la perestroika* (Nóvosti, Moscú, 1988) y *Nombres rehabilitados* (Nóvosti, Moscú, 1989),

y el estudio de R.W. Davies, *Soviet history in the Gorbachev revolution* (Macmillan, Londres, 1989). Debates internos en relación con la *glásnost* se recogen en obras como las de Anatolii Druzenko, *Ne nadoela li glásnosti?* (Izvéstiya, Moscú, 1990); Y.I. Komárov, *Biurokratism-na sud glásnosti* (Politicheskoi literaturi, Moscú, 1989), y VV AA, *Glásnost. Nadúchniye voprosi i neobjodímie otveti* (Politicheskoi literaturi, Moscú, 1989). De algunos de los límites de las políticas oficiales se ocupan los libros de James E. Oberg, *Uncovering Soviet disasters. Exploring the limits of glasnost* (Random House, Nueva York, 1988), y Gueorguii Vachnadze, *Los secretos de la prensa soviética* (Eiunsa, Pamplona, 1992).

Algunas lecturas occidentales «ingenuas» y «esperanzadas» sobre el proceso de *perestroika* son los libros de Moshe Lewin, *The Gorbachev phenomenon* (University of California, Berkeley, 1988); Lilly Marcou, *Les défis de Gorbatchev* (Plon, París, 1988), y Martin Walker, *The waking giant* (Pantheon, Nueva York, 1986). Textos del mismo cariz publicados por autores soviéticos son el volumen de entrevistas con Kiva Maidanik, *Perestroika: La revolución de las esperanzas* (Vanguardia, Managua, 1987), y el libro colectivo *Perestroika: la única salida* (Círculo de lectores, Barcelona, 1990).

LA QUIEBRA DE LA ALQUIMIA GORBACHOVIANA (1990-1991)

Este capítulo, que en sustancia se ocupa de lo ocurrido entre los veranos de 1990 y 1991, se propone analizar las claves inmediatas del golpe que abrió el camino a lo que al poco se llamó la «revolución de agosto». Aunque muchos tardaron en caer en la cuenta de ello, esa «revolución» acarreó el final de la *perestroika*. Tiempo habrá para evaluar, con mayor perspectiva histórica, cuáles fueron las grandezas y las miserias de la postrera reforma soviética, como lo habrá también para dirimir si una vez más se hizo realidad la observación de Tocqueville: el momento más peligroso para un mal régimen es el que se produce cuando intenta mejorarse a sí mismo.

A título de reflexión general baste con decir que la debilidad que acosó al proyecto gorbachoviano tuvo tal vez su mejor ilustración en los efectos de la más amable de sus manifestaciones: el debate vivo en que se sumergió una sociedad que recuperaba su memoria y que, mal que bien, veía restituidos muchos de sus derechos se volvía contra quienes en su momento lo habían alentado o, al menos, lo habían permitido. A la población llegaban así los ecos de una discusión que se preguntaba por legitimidades y represiones cuando no llamaba la atención sobre la inequívoca desnudez del rey. Como quiera que, pese a todo, en la etapa de *peres-troika* apenas se hizo escuchar la voz de las gentes, y que el único impulso sólido de las reformas fue la debilidad que atenazó a quienes a ellas se oponían, la tragedia de Gorba-

chov no fue otra que la dramática disolución de las fuerzas que, con presiones o con represiones, hubieran podido alimentar la seducción autoritaria. Con su resistencia a dar por clausurada —ésta era la opinión de Borís Yeltsin— la etapa de «reforma desde arriba», a Gorbachov le era cada vez más difícil presentar su política como una garantía frente a registros policiales y ruido de sables. Muy al contrario, prefirió negarle a una emergente «sociedad civil» su derecho a retomar el proceso y a darle el sesgo que estimase procedente. Ante la perspectiva, fácilmente imaginable, de un abandono del poder, su opción anterior a los días de agosto fue clara: escudarse en el aparato de su partido y aguardar tiempos mejores que, por cierto, no llegaron.

Los dos rostros de Gorbachov

Como ya hemos apuntado, una repentina conciencia de los problemas que atenazaban a la URSS se hizo sentir en una parte de la dirección soviética a partir de 1985. Desde entonces, y hasta 1991, se verificó una confrontación entre dos grandes designios: si el uno puede calificarse de «neoburocrático», el otro remitía, antes bien, a un hechizo, subterráneo o manifiesto, por el capitalismo. Acaso la mayor originalidad del entramado soviético de esos años estribaba en la presencia simultánea, a veces indistinguible, de esos dos designios en un solo discurso político: el gorbachoviano.

Y es que hubo un Gorbachov en el que se revelaba una versión modernizada de un viejo orden en el que la burocracia privaba a la población de toda capacidad decisoria, volcaba la economía a su servicio, reprimía los derechos de las naciones y, a la postre, y bien es verdad que con una abierta provocación exterior, permitía que la URSS se sumergiera en la carrera de armamentos. Una buena parte del aparato «conservador» pareció encontrar en el proyecto gorbachoviano, en otras palabras, una salida airosa: en todas las propuestas y

medidas alentadas por la dirección soviética se vislumbraba una mano tendida que ofrecía a capas enteras de los viejos aparatos, las más modernizantes y tecnocratizadas, un reciclaje en un nuevo y remozado sistema. Aun cuando no siempre resultaba evidente que la política de Gorbachov respondía a un propósito decidido de mantener en pie el grueso del viejo orden, los compromisos que de ella se derivaban oscurecían la línea estratégica y obligaban a albergar dudas con respecto a su destino final.

Así las cosas, la imagen que nuestros medios de comunicación gustaban de ofrecer de Gorbachov —el impulsor de un programa de reformas audaz y radical— chocaba con una realidad bien diferente, en la que por doquier despuntaba una disposición a mantener en pie muchos de los elementos del viejo orden. Mientras la «reforma económica» —si algo había que mereciese tal nombre— a poco más parecía aspirar que a devolverle al centro conocimientos y capacidades que se habían ido diluyendo, en el tratamiento de los problemas nacionales se hacía notar siempre la negativa a aceptar cambios de relieve en el *statu quo* imperante, y en el ámbito político los elementos de control pesaban más que los de movilización. La idea de que todos los problemas que atenazaban a la URSS eran el producto de la labor de zapa ejercida por la «vieja guardia» no encontraba sustento en la realidad de un proyecto que incluía, en sí mismo y por sí mismo, una desconfianza cierta hacia todo aquello que suponía una ruptura visible con el pasado.

Pero junto a este «neoburócrata» se hizo sentir otro Gorbachov hechizado por el capitalismo y el mundo occidental. Las huellas que, pasados los meses, fue dejando este «criptocapitalista» fueron muchas: la reivindicación omnipresente de un mercado que ya no se hacía acompañar de adjetivos que contribuían a precisar su significado; una liberalización de los regímenes de propiedad que conducía a cualquier escenario menos al configurado por una genuina socialización; una creciente integración de la URSS en otro mercado,

el mundial, alentador de intercambios desiguales y desprovisto de justicias y solidaridades, y, en suma, un discurso tecnocrático que, en línea con todas las ideologías propugnadoras de un «progreso» sin adjetivos y de un «desarrollo» sin límites, sobreestimaba la dimensión liberadora de las nuevas tecnologías y subrayaba el carácter técnico de la mayoría de los problemas.

Más allá de estos elementos, el designio criptocapitalista que se escondía tras muchos de los movimientos gorbachovianos florecía en forma de una gigantesca reconversión de las relaciones laborales en la que la vieja lógica burocrática servía a intereses que históricamente no habían sido los suyos. Mientras el desempleo hacía su reaparición, los servicios que el estado maldispensaba se desvanecían y las diferencias sociales y la presión productivista ganaban terreno. Con el trasfondo de un visible acoso a algunos sentimientos hondamente arraigados en el imaginario colectivo, los privilegios de la burocracia no parecían verse sometidos a ninguna contestación de relieve. Las normas legales que, al menos sobre el papel, permitían que fuesen los trabajadores quienes nombrasen a los directores de las empresas eran abierta y ostentosamente ignoradas, entre tanto, por «conservadores», «centristas» y «radicales».

Aunque el rostro neoburocrático del designio gorbachoviano dificultó de manera poderosa los intentos de plasmación del proyecto criptocapitalista, ambos presentaron, sin embargo, un significativo elemento común: un temor evidente hacia una genuina dirección popular de los procesos. Las trabas que el proyecto neoburocrático impuso a la instauración de un sistema capitalista en la URSS no eran en modo alguno consecuencia de la defensa de un «programa» de carácter socialista y solidario. Eran, simplemente, el efecto de las esfuerzos que una parte de la burocracia realizaba para mantener en pie el grueso de sus privilegios. La síntesis gorbachoviana no era otra cosa que un ciclópeo esfuerzo de reciclaje de una parte del viejo orden en un

mercado que primero se avecinaba y, al poco, se tornó una realidad tan inexorable como salvaje.

El XXVIII Congreso del PCUS

El Congreso que el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) celebró a finales de junio y principios de julio de 1990 marcó el inicio de una etapa que concluyó con el golpe de agosto de 1991. Aunque es verdad que antes ya se habían hecho notar muchas de las claves del entramado de relaciones que con el tiempo cobró fuerza, es inevitable reseñar un rasgo que puede considerarse producto directo de las peculiares circunstancias del foro partidario: la ruptura del juego «centrista» que Gorbachov había intentado desplegar en los años precedentes. Si, por un lado, una buena parte del «reformismo radical», con Yeltsin a la cabeza, decidió abandonar el Partido, por el otro Gorbachov quedó al frente de una maquinaria en la que, junto a él, tan sólo pervivía un poderoso aparato «conservador». Las bases políticas del centrismo gorbachoviano experimentaron, pues, una ostentosa erosión, y el presidente se vio obligado a contentarse con el equívoco apoyo del aparato de un partido del que seguía siendo secretario general.

Es cierto que en más de un sentido la situación no era nueva. Durante los años anteriores, y en muy diversos foros —así, la Conferencia Extraordinaria del PCUS o las sucesivas reuniones del Congreso de Diputados Populares (CDP) y del Soviet Supremo (SS)—, Gorbachov parecía haber dado por buena la colaboración con los sectores «conservadores» del partido que lideraba. Esa colaboración se asentaba en los hechos en un acuerdo en virtud del cual los «conservadores» respaldaban formalmente los cambios para después ocuparse de su desvigorización. Semejante alianza en la sombra tenía un doble efecto: mientras, por un lado, permitía que Gorbachov se mantuviera en el puesto, por el otro creaba las

condiciones de un profundo estancamiento en el proceso de reforma.

La principal novedad deparada por el Congreso fue una suerte de «institucionalización» de ese pacto con los «conservadores». Antes de julio de 1990 Gorbachov podía mantener una ficción de equilibrio, toda vez que era el secretario de una formación política en la que tomaban asiento representantes de las posiciones más dispares. A su alcance estaba la adopción de gestos simbólicos que, al tiempo que levantaban su imagen a los ojos de la opinión pública occidental, lo colocaban eventualmente del lado del «reformismo radical». La huida de este último dejó a Gorbachov con un solo interlocutor —el aparato «conservador»—, en un escenario que obstaculizaba notablemente cualquier ficción de apertura y liberalidad.

En paralelo, y más allá de apariencias, el gran designio gorbachoviano —el reciclaje de las capas modernizantes de la burocracia— experimentaba también un ataque en regla: su viabilidad guardaba una estrecha relación con la perspectiva de un acuerdo con los «radicales», que por aquel entonces empezaban a ganar espacios de poder fuera del PCUS (así, Yeltsin se había convertido ya en presidente del SS de la Federación Rusa). Ante Gorbachov se presentaba una tarea muy ardua: mantener en pie ese designio aun en ausencia del respaldo «radical», en la urgencia de convencer a sus aliados «conservadores» de la necesidad de preservar la retórica de las reformas y de buscar una abstrusa síntesis entre el juego tradicional de la burocracia y la razón mercantil que parecía imponerse de modo inexorable. En esta tarea, el presidente soviético tenía que controlar, por añadidura, los movimientos de dos caballos que, desbocados, quedaban por completo fuera de su control. Si, cada vez más lejos del PCUS, el «reformismo radical» no dejaba de ganar terreno de muy diversas maneras, dentro del partido eran muchos los que estimaban que Gorbachov había ido demasiado lejos, de tal forma que sólo un proyecto disciplinario estaba en condiciones

de abrir el camino a la gigantesca operación de reciclaje de la burocracia.

Amparándose en los «conservadores» o aproximándose a los «radicales», Gorbachov apenas se ocupaba en fortalecer sus relaciones con una población cada vez más desencantada y escéptica de la que, con toda evidencia, recelaba. Eran otros quienes buscaban, y obtenían, el respaldo popular, de la mano casi siempre de una compleja mezcla de mensajes genuinamente antiburocráticos, idealizaciones de la economía de mercado y sus virtudes e invocaciones al imaginario nacional. Con activos como éstos, era difícil que los acontecimientos asumieran otro derrotero que el que siguieron bien entrado el otoño de 1990. En los hechos se hizo notar un pacto entre Gorbachov y los «conservadores» que parecía tener una mayor entidad que el mero y cíclico devaneo ideológico que el presidente había exhibido en los años anteriores, en los que a etapas en las que los «conservadores» eran los receptores de su discurso y los beneficiarios de su política habían seguido otras en las que el punto de mira de Gorbachov era el «reformismo radical». La lógica de los acontecimientos —desmentida en los hechos— invitaba a pensar que, con el paso del tiempo, la extensión de los períodos de protagonismo «conservador», y la intensidad de las medidas en ellos adoptadas, estaba abocada a reducirse.

El otoño neoburocrático

En el otoño de 1990 se dibujó una dramática interrupción de ese proceso cíclico, caracterizada a la vez por la fortaleza que acabaron por exhibir algunas políticas de sesgo visiblemente neoburocrático, y por la relativa prolongación de un período en el que aquéllas se hicieron sentir sin apenas contrapeso. Pronto quedaron atrás los últimos devaneos «radicales» de Gorbachov, quien en agosto de 1990 había suscrito con Yeltsin lo que a los ojos de los medios de comunicación

occidentales era un acuerdo de colaboración a largo plazo. Más adelante nos ocuparemos de su único y efímero retoño: el respaldo que el presidente soviético ofreció a un plan económico en clave dura —el «plan Shatalin»—, a un paso del capitalismo salvaje que estaba tomando cuerpo.

A partir de octubre de 1990, la agenda de Gorbachov experimentó una dramática mutación, en la que se daban cita las consecuencias del Congreso del PCUS y el ostensible propósito de no ceder capacidades reales de decisión a otras fuerzas o instituciones. Así las cosas, las reformas padecieron un poderosísimo freno cuyos efectos pronto fueron palpables a través de una aceleración en el ritmo de caotización de la economía, de un descrédito creciente de las instituciones políticas y de un acallamiento de las reivindicaciones que llegaban desde casi todas las repúblicas. La primera manifestación de este giro fue el rechazo que a la postre experimentó el mencionado «plan Shatalin». Con el indisimulado contento de los «conservadores», Gorbachov acabó por dejar de lado el que aparentaba ser su propio plan y respaldó un programa de transformaciones económicas que, en tierra de nadie, para poco más parecía servir que para ratificar muchas de las viejas inercias. Las medidas previstas incorporaban, cómo no, esos destellos de racionalidad tecnocrática que tan del gusto eran de Gorbachov, pero no por ello conseguían ocultar —piénsese, si no, en la remendona operación de retirada de los billetes de 50 y 100 rublos— el férreo designio de no tocar los privilegios de la *nomenklatura*.

El cambio, en diciembre de 1990, del equipo director del Ministerio del Interior fue uno de los pasos siguientes: Vadim Bakatin, quien mal que bien había hecho frente a los privilegios y desmanes de los órganos de seguridad del estado, fue sustituido en beneficio de un contemporizador, Borís Pugo —que impulsó el golpe de 1991—, y de un general, Grómov, de afamada mano dura. Primeros frutos de la gestión del nuevo equipo fueron los decretos que ampliaban las capacidades de intervención de las fuerzas policiales,

cuyos cometidos se extendieron a la propia supervisión de actividades económicas. La libertad de expresión atravesaba también una de sus pruebas más duras, como lo ponía de manifiesto la prohibición de emisión de *Vsgliad*, un programa de televisión en el que los viejos poderes eran objeto de abierta contestación.

Al tiempo que circunstancias como las anteriores se iban perfilando se hacían sentir otros dos procesos. Por un lado, la credibilidad de los máximos órganos legislativos, visiblemente copados por el PCUS, no dejaba de menguar; a los ojos de muchos, el CDP y el SS eran instancias vacías que reclamaban a gritos nuevas elecciones al margen de trucos y prebendas. Por el otro, los problemas nacionales seguían ocupando un primer plano. A ello contribuían, naturalmente, los actos de represión militar que habían tenido por escenario Lituania y Letonia en enero, y que tal vez ilustraban, por parte del gobierno central, un deseo de otorgarle a los militares un mayor protagonismo. Los enfrentamientos armados estaban a la orden del día, por lo demás, en muchos lugares, y singularmente en el Cáucaso.

Entre tanto —más adelante nos ocuparemos de ello—, Moscú se empecinaba en llevar adelante un Tratado de la Unión que, al igual que la «Ley de secesión» promulgada con anterioridad, estaba diseñado con el propósito de reducir a la nada el riesgo de desmembramiento del estado plurinacional. El intento de imposición de semejante mecanismo jurídico era tanto más significativo cuanto que de por medio se hallaba una larga lista de declaraciones de soberanía e independencia en la apenas faltaba alguna de las repúblicas soviéticas. El Tratado de la Unión se presentaba en este terreno como un instrumento fundamental de ratificación de una «reforma desde arriba». La impertinente negativa del centro a transferir competencias a las repúblicas constituía un foco adicional de tensión, y no dejaba de ejercer también un efecto caotizador sobre la situación económica del país.

En un marco dibujado por circunstancias como las men-

cionadas se hizo sentir, en diciembre de 1990, la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Edvard Shevardnadze. En sus avisos sobre la inminencia de una dictadura, Shevardnadze pensaba, a buen seguro, en un Gorbachov que entonces llenaba inequívocamente de contento a un aparato «conservador» convencido de que las liberalidades de antaño habían tocado a su fin. El hombre en quien pensaba Shevardnadze no era otro que el que respaldaba planes económicos en clave neoburocrática, mostraba un sectarismo extremo en el tratamiento de los problemas nacionales y —no lo olvidemos— profería oscuras amenazas de implantación de un estado de emergencia.

Sólo un aspecto de la política oficial —curiosa paradoja habida cuenta de la condición del recién mencionado Shevardnadze— parecía ofrecer un relativo contento a los «reformistas radicales»: el paraguas legitimador con que la URSS guarecía la perspectiva de una intervención militar norteamericana en el golfo Pérsico. Mientras, los «conservadores» activos, aquellos que en los distintos aparatos mantenían viva la llama de un proyecto neoburocrático, no podían encontrar motivo para sentirse descontentos con el encaje de bolillos gorbachoviano. Difícilmente el satanizado y preterido Ligachov, el principal de los rivales «conservadores» del presidente, hubiera aspirado a tejer —y es un ejemplo entre otros— una trama de obstáculos tan compleja como la que Gorbachov estaba urdiendo en forma de leyes de secesión y tratados de la Unión.

Novo Ogariovo y la primavera «radical»

Con la primavera de 1991 llegó, sin embargo, la firma de un acuerdo, el de Novo Ogariovo, que supuso una inflexión en la política oficial, con la consiguiente apertura hacia los sectores «radicales». En virtud de ese acuerdo, debía procederse a una renegociación del Tratado de la Unión en la que

estaban llamados a asumir un papel de relieve los emergentes poderes republicanos. Aunque puede discutirse en qué medida la renegociación en sí misma suponía un cambio drástico en la conducta de Gorbachov, parece fuera de toda duda que, en adelante, y hasta el golpe de agosto, fue la voluntad de alcanzar un acuerdo con los poderes republicanos, y singularmente con Yeltsin, la que guió al presidente soviético. Tal vez el mejor signo de que algo cambiaba era el hecho de que el propio Yeltsin se avenía a realizar algunas concesiones en beneficio de Gorbachov. Así, en la primavera de 1991 empezaba a guardar sus distancias con respecto a las repúblicas que rechazaban el Tratado de la Unión, y en lugar singular las del Báltico, al tiempo que auguraba la posibilidad de una retirada ante unas eventuales elecciones presidenciales en toda la Unión.

Muchas son las razones que pueden invocarse para dar cuenta del giro que nos ocupa. Una es, cómo no, la caotización que no dejaba de avanzar, y que no podía por menos que plasmarse en un creciente descontento popular: el programa neoburocrático «aplicado» en el otoño-invierno apenas había producido resultados. Otra la configuraban acaso las presiones internacionales, que colocaban a Gorbachov —deseoso de levantar obstáculos para inversiones y transferencias de tecnología— en una situación difícil. El ascenso paralelo de la figura de Yeltsin reflejaba, en un plano distinto, el escepticismo con que una parte de la sociedad soviética contemplaba las disputas palaciegas en que Gorbachov se hallaba inmerso. Tal vez fueron, en suma, los ambiguos resultados del referéndum sobre el Tratado de la Unión, celebrado el 17 de marzo de 1991, los que impulsaron un cambio notorio en la conducta del presidente soviético: aunque la propuesta de Gorbachov no había salido malparada, lo que a la postre le daba algo de fuerza y un margen de confianza, el porvenir de Yeltsin se anunciaba singularmente halagüeño, con una irrefrenable carrera hacia la presidencia de la Federación Rusa (FR). Por lo demás, no hay que olvidar que Gorbachov

estaba en condiciones «biológicas» de asumir el corrimiento hacia un proyecto distinto: en los años anteriores a menudo había echado mano de su rostro «criptocapitalista», con lo que en los hechos había preparado un sólido lecho a mercantilistas radicales y especuladores, cuyos discursos y prácticas empezaban a situarse ya a un paso del más salvaje de los capitalismos.

Si las manifestaciones del giro «conservador» acometido en el otoño de 1990 eran fácilmente identificables, no puede decirse lo mismo, en cambio, de las que, en la primavera de 1991, sobre el papel reflejaban su voluntad de acuerdo con quienes habían abandonado el PCUS en beneficio de un proyecto más radical. Las propias consecuencias del acuerdo de Novo Ogariovo eran cualquier cosa menos claras. Aunque Gorbachov se mostraba dispuesto a hacer concesiones a las repúblicas signatarias, su actitud con respecto a las secesionistas era la de siempre: todavía en julio el presidente soviético declaraba su voluntad de considerar a las repúblicas del Báltico como estados extranjeros a efectos económicos, sin por ello alterar en un ápice su decisión de no denunciar la anexión de 1940 y de aplicar con rigor, en consecuencia, la draconiana «Ley de secesión» aprobada un año antes.

La propia resurrección de un plan económico inequívocamente evocatorio del preconizado meses antes por Shatalin remitía al metafísico problema de las leyes y su aplicación: en un marco de caotización extrema y de diversificación de los poderes, Gorbachov podía adherirse al más radical de los planes en la certidumbre de que se haría notar un sinfín de obstáculos a su despliegue. Esto aparte, algunas medidas en las que se conjugaban viejos y nuevos intereses parecían poner el acento en la necesidad de instaurar una «mano dura» y eficiente al servicio del mercado; era el caso, en particular, de las que apuntaban a la declaración de un «estado de excepción» en la economía. Por lo demás, las agresiones a la libertad de expresión proseguían, la independencia del poder judicial brillaba por su ausencia y las amenazas no

habían desaparecido por completo. Aun cuando la situación en algunas repúblicas era diferente, las instituciones carecían por completo de autonomía con respecto a un aparato, el del PCUS, que no había prescindido de sus prerrogativas tradicionales.

Circunstancias como las expuestas, antes que remitirnos a un genuino cambio de orientación, parecían dibujar un giro artificial en las políticas oficiales, que de ser tal difícilmente explicaría el golpe de agosto. Para colocar las cosas en su sitio, hay que invocar, sin embargo, la manifestación de otros factores que contribuyeron a erosionar el contrato que Gorbachov había sellado unos meses antes con el aparato «conservador». En junio, por lo pronto, el presidente soviético tomaba nota de los resultados de las elecciones presidenciales en la FR, en virtud de los cuales Borís Yeltsin se convertía en el primer presidente de aquélla elegido por sufragio universal directo. El desgaste en el ejercicio del poder y la amplitud de una circunscripción en la que el peso de grandes bolsas de población rural reducía las posibilidades de un candidato sin aparato de sostén no habían mermado el atractivo electoral de Yeltsin. Las dos opciones que el PCUS parecía avalar habían recibido respaldos desiguales: significativo el recogido por Nikolai Rizhkov, en cuyo «conservadurismo civilizado» muchos apreciaban un remedio para la caotización que acosaba al país, y sorprendentemente bajo el obtenido por Vadim Bakatin, el recuperado candidato gorbachoviano.

El fracaso electoral de Bakatin —quien parecía contentarse con arañarle algunos votos «radicales» a Yeltsin y obstaculizar así la obtención, por éste, de una mayoría absoluta— no hacía sino ratificar, por si hacía falta, la precariedad de los instrumentos a disposición del simulacro centrista de Gorbachov. El apoyo que una parte de la población le dispensó a Rizhkov apuntaba en el mismo sentido y arrojaba luz sobre los espasmos contradictorios que atenazaban al PCUS: aunque formalmente inclinado por el proyecto oficial representado

por Gorbachov, en su seno parecían disfrutar de un mayor crédito quienes, en opciones más «conservadoras», se mantenían provisionalmente al acecho. Más allá de las contingencias anteriores, las elecciones presidenciales en la FR, con algo más de la mitad de los habitantes de la URSS, ofrecían una información preciosa sobre el futuro electoral de la Unión. Si antes los «radicales» habían ganado en escenarios de contornos limitados —grandes ciudades, repúblicas periféricas, consultas referendarias en las que propugnaban preguntas marginales—, en esta ocasión su triunfo exhibía una naturaleza mucho más general. Con los datos en la mano, las expectativas electorales del máximo dirigente soviético en unas elecciones presidenciales en el conjunto de la Unión no eran precisamente halagüeñas.

Entre tanto, y aunque ya hemos subrayado la presumible futilidad de la operación, Gorbachov daba por buena la discusión de un plan económico tan «polaco» como el rechazado unos meses antes. Lo hacía, además, en un contexto en que no ahorraba esfuerzos para ganarse un respaldo económico internacional. Su desplazamiento de julio de 1991 a la cumbre londinense de los «siete grandes» no fue precisamente un éxito: los países capitalistas desarrollados se ratificaron en sus posiciones y reiteraron su negativa a conceder créditos y a auspiciar inversiones en tanto sobre el terreno no se hiciera notar un plan económico de clave dura y fondomonetarizada. Al tiempo se analizaban las consecuencias de un renegociado Tratado de la Unión que, sobre el papel, debía alterar seculares privilegios del «centro» —léase, a todos los efectos, del PCUS— en la asignación de recursos. Aunque una vez más los obstáculos, legales y no legales, al despliegue de las nuevas normas hubieran podido ser tan numerosos como efectivos, muchos analistas dieron en interpretar que la espoleta de la acción de agosto fue precisamente el temor a que la aplicación del Tratado creara una situación de no retorno en cuanto a la preservación de arraigados privilegios.

Otros dos datos cierran el panorama de las semanas que

antecedieron al golpe: el decreto de la FR que ilegalizaba las organizaciones del PCUS en los centros de trabajo, calladamente aceptado por Gorbachov, y la revisión ideológica que el Comité Central del Partido respaldó a regañadientes, en la confianza acaso de que una conferencia por celebrar a fines de año diera buena cuenta de lo aprobado. La decisión de suprimir las organizaciones del PCUS en las empresas tenía una mayor importancia de lo que pudiera parecer, toda vez que, aunque un año y medio antes el Partido había renunciado formalmente a su papel dirigente, no por ello habían desaparecido sus atávicos instrumentos de intervención. Tuvo que ser una instancia legislativa que había conseguido escapar a los tentáculos oficiales —el Soviet Supremo de la FR— la que diese el paso de suprimir las organizaciones del PCUS en los centros de trabajo y se situase así en la perspectiva de restarle al Partido uno de sus elementos centrales de acción y control.

Por lo que respecta a las novedades «ideológicas» que se hicieron notar a finales de julio de 1991, ilustraban a la perfección la maraña de posiciones característica de los últimos tiempos de la vida soviética, en la que, al menos en lo que a la cúpula se refiere, el desfase entre las políticas reales y los contenidos ideológicos en que se sustentaban había alcanzado cotas insospechadas. Durante los años anteriores Gorbachov había procurado conservar incólume el cuerpo teórico heredado, en la confianza de que con ello mantendría de su lado a una parte de los «conservadores». Sus revolucionarias propuestas de julio no cerraban la puerta, de cualquier modo, a un discurso neoburocrático. Detrás de la ambigüedad de muchas de las formulaciones del presidente soviético se escondían posibilidades múltiples de hilvanamiento de discursos, tanto más cuanto que la instancia responsable del despliegue de éstos, el PCUS, era la misma de siempre. Junto con ello, no dejaba de ser curioso que precisamente en un momento en que los programas pasaban a enunciar liberalidades, tolerancias y democracias, fuera una reunión del

Comité Central, órgano burocratizado donde los hubiere, la que recibía la encomienda de dirimir cruciales cuestiones ideológicas.

Tal vez no era sino la búsqueda de un mensaje electoral más adecuado al sino de los tiempos lo que guiaba a Gorbachov en su acomodaticio esfuerzo ideológico de finales de julio. Con evidente oportunismo, el secretario general del PCUS se desmarcaba de un discurso impresentable: el anquilosado, barroco y retórico «marxismo» del PCUS, en que tan cómodamente había vivido instalado durante décadas. Lo hacía, además, sin renunciar en forma alguna al usufructo de los privilegios de todo tipo que se derivaban del mantenimiento del Partido y de sus infraestructuras y tentáculos.

Yeltsin: ¿otro cruce de proyectos?

Un comentario singular merece la figura del presidente ruso, Borís Yeltsin. Aunque después de la «revolución de agosto» los hechos han podido ser objeto de clarificación, la caracterización política del principal rival de Gorbachov había quedado perfilada ya antes. No sin cierta paradoja, muchos de los fenómenos que, en la figura de Gorbachov, habían suscitado un caudal de reflexiones en los años anteriores reaparecían con todo su esplendor en la figura de Yeltsin. Al igual que en Gorbachov, y bien que en una combinación y con una secuencia diferentes, en el presidente ruso se manifestaba una abstrusa combinación entre los hábitos, indelebles, del burócrata reconvertido y el hechizo, irrefrenable, que Occidente producía en los dirigentes soviéticos.

Así las cosas, el hecho de que el sinfín de críticas que Gorbachov recibía de su adversario no estuviese desprovisto de fundamento se convirtió, a la postre, en un dato marginal. Mucho mayor relieve adquirió la evidencia de que el propio Yeltsin no escapaba a los bloqueos que, en la retórica como en la práctica, hacían aparentemente irrepetible la figura de

Gorbachov. Aunque no ignoraban la futilidad de los poderes extraordinarios que reclamaban, uno y otro sucumbieron en su momento a una tentación, la presidencialista, que en un curioso ejercicio de taumaturgia asociaban con la defensa de los intereses de quienes no disponían de poder alguno. Uno y otro reivindicaban irrealizables concordias en cuya dirección, naturalmente, no dudaban en emplazarse a sí mismos. Uno y otro invocaban a menudo la ausencia, real o supuesta, de otras opciones que, por lo demás, buen cuidado ponían en reprimir. Satanizando a quienes, en su opinión, estaban socavando toda perspectiva de progreso, uno y otro eludían, en suma, más de un sesudo debate parlamentario al que habrían llegado con muchos desmentidos, pocas fuerzas y menos argumentos.

Pero los movimientos de Yeltsin dibujaron entre él y Gorbachov otro alarmante signo de comunidad: la improvisación acompañaba a quienes durante décadas, en Sverdlovsk o en Stávropol, no habían tenido más tarea que la de aplicar al pie de la letra los dictados del plan. La imagen de un Gorbachov que, a mitad de camino entre la duda y la deslealtad, traicionaba a sus recién ganados aliados y arrojaba a la basura el «plan Shatalin» le restó dureza a los trazos de una caricatura, la de Yeltsin, quien, profano en economía como en tantas otras cosas, daba por buenos sin más los papeles que uno de sus ultraliberales asesores le había hecho llegar.

Es verdad, de cualquier modo, que la deriva de los hechos acabó por convertir a Yeltsin en un caudillo que, aclamado y respetado, podía blandir con orgullo sus perseverantes invocaciones a las urnas. El reverencial temor —el pánico— que Gorbachov exhibía ante la libre expresión de sus conciudadanos benefició poderosamente a su rival. Consciente de ello, para Yeltsin no fue difícil asumir la opinión de las gentes y anunciar cruzadas contra los privilegios. No faltaban, sin embargo, quienes ya albergaban dudas con respecto al Yeltsin del futuro, llamado también a transmu-

tarse, ante algún nuevo héroe popular, en el Gorbachov del momento. Las mismas oscuras operaciones que el presidente soviético urdía para preservar los privilegios del aparato se intuían en algunos de los zarpazos de un Yeltsin que no había sido más audaz a la hora de transferir competencias a quienes, tomándole la palabra, habían tenido a bien reclamar derechos y atribuciones. El mismo designio tecnocratizante, en suma, se desprendía en un Yeltsin que, poco afecto a la iniciativa popular cuando ésta violentaba las reglas de su juego, prefería sortear entonces la democracia y encomendarse a los especialistas, que en su entorno invocaban principios tan sagrados como vacíos (y entre ellos, naturalmente, el mágico mercado).

La explicación es, tal vez, sencilla: en las pretensiones de Yeltsin se hacía sentir, sombría y oculta por las apariencias, la imagen de quien no había tirado por la borda el designio cuartelario de organizarlo todo desde arriba. «Me escuchaban, me obedecían y, gracias a ello, las empresas no funcionaban demasiado mal», confesaba humilde en ese formidable ejercicio de egocentrismo que son sus primeras memorias.[1] Ahora seducido por votaciones y parlamentos, apenas acertaba a ocultar que su interés por unas y otros era reciente y que su trabajo le seguía costando reprimir a un *apparatchik* ambicioso, dócil desde siempre a los hábitos de la burocracia. Una explosiva combinación —la que aunaba ambiciones personales, vacíos de liderazgo tras la muerte de Andrei Sájarov y un caos que se extendía por doquier— hizo de Yeltsin, en fin, el más fornido valedor de un prometedor horizonte en que se aprestaban a darse la mano nuevos autoritarismos y desordenados capitalismos. Un horizonte en el que, no ya los regímenes imperantes, sino las propias sociedades —iluminadas por la buena nueva del mercado, el beneficio y la propiedad— reproducían en su seno, de nuevo, un orden totalitario. Mal haríamos en pensar que

[1] *La Repubblica* (28 de agosto de 1991).

quien, en las palabras de La Rochefoucauld, «rechaza la injusticia, no por aversión a ésta, sino por el perjuicio que le produce», no es también, él, una mercancía desechable y perecedera.

La caotización económica

Con el centro empeñado en llevar adelante su propio designio, cada vez más marginal, el caos económico avanzó por doquier en los años finales de la *perestroika*. Sin planes ni mercados, la economía no disfrutaba siquiera de los magros beneficios de un prolongado plan de ajuste. Nuevos problemas —déficit público, inflación, paro— ganaban terreno, mientras los malos resultados y el acaparamiento de bienes recreaban a los ojos de los mayores la miseria de los años de posguerra. Desaparecidos, y no reemplazados, los canales oficiales de distribución, una economía que nada tenía ya de sumergida y que había perdido definitivamente el tren de la revolución tecnológica anticipaba los efectos «tercermundizadores» del capitalismo salvaje en ascenso. La lógica burocrática, empeñada en regular desde arriba todas las relaciones, pervivía con perfiles de caricatura de la mano de estériles decretos presidenciales y de contestaciones destempladas de las atribuciones que las repúblicas reclamaban para sí. Entre los «radicales» que veían en el mercado la medicina milagrosa para todos los males y el aparato empeñado en mantener el grueso de sus privilegios, la mayor parte de la población empezaba a identificar el proceso de reformas con una dramática lumpenización.

No faltaban economistas que apuntaban, sin embargo, lo que a primera vista parecía una paradoja: la única señal fiable de la introducción de reformas sólidas era la quiebra de todos los indicadores que daban cuenta del «progreso» y el «crecimiento» económico. Según este punto de vista, en tanto en cuanto no se hiciera notar un descenso visible en la

producción, sería difícil dar crédito a un proyecto de reforma que apenas estaría haciendo sentir sus efectos en la realidad, y nos hallaríamos más bien ante una repetición de muchos fenómenos comunes en el universo soviético; entre ellos, los simulacros estadísticos y la producción en masa de bienes deficientes. Si esta forma de ver las cosas se ajustaba a la realidad, los soviéticos de 1991 estaban de enhorabuena. Porque lo cierto es que, al menos en 1990 y 1991, los indicadores económicos se movieron de manera manifiesta en ese espectro de crisis. En los primeros meses de 1991, y en comparación con el mismo período del año anterior, el producto nacional bruto decreció del orden del 10%. La producción industrial se rebajó en un 5%, con expectativas de reducción aún mayores. La de petróleo descendió un 9%; la de carbón, según las modalidades, un 11-18%; la de carne un 12%; la de leche un 10%, y la de huevos un 8%. Los recursos de inversión se redujeron, entre tanto, un 16%. Al mismo tiempo se verificaba una contracción sin precedentes en el comercio exterior. Las exportaciones a los antiguos miembros del CAEM experimentaron una reducción del 41%, mientras que las importaciones caían un 48% (con el efecto, sólo aparentemente positivo, de un superávit en estas relaciones). Mientras las exportaciones al mundo capitalista desarrollado descendían en un 11%, las importaciones correspondientes se reducían de forma espectacular: un 45%.

Es obligado preguntarse por el significado de datos como los anteriores. La interpretación más común —y en este caso la más ajustada a la realidad— era la que, sin buscar paradojas, identificaba un dramático e incontrolado ahondamiento de una crisis que no podía ser frenada por ninguno de los programas económicos propuestos o desplegados. Bien es cierto, de cualquier modo, que la lectura, cargada de aparente contradicción, de los economistas que antes nos ocupaban podía aducir en su beneficio algunos hechos que dibujaban reales y efectivas medidas económicas. Era el caso, en particular, de las reformas de los precios que iban tomando

cuerpo: si el 1 de enero de 1991 se verificó un alza de un 90% en los precios al por mayor de la industria, los precios al por menor se incrementaron en un 24% en los tres primeros meses del año, para experimentar un nuevo ascenso, esta vez de un 60%, en abril.

Dos circunstancias que acabamos de mencionar —la inutilidad de los programas objeto de discusión y la aplicación de medidas que recordaban a la «terapia de choque» diseñada en Polonia por Balcerowicz— acotaron la realidad soviética de 1990 y de la primera mitad de 1991. Con respecto a los primeros, ya hemos señalado que fueron protagonistas de agudas disputas en el otoño de 1990. Más allá de crudas descripciones de medidas y de plazos, puede decirse que el programa avalado por el gobierno de la URSS, con Nikolai Rizhkov en la dirección y Leonid Abalkin en el guión, respondía a lo que aquí hemos entendido como un designio neoburocrático. Estimulado y denostado por Gorbachov según las necesidades, este programa se mostraba extremadamente cuidadoso a la hora de romper los equilibrios existentes y de sustraer capacidades y atribuciones a los centros tradicionales de poder; su cada vez más temerosa reivindicación de un «mercado socialista» hacía adecuadas las ya manidas metáforas del medio embarazo y del intento de sortear un precipicio dando dos saltos.

Mayores eran las dificultades para encuadrar el «plan Shatalin» o «plan de los quinientos días», respaldado por el yeltsiniano gobierno de la FR y, ya lo hemos dicho, efímeramente avalado por la propia dirección gorbachoviana. A menos que nos dejemos llevar por la palabrería social que inundaba sus páginas, habremos de convenir que la estación de destino de este plan —vía una gigantesca reconversión privatizatoria— era la introducción de un mercado sin adjetivos, a manera de lo sucedido en otros países de la Europa central y oriental. Aunque nadie hablaba de capitalismo, no parece que existiera palabra mejor para dar cuenta de la planta de esa estación final.

A mitad de camino entre ambos planes, Gorbachov se aprestaba, como tantas otras veces, a jugar todas las cartas. Así, al principio del otoño de 1990, al tiempo que decía inclinarse por la terapia dura del «plan de los quinientos días», promovía una dulcificación de éste y se abstenía de pronunciarse por el relevo de Rizhkov y de su equipo. Hay quien, con malicia evidente, sugería que Gorbachov se disponía a agregar a sus tan reforzados como inútiles poderes presidenciales todo lo que de malo había en los proyectos enfrentados: la inevitable ratificación del estancamiento propiciada por el programa de Rizhkov y la inauguración de una etapa de agudísimas convulsiones sociales, consecuencia poco menos que inexorable del proyecto de Shatalin. Cierto es que cada una de las propuestas que estaban sobre la mesa podía aducir en su beneficio ventajas nada despreciables. Los defensores del proyecto neoburocrático hablaban de una prometedora estabilidad, asentada en la garantía de mantenimiento de muchas estructuras y en la contención de posibles elementos desestabilizadores. Por su parte, los abogados del designio criptocapitalista anunciaban el fin inmediato del estancamiento, auguraban una recia defensa de los intereses de algunos estamentos emergentes y prometían la captación de reconfortantes inversiones extranjeras. En medio, y como acabamos de recordarlo, Gorbachov prefería jugar a dos bandas.

La inoperancia del programa económico adoptado en el otoño de 1990 fue reconocida por el propio Gorbachov después del golpe de agosto de 1991. Ya hemos dicho que no habían faltado algunos intentos de llevar adelante medidas similares a las incluidas en las «terapias de choque» que habían visto la luz en otros países. Junto a las mencionadas subidas de precios hay que referirse —y es, de nuevo, un ejemplo entre otros— a la «Ley de privatización y desestatalización» aprobada a principios del verano, en plena marea reformadora, por el SS de la URSS. De nuevo con un sistema incapaz de llevar a los hechos las decisiones del poder

E.U. DE RELACIONES BIBLIOTECA

legislativo, parecía como si se hubiera optado por un procedimiento en la certeza de que ninguno de sus términos se iba a llevar a efecto. Y es que el texto aprobado decía poco de la cordura de los legisladores. En una situación de caos generalizado faltaba, por lo pronto, uno de los requisitos imprescindibles para que un proceso de esa naturaleza llegase a buen fin: una voluntad expresa de sanear con anterioridad las empresas objeto de privatización. Más allá de ello, el ritmo previsto para la «desestatalización» se hallaba fuera de toda razón. La ley aprobada por el SS de la URSS reproducía de manera genérica las previsiones del «plan Shatalin»: se proponía privatizar nada menos que un 40-50% del patrimonio industrial del estado en un plazo de año y medio, y entre un 20 y un 30% en el bienio siguiente. El Reino Unido y Francia —dos países en los que los recursos internos superaban con creces a los existentes en la URSS— acometieron con una lentitud infinitamente mayor la privatización de empresas estatales con un peso específico significativamente menor. No parece desmesurado afirmar que, por encima de estas «minucias» técnicas, la ley que nos ocupa respondía al designio evidente de tranquilizar a quienes, en Occidente, reclamaban transformaciones radicales y supeditaban a ellas la concesión de créditos y facilidades.

En las fábricas

Mientras, los problemas laborales habían hecho notar de muy diversas formas su influencia. La singularidad de estos problemas no era, por lo demás, nueva. En el pasado la entronización de un «obrerismo» lleno de ficciones y malentendidos había sido acompañada por la represión de todo movimiento sindical autónomo. La desaparición de los soviets como formas independientes de organización en los primeros años del proceso revolucionario ruso, y la paralela descalificación de que fueron objeto quienes reclamaban

controles obreros o autogestiones, daba buena cuenta de una realidad en la que el principio de dirección jerarquizada y unipersonal se había impuesto con rapidez en beneficio de una «nueva clase» ascendente.

La reacción de los trabajadores adoptó una forma que a menudo se nos escapa: al amparo de algunas de las singularidades del sistema, derivadas ante todo del origen político de la burocracia, los trabajadores respondieron con un rendimiento laboral bajísimo que acabó por convertirse en un auténtico freno para la acumulación. La economía de pleno empleo proporcionó, en forma de posibilidad efectiva de cambio de puesto de trabajo, una salida adicional para los asalariados. El sindicalismo oficial desempeñaba, entre tanto, un doble papel, como instancia mitigadora de problemas cotidianos y como instrumento de control de las reivindicaciones de unos trabajadores que no ignoraban su precaria situación económica, las ingentes diferencias de nivel de vida que se ocultaban tras el discurso igualitario y la indefensión en que se hallaban inmersos.

Durante el grueso de la *perestroika,* los movimientos de contestación —y singularmente los que vieron la luz entre segmentos privilegiados, como es el caso de muchos de los trabajadores de la minería— poco más parecían defender que intereses locales teñidos de corporativismo. La implantación de un sindicalismo libre o la lucha por un poder real de decisión en las empresas, formalmente reconocido por las direcciones neoburocráticas, no formaban parte del núcleo de las demandas de los huelguistas, más preocupados por la escasez de bienes o por las alarmantes deficiencias de los servicios sociales. Los sindicatos oficiales, sometidos a agudas convulsiones, mantenían, entre tanto, una parte respetable de sus prerrogativas. En un marco de crisis existía un hueco para una «vieja guardia» que, con renovada retórica obrerista, promovía un pacto *contra natura* entre sectores de la clase obrera y los responsables directos de su lumpenización.

La situación laboral no era, por lo demás, muy distinta

de la que, desde finales de 1989, empezó a hacerse notar en algunos países de la Europa central y oriental. El capitalismo no sometido a reglas que se iba imponiendo en éstos también se manifestaba en la URSS. En los hechos no se ahorraban esfuerzos para crear las condiciones de un triple proceso de reconversión, privatización y lumpenización. En un parcial cambio de papeles, los viejos sindicatos oficiales empezaban a reaccionar y asumían un fermento de resistencia. Mientras, las organizaciones obreras que habían visto la luz poco antes optaban unas veces por modelos corporativos encargados de garantizar a sus afiliados una parte del pastel, y otras por fórmulas en las que encontraban contestación por igual los ardides de una *nomenklatura* presta a asumir un patético reciclaje y la lógica «tercermundizadora» asociada al imperante capitalismo salvaje. Al margen de una y otra opción, la anomia se imponía, mientras los servicios públicos, tan deteriorados como siempre, eran el escenario provisional de algunos de los más duros movimientos de contestación del orden emergente.

Más allá de lo anterior, los sindicatos eran fuerzas endebles sometidas a agudísimas tensiones. Muchas de estas últimas apuntaban a la configuración de particulares sistemas de privilegios que podían ganar peso al amparo del proceso de privatización. Pensemos, por qué no, en la posibilidad de manifestación de «sindicatos patronalizados» que fueran el producto de la conversión de determinadas *élites* obreras en empresarios, muy lejos, pese a las apariencias, de un modelo autogestionario. Esas mismas castas sindicales parecían propicias a aceptar pactos «neocorporativos» semejantes a los alentados en Europa occidental por las distintas formas de socialdemocracia. En virtud de esos hipotéticos acuerdos —un freno, bien que relativo, al capitalismo salvaje—, un conjunto de estructuras jerárquica y funcionalmente ordenadas, reconocidas por el estado, se arroga un monopolio de representación y se compromete a respetar, y a hacer respetar, determinados acuerdos en los que se materializan los

planes económicos en proceso de aplicación.[2] Una consecuencia, fácilmente imaginable, del progreso de este tipo de pactos, en los que se darían la mano el estado, los empresarios privados y las *élites* sindicales, sería la ratificación de las divisiones que podían augurarse entre sectores económicos «prósperos» y los que no lo eran.

En los cuarteles

Las fuerzas armadas soviéticas, muy ideologizadas y sometidas a un activo control político, desarrollaron ante todo dos funciones. Si por un lado fueron la más clara representación del poderío y de la presencia exterior de la URSS, por el otro operaron como un importantísimo agente de socialización, siempre en beneficio —como ya apuntamos en su momento— del universo ruso o, en su defecto, del eslavo. Desde el final de la segunda guerra mundial se vieron apoyadas por un poder civil que, él mismo militarizado, casi siempre se mostró aquiescente con sus demandas. Acaso lo anterior explica la nula presencia de tensiones bonapartistas en las fuerzas armadas. En paralelo el gasto militar alcanzó —ya lo vimos— cotas muy significativas.

La *perestroika* supuso una visible alteración en muchas de las reglas de juego tradicionales. Por lo pronto, desaparecido el escudo protector vigente durante decenios, una aguda crisis económica y social alcanzó de lleno a las fuerzas armadas. Estas debieron encarar, además, los problemas que aportaban los soldados de conscripción, fiel reflejo del hundimiento general del sistema: enfermedades, alcoholismo, escasa formación, dominio deficiente del ruso... Por último, pronto se hizo valer una dura competición por recursos escasos: la dirección civil, que apostó por reducciones en el gasto

[2] Philippe C. Schmitter, «Still the century of corporatism?», en *Review of Politics* (nº 36, 1974).

en defensa y en los niveles de tropas y dispositivos, alentó al respecto —más adelante lo veremos— una nueva dinámica de control de armamentos y aplicó en la propia industria de defensa un incipiente modelo de reformas que incorporaba proyectos de reconversión en provecho de la economía civil.

Más allá de los aspectos mencionados, la *perestroika* supuso una reducción de la presencia exterior, y de la capacidad de defensa, del estado soviético. Así lo atestiguaban una nueva doctrina militar de perfiles defensivos, la retirada de Afganistán, la disolución del Pacto de Varsovia y la aceptación de hecho —con ocasión de la crisis del Golfo— de la hegemonía planetaria de los Estados Unidos. Los militares empezaron a reaccionar, por añadidura, ante la quiebra de un gran número de relaciones. De diversas formas mostraron su rechazo ante el incipiente caos económico, los «efectos perniciosos» de la *glásnost* y, en particular, el desmembramiento del estado plurinacional. Eran objeto, entre tanto, de visibles críticas, que unas veces nacían de las instituciones y otras procedían de una emergente «sociedad civil» que, aparte de identificar en las fuerzas armadas la pervivencia de rancios valores, a menudo se había lanzado a la idealización del enemigo norteamericano.

Para explicar por qué una situación tan tensa como la reseñada no provocó un rápido e incontrolable enconamiento de las relaciones hay que recordar que también operaban elementos de contención. Pueden mencionarse entre ellos la perspectiva de una mayor racionalización en la actividad de las fuerzas armadas, la preservación, pese a todo, de un gasto de defensa muy elevado y del sistema general de la disuasión nuclear, o la adscripción de los militares a tareas de reconstrucción económica y, en su caso, de represión de los movimientos nacionalistas (Cáucaso, Báltico). Esto aparte, la dirección civil adoptó una línea dura frente a fenómenos como la objeción de conciencia al servicio militar y las actividades políticas y sindicales en las fuerzas armadas —se negó a suprimir, por ejemplo, las organizaciones del PCUS—,

al tiempo que periódicamente emitía declaraciones de tono «conservador» sobre las materias más diversas.

Más allá de todos los aspectos mencionados, debe reseñarse que en el período de *perestroika* se hicieron sentir en el seno de las fuerzas armadas significativas divisiones internas; entre sus miembros se contaban tecnócratas y burócratas, reformistas e inmovilistas, hipernacionalistas y gentes poco comprometidas con un discurso nacional. A la luz de algunos análisis, fueron precisamente estas divisiones las que, por el riesgo que la situación implicaba, impidieron un enfrentamiento abierto entre unidades militares durante las tensas jornadas de agosto de 1991.

Las ayudas externas

En la primavera de 1991 el SS de la URSS aprobó una nueva ley sobre inversiones exteriores. Incluso los miembros del «conservador» grupo *Soyuz* —acaso hechizados también por la perspectiva de una homologación externa de su país— apoyaron con su voto la nueva normativa, que a duras penas podía satisfacer los objetivos que ella misma se fijaba: las ambiciones de la mayoría de los empresarios occidentales difícilmente estaban llamadas a colmarse en un medio sometido a una acelerada caotización. Eran muchas, por lo demás, las razones que daban cuenta de por qué los capitales privados occidentales apenas habían hecho acto de presencia en la economía. La más simple es la que nos recuerda que las condiciones de funcionamiento de ésta no eran las idóneas para satisfacer los objetivos de la mayor parte de esos capitales: el negocio fácil, la explotación de una mano de obra barata, el expolio de materias primas o el disfrute de privilegios monopólicos u oligopólicos.

Tampoco los gobiernos se mostraban, sin embargo, más generosos. De acuerdo con una estimación de 1990, cuya solvencia no ha sido negada, el volumen global entonces

previsto para el conjunto de las ayudas «oficiales» a lo que bien poco antes era el «bloque soviético» resultaba ser del orden de 21.000 millones de dólares. Esta cifra merece, de cualquier modo, un par de comentarios: si, por un lado, la crisis del Golfo pareció aminorar al poco su cuantía, por el otro no está de más recordar que en su cálculo se incluían líneas de crédito —por valor de 5.200 millones de dólares— cuyo carácter altruista y cooperador debía ponerse en duda.

Si, con todo, asumimos que en 1990 la «Europa del Este» se aprestaba a recibir unos 20.000 millones de dólares, parece razonable que nos ocupemos en evaluar qué porcentaje de las necesidades económicas existentes iba a ser satisfecho por este conducto. A principios de 1990, el canciller alemán, Helmut Kohl, estimó en nada menos que 160.000 millones de dólares el coste del reflotamiento económico de la antigua RDA. Aun cuando esta última era, con mucho, el más desarrollado de los países «del Este», y en consecuencia las exigencias de su reconstrucción debían ser sensiblemente menores que las que se hacían notar en zonas más deprimidas, podemos convenir que los volúmenes de inversión que reclamaba el conjunto de los estados que nos ocupan eran semejantes a los de la RDA. Como quiera que ésta tenía unos 16 millones de habitantes, y que en el área de nuestro interés vivían unos 400 millones de personas —incluida la parte asiática de la URSS—, una estimación a la baja de los costes de la reconstrucción económica remitía a la escalofriante cifra de 4 billones de dólares.

Así pues, y habida cuenta de que las ayudas externas sólo permitían atender un 0,5% de las necesidades objetivas —20.000 millones frente a 4 billones—, sorprende que hubiese quien intentase pintar con tonos de generosidad y altruismo lo que poco más era que cicatería y búsqueda de negocio fácil. Igual de sorprendente era, en otro terreno, que el grueso de los estados de la Europa central y oriental pusiese manos a la tarea de aplicar los planes de ajuste auspiciados por el Fondo Monetario Internacional: al igual que en

tantos lugares del Tercer Mundo, el objetivo de esos planes no parecía ser el bienestar económico sino, antes bien, la lucrativa explotación de la periferia del sistema capitalista mundial.

Leyes y derechos nacionales

Algunos de los estudiosos de las transiciones políticas han subrayado las dificultades con que éstas se topan cuando en el escenario en que se desarrollan no se hace notar un grado suficiente de aceptación del marco geográfico-nacional-estatal heredado. La vigencia de esta tesis en los últimos años de la URSS es manifiesta. Aunque eran muchos los factores que daban cuenta del atolladero en que llegó a encontrarse el proceso de reformas, es evidente que las distorsiones derivadas de una estructura supranacional mal asentada fueron singularmente importantes. En lo que a nosotros interesa, en 1990 y 1991, y con excepción de un tramo final en que la FR asumió un señalado protagonismo, la mayoría de los acontecimientos de relieve en lo relativo al despliegue legislativo y a las reacciones del poder central tuvieron por escenario o por causa el Báltico.

Perderíamos perspectiva, de cualquier modo, si olvidásemos que uno de los elementos que hacían extremadamente difícil la resolución de los conflictos nacionales en el teatro soviético era la marcada diversidad tipológica que éstos presentaban. Pensemos, si no, que en unos casos lo que se hizo sentir fue un enfrentamiento entre la «nación dominante», que asumió un papel de centralidad, y una periferia descontenta; a este esquema se ajustaban, aunque con diferencias, los conflictos del Báltico y algunos de los que vieron la luz en el Cáucaso. En otras situaciones los protagonistas de las disputas eran repúblicas «periféricas» que pleiteaban entre sí; los problemas de trazado de fronteras y, en términos más generales, la inadecuación de los límites de los estados-

nación instituidos, eran los elementos más comunes de enfrentamiento, como es fácil colegir en los casos de los enclaves caucásicos de Nagorni-Karabaj y Najicheván. Un tercer modelo era el derivado de las reivindicaciones de minorías nacionales que, fuera del estado-nación llamado a ser el suyo, o simplemente carentes de entidad política, reclamaban sus derechos; éste era el sentido de las demandas que se habían hecho notar en Moldavia, una buena parte de cuya población parecía desear una reintegración en el estado rumano, y también el que se transmitía en las reivindicaciones de los tártaros de Crimea, despojados de su república durante la segunda guerra mundial. Por último, no puede faltar una mención del caso de un buen número de pequeñas comunidades que, en particular en Siberia, planteaban también sus reivindicaciones nacionales y a duras penas se ajustaban a los modelos descritos.

Al margen de esta extrema diversidad, y retomando el relato, el primer acontecimiento al que debemos prestar atención se produjo en marzo de 1990, cuando el parlamento lituano aprobó una declaración unilateral de independencia. Como es sabido, en los meses siguientes varias repúblicas emitieron otras tantas declaraciones, que unas veces lo eran de independencia y otras de soberanía. En paralelo con este proceso se desarrollaba otro, en virtud del cual el poder central intentaba dar satisfacción a una promesa que el presidente Gorbachov había realizado en Vilnius, la capital de Lituania, con ocasión de un viaje en enero de 1990: la de desarrollar los instrumentos legales que debían permitir el ejercicio de los derechos de autodeterminación y secesión.

La «Ley de secesión» que poco después vio la luz, lejos de convertirse en el instrumento legal en el que —por citar el ejemplo más claro— las repúblicas del Báltico pudieran asentar sus reivindicaciones, fue en los hechos un estímulo para la ruptura de relaciones con el poder central. Evidentemente diseñada con el propósito de mantener el *statu quo* o, si acaso, de modificarlo muy levemente, la ley señalaba que

en la república que desease abandonar la Unión debía organizarse un referéndum en el que dos tercios de la población con derecho a voto —no de los votantes efectivos— tendrían que respaldar la opción secesoria. El texto legal, que garantizaba los derechos de las minorías nacionales presentes en la república en cuestión, establecía, por añadidura, que las unidades territoriales de orden menor podían decidir su futuro de forma autónoma. En caso de que el referéndum se saldase con un respaldo popular a la secesión —podía entonces repetirse a petición de un 10% de los inscritos en el censo—, quedaría abierto un período de cinco años hasta la independencia efectiva; si la población no se inclinase por ésta, la celebración de un nuevo referéndum habría de aguardar un decenio. La decisión final correspondía, de cualquier modo, a las instancias legislativas del poder central, que habrían de evacuar consultas con las restantes repúblicas. La ley confiaba al centro notables atribuciones y establecía cotas de participación difíciles de alcanzar en la mayoría de unas repúblicas que, como las soviéticas, contaban con una significativa presencia de población foránea. Si la población «local» respaldaba la secesión y la «inmigrante» se oponía a ella —dato éste, por cierto, no confirmado—, sólo Lituania y Armenia parecían en condiciones, bien que precarias, de superar los listones instituidos.

Con semejantes y draconianas condiciones, apenas puede sorprender que las repúblicas bálticas optasen por una vía más expeditiva: la denuncia del pacto germano-soviético de 1939, de la subsiguiente incorporación de sus territorios a la URSS, de la política demográfica impulsada desde el centro y del mecanismo de secesión descrito. A los ojos de muchos ciudadanos en el Báltico, tan sorprendente resultaba que fuera el parlamento de la potencia ocupante el que dictaba las normas de secesión como curiosa la transmutación que habían experimentado en pocos meses quienes antes rechazaban cualquier posibilidad de ejercicio de los derechos de autodeterminación y secesión y ahora se presentaban

como formidables valedores de la fórmula referendaria y de los derechos de las minorías foráneas presentes en el Báltico.

La respuesta del centro a la actitud del parlamento lituano consistió, por un lado, en ratificar el contenido de la «Ley de secesión» y, por el otro, en instaurar un inmediato y duro bloqueo económico, en un marco en el que eran evidentes la endeblez de los apoyos con que contaban las autoridades lituanas y la imprevisión de éstas. Con tales medidas entraba en crisis abierta lo que en algún momento se calificó como el «modelo civilizado» de tratamiento de los problemas nacionales, presuntamente reservado a las repúblicas del Báltico. En otros lugares, y al amparo tal vez del escaso interés que las potencias occidentales mostraban por lo que sucedía en el «Tercer Mundo» soviético, el poder central hacía uso a menudo, y sin mayor contención, de la fuerza.

Las tensiones en el Báltico parecieron remitir en la primavera y el verano de 1990, al tiempo que hacía su aparición un nuevo mecanismo legal que, sin derogar la «Ley de secesión», se proponía sentar las bases de una refundación del estado: el Tratado de la Unión. A lo largo de la etapa de involución neoburocrática que antes analizamos, el Tratado fue uno de los instrumentos decisivos del juego desplegado por el centro. Ni siquiera aquellas partes de la Unión en las que los «conservadores» eran fuertes —así, las repúblicas del Asia central— quedaron al margen de la contestación de la fórmula propuesta por Gorbachov, quien durante varios meses prefirió hacer oídos sordos a quienes le aconsejaban escuchase las demandas de los poderes republicanos. Entre tanto se mantenía cerrado el camino a un efectivo traspaso de atribuciones a las repúblicas, con la consiguiente multiplicación de los mecanismos caotizadores en el seno de la economía.

Aunque las sucesivas reformas y enmiendas de que fue objeto hacen difícil un comentario general sobre el contenido del Tratado de la Unión, parece obligado señalar que, por sus liberalidades en terrenos decisivos, el texto suponía un

avance sustancial con respecto a la tónica habitual de tratamiento de los problemas nacionales. Inevitablemente retórico en buena parte de su articulado, el Tratado suponía, con todo, una sensible ampliación de las competencias republicanas. Bien es cierto que de por medio no faltaban problemas, como los derivados, por ejemplo, de la ambigüedad con que hacía referencia a los derechos de las unidades territoriales de rango inferior al de las repúblicas federadas.

No eran ésos, sin embargo, los problemas principales que planteaba, no ya el Tratado, sino el escenario en que veía la luz. Ejemplificador una vez más de un decidido propósito del centro —neutralizar los derechos de autodeterminación y secesión—, el Tratado fue un instrumento legal al servicio del designio de casi siempre: forzar una moratoria en el ejercicio, formalmente reconocido, de esos derechos. Con él, y de manera inequívoca, la dirección soviética rechazaba cualquier proceso que apuntase a una ruptura previa de la Unión a la que pudiera seguir la reconstrucción, voluntaria y democrática, de ésta: la Unión debía mantenerse en pie, aun cuando ello supusiese un olvido de las declaraciones de soberanía e independencia emitidas por la mayoría de las repúblicas federadas y de los resultados de las consultas referendarias que se iban celebrando en algunas de ellas. El Tratado era así poco más que un postrer esfuerzo que el centro realizaba para mantener sus prerrogativas tradicionales, y en modo alguno constituía un instrumento creado para permitir una negociación equilibrada. Las propias operaciones de represión desarrolladas en enero de 1991 en el Báltico —ya antes nos hemos ocupado de ellas— daban cuenta de este estado de cosas.

Así los hechos, el dato fundamental era el enfrentamiento entre el centro y media docena de repúblicas decididas a ejercer su derecho a la autodeterminación, y no la disputa competencial que mantenían el mismo centro y las repúblicas que parecían dispuestas a preservar la Unión. Por mucho que Moscú se apoyase en éstas —aportaban, no lo olvidemos, la

mayoría de la población—, el problema de fondo, que el Tratado pretendía esquivar, seguía siendo el que se planteaba en el Báltico, buena parte del Cáucaso y Moldavia. Esta circunstancia se hizo evidente el 17 de marzo de 1991, cuando se celebró en toda la URSS un referéndum sobre el porvenir de la Unión. Con una pregunta extremadamente ambigua, que interrogaba a los ciudadanos sobre su disposición a vivir en un paraíso de libertades y prosperidad, todas las opiniones parecieron experimentar un reforzamiento de resultas de la consulta referendaria. Así, con un apoyo masivo de los medios de comunicación y de los aparatos oficiales, el centro consiguió sacar adelante su propuesta; Gorbachov volvió a echar mano del aparato del PCUS, que a buen seguro no operó ni con ingenuidad ni sin contraprestaciones. Los «reformistas radicales» encontraron, por su parte, aceptables respaldos, que unas veces adoptaron la forma de un rechazo de la Unión renovada y otras se plasmaron en señalados apoyos a la elección directa del presidente republicano. Por lo que a los movimientos nacionalistas de la periferia se refiere, y aun de por medio las denuncias de coacciones emitidas por las minorías foráneas, la masiva abstención de la población no podía sino ratificar muchas de sus tesis tradicionales.

Por lo demás, la naciente sociología electoral soviética, cuyos pronósticos recibieron una general confirmación, estaba de enhorabuena. Como se esperaba, la propuesta del centro fue acogida con recelos incontables en la periferia escisionista configurada por el Báltico, Georgia, Armenia y Moldavia. Los votantes también respondieron con arreglo a lo previsto en las repúblicas eslavas; el apoyo a la Unión renovada fue, con todo, sensiblemente menor en la FR —más proclive a la contestación del poder central— que en Ucrania y Bielorrusia. En las grandes ciudades de estas repúblicas, donde se hacían notar los fermentos de una emergente «sociedad civil», el respaldo recibido por el proyecto gubernamental alcanzó niveles más bajos. Por último, en el Asia central, donde los viejos aparatos y sus tiranías pervivían

inmutables, la población expresó una inequívoca adhesión a los designios refundadores de la Unión; de entre las repúblicas de cultura islámica, sólo la caucásica Azerbaiyán parecía guardar alguna distancia con respecto a los requerimientos de Moscú.

Los acontecimientos posteriores al referéndum del 17 de marzo han sido sumariamente analizados en otro epígrafe de este capítulo. Baste con recordar que el acuerdo de Novo Ogariovo suponía, del lado de Gorbachov, la asunción de la necesidad de renegociar el Tratado de la Unión, en la perspectiva acaso de premiar a las repúblicas que se habían mostrado aquiescentes con su contenido. La relativa generosidad exhibida por Gorbachov durante la primavera de 1991 guardaba una estrecha relación, de cualquier modo, con un propósito más explícito: ganar a la FR para la causa de la Unión renovada. En este orden de cosas debe entenderse, por ejemplo, la presunta resolución, en beneficio formal de las repúblicas, de la «guerra de competencias» que enfrentaba al centro con aquéllas. El creciente poder de la FR, convertida en un duro interlocutor, permitió tal vez que en el plano legal se alcanzaran acuerdos mucho más avanzados que los previstos en el momento de gestación del Tratado de la Unión.

Claro es que la circunstancia anterior apenas tenía efecto alguno sobre el que seguía siendo problema fundamental: el planteado por la media docena de repúblicas que preferían mantenerse al margen del acuerdo adoptado en Novo Ogariovo. Ya hemos señalado que en esta cuestión Gorbachov no parecía bajar la guardia y porfiaba en llevar adelante la que había sido su política ya en la primavera de 1990: una peligrosa combinación en la que se daban la mano la voluntad de exigir el respeto de las leyes y la decisión de hacer valer sanciones de carácter económico. Frente a ello, las autoridades de las repúblicas secesionistas exhibían los datos de las consultas referendarias que, celebradas en la primera mitad de 1991, conducían a una inequívoca conclusión: un porcentaje significativo de la población deseaba una independencia

plena, mientras que eran minoría quienes se abstenían y, más singularmente, quienes se oponían al abandono de la Unión. Incluso una parte importante de la «población foránea» se inclinaba, en fin, por la independencia.

A manera de resumen puede decirse que al respecto de la cuestión nacional se hicieron notar tres grandes posiciones. La primera privilegiaba la estabilidad, e identificaba como provisionalmente disruptores los procesos que hacían peligrar aquélla. La segunda no sólo se ocupaba de subrayar la importancia de la estabilidad, sino que rechazaba, incluso como posibilidad futura, cualquier cambio en el *statu quo*. La tercera reclamaba el ejercicio inmediato, y sin cortapisas, de los derechos de autodeterminación y secesión, y para ello subrayaba la paradoja de una política que, como la oficial, al alentar una moratoria en el ejercicio de esos derechos, tenía un carácter desestabilizador. Siendo evidente que Gorbachov no se emplazaba en la tercera de esas posiciones, queda por dirimir cuál era el lugar que le correspondía entre las restantes. Parece incontestable que el presidente soviético no había asumido en momento alguno el deslizamiento desde una posición —la primera—, que podía aducir en su beneficio poderosos argumentos, a otra —la tercera— que era el desenlace lógico de las reformas que él mismo había impulsado. Lo poco que podemos decir con certeza es que las peculiares alianzas desplegadas, acaso más estratégicas que tácticas, colocaron a Gorbachov en una comprometida situación, al lado de quienes propiciaban el mantenimiento, eventualmente *manu militari,* de la Unión que conocíamos.

BIBLIOGRAFÍA

Caracterizaciones generales del proceso de *perestroika* son las obras de Seweryn Bialer (dir.), *Inside Gorbachev's Russia* (Westview, Boulder, 1989); Marie-Agnès Crosnier, Jean Gueit y Anne de Tinguy, *Les années Gorbatchev* (La documentation française, París, 1993); Martin Crouch, *Revolution & evolution. Gorbachev and Soviet politics* (Philip Alan, Londres, 1989); Alexander Dallin y Gail W. Lapidus (dirs.), *The Soviet system in crisis: a reader of Western and Soviet views* (Westview, Boulder, 1991); Marshall Goldman, *What went wrong with perestroika* (Norton, Nueva York, 1991); Bernard Guetta, *Eloge de la tortue. L'URSS de Gorbatchev, 1985-1991* (Le monde, París, 1991); Ed A. Hewett y Victor H. Winston (dirs.), *Milestones in glasnost and perestroyka* (dos tomos) (The Brookings Institution, Washington, 1991); Jean Meyer, *Perestroika* (dos tomos) (FCE, México, 1991); Pascal Lorot, *Histoire de la perestroïka* (PUF, París, 1993); Antonio Moscato, *Gorbaciov. Le ambiguità della perestrojka* (Erre emme, Roma, 1990); Ogoniok, *Cómo cambió la URSS* (Límite, Barcelona, 1991); Stephen White, *Gorbachev in power* (Cambridge University, Cambridge, 1990), y VV AA, «L'URSS, de la perestroïka à l'après-communisme», monográfico de *Le monde* (octubre de 1991). También puede recurrirse a los textos recogidos en lo que, propiamente hablando, no son unas «memorias» de Mijaíl Gorbachov: *Memorias de los años decisivos, 1985-1992* (Acento, Madrid, 1993).

Ensayos generales sobre la *perestroika*, publicados por autores de lengua castellana, son los trabajos de Cesáreo R. Aguilera de Prat, *La crisis del estado socialista. China y la Unión Soviética durante los años ochenta* (PPU, Barcelona, 1994); Emilio Alvarado, «El hundimiento de la Unión Soviética», en Juan Carlos Monedero (dir.), *El retorno a Europa* (Universidad Complutense, Madrid, 1993); Manuel Castells, *La nueva revolución rusa* (Sistema, Madrid, 1992); Hugo Fazio, *La Unión Soviética: de la perestroika a la disolución* (Uniandes-ecoe, Santafé de Bogotá, 1992), y Guillermo A. Pérez, «Algunas claves del proceso de desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas», en Ricardo M. Martín y Guillermo A. Pérez (dirs.), *Crisis y cambios en el mundo actual* (Universidad de Valladolid, Valladolid, 1993). También pueden consultarse los monográficos «¿Por qué se atasca la perestroika?», en *Cuadernos del Este* (nº 1, 1990), y «Cambio y transformación en la Europa del Este», en *Debats* (nº 40, junio de 1992).

Texto clave sobre los proyectos oficiales de reforma política es la obrita de Mijaíl Gorbachov, *Informe político del Comité Central del PCUS a su XXVIII Congreso y tareas del Partido* (Nóvosti, Moscú, 1990). Introducciones a la situación política de la etapa postrera de *perestroika* son los trabajos de Javier Alvarez Dorronsoro, «El sistema político y su reforma», en el volumen colectivo *De la revolución de Octubre a Gorbachov* (Fundamentos, Madrid, 1991); M.A. Babkina (dir.), *New political parties and movements in the Soviet Union* (Nova Science, Commack, 1991); Roberte Berton-Hogge, *La réforme politique en URSS* (La documentation française, París, 1989); Romano Bettini, *L'URSS nell'era di Gorbacev* (Europa, Roma, 1991); Giulietto Chiesa, *Transizione alla democrazia* (Lucarini, Roma, 1990); Manuel García Alvarez, *Las reformas jurídico-políticas en la URSS (1988-1991)* (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991); Maurizio Massari, *La grande svolta. La riforma politica in URSS* (Guida, Nápoles, 1990); Vera Tolz, *The USSR emerging multi-party system* (Praeger, Nueva York, 1990), y Stephen White, Alex Pravda y Zvi Gitelman (dirs.), *Developments in Soviet politics* (Macmillan, Londres, 1990).

Algunos de los términos de los nuevos movimientos se estudian en las obras de John Bushnell, *Moscow Graffiti. Language and subculture* (Unwin Hyman, Londres, 1990); A.V. Grómov y O.S. Kuzin, *Neformali. Kto est kto?* (Misl, Moscú, 1990); Geoffrey Hosking, Jonathan Aves y Peter J.S. Duncan, *The road to post-communism. Independent political movements in the Soviet Union, 1985-1991* (Pinter, Londres, 1992), y Borís Kagarlitski, *Farewell perestroika* (Verso, Londres, 1990). Expresiones del debate político en la URSS son los trabajos de Mijaíl Afanásev, *Bureaucracy: triumph and crisis* (Progress, Moscú, 1990); Serguéi Alekséev, *Law and legal culture in Soviet society* (Progress, Moscú, 1991); Yurii Kozlov y Yevguenii Frólov, *Los órganos de administración pública en la URSS* (Progreso, Moscú, 1990), y VV AA, *Perestroika in the USSR: social scientists' views and approaches* (Nauka, Moscú, 1993).

Las reformas económicas se estudian en Benjamín Bastida, «La Unión Soviética: se acabó la perestroika», en Enrique Palazuelos (dir.), *Europa del Este ante el cambio económico* (Economistas, Madrid, 1991); João Bernardo, *Crise da economia soviética* (Fora do texto, Coimbra, 1990); Philip Hanson, *Local power and market reform in the former Soviet Union* (RFE/RL Research Institute, Munich, 1993); Marie Lavigne, «Reformas económicas en la URSS y en Europa del Este», en Enrique Palazuelos (dir.), *Europa del Este...*; Enrique Palazuelos, *La economía soviética más allá de la perestroika* (Ciencias Sociales, Madrid, 1990) y «El sistema económico y su reforma», en el volumen colectivo *De la revolución de Octubre a Gorbachov* (Fundamentos, Madrid, 1991), y Luis Angel Rojo, José Angel Sánchez Asiáin y Andreu Mas Colell, *Reforma económica y crisis en la URSS* (Espasa Calpe, Madrid, 1991). Dos infor-

mes sobre la situación en la etapa postrera de la *perestroika* son *Soviet economic performance in 1991* (NATO, Bruselas, 1992) y *Stabilisation, libéralisation et dévolution de compétences* (Comisión de la CE, Bruselas, 1990). Trabajos sobre los nuevos grupos directores son los de Roberte Berton-Hogge, *URSS: quels cadres pour l'entreprise nouvelle?* (La documentation française, París, 1987); A. Craig Copetas, *Bear hunting with the Politburo* (Simon & Schuster, Nueva York, 1991), y el monográfico «Perestrojka e lavoro», en *Sociologia del lavoro* (Franco Angeli, Milán, 1991).

El mejor texto sobre los problemas sociales emergentes es el de David Lane (dir.), *Soviet society under perestroika* (Unwin Hyman, Londres, 1990). Sobre las redes de corrupción y las mafias, y aunque el grueso de la información se refiere a etapas anteriores, pueden consultarse Virginie Coulloudon, *La mafia en Union Soviétique* (JCLattès, París, 1990); Renata Lesnik y Hélène Blanc, *L'empire corrompu* (Robert Laffont, París, 1990), y Arkadi Vaksberg, *La mafia russe* (Albin Michel, París, 1992). En hechos más recientes se concentra Nadine Marie-Schwartzenberg, *Le crime organisé en URSS* (La documentation française, París, 1990). De la situación del sistema educativo se ocupa John Dunstan (dir.), *Soviet education under perestroika* (Routledge, Londres, 1992). Los problemas de las mujeres soviéticas en este convulso período se estudian, en fin, en Helene Burgess, *Our lives, our dreams. Soviet women speak* (Progress, Moscú, 1988); Francine du Plessix Gray, *Femmes soviétiques. Les oubliées de la perestroïka* (Presses de la Renaissance, París, 1990), y Chanie Rosenberg, *Women and perestroika* (Bookmarks, Londres, 1989).

Algunas obras/memorias de personajes públicos de relieve son los libros de Edvard Shevardnadze, *El futuro pertenece a la libertad* (B, Barcelona, 1991) y *Moi vibor* (Nóvosti, Moscú, 1992); Nursultán Nazarbáyev, *Bez pravij i levij* (Molódaya gvárdiya, Moscú, 1991); Anatolii Sobchak, *Jozhdéniye vo blast* (Nóvosti, Moscú, 1991), y Aleksandr Yákovlev, *Lo que queremos hacer con la Unión Soviética. Entrevista con Lilly Marcou* (Alianza, Madrid, 1991), *Muki prochteniya bitiá* (Nóvosti, Moscú, 1991) y *Obval posleslóviye* (Nóvosti, Moscú, 1992).

EL GOLPE DE AGOSTO DE 1991 Y SUS CONSECUENCIAS

Cuando, en 1991, la URSS entró en vía manifiesta de desaparición, los efectos de varios decenios de percepciones acumuladas se hacían notar todavía con singular fortaleza. Aunque dábamos por descontado que el sistema soviético, tal y como lo habíamos conocido durante decenios, se estaba derrumbando, seguíamos pensando en la URSS de esos meses como un mutante, no excesivamente transformado, del orden político, económico y social nacido en 1917. La convulsión del 19 de agosto de 1991 contribuyó poderosamente a subvertir estos esquemas y obligó a cerrar por fin, sin excesivas dudas, el ciclo iniciado siete décadas y media atrás. En adelante no parecía posible repetir el ejercicio de los años anteriores: el «sistema soviético» ya no existía, y por muy significada que pudiese ser su herencia, debíamos aceptar plenamente esa perspectiva.

La quiebra del viejo orden alcanzó también al designio que Gorbachov había intentado imponer en los años anteriores, y del que en los últimos días de agosto procuraba liberarse a marchas forzadas. Desacreditado el viejo aparato, Gorbachov se encontraba sin sustento en uno de los flancos —que cada cual ponga, a su gusto, la etiqueta de «izquierda» o «derecha»— y con fuerzas cada vez más poderosas y recelosas en el otro. Siquiera provisionalmente, también la gigantesca operación de reciclaje de las capas más modernizantes de la burocracia se había venido abajo. El pacto con los «conservadores» en que Gorbachov había sustentado sus

movimientos en los últimos años había entrado, en fin, en crisis. Los responsables del golpe de agosto, dirigentes de los sectores más modernizantes de lo que el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) había sido en sus meses postreros, no habían podido resistir la tentación del orden y de la disciplina, una tentación, por cierto, que también parecía seducir a Gorbachov.

Los acontecimientos de agosto reflejaban en muchas de sus dimensiones la quiebra del proyecto neoburocrático. Elecciones semidemocráticas, planes económicos recubiertos de una ambigüedad extrema, retóricos reconocimientos de autodeterminaciones y secesiones, e intentos disimulados de mantener en pie privilegios sin cuento parecían provisionalmente desterrados. Sólo en el caso de Gorbachov —el representante por excelencia de la modernidad neoburocrática— se adivinaba alguna escapatoria: la otra dimensión de su discurso, la criptocapitalista, podía desplegarse ahora con desenvoltura, en la esperanza de ganar para su causa a aquellos que recelaban del juego de connivencias de los años anteriores. El Gorbachov de esos días se aprestaba a olvidar viejas transacciones en beneficio de la mercancía que él mismo había vendido con singular talento en sus viajes al exterior: un hechizo por Occidente apenas recompensado por unas potencias, las occidentales, que no habían mostrado otra generosidad que la de las palabras.

Hubo algo, con todo, que no se vino abajo en esos días de agosto. El ascenso innegable de un designio capitalista salvaje, que Yeltsin defendía en los hechos —en sus declaraciones se confesaba un socialdemócrata—, no se produjo en detrimento de un proyecto socialista: en los años precedentes Gorbachov poco más había hecho que defender una confusa mezcla de privilegios burocráticos y modernidades capitalistizantes, con la cobertura retórica de un «socialismo» que no era sino una estratagema reproductora de la palabrería del viejo orden. Así las cosas, apenas puede sorprender que en las calles nadie saliese en defensa de unas conquistas sociales

que en esos días, y a los ojos de la mayoría de los soviéticos, ocultaban una realidad más consistente: la dominación burocrática. Una dominación, por cierto, que, de haber alumbrado con anticipación su destino de esas horas, Gorbachov acaso habría procurado mantener y modernizar con procedimientos menos «liberales». Tal vez entonces se nos habría impuesto con claridad la imagen que el último de los presidentes soviéticos se disponía a legarle a la posteridad: la de un «conservador» que mostró una conciencia incipiente de una crisis sin fondo y que, más allá de lo anterior, actuó en algunas circunstancias —sólo en algunas— con una compostura para la que sus largos años de ascenso en el aparato brezhneviano no lo habían preparado.

El golpe

En los meses —casi habría que decir en los años— anteriores a agosto, la perspectiva de una involución en la URSS había hecho correr mucha tinta. Por razones obvias, la sovietología se ocupaba de una doble, pero no ampliable, tarea: delimitar las causas de un posible «golpe» y analizar sus previsibles consecuencias. Como quiera que el golpe en sí, en su condición de operación político-militar, escapaba a sus intereses, no tuvo una nueva ocasión de demostrar la debilidad de sus conocimientos. A duras penas habría podido imaginar, sin embargo, la perspectiva que se hizo notar en los últimos días de agosto de 1991: un golpe alentado por la cúpula del Partido y del estado que no se traduce en derramamiento de sangre y que, y por encima de todo, fracasa estrepitosamente.

Por lo demás, la sovietología no acertó a explicar —y esta tarea sí que estaba entre sus cometidos— por qué los impulsores del golpe decidieron romper las reglas de juego en agosto cuando unos meses después, en noviembre o en diciembre, habrían podido arrebatarle a Gorbachov de forma

«legal» la secretaría general del PCUS. El hecho de que el 20 de agosto estuviesen preparadas las galas de la firma del Tratado de la Unión no parece razón suficiente para dar cuenta del cariz que adoptaron los acontecimientos. Si la firma estaba llamada a ser, con sólo tres repúblicas suscribientes, un acto patético, las perspectivas de cambio en la distribución de recursos que algunos especialistas interpretaban se derivarían del nuevo tratado tampoco parecían razón más poderosa que otras muchas, tanto más si se tenía en mente el escaso respeto por las leyes que se había hecho sentir en los años anteriores. Los actores del golpe tal vez precipitaron su acción al tomar nota de un irrefrenable empeoramiento de sus posiciones como el que se anunciaba en virtud de dos contingencias: el respaldo que Gorbachov podía encontrar en el propio aparato del PCUS con ocasión de la Conferencia Extraordinaria de final de año —lo cual nos remite al equívoco juego de siempre, con posiciones y retóricas infinitamente intercambiables—, y la estéril destitución de un secretario general que sin embargo conservaría, y más allá de ello reforzaría, su condición de jefe del Estado.

Por lo demás, y aunque las informaciones siguen siendo —probablemente lo serán durante mucho tiempo— precarias, la mayor parte de los datos invitan a considerar como un «golpe blando» lo ocurrido el 19 de agosto. El rasgo fundamental de las acciones acometidas ese día no parecía ser, como se ha afirmado a menudo, la improvisación, y sí la limitación de objetivos y medios. Aunque el grado de elaboración de la operación fuese escaso, no es posible explicar de esta suerte un dato tan decisivo como que Yeltsin no fuese detenido ni, por lo que parece, coartado en momento alguno. Transcurridos varios años, tal vez hay que darle algún crédito a los propósitos de la acción enunciados por uno de sus responsables, Yanáev, en la propia tarde del lunes 19: lo que a cualquier analista con un poco de discernimiento le pareció la manida alegación autoexculpatoria común en las primeras horas de un golpe —el anunciado designio de llevar adelante

las reformas inyectando dosis de disciplina en la vida de un país caotizado— acaso era la veraz declaración de principios de una operación con ambiciones muy recortadas. Así, aunque la renuncia al empleo de la fuerza fuese unánimemente explicada en virtud de la resistencia de la población y de varios de los poderes republicanos, o de la desobediencia de las unidades militares, alguna influencia debió ejercer en ella la conducta contenida que exhibió el Comité de Emergencia golpista.

Además de lo anterior hay que recordar otros datos que sitúan en el centro, bien que por razones distintas, al propio Gorbachov. En primer lugar, los miembros del Comité de Emergencia habían medrado al amparo del presidente, y en la mayoría de las casos habían hecho en los años anteriores pública profesión de sus querencias reformadoras. Un lustro antes, un gobierno encabezado por Yanáev, Pávlov, Yázov, Pugo, Kriuchkov y Baklánov hubiese parecido el producto de una auténtica revolución, y no precisamente la realizada por la «vieja guardia». No fue esta última, pues, y sí una parte del *establishment* liberal del PCUS, la que intentó dar un golpe de mano en agosto. Muchas son las consecuencias que de ello pueden extraerse. La más importante es tal vez la que nos invita a desconfiar por completo de las etiquetas. A menudo se olvida que en 1986 Ligachov y Rizhkov —luego condenados a la ignominia por los medios de comunicación occidentales— eran unánimemente considerados los dos principales aliados de Gorbachov en la cúpula del PCUS y del estado, o que en las jornadas de agosto los «conservadores» Vadim Medvédev y Borís Grómov hicieron frente con firmeza a las exigencias del Comité de Emergencia.

También, y no menos importante, es menester recordar que había sido el propio Gorbachov quien había nombrado, por lo que parece de buen grado, a quienes el 19 de agosto habían sido sus repentinos rivales: no le habían sido impuestos. El hecho de que la vicepresidencia de la Unión, la presidencia del Consejo de Ministros y la jefatura de los

ministerios de Defensa e Interior estuviesen ocupadas por semejantes personajes no era, en suma, el producto de la presión «conservadora»: el propio Gorbachov así lo reconoció en su multitudinaria rueda de prensa del jueves 22. En estrecha relación con todo ello, las medidas anunciadas en la madrugada del 19 de agosto se hacían eco de muchas de las inquietudes, y de muchas de las amenazas, demostradas y proferidas por el presidente soviético en el transcurso del año anterior.

La perspectiva de instauración del estado de emergencia no era ajena a la conducta de Gorbachov, circunstancia que —junto con su directa responsabilidad en los nombramientos en la cúpula— le daba crédito, siquiera fuese parcial, a las palabras de Edvard Shevardnadze, quien poco más hacía que expresar un sentimiento generalizado entre la población: Gorbachov era, al menos por omisión, el responsable de lo sucedido el 19 de agosto, y ello aunque en los meses anteriores le hubiese imprimido un viraje «radical» a muchas de sus políticas. En los días que siguieron al fracaso del golpe, el propio presidente soviético le dio consistencia a esta lectura de los hechos, no en vano aceptó sin protestas las imposiciones de Yeltsin: en momento alguno invocó su secuestro en Crimea para reclamar, como en otro caso hubiese sido lo suyo, su independencia de decisión y exigir que nadie sacase provecho de una situación —la de la tentativa golpista— a la que, sobre el papel, era plenamente ajeno. Con su aceptación de imposiciones sin cuento, aceptaba también su responsabilidad, bien que limitada, en el desencadenamiento de los hechos. Las cosas así, y aunque ningún indicio sólido apunta a una directa implicación de Gorbachov en lo sucedido en la madrugada del 19 de agosto, es obligado recordar que la aparición de pruebas al respecto —que no se hizo sentir, por cierto, en los procedimientos judiciales posteriores— hubiese encontrado un sólido soporte en muchas de las conductas exhibidas por el presidente soviético en los meses anteriores.

Lo que durante tres días pareció un retorno al Budapest de 1956 o a la Praga de 1968, esta vez en las calles de la capital de la metrópoli, al final acabó por emplazarnos en un escenario que recuerda al de la Europa central y oriental de los últimos meses de 1989. También en lo relativo a las consecuencias de la «revolución de agosto» la sovietología se vio obligada, por lo demás, a asumir cometidos que no eran los suyos. Con una tarea perentoria —adivinar el futuro de fuerzas desbocadas que habían roto visiblemente las reglas del régimen estudiado durante décadas—, los sovietólogos se convirtieron durante unos días en algo que no eran: especialistas en agencias de inteligencia, escrutadores de psicologías profundas y desempolvadores de vetustos anales que daban cuenta del desmembramiento de añejos imperios. Tuvieron que acometer esta tarea, además, en un momento en que todos los escenarios eran imaginables, muy lejos de los designios de un Gorbachov que años atrás se enorgullecía de haber fraguado un entorno caracterizado por la estabilidad y la predictibilidad de las relaciones.

El primer efecto «interno» de las acontecimientos de agosto fue, ya lo hemos apuntado, el provisional retroceso del proyecto neoburocrático imperante durante años. En paralelo con un brusco recorte en las atribuciones del presidente Gorbachov, el evento estelar de este retroceso no fue otro que la ilegalización del PCUS y la confiscación de sus bienes, medidas ambas de efectos difusos. Si la primera equivalía a una quimera inalcanzable, e indeseable incluso para quienes se propusieron llevarla a los hechos, como era ilegalizar el estado, la segunda se vio sorteada por un aparato que, entre otras cosas, procuró poner a buen recaudo sus recursos.

La quiebra del discurso neoburocrático fue, sin embargo, parcial. Y el dato fundamental que apunta a su pervivencia no era el mantenimiento en la cúpula —en el propio «Con-

sejo de Estado» que vio la luz en aquellos días— de poderes republicanos que no se caracterizaban precisamente por su reformismo; ni siquiera lo era el hecho de que los órganos legislativos siguiesen reflejando los efectos de unas elecciones semidemocráticas y acogiesen en su seno a lo más granado del aparato del PCUS, que encontraba en ellos una adecuada caja de resonancia. La gran paradoja del momento bien podía ser el resurgimiento fulgurante del designio neoburocrático en la forma del pacto que, aparentemente *contra natura*, y con tres meses de duración, conformaron a golpe de decreto Yeltsin y Gorbachov.

En un primer momento, en una inversión de lo ocurrido en los meses precedentes, y con el pragmatismo de las gentes de orden, Yeltsin buscó con ahínco el apoyo de un Gorbachov que en casi todos los pronósticos era un cadáver político. Hizo valer así, en un espacio distinto, el mismo juego centrista desplegado por Gorbachov en los años anteriores. En horas como ésas era obligado recordar de dónde procedía Yeltsin —del propio PCUS— y cuáles habían sido algunos de sus comportamientos más recientes —así, la represión de las demandas «nacionales» dentro de la Federación Rusa (FR), o la decidida voluntad de restarle capacidades al poder legislativo. Por fuerza tenía que abrirse camino una conclusión esquivada por los especialistas: si nos dejamos llevar por la realidad de quién era Yeltsin, la «revolución de agosto» no había permitido, pese a las apariencias, un corte tan drástico con el pasado como el que se produjo en la Europa central y oriental a finales de 1989. Por muchos conceptos, Yeltsin se asemejaba a los Rakowski, los Modrow, los Grósz y los Adamec, barridos entonces de la historia en su esfuerzo postrero por conferirle una imagen moderna y liberal a los viejos partidos gobernantes. Aunque la parturienta había dado a luz algo, no había muerto del todo. Había dejado su huella, poderosa, en los cromosomas de sus hijos. La *matrioshka* que había alumbrado algo nuevo no llevaba en su seno otra cosa que reproducciones a escala de sí misma.

Este Yeltsin repentinamente colocado en los altares por quienes meses antes olvidaban que al menos un rasgo nada marginal colocaba su figura muy por encima de la de Gorbachov —su innegable triunfo en varios procesos electorales—, parecía haber heredado, bien que con un sesgo algo diferente, el designio imperial del que había hecho gala en repetidas ocasiones el presidente soviético. Ahora que Gorbachov no tenía en realidad proyecto alguno —y acaso todavía confiaba más en los Yanáyev y los Pávlov que en sus forzados aliados del momento o en una población que le producía un pánico cerril—, Yeltsin pasó a defender con vigor durante unos meses una idea, la del mantenimiento de la Unión, que unas veces se superponía y otras contradecía el objetivo que le parecía haber guiado en los años anteriores: Rusia convertida en un nuevo y estable centro de poder internacional. Era pronto para saber si este desplazamiento de los designios de Yeltsin reflejaba una subterránea voluntad de preservar la Unión o si, por el contrario, se trataba de una respuesta oportunista a la reaparición de viejos temores: en los días siguientes al golpe no faltaron voces —así, los presidentes de Ucrania y de Uzbekistán— que creyeron ver en el «nuevo centro» ruso un trasunto de las pretensiones coloniales del «viejo centro» soviético. Tal vez esta circunstancia convenció a Yeltsin de la necesidad de mantener en pie durante unos meses un poder central que, formal, y acaso realmente, distinto del ruso, estaba llamado a suscitar menores recelos: eran muchos los que preferían conservar la Unión si así experimentaba un freno el irresistible ascenso de Rusia.

Al poco se hicieron sentir, por cierto, voces que, en el campo «radical», empezaban a marcar distancias con respecto a un Yeltsin sospechoso de traición a sus acólitos. Las múltiples declaraciones de Yurii Afanásev eran ilustrativas al efecto. Era significativo, entre tanto, que Gorbachov encontrase grandes dificultades para llenar con nombres las más altas instancias de la Unión, como lo demostró la negativa

con que Iván Siláev respondió al ofrecimiento del puesto de primer ministro, o como lo ilustraron, con sus recelos, los Shevardnadze, los Yákovlev y los Popov..

La gestación de la CEI

A la postre dos fueron los efectos fundamentales del golpe de agosto: la ilegalización del PCUS y el desmembramiento del estado plurinacional hasta entonces existente. Un tercer efecto, postergado unos meses, fue la defenestración política del presidente Gorbachov, quien consiguió sobrevivir unas semanas a la ilegalización del partido que, mal que bien, había respaldado muchos de sus esfuerzos en los años anteriores.

Fue la desaparición del estado soviético lo que, al cabo, en diciembre de 1991, colocó a Gorbachov fuera de juego. Los procedimientos de tratamiento del «problema nacional» que el presidente de la URSS había intentado impulsar antes de agosto entraron en visible quiebra tras el fracaso del golpe. Tanto el Tratado de la Unión como la «Ley de secesión» aparecieron a los ojos de muchos como lo que probablemente eran: normas legales promovidas con el subterráneo propósito de evitar que pudieran llevarse a término, con todas las consecuencias posibles, los derechos de autodeterminación y secesión. En los primeros días de septiembre de 1991 los poderes del centro se vieron sensiblemente recortados tras una sesión extraordinaria del Congreso de Diputados Populares. Antes se había hecho notar un rosario de declaraciones de independencia en las repúblicas. Las peculiaridades que exhibía la situación en cada una de éstas se tradujeron en lo que, de manera simplificada, podemos describir como tres grandes escenarios. Por un lado, las repúblicas del Báltico y, con perfiles menos claros, también Georgia y Moldavia, parecían inclinarse por una «independencia real», sin recortes ni componendas. Ocho repúblicas, por su parte,

respaldaban lo que a primera vista parecía una «independencia formal»: al tiempo que emitían las declaraciones correspondientes, mostraban su voluntad de permanecer en una «unión renovada» de contornos no demasiado claros. Ése era el caso de Bielorrusia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tadzhikistán, Kirguizia, Armenia y Ucrania; estas dos últimas repúblicas se reservaban, sin embargo, una decisión final, que debía llegar de la mano de sendos refrendos de autodeterminación por celebrar a finales de septiembre (Armenia) y principios de diciembre (Ucrania). Las dos repúblicas restantes, Rusia y Kazajstán, no emitían, en fin, declaración de independencia alguna.

Entre septiembre y diciembre no fueron muchas las novedades de relieve. Estonia, Letonia y Lituania, objeto de un rápido reconocimiento internacional, accedieron en plenitud a la independencia, mientras Georgia y, en particular, Moldavia parecían flirtear con la nueva Unión. Las negociaciones para la configuración de ésta eran impulsadas por Gorbachov, quien acaso vislumbraba una tabla de salvación en una situación desesperada. Dejemos al margen, por cierto, la trasnochada admonición proferida por el presidente soviético días después del golpe —«Si no firmáis un nuevo Tratado de la Unión, si no mantenéis la unidad nacional, dimitiré»[1]—, tanto más patética cuanto que procedía de quien en el pasado se había servido de amenazas más duras y de sanciones más consistentes, y ahora todo lo fiaba en la incierta esperanza de que los legisladores se sintiesen afectados por la perspectiva de su dimisión. El hecho de que el propio Gorbachov invocase los resultados del evanescente referéndum del 17 de marzo de 1991 ilustra a las claras que el presidente soviético no acababa de tomar nota de la nueva situación.

En octubre y en noviembre pareció que se registraban avances significativos, con todo, en beneficio del proyecto avalado por el presidente soviético. Así, el 18 de octubre

[1] *La Repubblica* (28 de agosto de 1991).

ocho repúblicas, a las que poco después se sumaban Ucrania y Moldavia, respaldaban en principio un tratado de unión económica que quedaba pendiente de ratificación por los parlamentos correspondientes; junto con las bálticas, sólo Georgia y Azerbaiyán quedaban al margen del tratado en cuestión. Aunque el 14 de noviembre siete repúblicas aprobaban, por otra parte, un proyecto de acuerdo que se proponía crear una «Unión de estados soberanos», el 25 de ese mes las conversaciones entraban en un callejón sin salida: mientras Gorbachov seguía en su empeño de sacar adelante lo que equívocamente calificaba como un «estado confederal» con instituciones unitarias —una presidencia, un gobierno, un parlamento—, la FR propugnaba una especie de confederación que, sin poder central alguno, prefiguraba lo que un par de semanas después acabaría siendo, al menos en la forma, la Comunidad de Estados Independientes.

De manera casi soterrada, la FR asumía paulatinamente, entre tanto, muchas de las atribuciones hasta entonces en manos del poder central. A finales de octubre, Yeltsin había anunciado la creación de un banco de Rusia sobre la base de los activos del *Gosbank*, el banco central de la Unión Soviética. Un mes después decidía asumir los gastos presupuestarios de la propia URSS, atendiendo con carácter inmediato al pago de los salarios de los funcionarios gubernamentales. En los hechos eran los representantes de la FR quienes negociaban con los organismos internacionales las ayudas y los planes económicos que debían hacerse sentir sobre el terreno.

No faltaban, por lo demás, tensiones internas que amenazaban la estabilidad de algunas repúblicas. Eran evidentes, en primer lugar, en la propia FR, donde tártaros, buriatos y chechenos, por citar tres ejemplos, reclamaban en unos casos autonomía y en otros francas independencias. Pero las tensiones alcanzaban también a otros lugares. Turbulentos acontecimientos seguían teniendo por escenario el Cáucaso: un clima de guerra civil se hacía notar en Georgia al tiempo que proseguía, pese al teórico alto el fuego pactado en

septiembre, el enfrentamiento armenio-azerí en Nagorni-Karabaj. En otros casos se verificaba el desmembramiento abierto de viejas unidades político-administrativas, bien ilustrado por la situación en Moldavia, en donde dos porciones de su territorio —la república del Transdniestr y la de los gagauzes— se habían declarado independientes. Mientras, en las repúblicas de cultura islámica, los candidatos de los viejos partidos comunistas locales —éstos habían modificado con anterioridad sus nombres— arrasaban en sucesivas consultas electorales: Mutalíbov se imponía en Azerbaiyán a principios de septiembre, Nazarbáev en Kazajstán el 1 de diciembre y Karímov en Uzbekistán a finales de año. El propio Akáev, más alejado del PCUS y de sus aparatos, triunfaba con claridad en las elecciones kirguizes del 12 de octubre.

Fueron, sin embargo, y como es sabido, los resultados de las elecciones presidenciales y del referéndum de autodeterminación celebrados el 1 de diciembre de 1991 en Ucrania los que le imprimieron una deriva inesperada a los acontecimientos. En el curso de los meses anteriores el presidente ucraniano, Kravchuk, había jugado cartas diversas. En los últimos días de agosto, por lo pronto, no había ocultado sus temores —algo de esto ya lo hemos apuntado— ante la configuración de un emergente y amenazador centro «ruso». Sus movimientos de entonces parecían reforzar, en esa línea, el proyecto de un centro «independiente». Con el paso de las semanas, las suspicacias de los dirigentes ucranianos alcanzaron, sin embargo, a este último, abanderado por un Gorbachov empeñado en confundir «autodeterminación» con «descentralización» y poco proclive a aceptar que incluso su «estado confederal» reclamaba, en buena ley, la independencia previa de las partes invitadas a constituirlo. La reacción ucraniana, componendas internas aparte, exhibía visos innegables de racionalidad: los recelos con respecto a la reconstrucción de un poder central parecían plenamente justificados, como lo estaba la voluntad de llevar a los hechos una descentralización que en los años anteriores había sido una mera

añagaza propagandística. Ucrania se desmarcaba del nutrido grupo de repúblicas que con posterioridad a los acontecimientos de agosto habían asumido la vía de una independencia puramente formal.

La negativa de las autoridades ucranianas a firmar, a la postre, el Tratado de la Unión hizo que viera la luz una decisión que acaso estaba preparada de manera subterránea: la FR anunció su intención de mantenerse al margen del Tratado si Ucrania hacía lo propio. Sin que mediara ninguna discusión parlamentaria previa, el 8 de diciembre los presidentes de las tres repúblicas eslavas —la FR, Ucrania y Bielorrusia— firmaron en Minsk un acuerdo que creaba la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Tras abrirse un rápido proceso de adhesiones, la constitución de la CEI fue ratificada en Almá Atá el día 21, por un total de once repúblicas (todas las de la vieja Unión excepto las tres del Báltico y Georgia; esta última se sumó a la CEI en el otoño de 1993).

El gran perdedor del proceso que nos ocupa fue el presidente Gorbachov quien, rechazado ostensiblemente su proyecto de Unión, acabó por dimitir el día 25. Con su retirada política adquirían plena carta de naturaleza muchas de las consecuencias, aplazadas durante unos meses, de la «revolución de agosto». La diferencia fundamental entre la nueva Comunidad y la Unión preconizada por Gorbachov no era otra que el hecho de que la primera reconocía expresamente la independencia y soberanía de las partes suscribientes. En una primera aproximación, por otra parte, la Comunidad naciente parecía rechazar la perspectiva de aparición de un nuevo centro, fueran cuales fueran los perfiles que éste estuviera llamado a adoptar. Claro es que en Minsk y en Almá Atá poco más se había hecho notar que un acopio de voluntades plasmado en declaraciones programáticas inequívocamente cargadas de retórica. Para el futuro quedaba la tarea más dura: la de perfilar de manera concreta qué debía ser la CEI o, lo que es lo mismo, la de tomar partido por uno u otro modelo de «centro».

Los efectos externos

En el plano de las relaciones internacionales, la «revolución de agosto» no hizo sino ratificar muchas de las tendencias que ya se habían manifestado en los años anteriores. En este campo las sorpresas fueron, pues, menores, en la medida en que en los hechos —y en particular con ocasión de la crisis del Golfo— ya se habían diluido muchos de los rasgos que conferían originalidad al sistema soviético.

Es obligado recordar, con todo, que al amparo de lo sucedido en agosto dos procesos experimentaron una notoria aceleración. El primero fue la retirada de las unidades militares soviéticas presentes en distintas partes del globo. En paralelo, y en un segundo impulso, los pocos países del Tercer Mundo que dependían estrechamente de la ayuda de la URSS se vieron obligados a asumir la realidad de una drástica reducción de aquélla. La adaptación se vio facilitada, sin duda, por un hecho: la reducción de las ayudas no era precisamente nueva. La situación de Cuba y, en menor medida, la de Vietnam nada tenía de halagüeña, y otro tanto se podía decir —a menudo se olvida— de la del gobierno afgano: sólo las divisiones en la guerrilla opositora retrasaban la caída del régimen de Kabul. Aunque los entornos eran distintos, los acontecimientos de agosto también estaban llamados a ejercer un efecto de contención sobre eventuales tentaciones de asalto burocrático en lugares —ante todo Rumania y Bulgaria— en los que aquél todavía era imaginable.

En un ámbito más general, el reforzamiento de las posiciones de las Estados Unidos fue evidente. A este respecto era significativo que ni siquiera en los momentos más críticos los EE UU pareciesen perder en el envite. En la incertidumbre creada por el golpe no faltaron voces que subrayaban que cierta «marcialización» de la vida soviética no podía por menos que redundar en beneficio de unos capitales exteriores llamados entonces a desprenderse de miedos y cautelas: los propios responsables de la acción se ocuparon de llamar

la atención sobre las ventajas que debían derivarse del nuevo régimen de orden. Fracasada la tentativa, los EE UU experimentaron de nuevo un reforzamiento de sus posiciones de la mano de la figura ascendente del momento: Yeltsin.

Que los Estados Unidos saliesen beneficiados en todos los escenarios no quiere decir, naturalmente, que no tuviesen que tomar decisiones. En las jornadas siguientes al golpe, la política norteamericana fue ambigua en lo que se refiere a las personas —y acaso a los proyectos— que merecían apoyo. Como es fácil comprender, las opciones eran dos: Gorbachov o Yeltsin. El provisional respaldo norteamericano a la figura de Gorbachov puede interpretarse, de cualquier forma, de muy diversas maneras: como un intento de evitar rupturas traumáticas, como un apoyo —que a nadie debe sorprender— a un proyecto subterráneamente neoburocrático o, en un sentido distinto, como un visto bueno al seguidismo inicialmente exhibido por el presidente soviético con respecto a las exigencias de Yeltsin. Aunque no había que albergar dudas en lo que al futuro se refiere —los EE UU apoyarían el designio político que allanase el camino a los centros capitalistas—, con carácter provisional Gorbachov era acaso un mejor candidato que un Yeltsin que, entre otras cosas, no disponía de un aparato represivo consolidado en que sustentar los programas que preconizaba. A finales de 1991 ciertas dosis de orden burocrático podían venirle como anillo al dedo a los intereses de los capitales exteriores.

El devenir de los acontecimientos no parecía, en cambio, tan positivo para la Comunidad Europea (CE). Al amparo de la «revolución de agosto» —otro tanto había sucedido en la Europa central y oriental a finales de 1989— se hicieron notar nuevos acosos a la ya de por sí precaria cohesión comunitaria. Con toda evidencia Alemania, dispuesta a reconstruir viejos emporios, miraba ya entonces hacia el este, donde se disponía a colocar capitales materiales y humanos. Los países marginales dentro de la CE se veían obligados a tomar nota, entre tanto, de un futuro en el que la

homologación comunitaria de sus economías perdía terreno en beneficio de otros intereses. La propia desestructuración económica de la Europa central y oriental facilitaba la manifestación de poderosísimas tendencias centrífugas en la mitad occidental del continente. La desaparición del CAEM había alterado muchos de las flujos económicos tradicionales en la Europa central y oriental y había creado las condiciones para una rápida, y de nuevo salvaje, aparición de los capitales occidentales; este proceso parecía llamado a repetirse de la mano de una nueva alteración en los flujos económicos, esta vez en el seno de lo que todavía era la URSS.

En este marco nadie hablaba en serio de un nuevo plan Marshall: todos sabían que eran los intereses privados —y no las políticas solidarias que eventualmente podían encarar organizaciones gubernamentales y no gubernamentales— los que se imponían en todos los lugares. La inocente alegría con que algunos medios de comunicación recibieron la noticia de la creación de un fondo de ayuda a la URSS por parte del Banco Mundial —conducta que, por lo que parece, carecía de antecedentes— apenas permitió que se reparase en la cuantía de los recursos con que ese fondo fue dotado: hubo quien, sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de que los treinta millones de dólares concedidos equivalían al precio de un par de desahogadas mansiones en Beverly Hills. Aunque las ayudas occidentales eran dramáticamente mezquinas, no debemos dejar en el olvido que el Tercer Mundo —en situación más precaria que la de la Europa central y oriental— recibía aún menos recursos y debía prepararse para tomar nota de nuevos recortes en los programas de asistencia del mundo opulento.

El papel mundial de la efímera Unión nacida a principios de septiembre de 1991 no podía ser, entre tanto, más liviano. Bien es cierto que en los meses anteriores se habían acumulado ya los datos para concluir que la URSS había desaparecido como agente internacional independiente. La guerra del Golfo demostró, en particular, su absoluta falta de voluntad

en lo que respecta a la asunción de una política propia o, lo que es lo mismo, su dramático plegamiento a los intereses de los Estados Unidos. La ratificación de esa condición de marginalidad de la URSS no era precisamente una buena noticia en lo que se refiere a la búsqueda de soluciones «honradas» al sinfín de conflictos que jalonaban el Tercer Mundo. Si el proyecto neoburocrático imperante en la URSS durante un lustro no fue capaz de desplegar una política exterior independiente, era fácil imaginar el horizonte abierto al amparo del acatamiento de las imposiciones norteamericanas que se anunciaba con el ascenso de Yeltsin y con la ratificación de la miseria occidentalizante que rodeaba al propio Gorbachov. El futuro de la Unión que nacía, y que duró cuatro meses, era el mismo que el de la Unión que murió con la «revolución de agosto»: la instalación en la periferia del sistema capitalista mundial, en un escenario de abierta «tercermundización» de todas las relaciones. Aunque esta estación final es deplorable, nada sería peor que dejarse llevar por la nostalgia de un pasado configurado en torno a bloques, guerras frías y magras distensiones.

BIBLIOGRAFÍA

Sobre el golpe de 1991, y junto con el relato de Mijaíl Gorbachov, *El golpe de agosto* (B, Barcelona, 1991), pueden consultarse Giulietto Chiesa, *Cronaca del golpe rosso* (Baldini & Castoldi, Milán, 1991); Ulysse Gosset y Vladimir Fédorovski, *Histoire secrète d'un coup d'Etat* (JCLattès, París, 1991); Konstantin Kobets, *La vie quotidienne à Moscou pendant le putsch* (Hachette, París, 1991); Rafael Poch, *Tres días de agosto* (La Vanguardia, Barcelona, 1991); Angus Roxburgh, *The second Russian revolution: the struggle for power in the Kremlin* (BBC, Londres, 1991); Gerd Ruge, *Der Putsch: Vier Tage, die Welt veranderten* (Fischer, Frankfurt, 1991); Martin Sixsmith, *Moscow coup: the death of the Soviet system* (Simon & Schuster, Londres, 1991), y VV AA, *Avgust-91* (Politizdat, Moscú, 1991).

Es muy abundante la bibliografía sobre la «cuestión nacional» y sus efectos en la etapa de *perestroika*. Mencionemos al respecto los textos de Françoise Barry y Michèle Kuhn, «Les avatars du Traité de l'Union», monográfico de *le courrier des pays de l'Est* (nº 361, 1991); Roberte Berton-Hogge, *La lutte pour le pouvoir en URSS: de la «parade des souverainetés» à la chute de l'empire* (La documentation française, París, 1991); Hélène Carrère d'Encausse, *La gloire des nations* (Fayard, París, 1990); Gregory Gleason, *Federalism and nationalism: the struggle for republican rights in the USSR* (Westview, Boulder, 1990); Oleg Glebov y John Crowfoot (dirs.), *The Soviet empire: its nations speak out* (Harwood, Londres, 1989); Stephen Kux, *Soviet federalism: a comparative perspective* (Westview, Boulder, 1990); Gail W. Lapidus, Victor Zaslavsky y Philip Goldman (dirs.), *From union to commonwealth: nationalism and separatism in the Soviet republics* (Cambridge University, Cambridge, 1992); Michel Lesage, *La crise du fédéralisme soviétique* (La documentation française, París, 1990); Alexander J. Motyl, *Sovietology, Rationality, Nationality* (Columbia University, Nueva York, 1990) y *Thinking theoretically about Soviet nationalities* (Oxford University, Oxford, 1992); Alexander J. Motyl (dir.), *The post-Soviet nations* (Columbia University, Nueva York, 1992); Vicent Partal, *Els nacionalistes a l'URSS* (El Llamp, Barcelona, 1988) y *La revolta nacionalista a l'URSS* (Eliseu Climent, Valencia, 1991); Charles Urjewicz, *La crise des nationalités en URSS* (La documentation française, París, 1989) y *L'«URSS» des indépendances* (La documentation française, París, 1991); Victor Zaslavsky, *Dopo l'Unione Sovietica* (Il Mulino, Bolonia, 1991), y los monográficos «Nació i nacionalismes a l'Europa central i oriental», en *Afers* (nº 14, 1992),

«Cela s'appelait l'URSS, et après...», en *Hérodote* (nº 64, 1992), y «Naciones y estados en el Este», en *Cuadernos del Este* (nº 11, 1994).

Por lo que se refiere a las distintas áreas de conflictos nacionales —excluyendo ahora a la Federación Rusa, de la que nos ocuparemos en el capítulo siguiente—, en los últimos años se han publicado, en primer lugar, bastantes monografías sobre las repúblicas del Báltico. Mencionemos los libros de Pilar Casanova, *La rebelión de las repúblicas bálticas de la URSS* (Asesa, Barcelona, 1991); Pietro U. Dini, *L'anello baltico* (Marietti, Génova, 1991); John Hiden y Patrick Salmon, *The Baltic nations and Europe* (Longman, Londres, 1991); Pascal Lorot, *La réveil balte* (Hachette, París, 1991) y *Les pays baltes* (PUF, París, 1991); Yves Plasseraud (dir.), *Pays Baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie* (Autrement, París, 1991), y Romuald Misiunas y Rein Taagepera, *The Baltic states. Years of dependence, 1940-1990* (Hurst, Londres, 1993). Sobre Estonia puede consultarse el libro de Toivo Raun, *Estonia and the Estonians* (Hoover, Stanford, 1991). Más nutrida es la bibliografía sobre Lituania: citemos los textos de Jordi Bañeres y Marc Leprêtre, *Lituània, dels inicis a la tercera independència* (El Llamp, Barcelona, 1990); Alfred Erich Senn, *Lithuania awakening* (University of California, Berkeley, 1990), y Gueorguii Efrémov, *Mi liudi drug drugu. Litva. Budni svobodi, 1988-1989* (Progress, Moscú, 1990).

Introducciones históricas sobre Ucrania son los libros de Arkady Joukovsky, *Histoire de l'Ukraine* (Dauphin, París, 1993), y Orest Subtelny, *Ukraine. A history* (University of Toronto, Toronto, 1993). Una publicación local reciente, reflejo de muchas insuficiencias de información, es el libro de Ivan Kripyakevich, *Istoriya Ukraini* (Svit, Lvov, 1992). Sobre lo ocurrido en los últimos años pueden consultarse David Marples, *Ukraine under perestroika* (St. Martin's, Nueva York, 1991); Alexander J. Motyl, *Dilemmas of independence. Ukraine after totalitarianism* (Council on Foreign Relations, Nueva York, 1993); Bohdan Nahaylo, *The new Ukraine* (RIIA, Londres, 1992); Leonid Pliuch, *Ukraine: à nous l'Europe* (Rocher, Mónaco, 1993), y Roman Solchanyk, *Ukraine: from Chernobil to sovereignity* (Macmillan, Basingstoke, 1992). De la situación económica se ocupan I.S. Koropeckyj (dir.), *The Ukrainian economy* (Harvard University, Harvard, 1992), y Enrique Palazuelos, *Ucrania* (ICEX, Madrid, 1994) y «Ukraina, Belarus y Moldova», en Fernando Luengo (dir.), *Europa del Este: ¿transición o crisis?* (IEO, Madrid, 1993). Al margen del último muy escasos son, en cambio, los estudios sobre Bielorrusia y Moldavia; mencionemos las obras de Bruno Drweski, *La Biélorussie* (PUF, París, 1993), y Nicholas Dima, *From Moldavia to Moldova* (East European Monographs, Boulder, 1991).

Por lo que a las repúblicas del Cáucaso se refiere, la bibliografía

sobre Armenia es muy abundante. Citemos los trabajos de Jean-Pierre Alem, *L'Arménie* (PUF, París, 1983); Patrick Donabedian y Claude Mutafian, *Artsakh, histoire du Karabagh* (Sevig, París, 1991); Ronald Grigor Suny, *Looking toward Ararat. Armenia in modern history* (Indiana University, Bloomington, 1993); Gerard J. Libaridian (dir.), *Armenia at the crossroads* (Blue Crane, Watertown, 1991); Davis Marshall y Christopher J. Walker, *The Armenians* (Minority Rights Group, Londres, 1987); Pierre Verluise, *Arménie. La fracture* (Stock, París, 1989), y Christopher J. Walker (dir.), *Armenia and Karabagh* (Minority Rights Group, Londres, 1991). Sobre Georgia pueden consultarse Jonathan Aves, *Path to national independence in Georgia, 1987-90* (School of Slavonic and East European Studies, Londres, 1991); S. y N. Guguchvili, y D. y O. Zurabichvili, *La Géorgie* (PUF, París, 1983); Roger Rosen, *Introduction to the Georgian republic* (Odyssey, Hong Kong, 1991), y Ronald Grigor Suny, *The making of the Georgian nation* (I.B. Tauris, Londres, 1989). Un trabajo conjunto sobre las dos repúblicas más occidentales del Cáucaso es el de Stephen Brook, *Claws of the crab. Georgia & Armenia in crisis* (Picador, Londres, 1993). Sobre Azerbaiyán puede leerse con provecho la monografía de Audrey L. Altstadt, *The azerbaijani turks* (Hoover, Stanford, 1992). Un estado de la cuestión económica se encontrará en Enrique Palazuelos, «Las repúblicas de la Transcaucasia», en Fernando Luengo (dir.), *Europa del Este: ¿transición o crisis?* (IEO, Madrid, 1993).

En los últimos años han aparecido muchos textos sobre la vieja Asia central soviética. Citemos entre ellos los libros de Elizabeth E. Bacon, *Central Asians under Russian rule* (Cornell University, Ithaca, 1990); Alexandre Bennigsen y Chantal Lemercier, *Le soufi et le commissaire* (Seuil, París, 1986); Giovanni Bensi, *Allah contro Gorbaciov* (Luigi Reverdito, Gardolo, 1988); Dale F. Eickelman (dir.), *Russia's Muslim frontiers* (Indiana University, Bloomington, 1993); William Fierman, *Soviet Central Asia. The failed transformation* (Westview, Boulder, 1991); Vincent Fourniau, *Histoire de l'Asie centrale* (PUF, París, 1994); Robert A. Lewis (dir.), *Geographic perspectives on Soviet Central Asia* (Routledge, Londres, 1992); Vincent Monteuil, *Les musulmans soviétiques* (Seuil, París, 1982); Boris Z. Rumer, *Soviet Central Asia: «a tragic experiment»* (Unwin Hyman, Boston, 1989); Michael Rywkin, *Moscow's Muslim challenge* (M.E. Sharpe, Armonk, 1990); Jean Sellier y André Sellier, *Atlas des peuples d'Orient* (La découverte, París, 1993); Ahmed Tajeri, *Crescent in a red sky* (Hutchinson, Londres, 1989) e *Islam-URSS: la révolte de l'Islam en URSS* (Tsuru, París, 1991); Giles Whittell, *Central Asia* (Cadogan, Londres, 1993), y el monográfico «Des ethnies aux nations en Asie centrale», en *Revue du monde musulman et de la Méditerranée* (nº 59-60, 1992). Un análisis de la situación económica más

reciente se realiza en Enrique Palazuelos, «Las repúblicas asiáticas», en Fernando Luengo (dir.), *Europa del Este: ¿transición o crisis?* (IEO, Madrid, 1993). Monografías sobre grupos étnicos específicos son las de Martha Brill Olcott, *The kazakhs* (Hoover, Stanford, 1987); Edward A. Allworth, *The modern uzbeks* (Hoover, Stanford, 1990), y James Critchlow, *Nationalism in Uzbekistan* (Westview, Boulder, 1992). Un estudio sobre la situación de la mujer en Uzbekistán se incluye en el libro de Valentina Bodrova y Richard Anker, *Las mujeres trabajadoras en los países socialistas* (Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1991).

Un texto general sobre las «etnias minoritarias» es el de John Russell y otros, *Soviet Minorities* (The Minority Rights Group, Londres, 1991). Sobre los judíos pueden consultarse Edith Coron, *La dernier exode: les juifs soviétiques en Israël* (François Bourin, París, 1993); Martin Gilbert, *Los judíos en la URSS* (La semana, Jerusalén, 1978), y Thomas E. Sawyer, *The Jewish minority in the Soviet Union* (Westview, Boulder, 1979). Por otras minorías se interesan Alan W. Fisher, *The Crimean tatars* (Hoover, Stanford, 1987); Ann Sheehy y Bohdan Nahaylo, *The Crimean Tatars, Volga Germans and Meskhetians* (The Minority Rights Group, Londres, 1980); Azade-Ayze Rorlich, *The Volga Tatars* (Hoover, Stanford, 1986); James Forsyth, *A history of the peoples of Siberia* (Cambridge University, Cambridge, 1992), y Nikolai Vajtin, *Native peoples of the Russian far north* (The Minority Rights Group, Londres, 1992).

LA FEDERACIÓN RUSA COMO ESTADO INDEPENDIENTE

Las primeras negociaciones entre las repúblicas constitutivas de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), a principios de 1992, pusieron de manifiesto dificultades y discordias mayores que las que a primera vista eran augurables. Sobre el papel, lo que esas desavenencias ilustraban era la manifestación de recelos sin cuento en lo que respecta a la reaparición, por contenidos que fuesen sus perfiles, de un nuevo centro. Es verdad que, en ausencia de acuerdos que dibujasen transformaciones sustanciales en las formas de relación, por momentos parecía como si —no sin paradoja— el viejo centro resurgiera por doquier: la inercia mantenía en vigor, siquiera sólo fuera de forma cadavérica, muchos de los procesos de decisión característicos del orden burocrático que se negaba a morir. Su presencia e influencia se hacían sentir también a través de la configuración «espontánea» de nuevos núcleos de poder que, en las repúblicas recién independizadas, parecían heredar muchos de los hábitos despóticos del centro moscovita.

En origen la CEI presentaba, de cualquier modo, un rasgo que no debe escapar a nuestra atención. De su mano adquiría un primitivo grado de institucionalización el predominio de las tres repúblicas eslavas que, promotoras iniciales del proyecto, acaso aspiraban a ratificar lo que con rasgos más nebulosos ya habían sido en el pasado: un Primer Mundo dispuesto a sacarle partido a su condición de tal y a preservar una relación casi colonial con los territorios más pobres de la

ahora se limitaban a adquirir consistencia legal o semilegal. No hay que olvidar, de cualquier modo, que en el área que nos ocupa apenas se hacía valer la búsqueda de proyectos conjuntos entre las repúblicas. Con problemas fronterizos y conflictos étnicos de cierta entidad, los esfuerzos de construcción de un «mercado común», como el que se planeaba en las jornadas anteriores al golpe de agosto, no parecían prosperar. Claro es que la conciencia de un renovado «colonialismo» eslavo puede propiciar, en el futuro, el reflotamiento, con mayor consistencia, de esos proyectos.

Otro de los efectos, el más aparatoso, de la nueva situación era un rebrote del nacionalismo ruso, entre cuyas consecuencias previsibles se hallaba la de enconar las ya de por sí delicadas relaciones con otras repúblicas. La existencia, en todas ellas, de significativas bolsas de población foránea se sumaba a los problemas de trazado de fronteras, en buena parte legados por caprichosas decisiones adoptadas en los años veinte y treinta. Piénsese que son del orden de 25 millones los rusos que residen fuera de la Federación, y que más de cuarenta millones de no rusos viven lejos de las repúblicas o territorios que son formalmente los suyos.

Aunque entre los propósitos iniciales de la CEI se contaba resolver el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, lo cierto es que las tensiones no dejaron de crecer. Estas tensiones eran un obstáculo importantísimo, por cierto, para la consolidación del proyecto de hegemonía eslava que antes mencionábamos. Mal haríamos en pensar, con todo, que los principales problemas que estaban, y están, sobre la mesa en la nueva Comunidad eran los que dirimían las repúblicas federadas que constituían la vieja Unión. Y mal haríamos porque un horizonte bien imaginable era el de una ruptura en la cohesión interna de esas mismas repúblicas: en casi todas ellas se escuchaban demandas de autodeterminación y secesión formuladas por unidades político-administrativas de rango inferior. Este horizonte de rupturas internas resultaba particularmente notorio en el seno de la FR, un complejo y artificial

entramado étnico en el que era menester distinguir dos entidades que sólo de manera parcial se solapaban: mientras Rusia es un país europeo con fronteras que se extienden desde el confín con Bielorrusia y las repúblicas bálticas hasta los Urales, y desde el Ártico hasta las llanuras ucranianas y el mar Negro, el resto de la Federación es el producto de la mezcla entre los colonizadores que fueron llegando a tierras asiáticas desde el siglo XVIII y los pueblos que moraban en ellas. Lejos del territorio europeo de la Federación —habría que añadir algunas regiones adyacentes allende los Urales—, la presencia de Rusia y de su mitología nacional se reduce sensiblemente.

Así las cosas, muchas de las tensiones y amenazas que se hacían notar en la Unión Soviética siguieron manifestándose en el interior de las repúblicas recién independizadas. En la FR como en Ucrania, en Moldavia como en el Báltico, reaparecieron, en particular, algunas de las estratagemas urdidas por Gorbachov, quien, por cierto, hubo de aguardar a finales de agosto de 1991 para denunciar la militarizada anexión del Báltico. Quienes en los últimos años de la URSS se enfrentaron a un sinfín de despropósitos parecían empeñados en reproducirlos. Si para Gorbachov la apertura de un proceso de secesión reclamaba el apoyo de dos tercios de la población censada en un territorio, Yeltsin declaró en su momento su intención de elevar el porcentaje nada menos que a un 90% cuando se hizo notar el deseo de los alemanes del Volga de conformar, no ya una república independiente, sino una simple unidad política autónoma dentro de la FR. La reacción del parlamento ruso ante las demandas de autodeterminación que llegaban de Tatarstán, de Yakutia o de Chechenia recordaba de forma inequívoca a la exhibida en más de una ocasión por el Soviet Supremo de la vieja Unión.

Lo mismo sucedía en Ucrania, donde la espoleta de muchas tensiones se llamaba Crimea. Esta, habitada por tártaros que en 1944 fueron víctimas de un masivo destierro, y posteriormente con una mayoría de población rusa, había

sido gentilmente regalada a Ucrania en 1954 en virtud de una caprichosa decisión de Jrushchov. Las autoridades ucranianas repetían las monsergas que unos meses antes se blandían en su contra: como quiera que Crimea carecía de Constitución, su destino debía plegarse a lo establecido por las leyes ucranianas, no precisamente liberales en estas materias. La hipocresía alcanzó nuevas cotas cuando desde Kíev se sugirió que el referéndum del 1 de diciembre de 1991 —en él Crimea respaldó la independencia ucraniana— zanjaba la cuestión y cerraba el camino a una nueva consulta popular. El argumento esgrimido era el mismo utilizado por Gorbachov unos meses antes, cuando, con la abierta contestación de Ucrania, se empeñaba en subrayar que un referéndum anterior, el del 17 de marzo de 1991, hacía evidente la voluntad de las repúblicas en lo que se refiere a la preservación de la Unión.

El tono de la política de las autoridades ucranianas lo daba la ley que, desde el otoño de 1991, castigaba con penas de hasta tres años de prisión y 10.000 rublos de multa la «propaganda separatista». Claro que hablando de leyes eran las de ciudadanía, que estaban cobrando forma en el Báltico, las que se llevaban la palma en cuanto al conculcamiento de derechos básicos. En Estonia el texto legal en cuestión, que no era singularmente draconiano en su propósito general —para obtener la nacionalidad estoniana era suficiente haber residido dos años en el país y demostrar un conocimiento aceptable de su lengua—, incorporaba una desgraciada artimaña: al establecer un período de doce meses en cuyo transcurso debían examinarse las demandas de la población foránea, privaba a ésta temporalmente de todos sus derechos políticos en un momento en que se iban a celebrar —se celebraron— unas elecciones generales (hecho el mal, la ley fue retirada, al menos provisionalmente, en 1993).

Las cosas así, hay que poner el dedo en la llaga de algunas sangrantes contradicciones. Si artificiales eran los mecanismos que habían modelado la Unión Soviética, artificiales

eran también los que conformaban cada una de las nuevas repúblicas. La irracionalidad hipercontroladora de la vieja Unión reaparecía una y otra vez con el rostro de nuevos centralismos que, en espacios geográficos más contenidos, no por ello dejaban de reproducir las aberraciones de antaño. Qué no decir, en fin, cuando los nuevos poderes daban por buenas violaciones sin cuento de derechos básicos o ponían manos a la tarea de alentar el crecimiento de máquinas de represión y de guerra. Sintomático es, en suma, que los mismos que rechazaban los cambios en el interior de sus repúblicas se encargasen de promoverlos allende sus fronteras. No otra cosa era lo que hacían esos nacionalistas rusos que, mientras invocaban legitimidades y constituciones para cortarle las alas a tártaros y chechenos, apoyaban sin rebozo a la república del Transdniestr, que sus compatriotas rusos habían tenido a bien desgajar de Moldavia.

Más allá de las contingencias anteriores hay que convenir que la CEI en modo alguno solucionaba los ingentes problemas económicos y sociales que atenazaban a todas las repúblicas. Antes bien, se trataba de una instancia fantasmagórica: bajo su cobertura no se había abierto camino ninguna estructura política común, los acuerdos económicos se ajustaban a un esquema estrictamente bilateral, y el propio mando militar conjunto había de pasar a mejor vida en la primavera de 1993. Los conflictos armados que jalonaban la realidad de muchos de los estados miembros obligaban a concluir, en fin, que ni siquiera tenía visos de hacerse valer el magro objetivo que para la Comunidad había fijado en su momento el a la sazón presidente ucraniano, Kravchuk: garantizar la desaparición pacífica, y ajustada a reglas, de la Unión Soviética. Al margen de todo lo anterior, y además del Primer y del Tercer Mundo que se adivinaban en el entramado de la CEI, un poder absorbente e intervencionista se hacía notar —repitámoslo una vez más— con vigor: Rusia. La hiperespecialización productiva del pasado planteaba ahora ingentes problemas de reestructuración económica

BIBLIOTECA DE RELACIONES INTERNACIONALES E.U.

que colocaban delante de la CEI una gigantesca tarea en un momento en que el caos crecía al amparo de la pervivencia de la lógica burocrática, del ascenso de un capitalismo de perfiles salvajes y de una visible voluntad de utilizar con agresividad las bazas en poder de cada cual.

Yeltsin en los altares

Aunque con el fracaso del golpe de agosto de 1991 la política de Gorbachov entró en una crisis irremediable, dejados atrás los primeros y convulsos momentos las cosas parecieron menos claras y el renacimiento subterráneo de lo viejo se hizo notar de forma inesperada. El sustituto formal de Gorbachov en muchos terrenos, Yeltsin, llamado a subvertir todas las reglas, recuperaba una parte del supuestamente mortecino pulso burocrático.

Ya hemos apuntado que a menudo reaparece en Yeltsin un rostro que en realidad nunca le fue ajeno: el del dócil *apparatchik* que ascendió uno a uno los peldaños del poder en la ciénaga brezhneviana. Convertido en un héroe popular tras su éxito electoral de marzo de 1989, muchos de sus comportamientos lo han convertido en un émulo del propio Gorbachov. Formados en la misma escuela, uno y otro han competido en lo que a modos autoritarios y caprichos personalistas se refiere. Una voz que merece crédito en Occidente, la de Aleksandr Yákovlev, ha llamado la atención sobre la reconstrucción de algo que se asemeja mucho a un sistema de partido único, con restricciones sin cuento para los medios de comunicación y un generalizado desprecio por las leyes.[1] Los propios medios de prensa «reformistas» se han visto en la obligación de criticar a los gobernantes que habían contribuido a aupar. De la mano de figuras como la de Yeltsin o las de los alcaldes de Moscú y San Petersburgo

[1] Tass (2 de diciembre de 1991).

cobraba vigor un régimen autoritario con dos sustentos ideológicos: un «anticomunismo» visceral y un nacionalismo ruso de perfiles cada vez más chauvinistas. En las palabras de Nikolai Travkin, el dirigente del Partido Democrático de Rusia, «hemos desmantelado algo repugnante, pero hasta el momento nada bueno hemos edificado en su lugar».[2]

Muchos comentarios sobre la política de Yeltsin han cambiado visiblemente de rumbo, y parecen empeñados en subrayar uno de sus designios: reconstruir miméticamente las viejas estructuras y los hábitos burocráticos del PCUS, y cortar de raíz, así, el incipiente multipartidismo. El supuesto deseo de reducir las posibilidades de sabotaje de las reformas todavía en manos de muchos poderes locales hizo que el gobierno ruso desarrollase una verticalísima estructura de poder: era a su presidente, y no a la población a través de las urnas, a quien correspondía designar a los responsables de las administraciones regionales, que a su vez nombraban a los directores de los cuerpos ejecutivos de rango inferior. La fidelidad se convertía así en un elemento decisivo, muy por encima de apoyos populares o competencias profesionales. A más de uno le vino a la memoria, claro, el régimen de comisariados políticos creado por Trotski en los años veinte.

El diario *Komsomólskaya pravda* apuntaba en el otoño de 1991 que la estructura de poder en la FR recordaba punto por punto a la que el Comité Central y el Politburó del PCUS habían desarrollado en la plaza Vieja de Moscú. El Consejo de Estado de la Federación no era sino un remedo de un fenecido Comité Central cuyos miembros «disfrutaban de poderes plenipotenciarios pero no arrostraban responsabilidad alguna».[3] Con semejantes liberalidades, el respeto por la ley brillaba por su ausencia. En un país en el que el gobierno

[2] Cit. en Julia Wishnevsky, «Russia: liberal media critizice democrats in power», en *RFE/RL Research Report* (vol. 1, nº 2, 10 de enero de 1992), pág. 7.

[3] *Komsomólskaya pravda* (11 de octubre de 1991).

por decreto se había convertido en la norma, apenas podía sorprender que medidas como la ilegalización del PCUS, la confiscación de su patrimonio o la precipitada constitución de la CEI no fuesen objeto de las pertinentes discusiones parlamentarias.

Pero no eran éstas todas las prácticas del viejo orden que permanecían incólumes. Pese a las promesas de abolición, el sistema de permisos que restringía la posibilidad de residir en las grandes ciudades fue ratificado en octubre de 1991 por los ayuntamientos de Moscú y San Petersburgo. Seguían siendo realidad, entre tanto, las tiendas y las clínicas especiales: a sus beneficiarios de siempre se agregaban los nuevos dirigentes políticos y los delincuentes económicos de las nuevas hornadas. Había quien opinaba que el deseo de preservar privilegios de todo tipo había contribuido a frenar la privatización jurídica de establecimientos en los que se había verificado ya una privatización económica de los beneficios.

Qué no decir, en fin, de las políticas que los nuevos dirigentes empezaban a desarrollar en relación con los medios de comunicación. Los amigables consejos impartidos por quien hasta abril de 1992 fue primer viceministro de la FR, Guennadii Búrbulis, le recordaron a más de un director de periódico las prácticas propias de los funcionarios del Comité Central del PCUS. El alcalde petersburgués, Sobchak, mostró varias veces su indignación ante lo que estimaba eran ataques injustificados de la prensa. Atrás habían quedado las promesas de transparencia realizadas por Yeltsin: las políticas oficiales parecían preservadas por un halo de secretos. No faltaban los datos que identificaban canales particulares de difusión de información, en los que la disponibilidad de divisas fuertes era la mejor garantía para obtener exclusivas y entrevistas. En el horizonte se dibujaba, en suma, una ley que establecía que al amparo de la instauración de un estado de emergencia todos los medios de comunicación se verían obligados a difundir los comunicados oficiales.

Aunque, las cosas así, era difícil no identificar el renacimiento de un sinfín de viejas prácticas en una figura en la que muchos habían apreciado una indomable voluntad de ruptura, el provisional rasgo definitorio de Yeltsin era el hecho de que todas las interpretaciones resultaban posibles a la hora de dar cuenta de su comportamiento. Por lo pronto, era inevitable que viésemos en el presidente la consumación de muchos de los arrebatos autoritarios que se hacían sentir en una sociedad en plena convulsión. Ahí estaban, si no, el omnipresente gobierno por medio de decretos, el desprecio que suscitaba un poder legislativo independiente o la «zhirinovskización» que parecía impregnar muchas de las políticas oficiales. Junto a esta figura prepotente e incontrolada despuntaba, sin embargo, una realidad poco adaptada a sus características: su autoritarismo apenas encontraba cauces para abrirse camino. La quiebra de todas las estructuras había hecho del presidente ruso un gobernante palaciego que a duras penas conseguía plasmar en hechos sus decretos. El desorden neuronal que atenazaba a Yeltsin tenía mucho que ver con una fría verdad: había sido la general extensión del caos, y no el efecto esperable de las políticas reformadoras, lo que había acabado por erosionar el poder burocrático.

Hay quien ha afirmado también, no sin ingenio, que en Yeltsin recobraron aliento las dos «disidencias históricas» que se hicieron sentir en el orden soviético: la contestación de la burocracia de Lev Trotski y la defensa valerosa de derechos y libertades de Andrei Sájarov. Claro es que, imágenes y literatura aparte, el presidente ruso se ha prestado también a componendas y medias tintas. Si por un lado no le ha hecho ascos —lo hemos apuntado varias veces— a ese gran designio gorbachoviano que era el reciclaje de la burocracia más modernizante, por el otro tampoco ha perdido el tiempo en molestos formalismos. Yeltsin gusta poco de controles, cuando no contempla con recelo los «excesos» en la libertad de expresión o se adhiere sin cautelas a la idea de que una economía débil no puede permitirse un sindicalismo

fuerte. Nada inclinado, pese a las favorabilísimas condiciones, a dotarse de un partido que, a la postre, limitaría muchos de sus impulsos, ha preferido, en fin, la reyerta perpetua con sus subordinados.

La densa niebla que rodea toda la política económica de la FR ha impedido, por lo demás, alumbrar conclusiones sobre los objetivos de Yeltsin en este terreno. Confiado tal vez en que su carisma elimine todos los obstáculos y en que un capitalismo sin control levante mágicamente el país, quien en el viejo orden se labró un innegable prestigio como gestor ha mostrado después ingenuidad y precipitación. Así lo ha testimoniado al menos una liberalización de los precios —a ella volveremos— que tenía más que ver con los manuales académicos que con una reflexión cruda sobre los hechos. No ha faltado quien, de nuevo, ha visto en alguno de los movimientos del presidente un renacimiento del ambiguo juego desplegado por Gorbachov en los años anteriores. Razones sobrarían para ello, tanto más cuanto que Yeltsin se ha avenido a jugar dos cartas opuestas. La primera no era otra que la que conducía a idolatrar el mercado y a reclamar, en consecuencia, una inmediata reducción de las engrosadas prerrogativas de los aparatos estatales. La segunda era la que, en sentido contrario, impulsaba a convertir a la FR en el núcleo de un nuevo imperio que se disponía a reforzar centrales mecanismos de control, disuasión y represión.

Las propias querencias nacionales de Yeltsin se han visto inmersas, también, en una densa niebla. Baste con recordar que, cuando, antes del golpe de agosto, se imponía una discusión sobre la naturaleza y las consecuencias del Tratado de la Unión, Yeltsin hizo todo lo que estuvo en su mano para impedir que el parlamento de la FR discutiera un texto aprobado en las alturas. La solidaridad que en más de una ocasión demostró para con las demandas que llegaban de la periferia no se hizo notar, en cambio, cuando lo que se hallaba de por medio eran las reivindicaciones de calmucos, yakutios o tártaros, en la propia FR. Sobran los datos, por lo demás,

que incitan a reconsiderar la figura de Yeltsin a la luz de un nacionalismo ruso que aflora por momentos. Su lenguaje, cada vez más duro y victimista, ha entrado en abierta competición con la demagogia zhirinovskiana. Su aparente docilidad en el escenario internacional bien puede abrir el camino, en suma, a un esfuerzo menos tranquilizador para los intereses de la única superpotencia que resta en el planeta: el de un renacimiento nacional ruso con marcados ribetes militaristas.

Un capitalismo hipersalvaje

En la FR se hacen notar, desde hace varios años, fenómenos tan lamentables como la universalización de la especulación y de la usura, la conversión de la economía sumergida en el único terreno en que las transacciones económicas son posibles y la desaparición de los «colchones» sociales. A todo ello se ha agregado un dato decisivo: mientras que en otros lugares las formas salvajes de capitalismo han podido servir —seamos magnánimos al respecto, siquiera sea en beneficio de la comparación— para dejar atrás situaciones críticas o para encarar con algún vigor una acumulación posterior, en la FR, como en el resto de la vieja Unión Soviética, no se ha hecho valer elemento alguno que dibuje algo más que la perpetuación del caos y de las escisiones sociales.

Las peculiarísimas condiciones estructurales del viejo orden burocrático y de su crisis nos sitúan ante problemas tan arduos como el de la identificación de la naturaleza del «orden» sustitutorio: acaso el sistema provisionalmente triunfante remite a fórmulas de desestructuración social cuyos contenidos y consecuencias nos son desconocidos. Sean como sean las cosas, la incapacidad para detener el crecimiento del déficit público y de la inflación, la ineficacia de los planes económicos desplegados, las reducciones —cada vez mayores— experimentadas por los niveles de producción, el deterioro de la situación de la mayoría de las gentes y la dificultad para delimitar territorialmente los espacios económicos dibujan un panorama extremadamente sombrío para el futuro.

A lo largo de 1992, y mientras el descrédito de la política desplegada por el gobierno ruso no dejaba de crecer, fueron muchos los conciudadanos de Yeltsin que recordaron las palabras de éste poco antes, cuando anunció que se arrojaría delante de un tren en el mismo momento en que una liberalización de los precios colocase a una parte de la población en la indigencia más absoluta. Las subidas que se verificaron a partir del 2 de enero de 1992 —al amparo de la «terapia de choque» auspiciada por el equipo de Gaidar— tuvieron, sin embargo, los efectos esperables. Los ingresos salariales resultaron ser cada vez menos importantes, y mayor la tentación de ganarse la vida al margen de los cauces oficiales. Los ahorros se evaporaron de la noche a la mañana, mientras la mayoría de los rusos se lanzaba a una tan frenética como estéril búsqueda de divisas. Como quiera que los establecimientos comerciales seguían dependiendo por completo de los suministros estatales, ningún «mercado» hizo su aparición. El dramático, y paralelo, proceso de concentración de la riqueza en unas pocas manos no se vio acompañado, por lo demás, de inversión alguna. La certificación de que el caos ganaba terreno se convirtió en un estímulo adicional, en fin, para un gigantesco proceso de evasión de capitales.

La crisis afectó de manera sensible al ciudadano de a pie, quien ya en 1991 había visto cómo su poder adquisitivo experimentaba una dramática reducción, de un 58%, en comparación con 1990 y al que, de la mano de formidables subidas de precios, se le auguraban nuevas mermas en su capacidad adquisitiva. Al margen de lo anterior, el paro adquirió cierta extensión, sin que las nuevas fórmulas de actividad económica alcanzasen un desarrollo significativo; la destrucción de puestos de trabajo afectaba fundamentalmente a las empresas estatales y a las cooperativas agrícolas. Los meca-

nismos de registro y de compensación al servicio de los desempleados parecían desarrollarse con extrema lentitud, y ello pese a las necesidades acuciantes de una población en la que se contaba cerca de un millón de personas sin hogar.

La mayoría de los rusos, lejos de los privilegios de los que alardeaban por igual una *nomenklatura* todavía floreciente y los nuevos delincuentes económicos, pasaban sus horas buscando lo que sólo encontraban a precios prohibitivos: alimentos y fármacos. La carestía de unos y otros era particularmente notable en las grandes ciudades. Dos hechos hacían que la situación no alcanzase, sin embargo, una gravedad extrema. Por un lado, la costumbre de deambular por las calles en busca de víveres y medicamentos no era nueva, y el ejercicio de adaptación no resultaba difícil. Por el otro, la vivienda, los combustibles y el transporte seguían disfrutando de generosas subvenciones estatales. Incapacitados para ejercer presión alguna o para integrarse, siquiera marginalmente, en los nuevos y lucrativos circuitos económicos, los ancianos eran las víctimas señeras de la política gubernamental. Su ya precaria capacidad adquisitiva se había reducido de forma drástica, y en el horizonte no se adivinaban medidas sociales de compensación. Nadie hablaba, por ejemplo, de la creación de «comedores populares» que hiciesen más llevadera la situación de un *lumpenproletariat* cada vez más numeroso. La incipiente resistencia obrera bastante tenía con abrirse camino, tanto más cuanto que los responsables gubernamentales parecían mirar con malos ojos la aparición, inevitable, de un sindicalismo independiente y resistente.

El otro gran núcleo de la política económica de Yeltsin, las privatizaciones, suscitaba escepticismos e indignaciones en una población que observaba, atónita, cómo los previsibles beneficiarios no eran sino los mismos que se enriquecían con las subidas de precios. Más allá de la retórica, nadie parecía tomar en serio la perspectiva de que los pequeños negocios fuesen dirigidos por los trabajadores que los habían

regentado desde siempre. En muchos casos la privatización prevista conducía a una subasta pública, y no era difícil adivinar quienes ganarían, de nuevo, en la puja: la *nomenklatura*, buena conocedora de lo que había que comprar, las fortunas recientes y, en su caso, los capitales extranjeros.

La introducción de estas medidas se produjo, además, en un escenario en el que nada invitaba al optimismo. Sólo una amarga superstición, que ocultaba intereses inconfesables, invitaba a pensar que la situación estaba llamada a mejorar. Rotos muchos de los flujos económicos entre las repúblicas, estaban haciendo su aparición nuevos poderes en la forma de gigantescas empresas que condenaban a una inevitable dependencia al resto de la economía. Mientras la producción no dejaba de reducirse —un 17% en 1991, un 20% en 1992, un 16% en 1993—, aumentaba el número de empresas que cerraban sus puertas. El aparato fabril apenas contaba con recursos de inversión que garantizasen el funcionamiento futuro de muchas instalaciones, con lo que era de prever un descenso todavía más dramático en los niveles de producción. El descenso tenía que alcanzar también, por lógica, a los bienes —petróleo, gas, oro y maquinaria— que el conjunto de la CEI, y de manera más precisa la FR, seguía exportando; los eventuales incrementos en los niveles de exportación de armas sólo ofrecían, entre tanto, una compensación marginal. El crecimiento del desempleo, y de los subsidios correspondientes, era un elemento más de aceleración de una inflación estimulada por la aparición de nuevas monedas nacionales (los rublos «locales» revertían hacia la FR).

La ayuda humanitaria que, con cuentagotas, llegaba del exterior no era objeto, entre tanto, de un reparto gratuito y selectivo, como sería de rigor. Alimentos y fármacos no estaban precisamente en los anaqueles de los pocos establecimientos que todavía mantenían los viejos precios estatales: mercancía de especulación, en muchos casos se apreciaba en su distribución la mano negra de viejas y nuevas mafias,

que no desaprovechaban ocasión alguna de enriquecerse. A principios de 1992, los medios de comunicación daban cuenta de una más de las modalidades de negocio: los medicamentos que el estado importaba a precios internacionales y a continuación subvencionaba para que pudiesen ser adquiridos por el grueso de la población eran recapturados «a precios políticos», antes de su puesta en venta efectiva, por grupos privados que los recolocaban, a precios internacionales, fuera del país. El estado subvencionaba, pues, los cuantiosos beneficios de esos grupos, y la población no veía en modo alguno suavizada su patética situación. Mientras, parecía como si Occidente siguiese empeñado en ratificar el equívoco de siempre: su ayuda, que no se anunciaba ni cuantiosa ni generosa, se supeditaba a la puesta en práctica de un sinfín de reformas que acaso reclamaban, para ganar consistencia, de esa misma ayuda que se negaba.

En este juego había un olvidado vencedor, bien que provisional: el viejo orden. Su pervivencia, aunque muchas veces simbólica, tal vez deba inducir a pensar que la vertiginosidad de los cambios sólo podía explicarse porque éstos eran más epidérmicos de lo que una primera lectura daba a entender: por voluntad expresa de los agentes o por la inercia irrefrenable de los procesos, parecía como si muchos de los elementos del viejo orden rebrotasen por doquier. Pensemos, si no, que en ausencia de un régimen claro de relaciones entre las repúblicas recién independizadas, muchos de los antiguos mecanismos de decisión —antes lo hemos dicho— permanecían en pie. Hay quien apreció un mero traspaso de mastodontes burocráticos desde la vieja Unión a una FR que, durante decenios desprovista de un aparato administrativo propio, poco más estaría haciendo que conferirle una apariencia de legalidad rupturista a las mismas instituciones del pasado. No parece que Yeltsin haya mostrado, por su parte, una voluntad descentralizadora mayor que la exhibida por Gorbachov con anterioridad. En un escenario semejante tampoco puede sorprender que la *nomenklatura*, reconvertida o

no, conservase privilegios sin cuento. No hay, en suma, ámbito alguno de la vida de la nueva comunidad de estados en el que no sea posible rastrear la presencia, en ocasiones esplendorosa, de lo viejo.

La situación económica de la mayor parte de las repúblicas integrantes de la CEI remite, así las cosas, a una complejísima síntesis de «burocracia» y «capitalismo». En el «núcleo» de los sistemas económicos, el estado sigue siendo, pese a todo, protagonista indisputado; allí la planificación burocrática pervive, siquiera sea de forma fantasmagórica. Lejos de ese núcleo, en una «periferia» en franca expansión, los elementos genuinamente capitalistas campan por sus respetos. Es en esa periferia en donde se hace sentir un capitalismo hipersalvaje que ha dejado en precario las opiniones de quienes, ilusos, sostenían que en la Europa central y oriental estaba ganando terreno una «economía social de mercado». La deriva de los acontecimientos aconseja ser cautelosos, sin embargo, con respecto a la idoneidad de la terminología topográfica —«centro» y «periferia»— que acabamos de utilizar: es fácil que al cabo de un tiempo nos veamos obligados a intercambiar las posiciones de esos segmentos económicos. Esa perspectiva alguna relación guarda con dos hechos de innegable relieve. El primero es la varias veces mencionada reconversión mercantil de la *nomenklatura* de otrora. El perfil sociológico de los capitalistas salvajes del momento no apunta, como acaso parece, a grupos emergentes sin conexión con el viejo orden: entre ellos se cuenta una plétora de significados representantes de este último, y.en particular de sus capas más tecnocratizadas. El segundo hecho no es sino la connivencia estatal con el orden económico naciente: sin ella no podría explicarse su formidable expansión de estas horas.

Aunque las apariencias indiquen lo contrario, muchos de estos procesos remiten a una conclusión inesperada: el designio de fondo de Gorbachov —esa reconversión mercantil de la *nomenklatura* que tantas veces no ha ocupado— se abre

camino, en Rusia como en otros estados, bien que en condiciones diferentes de las imaginadas por el último presidente soviético: los sectores más tecnocratizados de la burocracia han encontrado un activo competidor en los empresarios salvajes de las últimas hornadas. Esta lucha, en la que menudean los acuerdos, tiene un eco evidente en la disputa que, en la FR y a lo largo de los últimos años, se ha hecho notar entre los programas económicos de los equipos de Gaidar y del primer ministro Chernomirdin: si el primero ha apostado por reformas duras e inmediatas, y se ha alineado de manera genérica con los intereses de los nuevos empresarios, el segundo ha hecho lo que estaba en su mano para alcanzar una moratoria en la aplicación de muchas medidas, en la confianza de que ello permitiría un reciclaje más plácido a los burócratas reconvertidos.

Los medios de comunicación

Pocos registros mejores de la deriva reciente de nuestras sociedades hay que el que ofrece la televisión, reflejo inequívoco de las miserias, las pretensiones y los traumas de un mundo que las más de las veces se nos escapa cuando buscamos penetrarlo de la mano de la letra impresa.

La convulsión del momento ha dejado su huella en unos medios de comunicación, los rusos, sometidos a poderosas turbulencias desde agosto de 1991. Algunas de éstas han sido, ciertamente, venturosas. Es el caso, en particular, de la transparencia y libertad exhibidas por algunas publicaciones en las que han encontrado sustento prolijas denuncias de la corrupción que se extendía por doquier. Aunque esa frescura en la información no ha faltado por completo en los canales de televisión, hay que convenir que en éstos los controles y las cautelas han sido mucho mayores: en la programación apenas ha quedado espacio para otra cosa que para una abstrusa mezcolanza en la que han cobrado cuerpo dos grandes

impulsos. Por un lado, la revitalización de un pasado cargado de imaginería religiosa; por el otro, el más desenfrenado hechizo por algunas de las más deleznables muestras de la «cultura» occidental.

Quienes durante décadas se vieron coartados en sus aproximaciones a la religión están de enhorabuena. En los últimos años todos los canales de televisión al alcance de los moscovitas se han ocupado de transmitir interminables ceremonias religiosas. La frialdad, no siempre austera, de los rituales de la burocracia ha dejado paso a los oropeles de popes e inciensos, en los que han sido muchos más quienes han visto la reconciliación con un pasado cercenado que quienes han depositado una fe y unas creencias renacidas.

Aunque el folklore en todas sus manifestaciones haya seguido siendo un plato fuerte en los programas de televisión, ha padecido el visible acoso de mucho de lo que venía de fuera. Los desfiles de moda —rudimentarios en su concepción, al decir de los expertos— han reemplazado con ventaja a las danzas populares, mientras otra mercancía internacional, el esoterismo, ganaba terreno por momentos. Pero nada de lo anterior revolvía tanto los estómagos como la certificación de que, al igual que en tantos lugares del Tercer Mundo, la orgía de riqueza y de consumo que los norteamericanos gustan de retratar en algunos de sus productos televisivos estaba ya, en imagen, en las casas de la mayoría de los rusos. La navidad ortodoxa de 1992 se vio reconfortada en las pantallas con la retransmisión de un pagano desfile desde las cálidas avenidas de Disneyworld, un paraíso abigarrado en las antípodas de una Moscú colmada entonces de tiendas vacías y precios prohibitivos. Qué no decir, en fin, de esas interminables series rodadas en descomunales mansiones en las afueras de Dallas o de Houston. Son muchos los rusos que en sus imágenes han identificado el bienestar y la belleza comunes entre las sencillas gentes de un Occidente en el que no existen harapientos y ancianos abandonados. Sus certezas al respecto se han visto reforzadas con la confir-

mación de que incluso en la Latinoamérica productora de culebrones las paredes están bien encaladas, nada falta en las mesas y los protagonistas, ellas y ellos, rebosan de atractivo. Esta colonización a través de los símbolos, mucho más rápida y, mientras no se demuestre lo contrario, mucho más efectiva que la desplegada por el Fondo Monetario Internacional y sus tentáculos, alcanza a los propios programas informativos. En enero de 1992, las imágenes y los textos de la CNN eran tan literalmente reproducidos como profusamente utilizados para explicarle a moscovitas y petersburguenses lo que pasaba en Palestina, El Salvador o Filipinas. Su fulgor deslumbrante empequeñecía, entre tanto, el esfuerzo —no precisamente sobrehumano, es verdad— de los guionistas de un sinfín de programas que daban rienda suelta a los sueños de emprendedores jóvenes hechizados por el mercado y sus elixires.

Eternas perdedoras

La mitología oficial que cobró cuerpo tras la revolución de Octubre identificaba una inequívoca resolución de todos los problemas que hacía inútiles, cuando no sospechosas de «desviacionismo burgués», aquellas luchas que se ocupaban de una causa particularizada. Obligadas a ocultar sentimientos y frustraciones, las mujeres se convirtieron en los más acabados receptáculos de ese «realismo socialista» que en la jerga de la época fue etiquetado como un «embellecimiento» de la realidad. En una sociedad en la que la inocua soltería —y en general lo que no propiciaba el matrimonio y la procreación— se consideraba un estigma lacerante, no es difícil imaginar la respuesta oficial frente a horrorosos «vicios antisociales» como el lesbianismo. Un extremo oscurantismo se abría camino, entre tanto, de la mano de la reaparición de ideas y prácticas supuestamente agostadas y sólo a duras penas contestadas por minorías tan conscientes como reprimidas.

«Nuestro oscurantismo tiene su origen en el puritanismo ortodoxo de antes de la revolución, reforzado por medio siglo de hipocresía socialista y mutismo impulsado desde arriba».[4]

Pocas aproximaciones a la naturaleza del sistema soviético —un sistema que creía haber abolido desigualdades y discriminaciones— son tan provechosas como la que toma a la mujer como protagonista. Ya hemos mencionado una conocida argumentación de Engels, quien estimaba que dos grandes cambios debían verificarse para que con ellos cobrase alas una efectiva emancipación de la mujer: la imbricación en la producción y la socialización del trabajo doméstico. De ellos, sólo el primero —la URSS exhibía la más alta tasa planetaria de participación femenina en el trabajo— adquirió consistencia, propiciando lo que no era sino una doble jornada laboral. También recordamos que la masiva presencia de la mujer en el trabajo no se realizó en las condiciones de igualdad que serían de esperar: a medida que se ascendía en la pirámide laboral, la representación femenina se iba diluyendo, al tiempo que las mujeres se veían obligadas a realizar las tareas más rutinarias, disfrutaban de menores posibilidades de promoción y debían contentarse con salarios más bajos. El incumplimiento de muchas de las normas legales no era ajeno a esta situación, que tenía un estrecho paralelismo en lo que ocurría en otro terreno, el político, en el que la presencia de la mujer era, en todos los niveles, significativamente escasa.

Aparte lo anterior, algunas de las peculiaridades del sistema soviético hicieron notar su efecto de degradación sobre la condición de la mayoría de las mujeres. Piénsese, si no, en las ingentes cantidades de tiempo que era menester dedicar a

[4] Declaración de una de las mujeres interrogadas por Francine du Plessix Gray en *Femmes soviétiques. Les oubliées de la perestroïka* (Presses de la renaissance, París, 1990), pág. 96; el libro es la versión francesa del original inglés, *Soviet women talking the tightrope.*

la búsqueda de bienes de consumo, en la escasez y baja calidad de los electrodomésticos, en los efectos que sobre la vida familiar tuvo la extensión del consumo de alcohol, en la precariedad de un sistema de guarderías en el que eran varios millones los niños que se encontraban en listas de espera o en la ruina de una sanidad pública incapaz de satisfacer las necesidades más imperiosas («nuestras maternidades son nuestros mejores anticonceptivos: pocas son las mujeres que están dispuestas a afrontar una segunda vez esa prueba»[5]). Los problemas de escasez, calidad y ausencia de información eran particularmente notables en lo que respecta al uso de anticonceptivos. Aunque según una estimación de finales de los ochenta éstos eran utilizados por un 18% de las mujeres —un porcentaje significativamente bajo—, el empleo de procedimientos «seguros» sólo parecía al alcance de un 5% de la población femenina. Como es fácil imaginar, el efecto principal de esta anómala situación era una dramática extensión del aborto.

Semejante situación guardaba más de una relación con el visible giro que experimentaron muchas de las políticas oficiales en los años sesenta y setenta. La temprana manifestación de algunos signos inequívocos de la crisis —descenso alarmante en las tasas de natalidad, incremento inédito en las de mortalidad infantil, extensión del divorcio— provocó una rápida inclinación de las políticas oficiales en beneficio de la institución familiar y en abierto rechazo de la trasnochada mitología revolucionaria que subrayaba la inexistencia de otra familia al margen de la constituida por el Partido y el estado. Así, a una trágica competición natalista —el título de «madre heroína de la Unión Soviética» se obtenía una vez se habían colocado en el mundo diez vástagos— se sumaba la revitalización de una imagen de la mujer, femenina y defensora de la tradición, muy similar a la reivindicada por estamentos inequívocamente reaccionarios.

[5] Du Plessix Gray, *op. cit.*, pág. 39.

Esta pesada herencia se hace notar hoy por todas partes, cuando nuevos problemas llaman a la puerta. Las mujeres se cuentan entre las primeras víctimas de una política de reconversión industrial y acoso al subempleo que apenas acierta a disimular sus propósitos ratificadores de la división de papeles entre los sexos. Todas las previsiones señalan que el «ejército de reserva» de desempleados en proceso de configuración se nutrirá fundamentalmente de mujeres. No parece, entre tanto, que los servicios públicos estén ganando en calidad. Muchas políticas oficiales ponen el énfasis, una vez más, en el reforzamiento de la familia, tarea nada difícil si se toman en consideración los notorios obstáculos con que se enfrenta —problemas de abastecimiento de bienes y de escasez de viviendas, por ejemplo— cualquier perspectiva de atomización de aquélla. En paralelo, sin embargo, la prostitución y la pornografía no dejan de ganar terreno en una sociedad en la que un sinfín de mecanismos incita a admirar la belleza, la ausencia de inhibiciones y la vitalidad de una mujer, la occidental, de contornos irreales.

En un marco como éste, apenas se hace oír un discurso feminista contestatario. Si en muchas ocasiones las reivindicaciones de los movimientos «feministas» muestran perfiles opuestos a los habituales en Occidente, no faltan tampoco los movimientos que se hacen eco de muchas de las opiniones, unas veces simplemente puritanas, otras abiertamente reaccionarias, defendidas en los viejos círculos de la disidencia y el exilio. De forma subterránea ha cobrado fuerza la idea de que el trabajo femenino es la causa de todos los males: alcoholismo y delincuencia, absentismo y bajo rendimiento laboral, divorcio y descenso en las tasas de natalidad. Una interpretación de perfiles parcialmente diferentes, aunque no por ello menos sesgada, surge de la mano de la extendida presunción de que allí donde las energías de la mujer no se canalizan a través de las tareas colectivas reaparecen tendencias —ociosidad, consumismo...— peligrosas para el estado y la sociedad. No sin cierta paradoja, y a manera de ampliación de

alguna de las argumentaciones anteriores, la *glásnost* permitió, en suma, la manifestación de muchos prejuicios sexistas denigradores de la «mujer liberada». Du Plessix Gray ofrece buenos ejemplos de cómo los medios de comunicación solían acusar de todos los males a las mujeres «demasiado emancipadas», con la reivindicación consiguiente de una restauración del supuesto papel que corresponde a cada sexo.[6]

Durante la *perestroika*, pero también después, la respuesta oficial a todos estos problemas fue tan insuficiente en la teoría como equívoca en la práctica. Parecía como si la urgencia del momento fuese estimular la función maternal al tiempo que se le quitaba importancia a la dimensión productivo-laboral. Aunque en su momento se anunció el propósito de resucitar los soviets de mujeres y de alentar una mayor presencia de éstas en las tareas públicas, uno y otro objetivo reclamaban mayores compromisos. Los ecos del XXVII Congreso del PCUS, celebrado en 1986, parecen tan lejanos como vacías las presunciones enunciadas por un Gorbachov entonces lleno de certezas: «El socialismo emancipó a las mujeres de la opresión económica y social, garantizándoles la posibilidad de trabajar, obtener una educación y participar en la vida pública con una condición igual a la del varón. La familia socialista se basa en la plena igualdad entre varón y mujer, y en su misma responsabilidad».[7] Hoy, como tantas veces, las mujeres parecen condenadas a seguir siendo las grandes perdedoras. Claro es que su derrota será, una vez más, la de toda una sociedad que dice aspirar a una mayor justicia y una mayor libertad. No en vano, y en las lúcidas palabras de Fourier, «el grado de emancipación femenina es la medida natural del grado de emancipación general».[8]

[6] Du Plessix Gray, *op. cit.*, pág. 241.

[7] Discurso ante el XXVII Congreso del PCUS. Véanse *Materiali XXVII sezda Kommunisticheskoi Partii Sovetskogo Soyuza* (Politicheskoi literaturi, Moscú, 1986).

[8] Véanse los textos contenidos en *Le nouveau monde amoureux* (Anthropos, París, 1967).

El conflictivo otoño de 1993

La crisis política que se abrió camino en la FR en septiembre-octubre de 1993 tenía su origen en la configuración de dos legitimidades en el convulso período postrero de la *perestroika*. En 1990 había cobrado cuerpo, en condiciones semidemocráticas, un parlamento que, si en más de un sentido pagaba su tributo al viejo orden, no por ello era un nido de ultramontanos: en sus escaños se hacían notar las posiciones políticas más dispares. En junio de 1991, y al cabo de unas elecciones genéricamente libres, Yeltsin fue elegido, por su parte, presidente de la FR. A menudo se olvida que en las cruciales jornadas de agosto de 1991, el parlamento respaldó abiertamente al presidente. Yeltsin no tenía a la sazón ningún interés en disolver un parlamento que lo apoyaba y del que acaso esperaba no iba a ejercer mayor oposición en el futuro.

Sin embargo, el presidente se equivocaba: varios hechos suscitaron la oposición del grueso del parlamento. En primer lugar, la «terapia de choque» desplegada en 1992 por el equipo de Gaidar provocó un inevitable descontento. En segundo término, empezaron a acumularse los datos que remitían a un creciente autoritarismo en la figura de un presidente que no deseaba ver limitados, en forma alguna, sus poderes. En tercer término, muchos diputados, sabedores de su precaria situación, pujaron con claridad por preservar, contra viento y marea, sus puestos, en peligro en la eventualidad de unas elecciones libres. Más allá de los datos anteriores, tanto el presidente como la cúpula del parlamento habían realizado un sinfín de concesiones a muchos de los poderes republicanos, en lo que no podía sino acrecentar la confusión, los juegos subterráneos y las promesas incumplidas.

En un escenario como éste, uno de los grandes mitos que se hizo valer fue el del compromiso de Yeltsin con la democracia. Ningún dato sólido, sin embargo, lo avalaba. El hecho de haber sido elegido por la población en modo

alguno era una carta blanca para que el presidente actuase fuera de control. Yeltsin dio pasos muy claros encaminados a una irracional concentración del poder, no asumió ningún tipo de aproximación a quienes, dentro y fuera de las instancias parlamentarias, hubieran podido propiciar un acercamiento entre el ejecutivo y el legislativo, y —ya lo señalamos— renunció, en los hechos, a dotarse de una fuerza política de apoyo, que habría supuesto cierta limitación en su ejercicio del poder. Quienes pensaban que Yeltsin cogió por los cuernos el toro del parlamento para acabar de una vez por todas con una instancia no democrática se equivocaban: las relaciones del presidente con un parlamento democrático —el elegido el 12 de diciembre de 1993— no son menos conflictivas que las que se hicieron valer antes del golpe yeltsiniano de septiembre.

Una vez más se ponían de manifiesto los singulares rasgos de la figura de Yeltsin: quienes únicamente apreciaban en él un abierto compromiso con la occidentalización de la FR olvidaban aspectos cruciales de su comportamiento, como los relativos a su evidente instalación en los hábitos del viejo orden burocrático. Por lo que al parlamento disuelto se refiere, aunque no era una instancia democrática, tampoco era —ya lo hemos señalado— un mero reducto del viejo orden y sus aberraciones. Elegido en condiciones semidemocráticas, entre sus miembros se contaba el propio Yeltsin. Quienes encabezaron la «oposición parlamentaria» al presidente —Rutskoi y Jasbulátov— habían sido en el pasado, por otra parte, estrechos colaboradores de aquél. El enfrentamiento con Yeltsin había ocasionado, con todo, un escoramiento en las posiciones de la cúpula parlamentaria, de tal suerte que ésta se había radicalizado y a menudo lo había hecho en la forma de comportamientos poco o nada democráticos. La política de Yeltsin contribuía, de cualquier modo, a que el grueso del parlamento cerrase filas contra él. Y es obligado convenir que alguna racionalidad había en esa reacción: muchos diputados intuían que la agresividad del

presidente no obedecía a su firme creencia en el carácter no democrático del principal órgano legislativo, y sí a su voluntad de apartar cualquier tipo de oposición.

Sólo quienes gustan de simplificar las cosas aciertan a identificar, por lo demás, proyectos manifiestamente distintos entre las partes —Yeltsin y la cúpula del parlamento— en colisión. En buena medida las rencillas obedecían, muy al contrario, a una simple y obscena disputa por el poder adobada de malquerencias personales. Las distintas figuras políticas implicadas pusieron de manifiesto en repetidas ocasiones, en fin, la extrema intercambiabilidad de sus comportamientos. Por lo que se refiere a Yeltsin, lo poco que se puede decir es que, pese a todas las apariencias, carecía de un discurso «ideológico» que lo identificase: Yeltsin se apuntaba a todo aquello que intuía le permitía preservar un poder incontrolado. Del otro lado, y pese a algunas ingenuas lecturas, la cúpula del parlamento nada tenía que ver con un proyecto en el que la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad desempeñasen algún papel. Ya hemos avanzado que el grueso de sus movimientos se explicaba en virtud de una mezquina lucha por el poder. Los Rutskoi y los Jasbulátov parecieron llegar a la conclusión de que notables dosis de demagogia social incorporadas a un discurso nacionalista agresivo configuraban un interesante mensaje. Si lo anterior no era en modo alguno ajeno al comportamiento del propio Yeltsin, tampoco lo era la evidente aproximación que la cúpula del parlamento acabó por mostrar hacia los intereses de las capas dominantes en el viejo sistema soviético. En el discurso de esa cúpula la población era poco más que carne de cañón que, en su visible degradación económica, proporcionaba interesantes añagazas políticas.

En los hechos, el comportamiento de Yeltsin en las dos últimas semanas de septiembre de 1993 fue, como en tantas otras ocasiones, impresentable. Pocas veces una figura política en apuros ha tenido a su alcance un remedio tan sencillo para hacer frente a una crisis agudísima. Quienes piensan

que, dado lo ocurrido en la tarde-noche del domingo 3 de octubre —los disturbios callejeros en diferentes lugares de Moscú—, era inevitable que Yeltsin hiciese uso de la fuerza olvidan, dramáticamente, los antecedentes de la crisis. Y olvidan, en particular, que no sólo el parlamento, sino también el grueso de los dirigentes «regionales» y muchos de los propios asesores y partidarios de Yeltsin aceptaban de buen grado la convocatoria de elecciones generales y presidenciales simultáneas, algo que hubiera desbloqueado la crisis. Una ojeada a lo que en esos días escribieron los comentaristas políticos en Moscú refleja bien a las claras que una inmensa mayoría de las gentes convenía en que no había motivos para que las tensiones se ahondasen.

Por eso sonaban inequívocamente huecas las argumentaciones que, sin cautela alguna, apuntaban que Yeltsin no tenía otro remedio que no dudar allí donde dudaron los golpistas de agosto de 1991 (ante el mismo parlamento, por cierto, que entonces defendía con coraje democracias y libertades). Las decisiones adoptadas por el presidente el 4 de octubre —con el bombardeo del parlamento a la cabeza— sentaban, además, un pésimo antecedente. La nula voluntad negociadora y el decidido empleo de las fuerzas armadas en tareas de represión dibujaban, por añadidura, un panorama tétrico para la normalización de la vida política. Por lo demás, y al igual que sucedió en agosto de 1991, el comportamiento de las fuerzas armadas en la crisis rusa —véase al respecto el capítulo siguiente— se vio sometido a encendidos debates. Pese a la contundencia final de la acción militar, parece que en la tarde-noche del 3 de octubre se hicieron sentir fisuras en la relación entre el presidente y las fuerzas armadas. Entonces, y ante los desórdenes callejeros, Yeltsin hubo de recabar en varias ocasiones el concurso de unas fuerzas armadas que mostraron abiertas reticencias con respecto a su intervención. El hecho de que, al cabo, el presidente consiguiese poner en marcha algunas unidades militares puede explicarse, acaso, por el peso de la inercia y de la

cadena natural de mando. Pero remite también a la circunstancia de que, aunque muchos miembros de las fuerzas armadas estaban llamados, por lógica, a recelar de Yeltsin y de su mundo, el presidente ruso había movido con innegable sabiduría sus peones en los meses anteriores. Al propiciar una reconversión a un nacionalismo ruso cada vez más pujante y al sentar, mal que bien, los cimientos de una nueva potencia militar sobre las cenizas de la vieja URSS, Yeltsin había asumido en plenitud el discurso que probablemente estaban llamados a defender sus rivales en el parlamento. Bien es verdad que unos meses después, en diciembre, buena parte de los miembros de las fuerzas armadas parecieron darle su voto al Partido Liberal Democrático de Zhirinovskii: cuando el discurso nacionalista personificado por Yeltsin se vio superado por otro de tonos más radicales, muchos militares cambiaron sus adhesiones.

En otro plano, las relaciones de Yeltsin con las repúblicas y las regiones que integran la FR han sido muy complejas. En su reyerta con el parlamento, el presidente —un hipercentralista por biología— acabó por asumir algunas medidas descentralizadoras (otro tanto habían hecho los no menos centralistas dirigentes del parlamento). Con el paso del tiempo no parece que Yeltsin se haya mostrado, sin embargo, muy propicio a mantener sus promesas, más atraído por la perspectiva de una simple eliminación de los poderes contestatarios, en beneficio de algo que, una vez más, bien puede parecerse espectralmente al sistema soviético. Esto es lo que anunciaba, por cierto, la Constitución yeltsiniana, en la que, en su voluntad de uniformizar las prerrogativas de las diferentes unidades territoriales —repúblicas, regiones...—, el presidente optaba por rebajar las correspondientes a las de mayor rango.

Así las cosas, no debe sorprender que las repúblicas, en particular, desconfíen metódicamente del «centro» y que en todos los casos se planteen reivindicaciones de «autonomía» económica —en los hechos ésta ha cobrado cuerpo aun

sin el visto bueno del poder central— que en algunos se hacen acompañar de discursos nacionalistas más forjados. De por medio ha crecido la desconfianza de los poderes republicanos hacia un «centro» en el que no es difícil adivinar la pervivencia de viejos criterios monopolizadores de las decisiones. Por eso son, por fuerza, muchos los datos que auguran para el futuro una rebelión en la periferia.

Las elecciones de diciembre de 1993

El 12 de diciembre de 1993, en fin, las elecciones y el referéndum celebrados en Rusia alumbraron dos grandes conclusiones. Por un lado, y dada la escasa limpieza del proceso, la doble consulta no acabó con la ya larga disputa sobre la legitimidad de las instituciones políticas. Por el otro, se dibujaban evidentes hendiduras en un proyecto, el yeltsiniano, que parecía haber tocado techo. No se olvide que Yeltsin pudo dictar, a capricho y sin cortapisas, todas las reglas de juego. Semanas antes de las elecciones, uno de los cabezas de lista, Arkadii Volskii, subrayaba que la comunidad internacional se equivocaba al enviar sus observadores el mismo día 12: los resultados electorales se gestaban con anterioridad, durante una campaña preñada de arbitrariedades.[9] La exclusión de candidaturas, la prohibición de mensajes disonantes, el anuncio postrero de halagüeñas subidas en las pensiones y la profusión de amenazas y admoniciones estuvieron a la orden del día. Por encima de todo, en ese escenario despuntó, con luz propia, el autocrático procedimiento de elaboración y ratificación de la Constitución. La televisión oficial fue el conducto de muchas de esas arbitrariedades, visiblemente inclinada en provecho de la yeltsiniana «Opción de Rusia». En las páginas de *Izvéstiya*, nada sospechosas de animosidad con respecto a Yeltsin y su mundo,

[9] Televisión de Ostánkino (3 de noviembre de 1993).

Mijaíl Kozhújov rememoraba la reaparición del servilismo y la ampulosidad de la televisión soviética en el tratamiento dispensado por la televisión oficial al congreso fundacional de «Opción de Rusia».[10]

A lo anterior se agregaban otros datos que remitían al singular entorno de la vida política rusa. Casi todos los partidos y coaliciones, de recentísima creación, eran poco conocidos. Los programas, entre tanto, exhibían sospechosas similitudes y seguían pesando mucho más los *personajes*. Quienes aducían que esto no era sino un disculpable mal menor, olvidaban que las figuras políticas del momento no se caracterizaban precisamente por la claridad de sus mensajes, y sí por su propensión a los corrimientos ideológicos. Baste con recordar al respecto la deriva de personajes como Shajrai, Chernomirdin, Shumeiko o Yavlinskii. La singularidad de un escenario en el que eran muchos los partidos con vocación «atrapalotodo» tenía, por otra parte, sus reflejos. El neoliberal Gaidar exhibía con descaro una preocupación social que nadie le imaginaba, cuando no apostaba por un abrupto proteccionismo. El citado Volskii, representante señero de la reconversión mercantil de la *nomenklatura*, no tenía reparos en defender, pese a todo, el mercado más duro, mientras Yavlinskii, otrora claramente fondomonetarizado, le hacía guiños a una política exterior más bien hostil al occidentalismo imperante en la retórica oficial.

Si se apuesta por la ingenuidad se pueden cargar en la rúbrica del «entorno» otras singularidades. No parece, sin embargo, de recibo que se invitase a la población a refrendar una Constitución en la que se determinaban los cometidos del parlamento que debía elegirse en el transcurso de la misma votación; nadie sabía, por añadidura, qué es lo que sucedería en caso de que la Constitución no fuese refrendada. Alguna semejanza con lo anterior guardaba el hecho de que Gaidar, el candidato *in pectore* de Yeltsin, se permi-

[10] *Izvéstiya* (23 de octubre de 1993).

tiese anunciar una eventual disolución del nuevo parlamento en caso de que éste no respondiese, en su configuración, a las expectativas creadas. Dada la enorme concentración de poderes en la persona de Yeltsin —quien, por cierto, no estaba obligado a modificar el gobierno—, era improbable, sin embargo, que tal medida se mostrase necesaria.

El segundo gran mensaje de las elecciones —el genérico varapalo recibido por la opción yeltsiniana— remitía a una pobreza más: el grueso de las fuerzas políticas apenas hizo otra cosa que alinearse con respecto a Yeltsin. Más allá de ese dato, no es difícil entender por qué tantos rusos se abstuvieron y por qué quienes votaron no parecían guardar permanentes adhesiones. En los hechos, la mayor parte de las opciones políticas reflejaban intereses tan singulares como mezquinos: en unos casos eran los de los nuevos empresarios salvajes y en otros los de la *nomenklatura* más tecnocratizada y espabilada. Al margen de esos dos reconciliables proyectos, que ilustraban una mercantilización de la vida política que debiera pasar a los manuales de sociología, sólo parecía haber ganado terreno, en una huida hacia adelante, el protofascismo auspiciado por Zhirinovskii.

Con estos mimbres, la vida política rusa se antojaba llena de vacíos. El principal era, sin duda, el que debiera colmar un discurso que, rechazando por igual el orden burocrático de antaño y la miseria del capitalismo salvaje de hogaño, apostase con decisión por una «sociedad civil» independiente y demostrase con entereza cuáles eran las supersticiones anejas al individualismo, al «todo vale» y al chauvinismo que se imponían por doquier. En las jornadas siguientes a la disolución, *manu militari*, del parlamento hubo quien interpretó que algo de lo anterior cobraba cuerpo de la mano de algunos de los viejos disidentes —Gleb Pavlovskii, Mijaíl Gefter, el grupo *Memorial*—, que empezaban a plantarle cara a la autocracia yeltsiniana con las mismas armas que habían empleado en el pasado para resistir a su homóloga brezhneviana. Es evidente, de cualquier

modo, que ninguna de las figuras políticas del momento hacía olvidar a quien hubiera llenado más de un vacío: Andrei Sájarov.

Las escasas concesiones que la Constitución refrendada hacía a repúblicas y regiones parecían alimentar, en fin, la cautelosa rebelión de muchos poderes locales que, sin embargo, no dejaban de asumir unilateralmente nuevas atribuciones. Las promesas incumplidas por Yeltsin anunciaban acaso la ruptura de algunos consensos que podía alcanzar al propio bloque de apoyo al presidente: las disensiones entre los Gaidar, los Shajrai y los Sobchak parecían llamadas a ampliarse. Con este panorama no era difícil augurar una repetición de muchas de las tensiones que se hicieron notar en 1993.

En las jornadas anteriores a la consulta electoral, Yurii Baturin, uno de los asesores del presidente, lamentaba que en el nuevo parlamento pudiese hacerse notar la presencia de «un 40% de *lobbistas*, un 40% de gente no preparada y sólo un 20% de profesionales».[11] Baturin, que quizá atinaba en su pronóstico general, erraba cuando, petulantemente, quería hacernos creer que en las opciones presidenciales no tomaban asiento defensores de intereses particulares y oportunistas de todo tipo; su supersticiosa idolatrización de los «profesionales» era, entre tanto, muy rusa. Tan rusa, por cierto, como el olvido de algo incontestable: en todas las formaciones políticas se apreciaban los signos de un nacionalismo agresivo preñado de autoritarismo y valores militares. Y es que el comportamiento del presidente Yeltsin en los meses anteriores mucho tenía que ver con el fulgurante ascenso de Vladímir Zhirinovskii. Al fin y al cabo éste poco más era que la consecuencia directa de la «terapia de choque» desplegada por Gaidar y de la polarización alentada por Yeltsin.

[11] *El País* (8 de diciembre de 1993).

En el horizonte: el nacionalismo ruso

El éxito electoral de Zhirinovskii en diciembre de 1993 y, más allá de él, la enorme capacidad de permeabilización que el nacionalismo ruso ha demostrado obligan a prestarle una atención singular. Al igual que ocurre con casi todos los «nacionalismos centrales», no nos sobran, sin embargo, los estudios sobre el nacionalismo ruso. A duras penas nos toparemos, aun así, con una combinación más rica de tendencias y problemas. Porque, en primer lugar, y como es de razón, en el nacionalismo ruso se hacen sentir todas las pulsiones propias de los nacionalismos: identificaciones etnocéntricas, versiones radicales y versiones moderadas, peculiares relaciones con modernizaciones y descolonizaciones, intereses propios de unas u otras *élites*, discursos compensatorios...

Junto con lo anterior, sin embargo, en el nacionalismo ruso se dan cita varios planos que lo hacen irrepetible. Si uno es la vieja polémica entre eslavófilos y occidentalistas, otro lo configura el proyecto «paneslavista», de cierto auge en los últimos años. En un tercer plano se cruza el problema del «estado», que para unos es garantía de la unidad y la continuidad de la nación rusa, y para otros responsable directo de rémoras históricas sin cuento. En un estadio más adelante aparece la cuestión del «imperio», que también suscita opiniones encontradas: decisivamente unido para unos con la nación rusa, a otros les ha parecido siempre un obstáculo decisivo en la consolidación de aquélla. La propia aparición de la URSS, lejos de simplificar los problemas, los hizo aún más peliagudos: mientras que para unos la nación rusa había recibido un nuevo impulso al amparo del régimen bolchevique, otros porfiaban en recordar, y es un ejemplo entre muchos, los dramáticos efectos de destrucción del hábitat rural ruso que tuvo la colectivización forzosa de los años treinta. En otro plano, allí donde muchos rusos apreciaban una maligna «sovietización», muchos no rusos veían, paradójicamente, una abrupta «rusificación». Mientras, el

aislamiento internacional de la URSS operaba en provecho del primero de los polos de la vieja colisión entre eslavófilos y occidentalistas, algo que marcaba, en fin, muchas tomas de posición.

En este confuso magma ideológico, y con ciertos rasgos imitativos de los nacionalismos «periféricos», en los años postreros de la *perestroika* empezó a despuntar un nacionalismo más vertebrado, que hizo de la creación de instituciones propias rusas el meollo de sus reivindicaciones. El ascendente movimiento pronto dejó atrás los apretados corsés ideológicos de organizaciones como *Pámiat* y *Otéchestvo* y pasó a exhibir en su seno las posiciones más dispares; entre ellas tanto se hacían notar un nacionalismo empeñado en forjar un estado de derecho como los efectos de un pacto, aparentemente *contra natura*, entre segmentos de los viejos aparatos burocráticos y nostálgicos del zarismo. La deriva de los acontecimientos condujo al poco, también en Rusia, a una apuesta en provecho de la secesión con respecto a la URSS, atestiguada, en 1990 y 1991, por la declaración de soberanía de la FR o por el reconocimiento del derecho de las demás repúblicas a abandonar la Unión. Claro que estas decisiones no eran ajenas, tampoco, a las necesidades del nuevo equipo dirigente de la Federación, con Yeltsin a la cabeza.

La configuración de una FR independiente, a finales de 1991, no podía por menos que estimular el auge de un nacionalismo estrechamente vinculado al nuevo estado. A este impulso se agregaron las necesidades de sustitución de una «ideología», la del sistema soviético, en visible descrédito. El primero de los efectos de la nueva situación fue un trasunto de resurgimiento de la disputa entre eslavófilos y occidentalistas. Mientras los primeros renovaban una apuesta aislacionista, los segundos optaban por una «modernidad» que identificaban con el «mercado» y con la represión de los elementos «no europeos» de la cultura rusa. Reaparecía, por añadidura, una vieja discusión sobre lo que es Rusia, en la que la apuesta por la ratificación del «imperio», tan cara

a los modernos eslavófilos, no era ajena, sin embargo, a muchos «nacionalistas liberales». Así lo certificaban las actitudes y políticas del propio Yeltsin, inclinado a concebir la CEI como una suerte de zona de «ingerencia permitida» para la FR y poco propicio a aceptar la expansión oriental de la OTAN. Este amago de solapamiento de las posiciones mantenidas por aislacionistas y modernizadores hacía singularmente compleja, por cierto, la vida política.

Aunque las polémicas al respecto de cuestiones como las que nos ocupan son muchas, en lo que a nosotros nos interesa hay que llamar la atención sobre la irrupción de un nacionalismo de perfiles agresivos, con dimensión claramente política, como ha resultado ser el abanderado por Vladímir Zhirinovskii. El caldo de cultivo de esta modalidad de nacionalismo es fácil de identificar: una aguda crisis económica y social, un visible descrédito de instituciones y partidos «tradicionales», la multiplicación de los problemas para los muchos rusos que viven fuera de su país y, en último término, la propia pérdida de peso planetario de la FR. Los signos de identidad de este nacionalismo desaforado han sido, por lo demás, varios. Uno de ellos es un visible rechazo del *establishment* de partidos e instituciones, presuntamente incapaces de restaurar la ley y el orden. Por detrás se ha manifestado una visible adscripción a fórmulas autoritarias y una notable ambigüedad con respecto a los problemas económicos, con un rechazo —que muchos han juzgado retórico— del papel desempeñado por las mafias en ascenso y por la vieja *nomenklatura*.

El Partido Liberal Democrático de Zhirinovskii ha sido, por otra parte, una fuerza política manifiestamente centralista y cerrilmente opuesta a toda perspectiva de disgregación interna de la FR. Al respecto, su plataforma electoral reclamaba la abolición de las repúblicas «étnicas» y su sustitución por meras entidades administrativas, en un marco geopolítico en el que se consideraban «rusas», no sólo todas las repúblicas integrantes de la URSS, sino también Finlandia,

partes de Polonia y la propia Alaska. En la cimentación ideológica de este proyecto se daban cita, también, un discurso antioccidental y otro antisemita. La xenofobia presente en muchas de las manifestaciones públicas de Zhirinovskii mucho tenía que ver, naturalmente, con la delicada situación de los rusos residentes en otros estados miembros de la CEI.

Las cosas como estaban después de las elecciones de diciembre de 1993, parece obligado concluir que el caldo de cultivo del nacionalismo que nos ocupa cada vez era más espeso. Así lo atestiguaban la situación económica, el juego político de Yeltsin, el citado descrédito de la mayoría de las instituciones y las omnipresentes querencias imperiales. Lo anterior no quiere decir, naturalmente, que todos los que respaldaron en las urnas a Zhirinovskii compartiesen la «huida hacia adelante» implícita en su mensaje y se adhiriesen, por consiguiente, a discursos imperiales y manifestaciones xenofóbicas; muchos votos respondían, antes bien, a un deseo de protesta frente a un sinfín de problemas y vejaciones. En un sentido contrario, sin embargo, estaremos dando la espalda a la realidad si olvidamos que un nacionalismo de perfiles agresivos y una apuesta consistente por fórmulas autoritarias parecen estar presentes en muchas de las fuerzas políticas rusas. Y no están ausentes, en singular, del discurso político de un Yeltsin que, a los ojos de algunos especialistas, se ha dejado cautivar también por el hechizo de la mercancía zhirinovskiana.

BIBLIOGRAFÍA

No son muchos los textos que dan cuenta del proceso que condujo a la configuración de la CEI. Mencionemos el librito de Mijaíl Gorbachov, *Dekabr-91. Moyá pozitsia* (Nóvosti, Moscú, 1992), y las obras de Timothy J. Colton y Robert Levgold (dirs.), *After the Soviet Union* (Norton, Nueva York, 1992); Borís Kagarlitski, *The disintegration of the monolith* (Verso, Londres, 1992); Hubert Morelle y Daniel Pineye (dirs.), *Après l'URSS: inventaire pour un drame* (Félin, París, 1993), y Robert Sharlet, *Soviet constitutional crisis: from de-stalinisation to disintegration* (M.E. Sharpe, Armonk, 1992). En alguno de estos casos el título no se ajusta plenamente al contenido real de los libros.

Introducciones generales a la problemática de los estados herederos de la URSS son los anuarios coordinados por Roberte Berton-Hogge y Marie-Agnès Crosnier (dirs.), *Ex-URSS: les états du divorce* (La documentation française, París, 1993), y por Marc Ferro (dir.), *L'Etat de toutes les Russies* (La découverte/IMSECO, París, 1993), y el libro de Andrei Zagorski y otros, *The Commonwealth of Independent States: developments and prospects* (MGIMO, Moscú, 1992). Sobre la Federación Rusa pueden mencionarse Bernhard Michalowski, *Russland* (Wilhelm Heyne, Munich, 1993), y Michael Unger, *GUS-Völker und Staaten* (Wilhelm Heyne, Munich. 1992). Pueden consultarse también los monográficos *Russia* (The Economist Intelligence Unit, Londres, 1993) y *La nouvelle Russie* (Le Monde, abril de 1994).

Trabajos sobre la situación política en la Federación Rusa son los que llevan la firma de Nikolai Biriukov y V.M. Sergeer, *Russia's road to democracy: parliament, communism and traditional culture* (Edward Elgar, Aldershot, 1993); Walter Laqueur, *Blach hundred. The rise of the extreme right in Russia* (Harper Collins, Nueva York, 1993); Michael McFaul y Serguéi Markov, *The troubled birth of Russian democracy. Parties, personalities, and programs* (Hoover, Stanford, 1993); Arthur H. Miller, William M. Reisinger y Vicki L. Hesli (dirs.), *Public opinion and regime change. The new politics of post-Soviet societies* (Westview, Boulder, 1993), y O.I. Shkáratan y V.I. Kolomiets, *El impacto del movimiento político sobre las estructuras del poder en Rusia: agosto 1991-julio 1992* (ISNT-Universidad Autónoma, Madrid, 1992). Puede leerse también el libro de Ruslán Jasbulátov, *The struggle for Russia* (Routledge, Londres, 1993). Dos directorios dan cuenta de las *élites* del momento en la Federación Rusa y en el conjunto de la CEI: *Who's who in Russia and the new states* (I.B. Tauris, Londres, 1993) y *Kto est kto v Rossii i v blizhnem zarubezhe* (Nóvoe vremia, Moscú, 1993). Información compendiada sobre nuevas organizaciones se encontrará en el libro de Vladímir Pribilovskii, *Dictionary of political parties and organizations in Russia* (Post Factum-The Center for Strategic and International Studies, Washington, 1992), y en los informes *Left-wing forces in the USSR after the August putsch* (Economy and Democracy, Moscú, 1992) y *Left and workers movements in the ex-USSR* (Economy and Democracy, Moscú, 1992).

Son varios ya los estudios publicados en torno a la figura del presidente ruso, Yeltsin. Citemos entre ellos los trabajos de Pilar Bonet, *La Rusia imposible* (El País-Aguilar, Madrid, 1994); Enrico Melchionda, *Eltsin a Mosca* (Lavoro, Roma, 1990); John Morrison, *Boris Yeltsin* (Penguin, Harmondsworth, 1991); Jerzy Reinhardt, *Boris Eltsine et le réveil russe* (Stock, París, 1992), y la fantasiosa biografía firmada por Vladímir Soloviov y Elena Klepikova, *Borís Yeltsin* (Vagrius, Moscú, 1992). En castellano se tradujo la primera entrega de las *Memorias* (Temas de Hoy, Madrid, 1990) del presidente ruso, que en 1994 ha publicado un segundo volumen de recuerdos: *Zapiski prezidenta*. La versión francesa de este segundo volumen se titula *Sur le fil du rasoir. Mémoires* (Albin Michel, París, 1994).

Son escasas, pese al innegable interés de la materia, las monografías sobre el nacionalismo ruso. Pueden reseñarse al efecto los textos de Mijaíl Agurski, *The third Rome: national bolshevism in the USSR* (Westview, Boulder, 1987); Hélène Carrère d'Encausse, *Victorieuse Russie* (Fayard, París, 1992); Stephen Carter, *Russian nationalism* (Pinter, Londres, 1990); Feliks Medvédev, *Posle Rossii* (Respublika, Moscú, 1992); Marie Mendras (dir.), *Un Etat pour la Russie* (Complexe, Bruselas, 1992); Michel Niqueux (dir.), *La question russe: essais sur le nationalisme russe* (Universitaires, París, 1992); Aleksandr Solzhenitsin, *Cómo reorganizar Rusia* (Tusquets, Barcelona, 1991); François Thual, *Géopolitique de l'orthodoxie* (Dunod, París, 1993), y el monográfico «Les marches de la Russie», en *Hérodote* (nº 54-55, 1989). De la figura de Vladímir Zhirinovskii se ocupa el libro de Didier Daeninckx y Pierre Drachline, *Jirinovski. Le russe qui fait trembler le monde* (La cherche midi, París, 1994).

De las reformas económicas en curso se ocupan los libros de Anders Aslund (dir.), *Economic transformation in Russia* (Pinter, Londres, 1994); Michael Ellman y Vladímir Kontórovich (dirs.), *The disintegration of the Soviet economic system* (Routledge, Londres, 1992); Maryse Gaudier, *Réformes économiques, évolution sociale, perspectives institutionnelles dans les pays d'Europe centrale et orientale* (Institut international d'études sociales, Ginebra, 1992); Jan Kregel, Egon Matzner y Gernot Grabher, *The market shock* (Austrian Academy of Sciences-International Institute for Peace, Viena, 1992); Fernando Luengo (dir.), *Europa del*

vieja Unión —el Asia central, el Cáucaso y buena parte, la menos rusificada, de la propia Federación Rusa (FR)—, que a los ojos de muchos habían sido en el pasado una auténtica rémora económica. En adelante, y por citar el ejemplo más claro, al desaparecer muchas de las recompensas estratégico-militares que «Rusia» obtenía por su ayuda económica a las zonas más deprimidas, lo más fácil es que esta última se diluyese en beneficio de relaciones más duras. No olvidemos que el proyecto paneslavo, aunque arrinconado de la mano de la disputa mantenida por la FR y Ucrania, puede reaparecer en el futuro al amparo de muchas de las inercias, y de muchos de los intereses creados, que antes mencionábamos.

La desgana con que las repúblicas del Asia central acogieron a la nueva Comunidad algo tiene que ver con la perspectiva anterior: la situación económica, tributaria del monocultivo y la hiperespecialización que, impuestos en las décadas precedentes, habían conducido a una dramática dependencia exterior, se veía agudizada por la masiva presencia de eslavos en los puestos de dirección. A este panorama se agregaba, siempre en el Asia central, la circunstancia de que el hundimiento del viejo orden se había hecho sentir con fuerza mucho menor. Hay quien, gráficamente, señaló que aunque el PCUS había muerto, no había manera de encontrar su cadáver: el grueso de los parlamentarios electos, y de los gobernantes, eran miembros o ex miembros del Partido, e incluso los dirigentes de línea liberal, como el presidente kazajo, Nazarbáev, hacían todo lo que estaba en su mano para cerrarle las puertas a otras formaciones políticas.

Aunque en el Asia central la situación económica era muy delicada en términos de «relaciones externas», en modo alguno podía compararse con la provocada en otras repúblicas por el hundimiento del sistema de abastecimientos. La fortaleza, de siempre, de la «economía sumergida» en el centro asiático facilitaba la preservación de muchos lazos que

ahora se limitaban a adquirir consistencia legal o semilegal. No hay que olvidar, de cualquier modo, que en el área que nos ocupa apenas se hacía valer la búsqueda de proyectos conjuntos entre las repúblicas. Con problemas fronterizos y conflictos étnicos de cierta entidad, los esfuerzos de construcción de un «mercado común», como el que se planeaba en las jornadas anteriores al golpe de agosto, no parecían prosperar. Claro es que la conciencia de un renovado «colonialismo» eslavo puede propiciar, en el futuro, el reflotamiento, con mayor consistencia, de esos proyectos.

Otro de los efectos, el más aparatoso, de la nueva situación era un rebrote del nacionalismo ruso, entre cuyas consecuencias previsibles se hallaba la de enconar las ya de por sí delicadas relaciones con otras repúblicas. La existencia, en todas ellas, de significativas bolsas de población foránea se sumaba a los problemas de trazado de fronteras, en buena parte legados por caprichosas decisiones adoptadas en los años veinte y treinta. Piénsese que son del orden de 25 millones los rusos que residen fuera de la Federación, y que más de cuarenta millones de no rusos viven lejos de las repúblicas o territorios que son formalmente los suyos.

Aunque entre los propósitos iniciales de la CEI se contaba resolver el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, lo cierto es que las tensiones no dejaron de crecer. Estas tensiones eran un obstáculo importantísimo, por cierto, para la consolidación del proyecto de hegemonía eslava que antes mencionábamos. Mal haríamos en pensar, con todo, que los principales problemas que estaban, y están, sobre la mesa en la nueva Comunidad eran los que dirimían las repúblicas federadas que constituían la vieja Unión. Y mal haríamos porque un horizonte bien imaginable era el de una ruptura en la cohesión interna de esas mismas repúblicas: en casi todas ellas se escuchaban demandas de autodeterminación y secesión formuladas por unidades político-administrativas de rango inferior. Este horizonte de rupturas internas resultaba particularmente notorio en el seno de la FR, un complejo y artificial

Este: ¿transición o crisis? (IEO, Madrid, 1993), y Enrique Palazuelos, *La situación económica tras la desaparición de la URSS* (IEO, Madrid, 1992) y «Rusia: la reforma estancada», en el libro coordinado por Fernando Luengo.

Una selección de la legislación sobre cuestiones sociales es el volumen *Sotsiálnaya politika v Rossii. Sbornik dokumentov* (Respublika, Moscú, 1992). Información interesante sobre esas mismas cuestiones se encontrará en los libros de Carlos Enrique Bayo, *Así no se puede vivir* (Plaza y Janés-Cambio 16, Barcelona, 1992); Pilar Bonet, *Imágenes sobre fondo rojo. Estampas de la crisis soviética* (El País-Aguilar, Madrid, 1992); Bob Deacon (dir.), *Social policy, social justice and citizenship in Eastern Europe* (Avebury, Aldershot, 1992); David Lane (dir.), *Russia in flux: the political and social consequences of reform* (Edward Elgar, Aldershot, 1992); Dmitrii de Kochko y Aleksandr Datskevich, *L'Empire de la drogue. La Russie et ses marches* (Hachette, París, 1994); Igor Kon y James Riordan, *Sex and Russian society* (Pluto, Londres, 1993); Hilary Pilkington, *Russia's youth and its culture* (Routledge, Londres, 1994); Richard Sakwa, *Russian politics and society* (Routledge, Londres, 1993); Anne de Tinguy y Catherine Wihtol de Wenden, *Est: ces immigrés qui viendraient du froid...* (Arléa-Corlet, Courbevoie, 1993), y en el monográfico «Penurias sociales en el Este», en *Cuadernos del Este* (nº 12, 1994).

LA DESINTEGRACIÓN DE LA URSS: POLÍTICA EXTERIOR Y FUERZAS ARMADAS

Este capítulo se propone tres objetivos. El primero no es otro que dar cuenta del proceso de desintegración de la URSS en su relación con la aparición de nuevas fuerzas armadas en las distintas repúblicas. El segundo consiste en describir la situación específica de las fuerzas armadas de la Federación Rusa (FR). El tercero estriba en determinar el nuevo incardinamiento internacional de esta última, sobre la base de aspectos como su relación con los miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y con las potencias occidentales, los efectos de las retiradas de tropas y de la pérdida de presencia exterior, o las consecuencias de los acuerdos de control de armamentos.

Los efectos militares de la ruptura del estado plurinacional

La paulatina independencia de las repúblicas soviéticas fue un dato evidente en los últimos meses de 1991. En el ámbito concreto de la defensa se hizo sentir, con peculiar fuerza simbólica, la decisión ucraniana de encarar la creación de unas fuerzas armadas propias. Ante la previsible extensión de posiciones como ésta —superadas, es cierto, en el Báltico—, la reacción de la cúpula militar soviética se cifró en la preservación de un sistema de seguridad único para todas las repúblicas, con un apoyo cauteloso a la creación, en aquéllas, de pequeñas «guardas nacionales» y

un rechazo, sin embargo, de la aparición de ejércitos *stricto sensu*.

El ministro de Defensa de la URSS, Yevguenii Sháposhnikov, subrayó la importancia de varios factores: la disposición de un espacio económico conjunto y de recursos que excedieran las capacidades de cada república, el riesgo de un fortalecimiento militar en áreas de activa confrontación armada, o la mayor eficacia derivada de la disposición de estructuras comunes. Las primeras ideas de Sháposhnikov llamaban la atención, de cualquier modo, sobre la conveniencia de renegociar las relaciones entre el centro y las repúblicas, de tal suerte que el primero se encargase de proteger las fronteras externas de aquéllas, sin inmiscuirse en sus asuntos internos. Por parte de las repúblicas debía existir un compromiso de mantenimiento de unidades comunes. Los responsables militares de las fuerzas de la Unión desplegadas en ellas serían nombrados por el Ministerio de Defensa de la propia Unión, bien que con el acuerdo previo de los presidentes republicanos.

Algunas diferencias exhibía, con respecto a la posición de Sháposhnikov, el jefe del Estado Mayor, general Vladímir Lóbov. Lóbov se inclinaba por la configuración de una dirección militar colegiada en el centro, con representación de todas las repúblicas; no tenía sentido que las unidades militares presentes en éstas quedasen al margen de las fuerzas unificadas, aun cuando era respetable el deseo de crear ministerios de Defensa en los diferentes estados. Lóbov no rechazaba de plano, con todo, la aparición de «ejércitos republicanos», aun cuando se cuidaba de subrayar los peligros anejos, y en particular las eventuales «tensiones étnicas».

La reacción del centro ante las primeras manifestaciones que apuntaban a la creación de unidades militares en algunas repúblicas consistió, en suma, en la defensa de una mayor descentralización, siempre sobre la base de la preservación de unas fuerzas armadas comunes. Este esquema —asumido también por el máximo responsable militar de la FR,

Konstantín Kobets— no era sino un correlato de los esfuerzos que, en un plano más general, desarrollaba el propio Gorbachov. Dada la naturaleza de los procesos en curso, las repúblicas del Báltico, cuya independencia era un hecho consumado, escapaban a este esquema: la propia cúpula militar soviética había acatado la perspectiva de una abierta retirada de tropas.

La primera concreción sólida de las ideas defendidas por Sháposhnikov fue la creación de un Consejo de Ministros de Defensa de los «estados soberanos», anunciada a principios de noviembre de 1991. Se trataba de un órgano consultivo encargado de debatir cuestiones generales relativas a la política militar; la configuración del nuevo organismo acarreaba, bien es cierto, la aceptación de la existencia de ministerios de Defensa en las diferentes repúblicas.

Como ya hemos analizado en su momento, a principios de diciembre de 1991 un referéndum abrió el camino a una efectiva independencia de Ucrania. Pocos días después el proceso abocó, por un lado, en la configuración de la CEI, que contestaba muchas de las ideas de Sháposhnikov: las repúblicas integrantes disponían de un pleno derecho a crear fuerzas propias, pasaban a controlar muchos activos del ejército soviético, y en el mejor de los casos se avenían a alcanzar algunos acuerdos, como el relativo a la preservación de unas fuerzas estratégicas comunes. Por otra parte, condujo a un inequívoco descontento militar, del que pronto fueron eco las declaraciones del vicepresidente ruso, Rutskoi, y la dimisión del ya citado Lóbov. Yeltsin no había hecho valer algo que estaba en la base del apoyo que había recibido, después de agosto, de la nueva cúpula militar: unas fuerzas armadas unificadas. Es verdad, sin embargo, que no faltaban opiniones que apreciaban positivamente la creación de una CEI que en su diseño inicial agrupaba, en una especie de confederación, a las tres grandes repúblicas eslavas, en un proyecto inequívocamente grato a muchos miembros de las fuerzas armadas.

El proceso desencadenado con el nacimiento de la CEI fue demasiado rápido para que la cúpula militar pudiese reaccionar en consonancia: hubo de aceptar el despliegue de muchas medidas que había rechazado con virulencia en los meses anteriores y que implicaban la desaparición de las fuerzas armadas del estado soviético. Según una lectura de los hechos, el equipo encabezado por Sháposhnikov, pese a no respaldar en muchos de sus términos la nueva política, puso lo que estaba en su mano para frenar una contestación dura como la que podía conducir a la postulación de un renacimiento imperial en Rusia. Sháposhnikov se ocupó, en particular, de tranquilizar a los inquietos oficiales rusos que residían en las repúblicas recién independizadas.

Desde su nacimiento, la CEI fracasó en sus intentos de forjar otras estructuras militares comunes que no fueran las vinculadas a las armas estratégicas. Significativo es que la cumbre de estados miembros celebrada a mediados de febrero de 1992 fracasase en su deseo de institucionalizar un mando unificado de carácter general y hubiese de contentarse con establecer un mero acuerdo provisional al que, por lo demás, ni siquiera se sumaron todas las repúblicas. Formalmente, sin embargo, los primeros pasos apuntaban a conferirle a la CEI responsabilidades sólidas. Piénsese, si no, que, al poco de nacer la Comunidad, el Ministerio de Defensa de la URSS se convirtió, con un mero cambio de nombre, en el núcleo del mando militar de la CEI, con el propio Sháposhnikov a la cabeza. El solapamiento de funciones entre el alto mando de la CEI y el gobierno ruso no podía por menos que suscitar recelos, tanto más cuanto que el temor a una despótica potencia regional rusa empezaba a extenderse.

Algunos de estos equívocos se disolvieron una vez que, a principios de mayo de 1992, la FR dotó de contenidos evidentes a su Ministerio de Defensa, en lo que, por otra parte, parecía un reconocimiento del fracaso en la tarea de configurar estructuras militares comunes y suponía una relativa privación de funciones para Sháposhnikov y su equipo.

La política rusa se sumaba —al menos en la tarea de vaciar de contenidos a la CEI— a la de Ucrania, en los meses anteriores principal núcleo de oposición a cualquier acuerdo militar. La propia condición de los militares que pasaron a encabezar el nuevo Ministerio remitía al abandono de cualquier ilusorio proyecto de estructuras comunes, en beneficio de una FR que debía asumir funciones cada vez más ambiciosas.

La desintegración de las funciones militares de la CEI se hizo de nuevo visible en la cumbre celebrada a mediados de mayo de 1992 en Tashkent. Aunque de ella se derivó un «acuerdo de seguridad colectiva», sólo seis de los once miembros lo suscribieron; entre ellos no se contaba, como cabía esperar, Ucrania. Con mayor o menor claridad, se dibujaban dos bloques: el primero, liderado por Moscú, incorporaba a las repúblicas del Asia central, mientras que el segundo, encabezado por Kíev, arrastraba a Bielorrusia. A esta división, y ya a principios de 1993, acabó por sumarse otra, que afectaba a dos instituciones que, pese a lo antes dicho, habían funcionado en estrecha colaboración desde mayo de 1992: los mandos militares de la FR y de la CEI. En una cumbre de esta última celebrada en Minsk, Sháposhnikov, cada vez más desplazado tras la consolidación del Ministerio de Defensa ruso, tomó partido por algunas de las propuestas ucranianas (y kazajas) que se proponían darle un sentido muy restringido al concepto de «fuerzas estratégicas», cuando no colocar en manos de cada poder republicano la decisión sobre lo que debía entenderse por tales; el gobierno ruso, por su parte, subrayó la urgencia de que todas las armas estratégicas fuesen colocadas bajo su jurisdicción.

De por medio había un sinfín de disputas sobre la naturaleza de las estructuras conjuntas. Se debatía la división de cometidos en la dirección, el carácter temporal o permanente de las instancias o el reparto de las cargas financieras, pero por encima de todo se discutía el «modelo» al que habían de ajustarse las estructuras comunes. Mientras la FR parecía pensar en el Pacto de Varsovia —un mando militar de la CEI

directamente subordinado al Ministerio de Defensa ruso—, Ucrania optaba, antes bien, por una mayor división de poder en el mando y en la toma de decisiones. Habida cuenta de los escasos progresos, una nueva cumbre de la CEI, celebrada en Moscú en junio de 1993, abolió el «mando militar conjunto»; Shaposhnikov fue nombrado secretario del Consejo de Seguridad ruso, al tiempo que se establecía un organismo provisional, de importancia menor, encargado de la «cooperación militar» entre los miembros de la CEI y al mando del coronel general Samsónov. Al parecer fue la propia FR la que decidió romper el juego, aduciendo las cargas financieras soportadas y la legislación aprobada por otras repúblicas. Como quiera que no se abría camino ninguna perspectiva conjunta, y que Rusia debía correr a cargo de *todas* las armas estratégicas, no tenía sentido seguir pujando por estructuras comunes en el ámbito de la CEI. Así concluían, al menos de forma provisional, los esfuerzos orientados a configurar un sistema de seguridad común y desaparecía el último resto de una institución que, mal que bien, recordaba los esquemas inspiradores de las fuerzas armadas de la URSS. Sobre el papel, y por añadidura, la FR asumía la conveniencia de regular sus relaciones militares sobre la base de acuerdos de carácter estrictamente bilateral.

La situación en las diferentes repúblicas

a) *Ucrania*. Dos semanas después del golpe de agosto de 1991, el Soviet Supremo (SS) ucraniano se pronunció por la creación de unas fuerzas armadas propias. Éstas vieron la luz el 6 de diciembre, con asiento en las tropas correspondientes a los distritos militares de Kíev, Odessa y la Ucrania subcarpática. El 3 de enero de 1992 todas las tropas presentes en Ucrania, con excepción de las fuerzas nucleares estratégicas, quedaron bajo el mando del presidente de la república. Siguieron unas semanas en las cuales muchos oficiales del

antiguo ejército soviético destinados en Ucrania realizaron juramento de lealtad a esta última, acaso atraídos por las promesas de respeto de sus derechos sociales y laborales.

En Ucrania se hicieron sentir problemas similares a los que se manifestaron en su momento en las fuerzas armadas soviéticas. Así, el número de candidatos en las academias militares se redujo sensiblemente, muchos oficiales jóvenes abandonaron su carrera, y la elusión del servicio militar obligatorio y la deserción se hicieron comunes. La escasez de viviendas era otro rasgo de la situación. La ruptura de lazos con otras repúblicas acrecentó, por lo demás, los problemas de repuestos y la escasez de materias primas. Tampoco faltaron en las fuerzas armadas divisiones ideológicas notorias.

Ucrania había heredado, en fin, una parte importante de la industria de defensa de la URSS, no en vano generaba un tercio de la producción militar soviética. La industria de defensa corría a cargo de un 38% de la producción industrial, y casi tres millones de personas estaban ocupadas en complejos militares. También en el caso ucraniano la conversión de la industria de defensa había sido un fracaso y, al igual que en la FR, se hacían sentir voces que reclamaban un reflotamiento de la industria militar con la vista puesta, ante todo, en la exportación de armas.

Al margen de estas cuestiones se hicieron sentir dos grandes problemas: el porvenir de la flota del mar Negro y la disputa con la FR sobre las armas nucleares. Por lo que al primero respecta, pronto se escucharon reivindicaciones ucranianas sobre la vieja flota soviética del mar Negro, en la cual eran numerosos los buques portadores de ese tipo de armas. Según la visión rusa, con sus demandas Ucrania violentaba los acuerdos fundacionales de la CEI, que incluían a la marina entre las «fuerzas estratégicas» y, por consiguiente, impedían la «nacionalización» de la flota del Negro. Para Kíev, en cambio, sólo una parte de la flota, la portadora de armas nucleares estratégicas, correspondía a la CEI (en nin-

gún caso a la FR), mientras que el resto debía serle entregado, sin disputa, a Ucrania. La situación adquirió visos de tensión en enero de 1992, y más aún en febrero, cuando el SS de la FR se pronunció por una flota del mar Negro unificada y por una revisión de la medida que, en 1954, había colocado a Crimea bajo soberanía ucraniana. En los primeros días de abril, Ucrania procedió a crear una marina propia y dio a entender su disposición a entregar a la CEI un reducido número de los buques de la flota, que al poco fue colocada, como respuesta, bajo el mando directo de Yeltsin. Las dos repúblicas dieron marcha atrás unos días después, y en junio llegaron a un acuerdo en virtud del cual los soldados de la flota debían corresponder, a partes iguales, a Rusia y Ucrania. En el mismo mes, y en Dágomis, se asumió como inevitable el nacimiento de sendas flotas rusa y ucraniana, y poco después, en agosto, se acordó la configuración, por un período de transición que debía prolongarse hasta finales de 1995, de una provisional «flota conjunta».

Como quiera que, pese a todo, las discrepancias proseguían, las dos partes suscribieron un nuevo acuerdo en Moscú en junio de 1993: la división de la flota debía producirse a partes más o menos iguales e iniciarse en septiembre del mismo año. Un acuerdo debía sentar las bases de la presencia de la marina rusa en territorio ucraniano. Los parlamentos respectivos rechazaron los compromisos contraídos, en un marco de general repulsa a la que se sumaron, del lado ruso, el vicepresidente Rutskoi, el presidente del SS, Jasbulátov, y el alcalde de San Petersburgo, Sobchak. Cada vez era más evidente, por lo demás, la vinculación entre el *affaire* de la flota del Negro y la disputa sobre Crimea. A la larga lista de acercamientos y desavenencias se agregó, en septiembre de 1993, un nuevo acuerdo, en esta ocasión firmado en Massandra: en abierta contradicción con los anteriores, la FR se quedaría con toda la flota del mar Negro, no sin antes compensar económicamente por ella a Ucrania, que así podría hacer frente a importantes deudas contraídas con anterioridad. Por añadidura, Rusia podría hacer uso de la base naval de Sebastópol.

La disputa sobre la flota fue una parte de otra, más general, sobre las armas nucleares estratégicas. Al respecto, las primeras tomas de posición ucranianas fueron claras: le conferían a la república la condición de estado no nuclear, tras la adopción del compromiso paralelo de destruir o entregar todas las armas atómicas presentes en su territorio. Ucrania apoyaba, además, los acuerdos de control de armamentos anteriormente suscritos. El SS ucraniano fue, sin embargo, a partir de 1992, la principal instancia reacia a llevar a la práctica los compromisos contraídos. En octubre de ese año una mayoría de diputados rechazó un proyecto de doctrina militar asentado en el principio de desnuclearización, en un marco en el que eran visibles las reticencias a la hora de ratificar los acuerdos START y el propio Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Las demandas de renuclearización chocaban, sin embargo, con obvias limitaciones: Ucrania sólo podía garantizar el «no uso», por la FR, de los dispositivos en cuestión, dependía de Rusia en lo relativo a repuestos, diseño, pruebas..., y debía hacer frente a los ingentes costes de mantenimiento de las armas nucleares.

Muchos responsables políticos y militares ucranianos subrayaban que las mayores amenazas procedían del norte y del este o, lo que es lo mismo, de Rusia. Así las cosas, Ucrania debía preservar sus arsenales estratégicos, incrementar el número de los efectivos de sus fuerzas y renunciar incluso a su neutralidad. Un discurso común en Kíev era el que sostenía que la política no nuclear enunciada en su momento no respondía sino al coyuntural objetivo de alcanzar y consolidar la independencia; una vez satisfecho, se imponía revisar los medios arbitrados. Al mismo tiempo, el Parlamento parecía tomar pronta conciencia de las cartas que se hallaban en su mano, y en particular de las relativas a una eventual negativa a respaldar los acuerdos START: las potencias occidentales se vieron impelidas a abrir una negociación con Ucrania

de la que podía derivarse la transferencia, a ésta, de recursos económicos y tecnológicos.

Sobre el papel, esta delicada situación quedó resuelta en Massandra en septiembre de 1993. En un giro inesperado de la política de Kíev, presuntamente relacionado con los proyectos de reflotamiento de una confederación eslava y con los problemas económicos internos, Ucrania accedió a trasladar a la FR todas las cabezas nucleares en su poder. No resulta sencillo predecir, entre tanto, cuáles están llamadas a ser las consecuencias del éxito electoral de Leonid Kuchma, en julio de 1994. El nuevo presidente ucraniano, mucho más próximo a Rusia que su antecesor, tanto podría imprimirle un acelerón a la desnuclearización como convertirse en beneficiario de una política rusa mucho más concesiva que, ahora, no le haría ascos a una potencia nuclear ucraniana.

b) *El Báltico*. Tras la independencia, la apuesta militar dominante en la FR pareció ser la configuración de fuerzas móviles de rápida reacción, ubicadas en una posición más central, acaso al este de los Urales. Aunque este hecho le quitaba relieve a las repúblicas bálticas, ello no fue óbice para que en el otoño de 1992 incluso el moderado Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se pronunciase por retener «importantes instalaciones estratégicas» en la región. En ésta no estaban presentes, de cualquier modo, complejos importantes relacionados con la industria de defensa. Más delicada era la cuestión del *oblast* de Königsberg/Kaliningrad, núcleo de la flota soviética del Báltico que, tras la independencia de Lituania, se había visto físicamente separado de la FR.

La cuestión de la retirada de las tropas soviéticas/rusas se hizo sentir desde el momento de la independencia de las repúblicas bálticas. En septiembre de 1991 Shaposhnikov dio por buena tal retirada, aun cuando anunció que en ningún caso debía iniciarse antes de 1994. Dos hechos posteriores merecen, sin embargo, mención. El primero fue la cumbre celebrada por los países más ricos del planeta en julio de

1992; tras ella, la retirada de tropas, antes sujeta a complejas y más bien estériles negociaciones, pareció adquirir un nuevo impulso. El cambio de actitud de Moscú no acabó, de cualquier modo, con las exigencias rusas: ayuda para la construcción de viviendas destinadas a los militares que debían abandonar el Báltico, respeto de los derechos cívicos y sociales de los oficiales retirados que deseasen permanecer en las tres repúblicas, garantía de comunicaciones con Königsberg/Kaliningrad, preservación de los derechos de la población rusohablante y compromiso de no plantear reclamaciones territoriales. El segundo hecho de relieve fue, el 29 de octubre de 1992, la primera decisión rusa —siguieron otras— de suspender temporalmente la retirada de tropas. En el origen de la medida estaban dos hechos: por un lado, el escaso compromiso que, en opinión de Moscú, mostraban las autoridades del Báltico en lo relativo a la resolución de los problemas sociales y laborales de los militares afectados; por el otro, la inexistencia de garantías de respeto de los derechos de los rusohablantes. La decisión del 29 de octubre situaba en un mismo plano a las tres repúblicas bálticas y olvidaba que al menos en una de ellas, Lituania, no existían mayores problemas en relación con los derechos de la minoría rusohablante. Aun así, y más adelante, ni siquiera la ausencia de acuerdos específicos con Estonia y Letonia pareció ser un problema para que las unidades rusas abandonasen, bien es verdad que con un ritmo distinto del previsto, sus instalaciones. Fue Lituania, de cualquier modo, la primera de las repúblicas de la que se retiraron, en agosto de 1993, las unidades rusas; al cabo de conflictivas negociaciones, el proceso llegó también a buen fin, en 1994, en Letonia y Estonia.

c) *Moldavia*. Desde agosto de 1991 apenas prosperaron en Moldavia los intentos de acometer una negociación sobre la retirada de las tropas de la antigua URSS. Éstas, el llamado XIV Ejército, controlaban la «república del Dniestr», con

unos 4.000 km² y unos 800.000 habitantes; antes de la independencia los rusos eran, por su número, la tercera comunidad presente en ese territorio, tras moldavos y ucranianos. En términos de derecho internacional, el XIV Ejército era una fuerza extranjera cuya retirada parecía postergada *sine die*. En abril de 1992 el gobierno ruso, sin evacuar consultas con las autoridades moldavas, procedió a apropiarse de un buen número de las unidades militares, en un gesto que parecía desdecir sus posiciones anteriores; éstas situaban al XIV Ejército bajo jurisdicción de las fuerzas conjuntas de la CEI.

La presencia y agresividad del XIV Ejército, y su papel «rusificador», se vieron acrecentadas tras el nombramiento, en junio de 1992, del mayor general Aleksandr Lébed como máximo responsable de aquél. Así lo atestiguó la ofensiva emprendida el mismo mes en torno a la ciudad de Benderi y la acumulación de informaciones que confirmaban la idea de que no había planes para retirar las tropas. La consolidación de la presencia de la fuerza que nos ocupa acaso estaba llamada a producirse de la mano de la reafirmación de la propia «república del Dniestr», y ello a pesar del acuerdo firmado entre Rusia y Moldavia: junto a una relativa desmilitarización de la zona, la primera reconocía que la «república del Dniestr» formaba parte de la segunda, mientras que Moldavia se comprometía, en caso de una eventual unificación rumano-moldava, a reconocer el derecho de autodeterminación del territorio en disputa.

d) *Bielorrusia*. A mediados de noviembre de 1991 se creó un Ministerio de Defensa en Bielorrusia. Una vez constituida la CEI, el SS republicano se pronunció por la subordinación de todas las tropas ex soviéticas presentes en el país, con la única excepción de las fuerzas estratégicas. Bielorrusia fue, por otra parte, una de las repúblicas que anunció su intención de acatar el tratado de seguridad colectiva de la CEI firmado en Tashkent en mayo de 1992; es verdad, sin

embargo, que luego reveló muchas cautelas, y entre ellas las del presidente Shushkévich, para quien el tratado estaba llamado a acrecentar las tensiones con países como Ucrania, Lituania o Polonia. A lo largo de 1992 se hicieron evidentes, dentro de las fuerzas armadas bielorrusas, los enfrentamientos entre corrientes nacionalistas de nuevo cuño y sectores más tradicionales. Antes de la desaparición de la URSS, entre los militares profesionales presentes en Bielorrusia se contaba un 50% de rusos por algo más de un 20% de ucranianos y un porcentaje levemente menor de bielorrusos.

Dato fundamental de la política bielorrusa fue la decisión de renunciar al arsenal nuclear existente en la república. En febrero de 1993 el SS ratificó el acuerdo START-I y, poco después, el TNP. Bielorrusia seguía así un camino diferente del asumido por Ucrania y Kazajstán. La república acometió también sensibles reducciones en sus tropas y dispositivos, no en vano su ubicación geográfica —avanzadilla de una eventual confrontación con el bloque occidental— hacía de ella un núcleo de despliegue de armas pesadas, con una enorme concentración militar. Las reducciones operadas no parecieron aminorar, sin embargo, los graves problemas de vivienda que atenazaban a las fuerzas armadas. La extensión del rechazo del servicio en filas era, por otra parte, una realidad consistente.

e) *El Cáucaso*. Dato fundamental de la situación en el Cáucaso ha sido la dificultad de distinguir la construcción de unas fuerzas armadas propias en las tres repúblicas ex soviéticas —Georgia, Armenia y Azerbaiyán— y el proceso paralelo de consolidación de unidades paramilitares de naturaleza muy diversa.

En el caso de Georgia, a finales de 1990 el parlamento había aprobado la creación de una «guardia nacional». Durante 1991 se hizo evidente que la citada guardia asumía funciones de manifiesta oposición al presidente Gamsajurdia. En marzo de 1992, y de resultas de la violenta destitución de

este último, el Consejo de Estado georgiano, presidido por Edvard Shevardnadze, aprobó la creación de unas fuerzas armadas y se propuso subordinar al Ministerio de Defensa todas las unidades paramilitares. Ello afectaba en particular a las unidades controladas por Tengiz Kitovani, quien en mayo había sido designado ministro. Esta circunstancia contribuyó a hacer las cosas más complejas, en especial cuando en agosto, y a instancias de Kitovani, un contingente de la guardia nacional entró en combate abierto en Sujumi, la capital de Abjazia, en donde algunas fuerzas políticas reclamaban la secesión con respecto a Georgia. En mayo de 1993 el ministro de Defensa fue relevado de sus funciones y reemplazado por el general Guiorguii Karkarashvili.

Con semejante panorama, al que deben agregarse las tensiones en Osetia del Sur, la presencia de fuerzas que apoyaban a Gamsajurdia y enormes dificultades para hacer valer la conscripción, eran muchos los problemas de las fuerzas armadas georgianas. En junio de 1992 quedaban en territorio de la república, y bajo control directo de Moscú, unos 20.000 soldados rusos. Tras sucesivos reveses en Abjazia, Shervardnadze acabó por suscribir con la FR un acuerdo de cesión de varias bases militares ubicadas en territorio georgiano.

Por lo que a Armenia respecta, la creación de unas fuerzas armadas se vio marcada por el conflicto de Nagorni-Karabaj, y ello pese a que las autoridades armenias siempre negaron que sus unidades militares participasen en los enfrentamientos. A mediados de 1992, un portavoz apuntó que Armenia se proponía configurar unas fuerzas armadas con unos 30.000 efectivos. Las primeras medidas al efecto —el «reclutamiento» de oficiales de origen armenio del antiguo ejército soviético y de oficiales rusos presentes en la república— no produjeron el resultado apetecido. Más efectiva pareció ser la decisión de movilizar, prometiendo innegables ventajas salariales, a oficiales que se encontraban en la primera categoría de la reserva. A mediados de 1992 eran

23.000, según una fuente, los soldados rusos presentes en Armenia.

En Azerbaiyán, en fin, el SS republicano se pronunció por la creación de unas fuerzas armadas a finales de agosto de 1991. En octubre se procedió a «nacionalizar» las propiedades del ejército soviético, al tiempo que se solicitaba el retorno de los azeríes que realizaban su servicio militar en otras partes de la URSS. Con el tiempo se hizo evidente la escasa formación, y las deficiencias organizativas, de las fuerzas armadas azeríes, bien reflejadas en los sucesivos fracasos militares en Nagorni-Karabaj. El presidente Mutalíbov acabó por dimitir en marzo de 1992 y fue sustituido por Yagub Mamédov. Nuevos fracasos en Nagorni-Karabaj provocaron, sin embargo, una crisis de gobierno; en mayo ocupó la presidencia Abulfaz Elchibey, quien intentó disolver las unidades paramilitares y alentó la reincorporación de oficiales en la reserva. En la primavera y el verano de 1993 se hicieron notar en Nagorni-Karabaj sucesivas derrotas que condujeron a la defenestración política de Elchibey. En febrero de 1992 se había iniciado, por otra parte, la retirada de las fuerzas rusas, que debía ultimarse a mediados de 1994. La sospecha de que unidades rusas habían colaborado con las milicias armenias en Nagorni-Karabaj provocó presiones encaminadas a acelerar la retirada que nos ocupa.

f) *Las repúblicas del Asia central.* Rasgo fundamental de las políticas de seguridad de las repúblicas del Asia central ha sido la ratificación de los lazos de dependencia con la FR. Los nuevos estados, preocupados por la estabilidad interna y sin apenas cuadros militares, prefirieron en primera instancia la firma de acuerdos bilaterales con la Federación. A principios de 1992 se hizo general, sin embargo, la asunción de que los problemas de defensa debían encararse en el marco de la CEI. Con una sola excepción —la de Turkmenistán—, las repúblicas centroasiáticas firmaron en mayo de ese año el acuerdo de seguridad colectiva.

Elemento singularizador de la situación en Kazajstán fue la presencia de armas nucleares estratégicas. Los iniciales compromisos de desnuclearización se vieron truncados en beneficio de una política más bien ambigua. Esto aparte, en la primavera de 1992 Kazajstán asumió un control pleno sobre los efectivos y las instalaciones presentes en su territorio. En marzo de 1993 firmó con la FR un ambicioso acuerdo de cooperación militar que dejaba abierto el camino a la creación de una zona de defensa conjunta, sin descartar la configuración de unidades militares mixtas.

Kirguizia no se dotó de unas fuerzas armadas propias ni de un Ministerio de Defensa. Pese a ello, en junio de 1992 asumió la jurisdicción sobre las unidades militares existentes en su territorio. Merced a un acuerdo firmado con la FR en octubre de 1992, las fuerzas de vigilancia de fronteras de esta última asumieron responsabilidades plenas en la defensa del territorio kirguiz. En abril de 1993 los dos estados ultimaron, por otra parte, un acuerdo de cooperación militar, no sin que Kirguizia subrayase su intención de que las tropas rusas abandonasen cuanto antes el país.

Por lo que a Tadzhikistán se refiere, desde un primer momento se hizo evidente la voluntad de buscar cooperación militar en la FR. Entre marzo y mayo de 1992 se hicieron sentir, sin embargo, los efectos de agudas turbulencias; cobró cuerpo entonces un gobierno de coalición que, aunque con mayoría comunista, incorporaba a miembros de otras fuerzas. Durante la segunda mitad del año, la 201 división motorizada rusa desempeñó un activo papel, no estrictamente militar; la oposición tadzhika acusó a los militares rusos de colaboración con las autoridades comunistas. En este clima, en noviembre de 1992 el gobierno de coalición se disolvió, en beneficio de un ejecutivo monocolor que no ocultó su dependencia militar con respecto a Rusia y Uzbekistán. La resistencia guerrillera siguió siendo importante, en especial en el Pamir.

Turkmenistán firmó con la FR, en junio de 1992, un

acuerdo que obligaba a la segunda a prestar su ayuda en la creación de un ejército republicano emplazado bajo mando conjunto. El número de efectivos militares presentes en Turkmenistán era de unos 60.000 en abril de 1993; de ellos una cuarta parte estaba bajo mando ruso, mientras que los restantes respondían a un mando conjunto. Aunque Turkmenistán fue la república centroasiática que con mayor claridad apostó por una sólida relación bilateral con la FR, ello no impidió que se hiciese sentir en el país una notoria influencia de Turquía.

En lo que a Uzbekistán atañe, en enero de 1992 estableció una «guardia nacional» que abrió el camino a la construcción de unas fuerzas armadas. Como quiera que en esta república existían visibles amenazas externas, procedentes de Tadzhikistán y de Afganistán, se realizaron claros esfuerzos para vincular a la FR con su defensa. Así lo testimonió la firma de acuerdos que contemplaban planes de movilización conjunta y maniobras ruso-uzbekas.

Las fuerzas armadas de la FR

Tras el golpe de agosto de 1991 cobraron cuerpo dos temores históricos de las fuerzas armadas soviéticas: el traspaso del poder a instancias ajenas al Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y el desmembramiento del estado plurinacional. Aunque el proceso no estuvo exento de problemas, el efecto sobre las fuerzas armadas no fue tan traumático como podía imaginarse: las estrecheces económicas exhibieron mayor relieve que los problemas ideológicos derivados de la desaparición de la URSS, de la ilegalización del PCUS o de una radical revisión de la historia. Las fuerzas armadas se mostraron incapaces de captar con prontitud las consecuencias de la «revolución de agosto». Cercenadas en sus fidelidades, quedaron, sin embargo, relativamente intactas en su estructura y mandos, al tiempo que desaparecían

muchos de los controles que en el pasado las habían colocado bajo estricta supervisión civil.

La «purga» operada en la cúpula militar en agosto de 1991 no acabó con los recelos sobre la lealtad de los responsables de las fuerzas armadas. De por medio se estaba verificando, de cualquier modo, un visible cambio de adhesiones auspiciado, en lugar central, por el presidente ruso, Yeltsin: en adelante las fuerzas armadas «soviéticas» estaban llamadas a perder su carácter de tales en beneficio de una «eslavización» de sus fidelidades. Como quiera que la política ucraniana pronto impuso trabas a la realización de ese proyecto, Yeltsin asumió un repliegue en beneficio de una abierta «rusificación» militar. El hecho de que un porcentaje notorio de los oficiales «soviéticos» fuesen rusos facilitó, sin duda, ese proceso, que a menudo se manifestó a través de un lenguaje cargado de agresividad al servicio de un nacionalismo de tonos cada vez más duros. Cuestionado por muchos militares, Yeltsin se presentaba a los ojos de otros como una tabla de salvación en la que se concitaban un renacido nacionalismo y amenazas sin cuento a la periferia.

Claro es que el proceso que acabamos de mencionar era dificultoso. Por lo pronto, afectaba a un estamento particularmente «ideologizado» y marcado por dos circunstancias: por un lado, la disolución de la URSS había creado en su seno imprevistas convulsiones, relacionadas con la ruptura de muchas relaciones entre el poder civil y el poder militar, con el desprestigio de la mayoría de las instituciones y con la difuminación del propio marco territorial de acción; por el otro, el núcleo de su misión histórica se había venido abajo, en ocasiones en beneficio de una manifiesta aproximación a la superpotencia rival. El más desestabilizador de cuantos problemas acosaban a las fuerzas armadas seguía siendo, con todo, la penuria económica. Los salarios no crecían al compás del coste de la vida, el déficit de viviendas era notorio, el sistema sanitario presentaba claras quiebras y muchos militares padecían los efectos de imprevistos traslados. La

aceleración de la retirada de la Europa central y oriental fue al respecto un factor decisivo. Aunque las autoridades realizaban grandes esfuerzos para contrarrestar esta situación, los problemas económicos configuraban un decisivo elemento de conflicto. La situación global no era la más propicia para encarar, por otra parte, una profesionalización que habría podido reducir muchas tensiones. La situación era tanto más delicada cuanto que la extensión de la objeción al servicio militar hizo que en la FR —y en otras repúblicas— la falta de personal fuese un problema endémico.

Otra fuente de discrepancias era la naturaleza de ese ente nebuloso que acabaron siendo las «fuerzas armadas de la CEI». A la luz de los escasos progresos, había quien pensaba que era fácil imaginar —como al cabo sucedió— que desapareciesen todas las estructuras militares comunes. A ello se agregaba que estaban pendientes de resolución muchas cuestiones relativas a la aplicación de los acuerdos de control de armamentos y que los diferentes estados se disponían acaso a seguir caminos distintos en la busca de alianzas con claras repercusiones militares. Había que destacar, además, la dramática situación de la industria de defensa en todas las repúblicas. La descapitalización era evidente, el desempleo se extendía y apenas se adoptaban medidas correctoras. La conversión de la industria militar era una operación visiblemente fallida que algunos gobiernos intentaban enderezar con las divisas procedentes de la venta de armas. A duras penas se adivinaba, entre tanto, de qué manera los restos del complejo industrial-militar de antaño podían atender a las demandas de creación de un ejército tecnológicamente avanzado sin darle la puntilla a la economía civil.

Hay que llamar la atención, en fin, sobre otro fenómeno en ascenso: un renacimiento militar asociado con el auge nacionalista. Parece como si para algunos el objetivo hubiese sido contentar a los militares a través de su imbricación en movimientos de exaltación nacional que, en otro plano, procuraban alejar a la población de problemas políticos, econó-

micos y sociales. Algunas de las reacciones del presidente ruso —como su toma de posición, en junio de 1992, ante el conflicto moldavo— remitían a ese nacionalismo adobado de ribetes militaristas. Las presiones militares bien podían desempeñar también un papel de relieve, por cierto, en determinadas decisiones de política exterior.

Problemas sociales y planes de conscripción

Una rápida descripción de los problemas sociales y laborales de los militares profesionales debe empezar por recordar la precaria situación en materia de vivienda. A principios de 1993, el ministro de Defensa ruso, Pável Grachov, estimaba en 120.000 los militares que carecían de una vivienda digna y avisaba de la posibilidad de que la cifra se situase en 400.000 en 1995 por efecto, ante todo, de la repatriación de efectivos. Ni los 60.000 apartamentos entregados en 1992 ni el licenciamiento de oficiales habían mitigado el problema. El ritmo de construcción de viviendas era lento, el abastecimiento de materiales resultaba cada vez más difícil, la calidad de las obras muy deficiente, y no faltaban recelos de los poderes locales. Para resolver el problema de la vivienda se reclamó, en primer lugar, el concurso de la ayuda exterior. En 1990 el gobierno alemán acordó destinar más de 7.000 millones de marcos a la construcción de viviendas para los militares soviéticos que debían abandonar Alemania; el grueso de la inversión se concentró en Ucrania y Bielorrusia. Los EE UU y algunos países escandinavos contrajeron también algunos compromisos al respecto. El segundo «remedio» invocado fue la asignación a la construcción de viviendas de los ingresos derivados de la venta de equipos militares. Otro dato decisivo era el licenciamiento de oficiales y suboficiales. Grachov señaló que en 1995 debía reducirse en nada menos que 270.000 el número de aquéllos. Otras estimaciones hablaban de 40.000-50.000 bajas por año. Aunque las reducciones

afectaban en primer lugar a los más veteranos, también alcanzaban a militares jóvenes. La posesión de conocimientos técnicos hizo que en muchos casos un trabajo civil tuviese mayor interés, con los efectos imaginables en términos de «descapitalización» de las fuerzas armadas. Pese a que los salarios experimentaron sucesivos incrementos, no parece que compensasen, por otra parte, los efectos de la aceleradísima inflación. La reducción de las posibilidades económicas auguraba crecientes problemas que también tenían que afectar a la industria de defensa; según una interpretación, una de las estrategias «salariales» desplegadas en 1992 en la FR por el equipo de Gaidar consistió en mejorar de manera sensible los ingresos de los militares profesionales colocando a éstos en una situación claramente mejor que la de los trabajadores de la industria de defensa, con objeto de evitar la formación de una «gran coalición» de oposición en la que participasen ambos grupos. De cualquier modo, la grave situación económica obligó al gobierno a optar entre una mejora de las condiciones de vida de los militares y el mantenimiento de los niveles de armamento; aunque el primer objetivo debía reducir muchos descontentos, su imposición podía realizarse a costa de un hundimiento de la industria de defensa. Fuesen las cosas como fueren, se hizo sentir una creciente participación de militares en actividades de comercio ilegal.

En otro ámbito, los problemas para llevar a la práctica los planes de reclutamiento no se redujeron en la FR después de agosto de 1991. En el otoño de 1992 sólo un 29% de los afectados por la conscripción estaba en condiciones de realizar el servicio militar; el 71% restante quedaba exento o se acogía al sistema de prórrogas. Ese 29% apenas satisfacía la mitad de las necesidades de personal de las fuerzas armadas, con un déficit, a finales de 1992, de nada menos que 986.000 hombres (este dato debe situarse, claro, en el marco de un sistema en el que rara vez las unidades se hallaban a pleno rendimiento). Conforme a una previsión, el déficit de personal debía acentuarse, habida cuenta de los efectos de la

reducción del período en filas de 24 a 18 meses. La negativa a servir en filas seguía siendo, por lo demás, un factor decisivo. Después de agosto de 1991, la FR padeció agudas tensiones nacionales que en algunos lugares —así, Tatarstán— se plasmaron en campañas encaminadas a recabar de los conscriptos que no acudiesen a filas. La dureza de la vida militar y los escasos medios para penalizar esas conductas fueron acaso un estímulo adicional de las mismas. Una estimación referida a la primavera de 1992 señalaba que en la FR la «insumisión» se había multiplicado por dos con respecto a los niveles del año anterior, y cifraba en sólo un 7% el cumplimiento de los planes de reclutamiento en Moscú. En un escenario como éste, en el que se redujo la presencia de soldados procedentes del medio urbano y pareció acrecentarse el porcentaje de conscriptos con antecedentes penales, no puede sorprender que ganasen terreno las voces que reclamaban una profesionalización de las fuerzas armadas.

La crisis de la industria militar

Tras el desmembramiento de la URSS, el grueso de su industria de defensa quedó en manos de la FR. En su territorio estaba del orden del 75% de las instalaciones y del personal de la industria militar, frente a un 15% que se encontraba en Ucrania; el 10% restante se lo repartían las otras repúblicas. Pese a lo anterior, la actividad de la industria se vio fragmentada, en un proceso agudizado por tendencias generales del sistema económico. El golpe de agosto «aceleró la disolución de los lazos entre las industrias de defensa y el centro. La FR y otras repúblicas reivindicaron el control sobre las empresas estatales —incluidas las del sector de defensa— y crearon un enorme caos en el sistema de asignación de recursos».[1]

[1] Peter Almquist, «Arms producers struggle to survive as defense orders shrink», en *RFE/RL Research Report* (nº 25, 1993), pág. 34.

Junto a este proceso se verificó otro de similar importancia: la rápida reducción experimentada por el gasto en defensa y por los pedidos realizados a la industria militar. Dada la inflación, las revisiones de las cifras, la dificultad de evaluar en dónde se incluyen algunas partidas y las mutaciones de las realidades político-geográficas, las estimaciones sobre el volumen del gasto militar son extremadamente dispares. Por citar algunos datos al respecto, el SIPRI *(Stockholm International Peace Research Institute)* estimó que el gasto en defensa de la URSS en 1991 ascendió a algo menos del 8% del producto nacional bruto (PNB). En los primeros meses de 1992, y ya bajo los efectos de una acelerada inflación, la FR identificó su gasto militar para el año citado en un 16% del presupuesto estatal. Sopesando los efectos de la inflación, los cálculos del SIPRI apuntaban que en 1992 el gasto militar ruso fue un 45% del correspondiente a la URSS en 1991 (estimaciones de la CIA rebajan el porcentaje a un 33%), o el equivalente a un 6-6,5% del PNB. Por lo que respecta a 1993, el equipo gubernamental de Gaidar se había comprometido a mantener los niveles de 1992, algo que al parecer también hizo Yeltsin.

Los datos sobre reducciones en los pedidos de armamento y en los recursos en investigación y desarrollo (I&D) son también ilustrativos de una tendencia a la baja en el gasto; no debe olvidarse, sin embargo, que algunos de los procesos abiertos, como la destrucción de distintos tipos de armas, reclamaban ingentes recursos. Sean las cosas como sean, los pedidos estatales de armamento se redujeron en un 32% entre 1990 y 1991, y en un 68% entre 1991 y 1992. Los recursos destinados a I&D también menguaron, bien que de forma menos espectacular. Según una estimación, en precios constantes de 1991, los 16.000 millones de rublos destinados a estos menesteres en 1989 debían reducirse a 10.000 millones en cada uno de los años que median entre 1992 y 1995.

[2] *SIPRI Yearbook 1993* (Oxford University, Oxford, 1993).

Un indicio más de la crisis fueron las reducciones operadas, en términos relativos, en los salarios de los trabajadores de la industria de defensa. En diciembre de 1992, el salario medio en ésta era de unos 11.500 rublos, frente a los 18.400 del conjunto de la industria. Con datos como éste, y dada la reducción global de la producción, no puede sorprender que muchos trabajadores dejasen sus puestos y se procurasen empleos en la economía civil. Según una estimación, en 1992 sobraban en la industria militar 1.500.000 empleos; en ese mismo año se apuntaba que un 21% de las industrias del ámbito de la defensa se hallaban en abierta bancarrota. La crisis de la industria de defensa se vio acompañada también, en la FR, de la aparición de estructuras de carácter independiente. La más influyente fue sin duda la «Unión rusa de directivos y empresarios de la industria», encabezada por Arkadii Volskii. Desde la primavera de 1992 esta organización, con sus «industrialistas», asumió un activo papel en la vida política: a través de la Unión Cívica ejerció una constante presión con objeto de preservar el armazón de la industria de defensa. En su momento se interpretó que el nombramiento de Viktor Chernomirdin como primer ministro, en diciembre de 1992, reflejaba el creciente predicamento de las opiniones de la Unión Cívica.

El discurso económico de los «industrialistas» se asentaba en la idea de que, pese a su crisis, la industria de defensa era el único sector de la economía capaz de satisfacer las necesidades de la población y de propiciar la innovación tecnológica. Desde este punto de vista, la decisión oficial, durante 1992, de recortar las ayudas a la industria de defensa no podía sino contribuir a la quiebra de la única parte recuperable de la economía. Según los «industrialistas», la falta de preparación para el «mercado» que exhibía la industria militar, y la ruptura de muchos lazos interrepublicanos, obligaban a acudir en socorro de la primera. Esta posición tuvo reflejo en dos ámbitos: el de la conversión de la industria militar y el de las exportaciones de armas.

Por lo que a la conversión respecta, la polémica entre los «reformistas radicales» —partidarios de una rápida y profunda conversión— y los «industrialistas» —reacios a aceptar la subordinación de la industria militar a las necesidades civiles— seguía abierta. La política oficial se vio teóricamente marcada por tres objetivos: la mejora de las condiciones de la economía civil, la producción de bienes de alta tecnología capaces de competir en los mercados internacionales y la necesidad de mantener el potencial científico y técnico, previa asunción de que sólo una economía civil fuerte permitiría preservar unas fuerzas armadas competentes. En relación conflictiva con estos objetivos, los puntos de vista de los «industrialistas» se fueron imponiendo. Para éstos, el ritmo de la conversión debía aminorarse a la espera de que progresasen otros aspectos de las reformas; el estado estaba obligado a mantener los créditos a las empresas, y los trabajadores de la industria de defensa debían recibir garantías frente al desempleo.

A la luz de lo ocurrido en la etapa de *perestroika*, y de la prosecución de muchas políticas, no puede sorprender que ninguno de los objetivos de la conversión se viese satisfecho. Ni siquiera el hecho de que la producción civil de la industria militar creciese del orden de un 10% en 1992 provocó optimismo alguno, habida cuenta de los ingentes costes de la operación. La consolidación de una FR independiente coincidía, por lo demás, con la búsqueda, poco fructífera, de nuevas formas de financiación, entre las cuales se contemplaba, al parecer, el desvío de parte de los beneficios de las exportaciones de armas. No faltó quien subrayó el riesgo de que, así, se ratificasen viejas tendencias. Si las exportaciones de armas permitían la obtención de divisas fuertes con las cuales, a su vez, se adquirían en el exterior «bienes civiles» de mayor calidad que los generados en virtud de las operaciones de conversión, lo único que se estaba haciendo era mantener viejas líneas de producción sin mayores efectos saludables para el conjunto de la economía.

En lo que atañe a las exportaciones de armas, lo primero que hay que recordar es que la FR se avino a respetar, con onerosas consecuencias económicas, los embargos decretados contra Irak, Libia y la «Federación Yugoslava». Por añadidura, asumió la pérdida de muchos de sus compradores tradicionales —los viejos aliados europeos, algunos países del Tercer Mundo— y se vio obligada a encarar las consecuencias de un mercado en abierta recesión.

Un cálculo referido a la URSS identificó una reducción de nada menos que un 55% en sus exportaciones en 1991. Pese a ello, hay quien piensa que los ingresos reales obtenidos por la URSS, y por la FR, en concepto de exportación de armas apenas experimentaron cambios; aun cuando la URSS habría vendido armas por valor de 14.000 millones de dólares en 1990, de 8.000 millones en 1991 y de 3.000-4.000 millones en 1992, en el primero y el segundo de los años mencionados los ingresos reales no habrían excedido los 4.000-5.000 millones de dólares, y los «impagados» habrían estado, por tanto, a la orden del día. La reducción en las exportaciones habría afectado ante todo a las dirigidas a estados morosos, con lo que los ingresos efectivos apenas habrían experimentado mermas. En este marco no es fácil evaluar en qué medida el descrédito creciente de las armas «soviéticas» —unido a la incapacidad para cumplir las cláusulas temporales de los contratos y proporcionar repuestos— ha incidido en el volumen y en la naturaleza de las exportaciones.

Algunos especialistas han subrayado, por otra parte, la desorganización característica de las instancias encargadas de las exportaciones. Frente a lo que sucedía antes de 1991, muchos han sido en la FR los agentes ocupados en estos menesteres. Esto aparte, en el futuro pueden abrirse procesos inesperados. Así, la asesora presidencial Galina Starovóitova ha reivindicado para las empresas del sector de defensa el derecho a negociar directamente con sus contrapartes extranjeras, mientras que el general Kobets ha reclamado el mismo

derecho para las fuerzas armadas; no se olvide que en febrero de 1992 el propio Yeltsin emitió una autorización para que la fuerza aérea vendiese 1.600 aviones. Si medidas como las sugeridas ganan terreno, a la pérdida de control sobre las exportaciones puede seguir tanto una lucha fratricida entre instituciones como una creciente agresividad de la FR en los mercados internacionales.

Sean las cosas como sean, no han dejado de crecer las presiones encaminadas a que la industria militar recupere pasadas actividades y oriente el grueso de su producción a la exportación, con la vista puesta en la obtención de divisas. Este planteamiento, cuya lógica económica es discutible —muchos estiman que no conduce sino a la reaparición de viejos «cuellos de botella»—, más bien parece obedecer a los intereses corporativos de las grandes industrias productoras de armamento.

En la mayoría de los casos debe albergarse la sospecha de que los beneficios serían rápidamente «privatizados», y en modo alguno se extenderían al conjunto de la vida económica. Sería un error pensar, sin embargo, que sólo los «industrialistas» se han dejado llevar por semejante forma de ver las cosas. El propio Yeltsin ha apostado con fuerza por conferirle un renovado impulso a las exportaciones de armas. Otro tanto puede decirse del ministro Grachov, quien en más de una ocasión actuó como «corredor» de la industria de armamentos. El mismo alcalde de San Petersburgo, el «reformista» Sobchak, ha defendido abiertamente una expansión de las exportaciones de armas. Claro que acaso el mejor reflejo de estas ideas es la propuesta que el «liberal» ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Kózirev, parece realizó al gobierno norteamericano a principios de 1993: como forma de ayuda indirecta a las reformas, los EE UU y otros países debían comprometerse a abrir a las armas rusas mercados hasta entonces cerrados.

El nuevo incardinamiento internacional

En las relaciones exteriores de la FR, y de los estados antecesores, se han manifestado siempre dos grandes tendencias, que llamaremos «occidentalista» y «orientalista». Sobre el papel no hay duda de que los «occidentalistas» han dominado la diplomacia en las primeras etapas de la Rusia independiente. Su intención ha sido clara: hacer lo posible para integrar el país en el Norte desarrollado, aun a costa de acatar imposiciones y caprichos. Los occidentalistas han dado por bueno el «nuevo orden internacional» anunciado en 1991 por el presidente norteamericano Bush, con consecuencias diversas. Entre ellas se cuentan el acatamiento acrítico de los planes del Fondo Monetario y la apertura de la economía a los capitales externos. Muchos de los enunciados del «nuevo pensamiento» se han incorporado a esta escuela de política exterior que, con Kózirev a la cabeza, ante todo ha buscado eludir tensiones con «Occidente». Es verdad, sin embargo, que los «occidentalistas» han propiciado soluciones negociadas para los conflictos que se hacían sentir en la periferia de la vieja URSS —Moldavia, el Cáucaso, el Asia central— y que no han apostado por fortalecer una potencia regional interventora.

El resurgir del nacionalismo ruso se ha acompasado con una contestación de las políticas occidentalistas. Los «orientalistas» han tomado nota de los desengaños experimentados por la política rusa en su flanco occidental y han apostado con claridad por una diplomacia en la que Rusia aparecía como una eventual mediadora entre el Norte y el Sur. Al efecto, tanto han defendido una «unión euroasiática» como han postulado una aproximación al mundo árabe y a las potencias asiáticas, limando asperezas con China y manteniendo la tradicional relación con la India. Han alentado, por añadidura, la preservación de una influencia, bien que no agresiva, en el Tercer Mundo. Es cierto, sin embargo, que la visión «orientalista» ha colocado a la FR en el centro del

espacio geoestratégico antes cubierto por la URSS, y le ha otorgado a Rusia una función de «gendarme regional», con el derecho y el deber de actuar allí donde estime que sus intereses están siendo violentados.

Si la perspectiva de una imposición de los «occidentalistas» probablemente remitía a una insorteable dependencia exterior de la FR, el horizonte de un ascenso «orientalista» debía asociarse con el surgimiento paralelo de una potencia autoritaria y expansionista. Tal y como ya hemos sugerido, la ubicación de una y otra posición reclama de una distinción geográfica entre lo que se ha dado en llamar el «extranjero cercano» y el «extranjero lejano».

a) *El «extranjero cercano»: los problemas de una potencia regional.* La disolución de la URSS y la aparición de la CEI crearon un nuevo entorno estratégico: por razones obvias, la FR mantenía una relación especial con los estados recién independizados. En el ámbito militar; y en otros, esa relación estaba por definir: si en unos casos se hacían notar tendencias hacia la configuración de la FR como una potencia regional, en otros parecía postularse un régimen de respetuosos y equilibrados vínculos. Si en unos casos era evidente que desde Rusia se daba poco crédito a la legitimidad histórica y a la independencia económica de los nuevos estados, cuando no se consideraba que debían reintegrarse a un espacio común, en otros los imperativos de la política internacional aconsejaban mantener cordiales relaciones con ellos.

Aunque la tensión entre esas visiones no se ha resuelto, la manifestación de conductas adscribibles a las primeras posiciones hizo que los vínculos de la FR con varios de los estados de la periferia de la vieja URSS se enrareciesen. Así, la calma general que caracterizaba a las relaciones de la Federación con lo que más adelante llamaremos «extranjero lejano» se veía contrarrestada por problemas diversos en el «extranjero cercano». A este respecto nunca se subrayará lo

suficiente la importancia que para la FR tenían los estados ubicados en las fronteras occidentales de la URSS: en ellos se concentraba buena parte de los cerca de 25 millones de rusos que vivían fuera del territorio de la Federación, cuyas fronteras con los países que nos ocupan eran, además, una fuente de conflictos.

En este marco hay que reseñar un dato: el destino de las tropas soviéticas fue distinto según las repúblicas. Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán decidieron asumir un control directo sobre todas las tropas presentes en sus territorios, mientras el control recayó sobre la FR en las tres repúblicas del Báltico y en las tres del Cáucaso; en Moldavia y en el Asia central la situación era, entre tanto, ambigua, aunque en el caso de las repúblicas centroasiáticas la FR controlaba, de hecho, la mayor parte de los procesos. Allí donde se reclamó abiertamente una retirada de tropas el ritmo de ésta era dispar: progresaba sin problemas en Lituania, lo hacía con altibajos en Estonia y Letonia, había concluido en Azerbaiyán en 1993, debía ultimarse en 1995 en Georgia y estaba sujeta a una compleja trama de acuerdos en Moldavia. En Armenia y Tadzhikistán las fuerzas políticas gobernantes parecían mirar con buenos ojos la presencia permanente de contingentes militares rusos, mientras que la situación era de difícil clasificación en Kirguizia, Turkmenistán y Uzbekistán.

La progresiva consolidación de un nacionalismo ruso guardaba una relación estrecha con la postulación de un creciente papel de la FR en el «extranjero cercano». Los esfuerzos de recuperación de un sueño imperial reclamaban la fijación de una esfera de influencia, y a este respecto es significativo que buena parte de la iniciativa asumida por la FR en su «extranjero cercano» corriese a cargo de las fuerzas armadas. La doctrina militar de la Federación aprobada en noviembre de 1993 poco menos que institucionalizaba los derechos de ingerencia e intervención en el «extranjero cercano», al tiempo que muchas de las polémicas con las nuevas autoridades republicanas tenían como objeto el reparto

de los efectivos, los equipos y las instalaciones de las fuerzas armadas de la antigua URSS.

Sería un error pensar que la demanda de una mayor agresividad en la «periferia» era privativa de posiciones extremas. Como en otros ámbitos, el propio Yeltsin se había dejado llevar por ella en ocasiones. Así lo testimonian sus declaraciones, en la primavera de 1992, en relación con el conflicto moldavo, o las críticas dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores, Kózirev, en otoño del mismo año, por la ausencia de una política clara en relación con los derechos de los rusos residentes en el «extranjero cercano». En su momento se interpretó que algunos cambios, y en particular la creación de instancias específicamente encargadas de las relaciones con las viejas repúblicas soviéticas, se proponían sustraer al control de Kózirev —un «occidentalista» mesurado en relación con la «periferia»— la política relativa al «extranjero cercano».

En lo que a nosotros interesa, la más importante de las cuestiones era, sin duda, la relativa a las operaciones de «mantenimiento de la paz» desplegadas por unidades militares de la FR. La propia terminología utilizada reflejaba los problemas: la palabra rusa que designa el objetivo de esas operaciones es *mirotvorcheski*, e identifica el proceso de «creación de paz» *(peacemaking,* en la terminología anglosajona), evidentemente más ambicioso que el simple «mantenimiento de la paz» *(peacekeeping).* La «república del Dniestr» y Osetia del Sur, en Georgia, fueron los escenarios principales de las operaciones que nos ocupan. En la primera, el XIV Ejército ruso intentó asumir, en el verano de 1992, un papel de fuerza de paz, visiblemente rechazado, sin embargo, por las autoridades moldavas, ucranianas y rumanas, para quienes era evidente su relación con la citada «república del Dniestr»; a la postre el contingente de paz quedó conformado por unidades rusas y moldavas. En Osetia del Sur el despliegue de las fuerzas de paz —rusas, georgianas y de las dos Osetias, la del Norte y la del Sur— se produjo a media-

dos de julio de 1992; pese a las pretensiones rusas, ningún acuerdo de la CEI se podía invocar al respecto, toda vez que Georgia no era miembro de la Comunidad.

En los dos casos citados se hicieron notar avatares semejantes: la actuación de las fuerzas rusas se produjo al margen, y a menudo en contra, de los acuerdos alcanzados en el marco de la CEI, en un escenario en el que su neutralidad era dudosa. Los gobiernos moldavo y georgiano habían reclamado en repetidas ocasiones, sin éxito, que las tropas rusas fuesen reemplazadas por contingentes de la CSCE o de la ONU. El intento de Moscú de presentar a sus tropas como «cascos azules», para así asimilar su comportamiento al de las unidades de la ONU, en modo alguno se veía sustentado por acuerdos internacionales que dibujasen reglas directoras de su actuación y una genuina neutralidad de su parte. En los hechos, la mayoría de quienes en su momento hemos descrito como «orientalistas» no veían con buenos ojos una «intromisión» de instancias como la CSCE o la ONU en la resolución de conflictos en el «extranjero cercano».

b) *El «extranjero lejano»: ¿continuidad del «nuevo pensamiento»?* En 1992 y 1993 la política de la FR lejos de las fronteras de la vieja URSS mantuvo un tono semejante al de los años finales de la era de Gorbachov. La aquiescencia con los intereses de las potencias occidentales siguió siendo un dato consistente, manifiesto a través de un comportamiento moderado en los organismos internacionales, una extrema contención en el Tercer Mundo y la prosecución de la línea marcada por Gorbachov en el ámbito del control de armamentos. Todos estos aspectos parecían subordinarse a un único objetivo: la obtención de ayuda económica y tecnológica occidental.

Por añadidura, se le había imprimido un renovado impulso a la retirada de las tropas presentes en la Europa central y oriental y en algunos países del Tercer Mundo. Al cabo de negociaciones más o menos arduas, que tenían por

objeto principal indemnizaciones económicas, las tropas que la URSS había colocado en Hungría y Checoslovaquia abandonaron estos países. Otro tanto sucedió, de forma más lenta, en Polonia. Pese a que Grachov lamentó en su momento el acuerdo de retirada de tropas firmado con la República Federal de Alemania (RFA), en diciembre de 1992 dio por buena una aceleración en la operación. Aunque las noticias al respecto eran confusas, la mayoría de los contingentes militares presentes en Cuba, Vietnam o Angola parecían haber retornado a la FR.

Los cambios operados en la organización militar en los años anteriores habían tenido al menos tres efectos. En primer lugar, la desaparición del «escudo protector» configurado por los estados miembros del Pacto de Varsovia y por las repúblicas soviéticas más occidentales había obligado a reforzar los distritos militares de Moscú y San Petersburgo, convertidos en «primera línea» de un hipotético frente. En segundo término, la manifestación de temores concentrados en un «Sur» configurado en torno a Irán, Afganistán, Pakistán o Turquía parecía haberse traducido en una voluntad de fortalecer el distrito militar del Cáucaso norte. En tercer lugar, en fin, las pérdidas de territorio operadas en los mares Báltico —independencia de Estonia, Letonia y Lituania— y Negro —independencias de Ucrania y de Georgia— habían generado nuevos problemas a las flotas respectivas. Esos problemas tenían una importancia relativa, toda vez que estamos hablando de dos mares cerrados. Aun así, el aislamiento que, en el Báltico, pasó a padecer el *oblast* de Königsberg/Kaliningrad era un asunto delicado. Por lo que al Negro atañe, la mayoría de las bases navales de importancia habían quedado del lado de Ucrania, de tal suerte que se imponía una negociación al respecto.

Problemas como los mencionados ilustraban que las fuerzas armadas de la FR tenían que encarar una situación «técnicamente» difícil. A la escasez de personal se agregaban las dificultades creadas por las deficiencias en el abaste-

cimiento o por los ingentes problemas de transporte. Muchas unidades que retornaban de la Europa central y oriental habían perdido toda capacidad de combate. La FR sólo había heredado, por otra parte, un 37% de las superficies de entrenamiento militar, con lo que también en este ámbito la situación era difícil. No faltaban informaciones que hablaban de buques de guerra que llevaban meses pendientes de una reparación, de la cancelación de trabajos en la mitad de los navíos en proceso de construcción, o de una reducción sensible en el número de horas de vuelo de los pilotos. En muchos casos se hacían sentir también los efectos del abandono de la carrera militar de profesionales cualificados. A estos problemas hay que sumar los derivados de las deficiencias de armas y equipos, tanto mayores cuanto que, al parecer, las unidades mejor pertrechadas eran las que habían quedado bajo control bielorruso y ucraniano. Esta situación suscitó, entre otras respuestas, la decisión de crear fuerzas de creciente movilidad que debían estructurarse en dos grandes componentes: una fuerza de reacción inmediata y otra de despliegue rápido. Su ubicación más probable era la configurada por el Cáucaso norte y la región del Volga-Ural; si en el primer caso se adivinaba una relación con las «amenazas meridionales», en el segundo se apreciaba también la voluntad de contrarrestar eventuales movimientos secesionistas en áreas como Tatarstán o Bashkiria.

Tal y como ya hemos apuntado, la conciencia de los escasos beneficios derivados de la connivencia con las potencias occidentales provocó, al cabo, una reacción que no sólo afectó a fuerzas marcadamente nacionalistas: no está de más recordar los gestos, relativamente frecuentes, de Yeltsin encaminados a compensar la aquiescencia demostrada para con los intereses occidentales. Baste con citar la cancelación de su viaje a Japón en septiembre de 1992 —de por medio estaban presiones relativas a la devolución de las islas Kuriles— o el viaje realizado a China en diciembre del mismo año. Otro tanto puede decirse de las distancias que la FR

acabó por mostrar en relación con algunas de las acciones norteamericanas contra Irak, con respecto a una intervención internacional en Bosnia o en lo que atañe a una eventual ampliación de la OTAN en la Europa central. Yeltsin recurrió más de una vez, en fin, a un duro lenguaje de crítica de las políticas occidentales, y en particular de la retórica que rodeaba a las magras ayudas económicas y tecnológicas.

Una conclusión tentativa

En septiembre de 1993 el presidente Yeltsin, en una acción visiblemente anticonstitucional, procedió a disolver el parlamento de la FR. Su decisión abrió el camino, en los primeros días de octubre, a un sinfín de enfrentamientos callejeros en la ciudad de Moscú y, al poco, a una violenta acción de unidades militares contra el edificio central del parlamento, la llamada «Casa blanca».

La ostentosa utilización de las fuerzas armadas en las jornadas de octubre, y su papel decisivo a la hora de otorgarle un triunfo, siquiera provisional, a Yeltsin han podido convertirse en un oneroso tributo para el presidente. Una activa «militarización autoritaria» de la vida política en la FR —que acaso es, sin necesidad de invocar presiones externas, el proyecto del propio Yeltsin— puede ganar terreno, en particular, con rapidez. Aun a sabiendas de que existen otros horizontes, ya nos hemos referido a la poderosa presencia de tensiones que apuntan a un renacimiento nacionalista con ribetes militares. La situación es propicia, por cierto, para que en un solo proyecto se den cita posiciones «tradicionalistas», hechizadas por la reconstrucción de decaídos imperios, y posiciones «rupturistas», que acaso perciben en la apuesta por un renacimiento militar una vía rápida hacia la profesionalización de las fuerzas armadas y la resolución de acuciantes problemas laborales y sociales. En el plano interno, la consolidación de esta alianza puede ser a la vez causa y

efecto del reforzamiento de las ya de por sí poderosas tendencias autoritarias que se hacen sentir en la vida política rusa (y en la de países aledaños). Sin necesidad de imaginar, aun cuando tampoco conviene descartarlas, rupturas traumáticas del juego político, en muchos lugares el poder parece estar recayendo en formaciones que han hecho de la defensa de parte de los privilegios de la *nomenklatura* un elemento central de sus reclamos. Así las cosas, el afloramiento de rasgos del viejo orden burocrático —en confusa relación con un sinfín de elementos novedosos— puede ser un dato sustantivo en los próximos años.

Si la perspectiva que manejamos acaba ganando terreno, las consecuencias imaginables son muchas. Una de ellas puede ser el fortalecimiento de una industria de defensa que intentaría asumir dos cometidos: el uno, tan tradicional como irrealizable, es el de locomotora tecnológica del resto de la economía; el otro, más bien novedoso, estriba en la ampliación de su producción de armas cara a la exportación, en la confianza, ilusoria, de que las divisas obtenidas permitirán un inmediato resurgir económico. Con una economía como la de la FR, la consolidación del horizonte que nos ocupa está llena de riesgos; el de los tributos políticos de la operación descrita no es precisamente el menor.

Pero si ésa es una posible consecuencia «interna» de un renacimiento nacional-militar, hay que reseñar también los presumibles efectos «externos». Uno habría de ser, a buen seguro, la ratificación del papel de «gendarme regional» que muchos reservan para la FR. Una segunda consecuencia bien podría estribar en el despliegue de una política exterior independiente en lo relativo a lo que hemos llamado «extranjero lejano»; de la mano de esa política —no necesariamente indeseable en sí misma—, muchos de los términos del actual orden internacional estarían llamados a entrar en crisis. Al amparo de un porvenir como éste no puede sorprender que algunos analistas auguren el renacimiento de fórmulas que inequívocamente remiten a la «guerra fría» y sus reglas.

No es fácil, por lo demás, identificar cuáles serían las reacciones occidentales —de todo habría— ante una situación como la descrita.

Un elemento más, el último, del que hay que hacer mención es el relativo a la problemática condición de la entidad invitada a acoger, en papel central, tensiones como las que estamos apuntando. Aunque muchos datos invitan a concluir que esa entidad tiene que ser, por fuerza, la FR de estas horas, no faltan opiniones que estiman muy probable un renacer del proyecto de una confederación eslava entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Como es fácil comprender, la consolidación de ese proyecto tendría importantes consecuencias militares. Claro es que, en un sentido contrario, tampoco faltan los especialistas que prefieren estudiar las consecuencias de un desmembramiento interno de la FR o de la propia Ucrania. Como se ve, la situación de ahora no es, en lo que a predicción del futuro respecta, mucho mejor que la de tiempos pasados.

BIBLIOGRAFÍA

Muy pocos estudios se ocupan, con carácter específico, de la política exterior de la Federación Rusa y de los demás estados herederos de la Unión Soviética. Mencionemos, eso sí, el trabajo de Suzanne Crow, *The making of foreign policy in Russia under Yeltsin* (RFE/RL Research Institute, Munich, 1993). Algunas claves sobre problemas concretos se encontrarán en los libros de Milan Hauner, *What is Asia to us? Russia's Asian heartland yesterday and today* (Routledge, Nueva York, 1992), y Gueorguii Vachnadze, *Goriachie tochki Rossii* (Kniga LTD, Moscú, 1993). El primero da cuenta de la importancia del espacio siberiano, mientras que el segundo constituye una interesante guía de conflictos.

El papel de las fuerzas armadas en los sistemas de tipo soviético se analiza en los libros de Timothy J. Colton, *Commissars, commanders, and civilian authority. The structure of Soviet military politics* (Harvard University, Londres, 1979); Timothy J. Colton y Thane Gustafson (dirs.), *Soldiers and the Soviet state* (Princeton University, Oxford, 1990); Kenneth M. Currie, *Soviet military politics* (Paragon, Nueva York, 1992); Christopher N. Donnelly, *Red Banner* (Jane's, Coulsdone, 1988); Roman Kolkowicz y Andrzej Korbonski (dirs.), *Soldiers, peasants, and bureaucrats* (George Allen & Unwin, Londres, 1982); Bruce Parrott (dir.), *The dynamics of Soviet defense policy* (The Wilson Center, Washington, 1990); Jacques Sapir, *Le système militaire soviétique* (La découverte, París, 1987), y Harriet Fast Scott y William F. Scott, *The armed forces of the USSR* (Westview, Boulder, 1984).

Monografías que se interesan por la historia de las fuerzas armadas son los libros de R. Craig Nation, *Black earth red star. A history of Soviet security policy, 1917-1991* (Cornell University, Ithaca, 1992); David Holloway, *The Soviet Union and the arms Race* (Yale University, New Haven-Londres, 1983); William T. Lee y Richard Staar, *Soviet military policy since World War II* (Hoover, Stanford, 1986); Michael Mccgwire, *Military objectives in Soviet foreign policy* (The Brookings Institution, Washington, 1987), y Thomas M. Nichols, *The sacred cause. Civil-military conflict over Soviet national security, 1917-1992* (Cornell University, Ithaca, 1993).

De la importancia económica de las fuerzas armadas soviéticas se ocupan Ulrich Albrecht, *The Soviet armaments industry* (Harwood, Chur, 1993); Peter Almquist, *Red forge: Soviet military industry since 1965* (Columbia University, Nueva York, 1990); Carl G. Jacobsen (dir.), *The Soviet defence enigma: estimating costs and burden* (SIPRI-Oxford University, Oxford, 1987); R.T. Maddock, *The political economy of Soviet defence spending* (Macmillan, Londres, 1988), y Teresa Virgili, *El gasto en defensa en la Unión Soviética* (Facultad de Ciencias Económicas, Barcelona, 1983). Merecen mencionarse también un estudio sobre la composición nacional de las fuerzas armadas y una interesante y densa monografía de «sociología militar»: Alexander R. Alexiev y S. Enders Wimbush (dirs.), *Ethnic minorities in the Red Army* (RAND, Santa Mónica, 1988), y Ellen Jones, *Red Army and society* (Allen & Unwin, Londres, 1985). Sobre los cambios operados en las fuerzas armadas en la etapa de *perestroika*, pueden consultarse los trabajos de Alexander R. Alexiev y Robert C. Nurick, *The Soviet military under Gorbachev* (RAND, Santa Mónica, 1990); Coit D. Blacker, *Hostage to revolution. Gorbachev and Soviet security policy, 1985-1991* (Council on Foreign Relations, Nueva York, 1993); Susan L. Clark (dir.), *Soviet military power in a changing world* (Westview, Boulder, 1991); William C. Green y Theodore Karasik (dirs.), *Gorbachev and his generals* (Westview, Boulder, 1990); Dale R. Herspring, *The Soviet High Command 1967-1989* (Princeton University, Oxford, 1990); Gerard Holden, *Soviet military reform* (Pluto-TNI, Londres, 1991); Thierry Malleret y Murielle Delaporte, *L'armée rouge face à la perestroïka* (Complexe, Bruselas, 1991); Bruce D. Porter, *Red armies in crisis* (Westview, Boulder, 1991); Jacques Sapir, *L'armée soviétique et la perestroïka* (La documentation française, París, 1990), y VV AA, *Armiya i óbshestvo* (Progress, Moscú, 1990). Tres monografías sobre cuestiones económicas afines con las de Arthur J. Alexander, *The conversion of Soviet defense industry* (RAND, Santa Mónica, 1990); Christopher N. Donnelly (dir.), *Gorbachev's revolution. Economic pressures and defence realities* (Jane's, Coulsdon, 1989), y Henry S. Rowen y Charles Wolf Jr. (dirs.), *The impoverished superpower* (Institute for Contemporary Studies, San Francisco, 1990). Trabajos centrados en la situación posterior a 1991 son el libro de John R. Lampe y Daniel N. Nelson (dirs.), *East European security reconsidered* (The Wilson Center, Washington, 1993), y el directorio, realizado por N.I. Krotov y A.A. Tsiganov, *Voénnie Rossii* (RAU, Moscú, 1992).

Sobre los órganos de seguridad del estado soviético pueden consultarse los libros de Christopher Andrew y Oleg Gordievsky, *KGB* (Sceptre, Londres, 1991); Ronald Hingley, *The Russian secret policy* (Dorset, Nueva York, 1970); Amy W. Knight, *The KGB Police and politics in the Soviet Union* (Unwin Hyman, Londres, 1990), y Nadine Marie-Schwartzenberg, *Le KGB* (PUF, París, 1993).

II PARTE

¿QUÉ FUE EL «NUEVO PENSAMIENTO»?

En 1985 y 1986 se hicieron notar con fuerza en la Unión Soviética algunas ideas que —rastreables en los textos de los años anteriores y tributarias de las teorizaciones de los movimientos pacifistas occidentales— empezaron a conformar un cuerpo teórico. Entre los elementos de lo que al poco se dio en llamar «nuevo pensamiento» estaban el énfasis en la idea de interdependencia; la defensa de enfoques predominantemente políticos, frente a los tradicionales de cariz militar; la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de confrontación bélica, y la adopción de una actitud más flexible en lo que atañe a los acuerdos de control de armamentos.

El origen del «nuevo pensamiento»

Aunque el «nuevo pensamiento» (NP) tuvo sus primeras manifestaciones en los años setenta, fenómenos de diversa índole aceleraron su conversión en doctrina oficial. La reflexión sobre esos fenómenos no fue común entre los especialistas soviéticos, más inclinados a identificar una evolución tranquila de las ideas, apenas relacionada con procesos externos que habrían actuado como elementos impulsores, cuando no como causas directas, de los cambios doctrinales. Muchos especialistas occidentales se han cuidado, en cambio, de reflexionar sobre las causas del NP. Uno de los

análisis más recientes, el de Gerard Holden,[1] identifica tres grandes interpretaciones.

1. De acuerdo con la primera, el NP acarreó un genuino cambio de política: supuso el abandono de un enfoque privilegiador de los conflictos en beneficio de otro propiciador de una actuación más cooperadora. Así, perdieron terreno las teorías asentadas en el peso de las fuerzas económicas y en la naturaleza de clase de los estados, y otro tanto sucedió con las concepciones que reivindicaban un enfrentamiento global entre capitalismo y socialismo. En lugar de unas y otras se instalaron «valores universales» y un principio de «seguridad común». Desposeídos de su carácter de clase, los estados se han visto influenciados por un sistema internacional en el que no han dejado de ganar fuerza la multipolaridad y la diversidad.

Aunque para muchos este tipo de concepciones convergía con un sinfín de teorizaciones occidentales no marxistas, no faltaron otras interpretaciones. Así, para Kubálková y Cruicksank el NP era una «amalgama ecléctica de pensamiento normativo liberal, radical y marxista», y reflejaba una «nueva y antihegemónica (gramsciana) orientación estratégica para la dirección de la futura política exterior de una superpotencia debilitada».[2] Los impulsores de esta interpretación se interesaron también por las opiniones de un grupo de especialistas civiles que en la URSS conformaron lo que se dio en llamar «escuela mutualista». Para estos estudiosos, la actitud de la URSS en el pasado había contribuido a reforzar la carrera de armamentos, y el concepto de «equilibrio» era de escasa utilidad para el mantenimiento de la paz y la seguridad. La influencia de la «escuela mutualista»

[1] Gerard Holden, *Soviet military reform* (Pluto-TNI, Londres, 1991), págs. 8 y ss.

[2] Vendulka Kubálková y Albert Cruickshank, *Thinking new about Soviet «new thinking»* (University of California, Berkeley, 1989), pág. 260.

—a la que luego se incorporaron la sección de asuntos militares del Departamento Internacional del Comité Central del PCUS, la de control de armamentos del Departamento de Propaganda del mismo y el equipo de asesores del ministro de Asuntos Exteriores— se hizo notar, de forma singular, en muchas concepciones defendidas por los portavoces oficiales.

2. En una segunda interpretación, el NP aparece como una adaptación de la teoría a una política exterior que en sus concreciones había sido siempre más pragmática de lo que una primera lectura sugería. De su mano adquirían relieve problemas teóricos como los derivados de la existencia de las armas nucleares en su relación con la «guerra» o con la inevitabilidad del «comunismo». Stephen Shenfield ha subrayado el esfuerzo de adaptación de la teoría desplegado en los últimos años ochenta en la URSS. Desde su punto de vista, la política exterior soviética nunca utilizó la amenaza de guerra nuclear como un medio al servicio de la definitiva y mundial imposición del «comunismo».[3] Aunque el compromiso con la revolución y la lucha de clases nunca fue plenamente abandonado, los principios postulados en las últimas décadas —así, la «coexistencia pacífica»— reflejaban ya la adaptación a una práctica en la que se procuraba asegurar la no interferencia mutua entre estados capitalistas y socialistas. En el trasfondo de esta lectura se halla la idea de que, excepto en los años inmediatos a 1917, la URSS nunca desplegó una política exterior genuinamente revolucionaria: las concepciones teóricas recientes serían poco más que un intento de adaptación a esa realidad.

También hay que dar cuenta de las transformaciones decisivas que los arsenales, en particular los nucleares, estaban experimentando. Las tecnologías emergentes incrementaron sensiblemente las capacidades de las distintas armas, de tal

[3] Stephen Shenfield, *The nuclear predicament* (RIIA, Londres, 1987).

forma que un número mucho menor de éstas permitía satisfacer el mismo tipo de prestaciones. Ello hizo que fueran posibles, cuando no necesarias, reducciones significativas en los distintos tipos de armas. Así, las dos superpotencias se esforzaron por presentar como un elemento positivo de su política lo que en buena medida era una exigencia de los desarrollos tecnológicos. Como puede esperarse, los textos soviéticos —otro tanto sucedía con los norteamericanos— apenas se ocuparon de cuestiones como éstas, que le habrían restado credibilidad a las negociaciones de control de armamentos.

Los propios cambios de la estrategia militar soviética entendida en su sentido más estricto pueden enmarcarse en esta interpretación. MccGwire ha señalado que a principios de los ochenta la URSS empezó a tomar conciencia del desplazamiento hacia zonas meridionales, y de manera singular hacia el golfo Pérsico, de los previsibles escenarios de confrontación con los EE UU. El teatro tradicional de conflicto, la Europa central, perdía vigor y el horizonte de una ofensiva de la URSS en Europa se diluía en paralelo con el interés, decreciente, por las armas nucleares y los dispositivos ofensivos.[4]

3. La tercera y última interpretación asocia el NP con un inequívoco reconocimiento de la decadencia de la URSS. Aun cuando esta forma de ver las cosas comparte con las anteriores muchos elementos, merece atención singular por cuanto remite a una visión muy común en las teorizaciones que se ocupan del «final de la guerra fría». Holden, «ve en la guerra fría un conflicto genuino entre sistemas sociales, no concede tanta importancia al NP como ajuste de la teoría a la práctica, y en muchas de sus versiones contiene un resabio liberal de "realismo de poder" a la antigua».[5] En muchas ocasiones los análisis han conducido a negar que en los últimos años

[4] Michael MccGwire, «Rethinking war: the Soviets and European security», en *The Brookings review* (primavera de 1988).

[5] Holden, *op. cit.*, pág. 11.

ochenta se hayan verificado cambios reales en el comportamiento militar de la URSS. Este es el caso, por citar un ejemplo entre muchos, de la reflexión de Scott, quien subraya, refiriéndose al NP, que «nada hay de nuevo en sus expresiones. Los antecesores de Gorbachov habían desarrollado ya esas consignas para modificar las percepciones occidentales del poderío militar soviético. Lo que es nuevo es la campaña de relaciones públicas que se propone vender a Gorbachov como fuerza conductora detrás de la *glásnost* y la *perestroika*».[6]

Un buen número de las lecturas de lo que ha sucedido en la URSS realizadas en los EE UU apuntan a lo que, en resumen, se presenta como una victoria norteamericana en la «guerra fría» o, en términos más apocalípticos, un «final de la historia». La política de modernización y rearme asumida por los EE UU a partir de 1978 habría satisfecho así sus objetivos, poniendo freno a la «expansión internacional del comunismo» y obligando a la URSS a realizar un gran esfuerzo militar en un momento en que sus recursos eran muy escasos. Significativa al respecto es una afirmación del presidente norteamericano Reagan: «Queremos desarrollar un arma, tan compleja como sea preciso, para lanzar a la URSS a la bancarrota en caso de que se proponga encontrar un sistema de defensa».[7]

El contenido ideológico

El discurso pronunciado por Gorbachov en diciembre de 1988 ante la Asamblea General de la ONU es tal vez la más

[6] William F. Scott, «Soviet military doctrine: continuity or change?», en William C. Green y Theodore Karasik (dirs.), *Gorbachev and his generals* (Westview, Boulder, 1990), pág. 7.

[7] Referida a la Iniciativa de Defensa Estratégica. Cit. en Abel Aganbegyan, *The challenge: economics of perestroika* (Hutchinson, Londres, 1988), pág. 204.

acabada expresión del contenido teórico del NP. Tras recordar de qué forma la aparición de las armas nucleares había planteado el problema de la supervivencia de la especie, describir la economía mundial como un organismo integrado, subrayar la importancia de la revolución científico-técnica y llamar la atención sobre el riesgo de una catástrofe ecológica, el secretario general del PCUS señaló que las «sociedades cerradas» eran impensables en el final del siglo. Gorbachov reivindicó una «desideologización» de las relaciones entre los estados, sobre la base de la primacía de «valores humanos universales» y del rechazo del uso de la fuerza.[8]

El NP supuso un cuestionamiento de muchos principios hondamente arraigados. Elemento central en su configuración fue la idea de que hay problemas de naturaleza global que reclaman la adopción de un enfoque de interdependencia y cooperación mutua; este hecho afecta por igual a bloques militares y sistemas económicos. Objetos privilegiados de la aplicación de ese enfoque son «la protección del medio ambiente, la eliminación del atraso del Tercer Mundo, la lucha contra las enfermedades, la consecución de nuevas fuentes de energía y el empleo del espacio y los océanos en beneficio del progreso».[9] Para Margot Light, el NP puede resumirse en seis principios interrelacionados: «El primero enuncia la naturaleza interdependiente de la supervivencia en la era nuclear y el hecho de que, en caso de conflicto atómico, el destino de todos los estados se hallaría inevitablemente unido. El segundo subraya la importancia de reducir el nivel de confrontación militar entre las potencias y sus alianzas, y de mantener en vigor los principios de igualdad y seguridad común. El tercero reconoce que no es posible garantizar la seguridad haciendo uso únicamente de medios técnico-militares. Además, y en consonancia con el cuarto principio, la seguridad tiene un carácter colectivo: no puede

[8] Holden, *op. cit.*, pág. 7.
[9] Yevguenii Primakov, en *Pravda* (9 de julio de 1987).

haber seguridad nacional sin seguridad internacional. Los dos principios restantes son consecuencia de los anteriores: dada la naturaleza de la seguridad en la era nuclear, la flexibilidad y la disposición a adoptar acuerdos son atributos necesarios de la política exterior. Por lo demás, la de la seguridad internacional es una cuestión compleja que exige la adopción de un enfoque también complejo y global: hay que arbitrar soluciones a los problemas militares, económicos, políticos y humanitarios para eliminar las fuentes y las causas de tensión, desconfianza y hostilidad».[10]

En una traducción «militar» de los principios anteriores, la del varios años ministro de Defensa soviético, Dmitrii Yázov, el NP puede resumirse en los siguientes postulados: «Concebir la guerra, y en particular la mundial, como un medio para satisfacer objetivos políticos es, no sólo amoral, sino también criminal; si desea sobrevivir, la humanidad debe eliminar las armas nucleares y las restantes armas de destrucción masiva; la seguridad en la era nuclear tiene que ser mutua y universal, y debe garantizarse por medios políticos; las diferencias entre los sistemas sociales o las ideologías no deben ser una barrera para el diálogo en interés de la paz; el principio de seguridad mutua se asienta en la paridad estratégico-militar entre la URSS y los EE UU, y entre el Pacto de Varsovia y la OTAN».[11]

La consolidación de esta forma de ver las cosas tenía efectos ideológicos decisivos. El NP reducía, hasta poco menos que hacerlo desaparecer, el papel de la «lucha de clases» y del enfrentamiento en las relaciones entre estados. Al tiempo, subrayaba la necesidad de desplazar los elementos militares de la «correlación de fuerzas», ponía en duda la inexorabilidad del triunfo del sistema socialista y valoraba

[10] Margot Light, *The Soviet theory of international relations* (Wheatsheaf, Brighton, 1988), págs. 308-309.
[11] Dmitrii Yázov, «On Soviet military doctrine», en *RUSI* (invierno de 1989), pág. 1.

de forma más positiva la capacidad del «capitalismo» para afrontar una coexistencia pacífica. Le prestaba un menor relieve, por otra parte, a la disuasión: «La seguridad no puede construirse indefinidamente sobre la base del miedo a la respuesta».[12] Para Gorbachov la disuasión «estimula la carrera de armamentos, que antes o después escapará a todo control».[13] Este cuestionamiento de la disuasión no llevaba aparejada una crítica paralela, como hubiera sido lo suyo, del concepto de «paridad estratégica»: «Sin un equilibrio militar-estratégico la estabilidad internacional es impensable. Hay que aceptar que una equivalencia aproximada de fuerzas es un fundamento de la seguridad, un imperativo que se justifica a sí mismo».[14]

Se identificaba, por otra parte, una responsabilidad del «socialismo» en la gestación de los problemas planetarios y se le asignaba, por tanto, un cometido en la asunción de las cargas consiguientes. Ante el peligro de una catástrofe nuclear, el concepto de «paz» adquiría prioridad sobre el de «socialismo», al tiempo que se diluía cualquier duda sobre la posibilidad de supervivencia e imposición de una de las partes: la guerra es una amenaza para la existencia de la civilización y para la vida en el planeta. «La supervivencia de la humanidad exige que se acelere la transición desde un mundo armado en exceso a un mundo sin armas. El NP parte de que el desarme general es posible, incluso en un mundo en que coexisten estados con regímenes diferentes».[15] En la formulación de Gueorguii Arbátov, el peligro no estribaba ya «en los EE UU, en la OTAN o en el capitalismo, sino en el

[12] Gorbachov. Cit. en Raymond L. Garthoff, *Deterrence and the revolution in Soviet military doctrine* (The Brookings Institution, Washington, 1990), pág. 23.
[13] *Ibídem.*
[14] L. Tolkunov, en *Kommunist* (nº 7, mayo de 1986), págs. 85-86. Cit. en Garthoff, *op. cit.*, pág. 99.
[15] Serebriánnikov, en *Kommunist vooruzhennij sil* (nº 17, septiembre de 1989).

militarismo», por cuanto los viejos esquemas «han transferido mecánica y simplificadamente las leyes del desarrollo interno [las leyes de la «lucha de clases»] a las relaciones internacionales».[16] A este respecto es ilustrativo el efecto de unas declaraciones realizadas por el ministro de Asuntos Exteriores, Shevardnadze, en 1988, en abierto cuestionamiento del principio de la «lucha de clases» aplicada a las relaciones entre estados. Las declaraciones provocaron la reacción de Yégor Ligachov, a la sazón segundo en la cadena de mando del PCUS, quien reivindicó «el carácter de clase de las relaciones internacionales. Cualquier otra formulación no hace sino introducir confusión. La dedicación activa a la solución de los problemas de la humanidad no puede significar en modo alguno un "freno" de la lucha de liberación social y nacional».[17]

Así las cosas, no es difícil entender por qué el NP se contraponía también a una idea habitual en los textos oficiales: la de la «coexistencia pacífica» como forma de la lucha de clases. Durante la segunda mitad de los ochenta, los portavoces soviéticos pusieron manos a la tarea de resucitar la colaboración que, durante la segunda guerra mundial, habían exhibido la URSS y las potencias occidentales. Tal y como lo ha señalado Holden, el propósito de esas imágenes retrospectivas era sustituir al enemigo común de entonces —el fascismo— por los enemigos globales del momento: las amenazas de destrucción nuclear y catástrofe ecológica.[18]

«Suficiencia razonable» y «defensa suficiente»

Los efectos del NP se hicieron sentir, en fin, en el plano estrictamente doctrinal. En febrero de 1987 el a la sazón jefe

[16] *Moskóvskie nóvosti* (nº 39, 1988).
[17] Holden, *op. cit.*, pág. 14.
[18] Holden, *op. cit.*, pág. 105.

del Estado Mayor soviético, Serguéi Ajroméev, escribió que la «doctrina militar es un sistema de puntos de vista fundamentales sobre la esencia y prevención de la guerra».[19] El ministro Yázov se encargó de agregar un elemento: la idea de que un aspecto de primer orden en la doctrina militar es su *subordinación* a la tarea fundamental de la prevención de la guerra. La visión clásica de una doctrina perfilada con objeto de facilitar la «preparación para la guerra» quedaba, por tanto, de lado, de la mano de la reivindicación de medidas diversas orientadas a prevenir y evitar cualquier tipo de conflicto bélico. No sólo la amenaza de una guerra nuclear provocaba alteraciones en la doctrina militar: éstas guardaban relación también con un conflicto convencional que, en palabras de Yázov, «podría tener consecuencias catastróficas comparables a las de un cataclismo atómico».[20]

En su dimensión propositiva, el NP subrayaba la importancia de reducir el nivel de confrontación entre las potencias y sus alianzas, y de mantener en vigor los principios de igualdad y seguridad común. Reconocía, por otra parte, que no era posible garantizar la seguridad haciendo uso únicamente de medios técnico-militares. En palabras de Shevardnadze, «hoy la seguridad debe garantizarse a través de medios políticos, por medio de limitaciones y reducciones en los armamentos, un sistema de control fiable, medidas de creación de confianza más ambiciosas y procesos que mitiguen las situaciones de conflicto».[21] En el mismo sentido se manifestaba Gorbachov: «La seguridad es cada vez más un problema político, que sólo puede resolverse con medios políticos».[22] Con el NP perdía terreno, por lo demás, la creencia de que al aumentar la seguridad de una de las partes

[19] *Sovétskaya Rossiya* (21 de febrero de 1987).
[20] *Krásnaya zvezdá* (23 de febrero de 1988).
[21] *International Affairs* (octubre de 1988), pág. 18.
[22] Mijaíl Gorbachov, *Izbrannie rechi i stati* (Politizdat, Moscú, 1987, vol. 3), pág. 245.

menguaba la de la otra, y se imponía una lógica que insistía en el crecimiento paralelo de la «seguridad común».

Estas ideas se concretaron en dos conceptos a casi todos los efectos asimilables: el de «suficiencia razonable» y el de «defensa suficiente». Algunos especialistas estiman que la presencia del primero puede rastrearse ya a finales de los setenta. El término «suficiencia razonable» se incorporó al discurso oficial, de cualquier modo, con ocasión de una comunicación de Gorbachov al Soviet Supremo de la URSS a finales de noviembre de 1985, y adquirió carta de naturaleza con motivo del XXVII Congreso del PCUS, en febrero de 1986. Entonces el nuevo secretario general se refirió a la necesidad de alentar una «reducción estrictamente controlada de las capacidades militares hasta alcanzar los límites de una suficiencia razonable».[23] En julio del mismo año, y en un viaje a Francia, Gorbachov precisó el principio, al señalar que «en las categorías de armamento en las que Occidente tiene superioridad, debe emprender reducciones; en aquéllas en que somos superiores, eliminaremos, sin dudarlo, lo que proceda».[24]

Un año después, en mayo de 1987, el Pacto de Varsovia asumía como núcleo de su doctrina militar el concepto de «defensa suficiente», cuyos perfiles eran semejantes a los que presentaba el de «suficiencia razonable». En septiembre de 1987 ésta fue definida por Gorbachov como «una estructura suficiente para repeler cualquier agresión pero inadecuada para desarrollar acciones ofensivas».[25] Aunque en la Conferencia Extraordinaria del PCUS celebrada en 1988 el concepto de «defensa suficiente», que para algunos analistas tenía un carácter más radical, pareció imponerse, en julio de ese año Shevardnadze recurrió de nuevo a la idea de «suficiencia

[23] *Soviet news* (26 de febrero de 1986).
[24] *Pravda* (8 de julio de 1986).
[25] Cit. en Gloria Duffy y Jennifer Lee, «The Soviet debate on reasonable sufficiency», en *Arms control today* (nº 8, octubre de 1988).

razonable», confiriéndole, eso sí, un sentido más global: «Este nuevo principio no exige sólo reducciones de armamento; reclama una revisión radical de las estructuras y de los cambios reales operados en las actividades militares. La suficiencia no es sólo cierto nivel de armamentos: se trata ante todo de un estado de ánimo, de una disposición psicológica y política en beneficio de arsenales más reducidos, suficientes para la defensa, pero no para el ataque».[26]

Principios defensivos/principios ofensivos

Fueron muchas las tomas de posición que apuntaban a una remodelación, sobre la base de principios estrictamente defensivos, de las fuerzas armadas. A este respecto puede citarse como pionera la declaración que el Pacto de Varsovia emitió en junio de 1986 en Budapest: «En interés de la seguridad en Europa y en el mundo entero, los conceptos y las doctrinas de las alianzas militares deben basarse en principios defensivos».[27] En este mismo orden de cosas, otra declaración del Pacto, aprobada en Berlín en 1987, señalaba que para prevenir la guerra se imponía la aplicación de un criterio de «suficiencia» en las fuerzas convencionales, manifiesto a través de la voluntad de rechazar las operaciones ofensivas. Los armamentos convencionales debían «reducirse hasta alcanzar un nivel en el que ninguna de las partes dispusiese de medios para realizar un ataque repentino o iniciar operaciones ofensivas en general».[28]

El rechazo de las estrategias ofensivas no parece que contase con excesivo apoyo entre los portavoces militares. Éstos veían con malos ojos estudios que, como el realizado

[26] «Statement in New York to UN General Assembly», en *BBC summary of world broadcasts* (SU/0174, 6-1988, A1/2-A1/3).
[27] *Pravda* (12 de junio de 1986).
[28] *Pravda* (30 de mayo de 1987).

por Kokoshin y Lariónov sobre la batalla de Kursk, subrayaban la importancia de las operaciones estrictamente defensivas y la necesidad de renunciar a todo tipo de ofensiva o contraofensiva. Los especialistas se mostraban más partidarios de mantener una vieja lógica que sólo consideraba el peor de los escenarios, y más inclinados a reivindicar la importancia de la «contraofensiva» y a desvirtuar así la radicalidad del cambio teórico primitivo. Los estudiosos civiles parecían estimar, por el contrario, que la supresión de los elementos ofensivos de la estrategia militar era decisiva. Entre estos estudiosos había dos versiones: una minimalista, a la que se acogían los partidarios de aplicar el principio de «defensa suficiente» únicamente a los arsenales nucleares, y otra más radical, que extendía el principio a toda la actividad militar.

En muchos casos el debate cobró cuerpo de la mano de las disputas suscitadas por el concepto de «defensa suficiente». Tras acatar éste en el sentido en que era utilizado por los analistas civiles —el sentido «no paritario»—, en diciembre de 1987 Ajroméev pareció acogerse a una definición de la defensa suficiente que implicaba el mantenimiento de las fuerzas necesarias para garantizar una «defensa segura» *(nadézhnaya oborona)*. Este concepto, utilizado a menudo por algunos de los militares más reacios a aceptar el NP, parecía implicar en todos los casos la preservación de capacidades ofensivas. Más adelante Ajroméev subrayó que la doctrina defensiva no debía excluir la posibilidad de asestar ataques de respuesta de carácter contraofensivo, algo que contribuía a distanciar su visión de la postulada por muchos analistas civiles: las concepciones de Ajroméev no remitían a un concepto de «defensa no provocativa», sino que, antes bien, parecían convertir las operaciones defensivas en simple parte —relevante sólo en los primeros momentos de un enfrentamiento— de unas operaciones ofensivas en gran escala. Ésta era también la visión del teniente general Serebriánnikov, el coronel general Garéev y

el general Ivanovskii. El propio Yázov señaló que «únicamente con la defensa no es posible derrotar al agresor. Una vez repelido el ataque, las tropas deben mostrarse capaces de desarrollar una ofensiva».[29]

Es cierto, sin embargo, que más adelante —y en lo que acaso era un ejercicio de aquiescencia con un poder civil que acababa de encumbrarlo— el jefe del Estado Mayor, Moiséev, se inclinó por una «suficiencia razonable» que incorporaba inequívocos contenidos «defensivistas», en la medida en que exigía «una limitación, tan notoria como sea posible, de los sistemas de respuesta, un cambio en la disposición con objeto de satisfacer misiones estrictamente defensivas, y una reducción de las capacidades de despliegue y del volumen de producción militar».[30] Moiséev no dejaba de adherirse, sin embargo, al mantenimiento de capacidades de contraofensiva, como lo demuestran sus palabras de enero de 1990: en la nueva doctrina «habrá lugar para contraataques y contragolpes, y también para una contraofensiva dirigida a la destrucción del enemigo invasor».[31] Algunos especialistas occidentales concluyeron, en fin, que la reivindicación de capacidades de contraofensiva se hizo más rara entre los portavoces militares a partir de 1988.

Más allá de estas disputas se impone una reflexión sobre los efectos que los cambios doctrinales pudieron ejercer en la realidad militar. Si a este respecto se ha subrayado, por un lado, que las reducciones unilaterales acarreaban cambios sustanciales en la configuración de las fuerzas armadas, no faltaron voces que identificaban, por otro, una reasignación de unidades que le restaba peso al proceso anterior. Según estas opiniones, la mayor parte de las unidades conservaban capacidades tanto defensivas como ofensivas; la única

[29] Dmitrii Yázov, *Na strazhe sotsialisma i mire* (Voenizdat, Moscú, 1987), págs. 32-33.
[30] *Pravda* (13 de marzo de 1989).
[31] Entrevista concedida a *Voennil vestnik* (nº 1, enero de 1990).

alteración producto de las reducciones era la que hacía que las operaciones de carácter ofensivo perdiesen parte de su capacidad de sorpresa y, en cierta medida, su contundencia y espectacularidad. En esta última línea, algunos analistas occidentales subrayaron que, en virtud de las reducciones anunciadas, las posibilidades soviéticas de asestar un ataque por sorpresa se habían visto muy mermadas. El senador estadounidense Sam Nunn apuntó que las medidas reseñadas proporcionaban a la OTAN siete días más para responder a un eventual ataque,[32] mientras que *The Military Balance* sugirió que una vez verificadas las reducciones «se elimina virtualmente la amenaza de un ataque por sorpresa».[33] En 1989, el propio informe norteamericano *Soviet Military Power* señalaba que «las reducciones unilaterales de efectivos son un 20% más ambiciosas que cualesquiera propuestas antes en negociaciones sobre fuerzas convencionales».[34] Es verdad que en algún caso las reducciones suscitaron polémicas, relativas, de manera singular, a la presunta acumulación —negada por responsables soviéticos— de tanques y blindados allende los Urales.

Otra manera de plantear la cuestión era preguntarse cuál era el grado de potencial ofensivo o contraofensivo requerido por la URSS. El discurso de Gorbachov en la ONU parecía reflejar una voluntad de reestructurar con criterios estrictamente defensivos las fuerzas emplazadas en la Europa central y oriental, para al tiempo conservar capacidades ofensivas en las unidades ubicadas en territorio de la URSS. La imprecisión de los términos empleados, y la falta de definición posterior, invitan a concluir que durante la segunda mitad de los ochenta las posiciones soviéticas se vieron sujetas a una perpetua discusión y transformación.

[32] Cit. en Holden, *op. cit.*, pág. 133.
[33] IISS, *The military balance* (Brassey's, Londres, 1989), pág. 231.
[34] *Soviet Military Power* (US Government, Washington, 1990), pág. 102.

Las descripciones oficiales siguieron caracterizándose por una ambigua generalidad. Así, según Moiséev, en 1985-1986 se inició un proceso de reestructuración al que acompañaron reevaluaciones doctrinales; las exigencias de movilización se redujeron, al tiempo que se abandonaron algunos programas de fabricación de armas ofensivas.[35] En 1989, el comandante en jefe del Pacto de Varsovia, Lúshev, señaló que las fuerzas de este último habían adoptado un «carácter puramente defensivo»,[36] en lo que Holden apreciaba una inequívoca voluntad de cerrar la cuestión y, con ella, la perspectiva de posteriores alteraciones en doctrinas o despliegues.[37] Yázov señaló en su momento que los «grupos de maniobras operacionales», unidades de cariz ostentosamente ofensivo, estaban llamados a retornar a la URSS. El propio Yázov se refirió en alguna ocasión a los planes de reestructuración de las divisiones motorizadas presentes en territorio de la URSS, abocadas a incorporarse a «regiones fortificadas» apenas dotadas en términos de movilidad y posibilidades ofensivas.

Holden subraya, por último, que en varias ocasiones se hizo notar alguna ocasional referencia a «maniobras defensivas», acompañadas de la construcción de fortificaciones y zanjas en el distrito militar de Moscú.[38] No faltaron tampoco artículos teóricos que, publicados en el mensual *Voennii vestnik*, se referían al reconocimiento defensivo, al fuego de defensa o a las fortificaciones. En más de una ocasión, el jefe del Estado Mayor se refirió al retraso en la aplicación práctica de la nueva doctrina militar. A principios de 1989, Moiséev señaló que se estaban empezando a encarar los problemas y apuntó las grandes dificultades que el proceso encontraba.[39]

[35] *Krásnaya zvezdá* (10 de febrero de 1989).
[36] *Krásnaya zvezdá* (3 de marzo de 1989).
[37] Holden, *op. cit.*, pág. 134.
[38] Holden, *op. cit.*, pág. 89.
[39] *Krásnaya zvezdá* (10 de febrero de 1989).

Como es fácil comprender, lo sucedido en los últimos meses de 1989 en la Europa central y oriental modificó de manera sensible el panorama. En concreto, el acatamiento soviético de las propuestas de retirada de las tropas presentes en el área hizo inútil cualquier distinción en cuanto a querencias ofensivas y defensivas a uno y otro lado de las fronteras de la URSS, aun cuando pusiese en el núcleo del debate la reestructuración de las fuerzas que restaban en el interior de ésta.

El porvenir de las armas nucleares

Los conceptos de «suficiencia razonable» y «defensa suficiente» recuerdan de manera inequívoca a una idea habitual en las teorizaciones occidentales: la de «disuasión mínima». Defendida por Gorbachov en Estrasburgo en 1989, la idea remite al potencial para producir un daño inaceptable por efecto de un ataque de respuesta. Uno de los analistas civiles soviéticos que contribuyeron a divulgar el NP, Aleksei Arbátov, recordó al respecto que «el umbral de daño inaceptable deducido en los años sesenta por el secretario de Defensa norteamericano, McNamara, es el equivalente a la destrucción de un 70% del potencial industrial y al aniquilamiento del 30% de la población. Semejante grado de destrucción exige del orden de cuatrocientas cabezas nucleares».[40] Aunque en la opinión de Arbátov el umbral fijado por McNamara era desmesuradamente alto, no faltaba quien pensaba que la disuasión mínima exigía un nivel de destrucción superior. La propuesta oficiosa emitida en 1987 por el Comité de Científicos Soviéticos por la Paz y contra la Amenaza Nuclear promovía la preservación de 600 cabezas

[40] Aleksei Arbátov, «Strategic equilibrium and stability», en *Disarmament and security 1987 yearbook* (Nóvosti, Moscú, 1988), pág. 248.

nucleares en misiles balísticos intercontinentales (ICBM) móviles, en un marco de desaparición de todos los sistemas de defensa estratégica. El propio Arbátov se pronunció por la supresión de dispositivos que entendía no contribuían a acrecentar la seguridad de la URSS; entre ellos estaban los misiles SS-24, los submarinos de la clase «Typhoon» y los aviones Tu-160.[41] Otros especialistas subrayaban, entre tanto, la necesidad de darle prioridad a la reducción de los dispositivos con funciones ofensivas más ostentosas, y de superar así lecturas puramente cuantitativas del control de armamentos.

Acaso éste es el momento de subrayar que, pese a no implicar una renuncia inequívoca de la lógica de la disuasión nuclear, el NP supuso una clara superación de viejos esquemas. Aunque en los últimos años setenta Brézhnev se había inclinado a menudo por formulaciones asimilables a lo que más adelante se entendería por «defensa suficiente», las concreciones gorbachovianas del término —así, el programa de desnuclearización global para el año 2000— excedían con mucho el marco brezhneviano. El NP impliçaba un inédito menoscabo de las armas nucleares. «La expansión del potencial nuclear y la creación de nuevos tipos de armas de destrucción masiva han perdido sentido político y estratégico», afirmaba en 1988 el mayor Kirshin.[42] El propio Yázov se refirió en su momento, sin mayores precisiones, a la disposición de la URSS «a renunciar a su condición de potencia nuclear».[43]

Este menoscabo de las armas atómicas no parece que plantease, al menos en principio, mayores problemas en unas fuerzas armadas que habían asumido ya una progresiva «convencionalización» en su estrategia militar. Esto aparte, las perspectivas de una definitiva erradicación de las armas

[41] Aleksei Arbátov, «How much defence is enough», en *International Affairs* (abril de 1989).
[42] MEMO (nº 18, diciembre de 1989).
[43] *Kommunist* (nº 18, diciembre de 1989).

nucleares eran escasas, por lo que las inquietudes de quienes estimaban que la URSS estaba poniendo en peligro su aparato de disuasión eran mínimas. En algún momento el ya citado Yázov señaló a este respecto que la «esencia de la suficiencia estriba en la necesidad de no permitir un ataque nuclear sin respuesta», agregando al efecto que el concepto de «paridad» remitía antes a la preservación de capacidades de disuasión que a aspectos puramente numéricos.[44]

[44] Cit. en Garthoff, *op. cit.*, págs. 144-145.

BIBLIOGRAFÍA

Monografías sobre el «nuevo pensamiento» son los trabajos de Archie Brown (dir.), *New thinking in Soviet politics* (Macmillan, Londres, 1992); Christoph Bluth, *New thinking in Soviet military policy* (Pinter, Londres, 1990); Raymond L. Garthoff, *Deterrence and the revolution in Soviet military doctrine* (The Brookings Institution, Washington, 1990); Vendulka Kubálková y Albert Cruickshank, *Thinking new about Soviet «new thinking»* (University of California, Berkeley, 1989); Derek Leebaert y Timothy Dickinson (dirs.), *Soviet strategy and new military thinking* (Cambridge University, Cambridge, 1992); Vadim Zagladin, *Reestructurar y humanizar las relaciones internacionales* (Nóvosti, Moscú, 1989); VV AA, *New political thinking in the nuclear age. USSR and US policy* (Nauka, Moscú, 1990), y VV AA, *Vías hacia la seguridad. La nueva mentalidad: estrategia de paz para los años 90* (Nauka, Moscú, 1990).

El entorno del «nuevo pensamiento» queda bien reflejado en los libros de Honoré M. Catudal, *Soviet nuclear strategy from Stalin to Gorbachev* (Arno Spitz, Berlín, 1988); Jonathan Dean, *Meeting Gorbachev's challenge* (Macmillan, Londres, 1989); Gregory Flynn (dir.), *Soviet military doctrine and Western policy* (Routledge, Londres-Nueva York, 1989); George E. Hudson (dir.), *Soviet national security policy under perestroika* (Unwin Hyman, Boston, 1990); Margot Light, *The Soviet theory of international relations* (Wheatsheaf, Brighton, 1988); Stephen Shenfield, *The nuclear predicament* (RIIA, Londres, 1987); Alan B. Sherr, *The other side of arms control. Soviet objectives in the Gorbachev era* (Unwin Hyman, Boston, 1988), y Anita Tiraspolsky y Georges Mink, «La maison commune européenne», monográfico de *le courrier des pays de l'Est* (nº 349, 1989).

EL CONTROL DE ARMAMENTOS Y SUS MITOS

Los problemas de interpretación de los datos, el escaso interés suscitado por las materias relacionadas con la economía militar soviética y, tal vez, el escepticismo ante la posibilidad de que de las negociaciones se derivasen efectos económicos sensibles han alejado a muchos especialistas de la reflexión sobre el control de armamentos. Nuestro propósito en este capítulo no es analizar el detalle de conversaciones y acuerdos, sino, en un ámbito más general y polémico, explicar cuáles han sido las quiebras de unas y otros y dar cuenta, en suma, de por qué un genuino «desarme» no ha conseguido abrirse camino.

En la segunda mitad de los años ochenta y a comienzos de los noventa fueron tres —ya nos hemos referido a ello— los ámbitos de negociación que, en el terreno del control de armamentos, y en estrecha relación con la manifestación del «nuevo pensamiento», permitieron la consecución de acuerdos. Si en diciembre de 1987 los Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado de supresión de fuerzas nucleares de alcance intermedio con base en tierra, en noviembre de 1990 se alcanzaba un acuerdo de reducción de fuerzas convencionales en Europa, y en julio de 1991 de nuevo eran las dos superpotencias las que decidían reducir el número de sus armas nucleares estratégicas. Eran muchos, de cualquier manera, los foros de negociación que quedaban abiertos: así, no prosperó, pese a los esfuerzos, un acuerdo de prohibición plena de pruebas nucleares, los EE UU rechazaron una y otra

vez cualquier limitación sólida de sus sistemas de defensa estratégica, las conversaciones sobre supresión de armas químicas fueron extremadamente complejas —muchos eran los interlocutores llamados a participar— y la peculiar condición de las armas nucleares tácticas permitió que éstas se mantuviesen genéricamente al margen de las distintas negociaciones.

Aunque, lo anterior aparte, los acuerdos firmados no eran los mejores imaginables, es obligado reconocer que incluían elementos positivos. Así, y en primer lugar, supusieron un freno, siquiera parcial, a una tendencia incontrolada al crecimiento de los arsenales. En segundo término, permitieron el despliegue de medidas de verificación *in situ* impensables un lustro antes. De forma más general, propiciaron la instauración de un clima de confianza y de una inercia de negociación que carecían de antecedentes en la historia del control de armamentos. Sumadas las aportaciones constructivas y las rémoras del pasado, la dinámica negociadora no consiguió trascender, sin embargo, el estadio del «control de armamentos» para adentrarse en terrenos más esperanzadores.

Negociaciones y liberación de recursos

El tratado de Washington, que establecía la destrucción de las fuerzas nucleares de alcance intermedio (FNI) con base en tierra, fue, a primera vista, un ejemplo claro de un inequívoco acuerdo de desarme: con él se procedía a suprimir una modalidad entera de armas y se prohibía explícitamente una eventual modernización de los sistemas correspondientes. El tratado dejaba abierto el camino, sin embargo, a horizontes poco esperanzadores: si por un lado permitía un rearme paralelo en áreas no afectadas por los términos del texto firmado, por el otro se concretaba en reducciones que apenas modificaban el panorama nuclear. Como quiera que el acuerdo sólo

se ocupaba de una categoría de armas —las terrestres con radio de acción entre 500 y 5.500 km—, no establecía limitación alguna de las cabezas nucleares transportadas por buques o aviones, y no afectaba a los arsenales británico, francés y chino, sobre el terreno quedaba la parte del león del aparato de guerra nuclear. El número de cabezas atómicas afectadas no era sino el 3-5% del total de las existentes en el globo y cerca del 10% de las instaladas en Europa en la fecha de ratificación del acuerdo.

No se puede olvidar, por otra parte, que en su formulación final el acuerdo de Washington no pudo convertirse en la expresión de una «opción triple cero» que, además de incluir las FNI, abarcase las armas nucleares tácticas, esto es, aquéllas con un radio de acción situado por debajo de 500 km. La supresión de estas últimas sólo entró en la agenda de la OTAN cuando —de la mano de la desaparición del «parachoques» de seguridad de la URSS— su utilidad se redujo sensiblemente, y ello pese a que algunos de los miembros de la Alianza, y en particular la República Federal de Alemania (RFA), eran decididos partidarios de esa medida desde tiempo atrás.

Los dos acuerdos START —el segundo fue firmado en enero de 1993— de reducción de armas estratégicas tampoco fueron una garantía de inversión significativa de tendencias atávicas de crecimiento de los arsenales nucleares. Conviene no olvidar que permitían la conservación de unas 20.000 cabezas atómicas, muchas de ellas de reciente introducción. Aunque muchos especialistas esperaban del START-I la primera liberación efectiva de recursos invertidos en el aparato militar, y su transferencia al sector civil de la economía —el acuerdo de Washington no había tenido efecto alguno en este terreno—, ésa era sólo una posibilidad entre otras, provisionalmente mutilada por la ausencia de restricciones de relieve a la modernización y a las pruebas de las armas afectadas. A buen seguro que los términos del START-I —que permitía, por no decir que alentaba, el crecimiento en el número de

cabezas propulsadas por misiles de crucero de lanzamiento submarino (SLCM) y por misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de base móvil, unos y otros sensiblemente desestabilizadores— habían sido contemplados en los planes de modernización de las dos superpotencias. Ello abría nuevas dudas, al menos en el caso de los EE UU, sobre la posibilidad de una reducción del gasto militar y apuntaba más bien a una diversión de recursos hacia ámbitos privilegiados en la carrera de armamentos más reciente («tecnologías exóticas», misiles de crucero...). También los efectos presupuestarios de las reducciones de fuerzas convencionales eran inciertos, al menos en lo que al lado occidental se refiere; la «meridionalización» de las estrategias podía abortar, por lo demás, este proceso.

Si las observaciones anteriores se refieren a limitaciones de tratados firmados, no eran más esperanzadores los rasgos de los acuerdos que se auguraban. Así, en lo relativo a las armas espaciales y al porvenir del Tratado ABM —sobre sistemas de defensa estratégica—, y pese a la relativa cancelación, en mayo de 1993, del proyecto norteamericano de «guerra de las galaxias», las inversiones en este ámbito no habían dejado de ser un motor objetivo de la carrera de armamentos. Las propias propuestas soviéticas al respecto, con su reivindicación, a finales de los ochenta, del mantenimiento en vigor de un renovado y liberalizado Tratado ABM, no hicieron otra cosa que proporcionar un *status* legal a una situación de inestabilidad evidente: ninguna de las grandes potencias estaba en condiciones de desplegar los sistemas que debían ser objeto de investigación en ese período, por lo que la prohibición de los despliegues era pura retórica y no constituía un freno para proceso alguno. Las propuestas soviéticas —producto indirecto de la intransigencia norteamericana o reflejo de la influencia de sectores que dentro de la URSS estimaban, contra toda lógica, que la industria de defensa podía convertirse en el motor de la revolución tecnológica que el país necesitaba— no acertaban a ocultar la triste

E.U. DE RELACIONES LABORALES BIBLIOTECA

realidad de que, al menos por lo que respecta a los EE UU, proseguían las investigaciones sobre nuevos y exóticos dispositivos.

Las medidas unilaterales

Acaso el único factor realmente novedoso que se hizo sentir a finales de los ochenta fue la puesta en marcha, por la Unión Soviética, de medidas unilaterales de reducción de fuerzas y dispositivos de alguna entidad. Así, entre agosto de 1985 y febrero de 1987, la URSS asumió una moratoria unilateral de pruebas nucleares, acompañada de algunos gestos de tono menor (moratoria paralela en pruebas de sistemas antisatélite, renuncia a nuevos despliegues de misiles SS-20 o retirada de lanzadores emplazados en la península de Kola). En diciembre de 1988 se abrió un nuevo ciclo de medidas unilaterales. La más espectacular fue sin duda la derivada del anuncio, realizado por Gorbachov en la ONU, de que la URSS prescindiría de 500.000 soldados, 10.000 tanques, 8.500 piezas de artillería y 800 aviones de combate en un plazo de dos años. También se anunció una notoria reducción en el número de tanques, aviones de combate y helicópteros producidos; la cifra de los primeros, que en 1989 era de 1.700, debía quedar en 1.000 en 1990.

En enero de 1989 la URSS formuló, en París, un ambiguo compromiso de destrucción del arsenal químico en su poder. En el mismo mes Gorbachov fue más explícito sobre las reducciones de tropas: reveló que afectarían a 240.000 hombres en la Europa central y oriental y en las zonas occidentales de la URSS, a 200.000 en la parte oriental de ésta, y a 60.000 en el sur. Agregó que serían retirados 5.300 tanques de los modelos más avanzados, y que de los 10.000 que debían ser destruidos, la mitad lo serían literalmente, y la otra mitad se convertirían en vehículos de uso civil o de entrenamiento. En abril, el propio Gorbachov apuntó el objetivo de

reducir el número de efectivos desde su nivel del 1 de enero, 4.250.000, hasta 3.760.000. Un mes después, la URSS anunciaba la retirada de medio millar de misiles nucleares tácticos, compromiso al que siguió, en junio, otro de ampliación de esa medida si obtenía alguna reciprocidad de parte de la OTAN. Las medidas relativas a las armas nucleares de más corto alcance reaparecieron en junio de 1990, cuando la URSS manifestó su propósito de desmantelar 60 lanzadores, más de 250 piezas de artillería nuclear y 1.500 cabezas, en el marco de un proyecto que a final de ese año debía conducir al desmantelamiento de 140 lanzadores y 3.200 piezas de artillería nuclear. Ya en 1991, y en enero, se anunciaba una nueva moratoria unilateral de pruebas nucleares en los cuatro meses siguientes, retomando así el pulso de las practicadas en 1985-1987 y a finales de 1989 y principios de 1990. En julio se hicieron públicos, en fin, planes que apuntaban una reducción de un 20-25% en el número de buques de la flota.

En el otoño de 1989, y en otro ámbito, la Unión Soviética hizo saber su voluntad de retirar todas sus tropas presentes en Mongolia. En un contexto más amplio, las previsiones apuntaban a la reducción, para el 1 de abril de 1991, de 200.000 efectivos en las unidades terrestres y navales de la URSS situadas en el este del país. Como consecuencia de acuerdos firmados con Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la República Democrática Alemana (RDA) —todos los aliados soviéticos habían acometido reducciones unilaterales de tropas y dispositivos—, la URSS se comprometió, en suma, a retirar sus efectivos presentes en los tres primeros países y en lo que hasta 1990 fue la RDA.

Modernización y reducciones

Hace años que los desarrollos militares entraron en una fase en la que el perfeccionamiento cualitativo de los dispositivos, y no su número, es el elemento fundamental. Caracterísiticas de las nuevas armas son su menor tamaño y creciente movilidad; su mayor precisión, que en último término ha reducido, por vía de igualación de prestaciones, la dependencia con respecto a las armas nucleares; su capacidad de desempeñar distintas misiones; las mejoras en vigilancia, proceso de datos y capacidades de información y comunicaciones, y, por último, la progresiva incorporación de «tecnologías exóticas».

El nuevo estadio de la carrera de armamentos tuvo una consecuencia inmediata: era posible, cuando no necesario, reducir el número de los dispositivos, sin que ello tuviera repercusión sobre la seguridad y la capacidad disuasoria. De hecho, antes de los acuerdos de control de armamentos de 1987-1991, tanto los EE UU como la URSS habían procedido ya a rebajar el número de sus cabezas nucleares: si éste era, por recurrir al ejemplo norteamericano, de 32.500 en 1967, en 1989 había descendido a 23.000. Según algunos análisis, al suprimir una parte de los arsenales atómicos las superpotencias no estaban haciendo otra cosa que adelantar un proceso que de cualquier modo hubieran tenido que afrontar. Se trataba, en otras palabras, de hacer de la necesidad virtud, de obtener un beneficio político —producto de una imagen renovada transmitida constantemente por los medios de comunicación— sin perder un ápice de fortaleza militar.

Los ejemplos de lo anterior pueden multiplicarse. Por efecto de las capacidades adquiridas —y en especial de la creciente precisión de los dispositivos— y de las nuevas estrategias, en los años ochenta se redujo sensiblemente la carga nuclear desplegada por las superpotencias (de manera más notoria la estadounidense). Los avances tecnológicos introducidos en un misil de crucero norteamericano, el AGM-86B, propiciaron en su momento una reducción sustancial en los planes de producción del mismo: de las 4.348 unidades previstas se pasó a sólo 1.739, al tiempo que se aceleraban los trabajos de diseño de un nuevo misil de cru-

cero. Según estimaciones referidas a la segunda mitad de los ochenta, en el caso de los EE UU el 50% de los ICBM y gran parte de los submarinos y de los bombarderos portadores de armas estratégicas eran unidades cuyo desfase tecnológico se había hecho notar bien pronto. El número de submarinos que transportaban misiles balísticos estaba abocado a reducirse desde años atrás, como consecuencia de la edad alcanzada por las unidades de la clase «Poseidon» y de la decisión de crear un nuevo submarino portador de un número de misiles mucho mayor. Como quiera que en el lado soviético la situación no era diferente, si estos comentarios se ajustan a la realidad, los acuerdos START-I debían interpretarse en términos muy diferentes a los habituales en los comunicados oficiales.

En un medio en el que, de la mano de un ingente proceso de modernización, proliferan «subsistemas y municiones inteligentes», se han multiplicado a la vez los problemas de verificación de posibles desmantelamientos o despliegues. A este respecto, los procedimientos habitualmente aplicados parten del principio de que hay categorías claras de armas que pueden convertirse en objeto de negociación. La proliferación de distintos tipos de modelos, la dificultad de deslindar sistemas convencionales y nucleares, y, por último, la creciente complejidad de las tareas de delimitación de asimetrías en arsenales que incorporan tecnologías de valoración cada vez más ardua hacen poco menos que imposible la aplicación del principio reseñado. Agreguemos, en fin, los problemas derivados, en el caso de la antigua URSS, del reparto de los arsenales nucleares estratégicos entre cuatro repúblicas que no siempre mantienen relaciones cordiales y que eventualmente utilizan los dispositivos ubicados en su territorio para conseguir ganancias en las negociaciones mantenidas en otros terrenos; no está de más recordar que el acuerdo START-II se firmó cuando su antecesor START-I todavía no había sido ratificado por el parlamento ucraniano.

Hay que mantener algunas cautelas sobre otros aspectos que oscurecen la aparente benignidad de los acuerdos de control de armamentos. Las dudas sobre la materialidad de las reducciones previsibles y la constancia de que el conocimiento de los arsenales es bastante deficiente obligan a realizar una valoración más cauta de negociaciones y propuestas.

Los peculiares acuerdos de contabilización de cabezas nucleares impuestos en la negociación del acuerdo START-I se tradujeron a la postre en reducciones que acabaron por situarse lejos del 50% inicialmente pactado y a menudo pregonado. A esta posibilidad apuntaban ya, años atrás, estudios realizados por dos instituciones norteamericanas: el *National Resources Defense Council* y la *Arms Control Association.* En los hechos, el START-I obligaba a los EE UU a destruir sólo un 14% de sus cabezas estratégicas; la URSS debía hacer lo propio con un 26% de las suyas. El intercambio de datos subsiguiente al acuerdo de Washington reveló, por otra parte, que tanto los EE UU como la URSS contaban con fuerzas nucleares de alcance intermedio en número superior al señalado por todas las estimaciones. En el caso norteamericano, ello era tanto más grave cuanto que los gobiernos europeos afectados, y según algunas sugerencias las propias autoridades estadounidenses, podrían no haber tenido conocimiento de que se estaban desplegando o almacenando más armas de las previstas. En lo que a la URSS se refiere, aunque es verdad que desplegó de forma efectiva un número de misiles SS-20 inferior al registrado por los cálculos occidentales —el conocimiento de este hecho hubiera frenado la instalación de los «euromisiles» en Holanda—, no lo es menos que mantuvo en situación de reserva una cifra respetable de lanzadores, que adoptó provisiones para dotar a los SS-20 de una capacidad de «recarga» y que conservó en Letonia, de forma inesperada, 84 misiles de crucero SS-4. Esta facilidad para ocultar la realidad de despliegues y almacenamientos, unida

a los ya mencionados problemas de verificación, no augura precisamente las mejores perspectivas para el futuro proceso de control de armamentos.

Por otra parte, las negociaciones de control de armamentos heredaron del pasado hábitos difícilmente refrenables, como la exageración del poderío del rival y la decisión de no renunciar a las ventajas que la situación del momento podía deparar. Ya con motivo de la negociación de los acuerdos SALT —también sobre armas estratégicas—, en los años setenta, la superioridad tecnológica obtenida por los EE UU gracias a la multiplicación del número de cabezas nucleares derivada de la introducción de los MIRV (vehículos de reentrada múltiple con blancos independientes) marcó definitivamente el contenido de los acuerdos finales, entre las reticencias estadounidenses ante la posibilidad de limitar los MIRV y el objetivo soviético de que los acuerdos no contribuyesen a ratificar una inferioridad pasajera. En la segunda mitad de los ochenta se hicieron notar conductas semejantes de la mano de una exageración sistemática del poderío convencional de la URSS y del intento de sacar provecho de las ventajas que a cada una de las superpotencias proporcionaban las diferencias estructurales existentes entre los arsenales respectivos.

Tras la firma del acuerdo de Washington, la OTAN acometió un esfuerzo encaminado a convencer a la opinión pública occidental de que existía una grave amenaza convencional derivada de la presión de la URSS en la Europa central; después, la retirada de las fuerzas soviéticas presentes en la antigua RDA, Polonia, Checoslovaquia y Hungría le quitó el grueso de su base a esta argumentación, que a buen seguro se proponía allanar el camino a inmediatas decisiones en el terreno del rearme. Aunque no es propósito de este texto analizar problemas tan complejos como los implicados en ese debate, hay que recordar que la OTAN hizo uso de arbitrarios análisis en cuanto a las fuerzas objeto de comparación, manipuló los datos de equipos, unidades y efectivos,

y omitió informaciones de carácter esencial. Los estudios más solventes realizados al respecto refuerzan la opinión de que la alianza occidental disponía de un aparato militar más moderno y eficaz, y ello a pesar de la superioridad numérica que el Pacto de Varsovia exhibía en numerosos terrenos. En el pasado, y de manera premeditada, la OTAN había renunciado a establecer una plena simetría entre los arsenales, consciente de la inferioridad tecnológica y de las deficiencias de encuadramiento y adiestramiento del bloque rival. Estas últimas hacían prácticamente impensable —aun sin tomar en consideración una posible respuesta nuclear— una ofensiva del Pacto en cualquier frente europeo.

Aparte lo anterior, uno de los problemas planteados en las negociaciones del primer acuerdo START fue el derivado del firme propósito soviético de evitar reducciones en el número de misiles de lanzamiento terrestre si no iban acompañadas de reducciones paralelas en los de lanzamiento naval. La explicación de esta conducta radica en el hecho de que la composición de los arsenales estratégicos de las dos superpotencias era diferente: una y otra deseaban conservar sus ventajas respectivas.

Según una estimación, el 60% de las cabezas nucleares estratégicas de la URSS se encontraban en misiles de lanzamiento terrestre, frente a sólo un 16,5% de las norteamericanas; por el contrario, los misiles de lanzamiento naval transportaban el 52% de las cabezas estadounidenses pero tan sólo el 30% de las soviéticas. La URSS deseaba mantener las ventajas derivadas de la superioridad de su arsenal de ICBM, más precisos aunque también más vulnerables, mientras los EE UU aspiraban a hacer lo propio con sus misiles de lanzamiento naval, de menor vulnerabilidad, pero también de menor precisión. Los acuerdos START no parecen haber resuelto, por cierto, los problemas derivados de semejante colisión de intereses.

El rearme

De todo lo anterior es fácil deducir que la principal amenaza que sigue pendiendo sobre el proceso de control de armamentos es, sin duda, la derivada de la posibilidad de sortear los acuerdos por medio del rearme. Aunque tras la «revolución de agosto» de 1991 las perspectivas de futuro cambiaron en el oriente europeo, muchas informaciones revelan que la modernización de los arsenales —permitida, una vez más, por el acuerdo START-II— es un proceso todavía activo. El hecho de que algunos de los acuerdos firmados tuviesen una clara restricción geográfica y sólo afectasen a zonas concretas del planeta —la Europa central y oriental, por ejemplo— abría nuevos horizontes de rearme, de la mano del redespliegue de unidades en áreas de creciente interés estratégico, como el Oriente Medio y el Pacífico. El enfoque tradicional de los estrategas, asentado en lo que se ha dado en llamar *worst case analysis* —un punto de vista que sólo toma en consideración la peor de las perspectivas imaginables—, se seguía imponiendo por doquier, al tiempo que se descubrían nuevas amenazas y huecos de dimensiones cada vez mayores en las defensas propias.

La modernización aspiraba a desarrollar nuevas prestaciones y a incrementar la disponibilidad de las distintas armas. En relación con esto último, piénsese que una parte de los lanzadores nucleares no podía emplearse de inmediato, por lo que la adopción de medidas para mejorar su «aprestamiento» permitía «compensar», siquiera parcialmente, los problemas derivados de las reducciones en curso. Según fuentes norteamericanas, las fuerzas estadounidenses que hubieran podido sobrevivir a un ataque preventivo eran en 1990 dos veces más numerosas que en 1985; durante ese período no dejó de crecer el porcentaje del arsenal desplegado que, tras encarar una ofensiva rival, hubiera podido participar en un ataque de respuesta.

En los últimos años el principal motor de la carrera de

armamentos parecen haber sido los programas de investigación de «tecnologías exóticas» vinculados a los proyectos de defensa estratégica. Los resultados de esas investigaciones deben hacerse notar en todos los terrenos de desarrollo militar. La aparición de una nueva generación de armas nucleares podría ser la consecuencia inmediata de esos estudios que, impulsados ante todo por los sucesivos presidentes norteamericanos, del lado soviético ilustraron en el pasado una posición paradójica: la seducción y la imitación mecánica que los movimientos norteamericanos produjeron siempre en la URSS hicieron que ésta le diera crédito —y reaccionase en consecuencia— a un programa de viabilidad tecnológica dudosa como la Iniciativa de Defensa Estratégica anunciada por Reagan en 1983. Si la decisión norteamericana era una más de las manifestaciones de un desarrollo dictado por el complejo industrial-militar, la soviética, más difícil de analizar, parecía responder a asunciones diversas: temor al efecto desestabilizador del «escudo» estadounidense; propósito de obtener incrementos, siquiera marginales, en los propios márgenes de seguridad; reducción del desfase tecnológico...

Por lo demás, y de forma sintética, es menester recordar que a principios de los noventa los EE UU trabajaban en el diseño de ICBM móviles y de misiles balísticos de lanzamiento submarino, al tiempo que la URSS procedía al despliegue de dos tipos de los primeros y de otros tantos de los segundos. En paralelo, una y otra potencia perfeccionaban nuevos modelos de bombarderos estratégicos. También proseguían las investigaciones y los despliegues en lo que atañe a misiles de crucero, transportables tanto por buques como por aviones; el esfuerzo soviético por romper con una tradición de inferioridad tecnológica en este ámbito fue particularmente notable. No faltaron, por último, nuevos desarrollos en armas convencionales, de tal suerte que las diferencias entre las prestaciones de muchas de éstas y las características de algunos de los ingenios nucleares eran cada vez menores. La modernización de los sistemas de control y comunicaciones,

muchas veces basados en el espacio, se orientó a incrementar, entre tanto, la capacidad de hacer frente a los problemas planteados por conflictos prolongados.

Un aspecto, no precisamente marginal, del proceso de rearme es la transferencia de armas de alta tecnología a estados que con anterioridad no tenían acceso a ellas. Esta modalidad de «proliferación horizontal» ha afectado en particular a misiles balísticos que pueden ser utilizados para transportar armas nucleares; la India, Brasil, Argentina, Irak, Israel y Arabia Saudí son algunos estados que parecen poseer esos misiles. Los tres primeros países mencionados emprendieron en su momento, como también lo hizo Canadá, una carrera para obtener submarinos de propulsión nuclear; de ella fue ejemplo el efímero arrendamiento, por la India, de un submarino soviético. Los Estados Unidos y la URSS, en unión con potencias como Francia, el Reino Unido y China, han sido responsables de esta modalidad de proliferación.

El control de armamentos después de 1991

Los procesos de control de armamentos siguieron su curso después de agosto de 1991. Si al respecto hay que subrayar alguna novedad, ésta fue la relativa al incremento en el número de estados interesados en las negociaciones. Piénsese, por ejemplo, en los efectos que sobre la deriva de los acuerdos START tuvo la presencia de cuatro potencias nucleares —la FR, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán— donde antes sólo había una. Los datos fundamentales que se hicieron notar en la etapa que nos ocupa se resumen en las líneas siguientes.

El 5 de octubre de 1991 Gorbachov respondió a las propuestas que días antes había transmitido su homólogo norteamericano, Bush. Elemento fundamental de ambas iniciativas fue la decisión de prescindir de todas las cabezas nucleares

utilizables por artillería y misiles balísticos tácticos. En su réplica, Gorbachov anunció su voluntad de prescindir, sobre una base bilateral, de todas las armas nucleares tácticas navales y aéreas, y se comprometió a asumir, con carácter unilateral, algunas reducciones más.

En segundo lugar, y pese a que en enero de 1993 —ya lo apuntamos— los EE UU y la FR firmaron un segundo tratado de reducción de armas estratégicas, el START-II, el panorama de las reducciones correspondientes ha sido oscuro por varias razones: los problemas de ratificación del tratado START-I planteados por Ucrania; las reticencias que mostraron la propia Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán en lo relativo a la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, y las perspectivas de que el SS de la FR se negase a darle el visto bueno al START-II. Un problema adicional que irá cobrando, probablemente, importancia es el de los costes de destrucción de los diferentes dispositivos. Sean las cosas como sean, el START-II implicaba reducciones del orden del 50% en los arsenales permitidos por el START-I de julio de 1991, y del 75% con respecto a los niveles de 1990. El proceso de destrucción de los dispositivos debía suponer el desmantelamiento de todos los misiles terrestres portadores de cabezas múltiples, núcleo principal del arsenal estratégico de la vieja URSS.

En tercer término, en su propuesta de finales de septiembre de 1991, el presidente norteamericano había incluido la idea de que los EE UU y la URSS asumiesen el despliegue de defensas, no nucleares, frente a misiles balísticos, en lo que era una sugerencia de revisión del viejo Tratado ABM. La acogida, positiva, que la sugerencia tuvo en la réplica de Gorbachov se vio claramente superada en enero de 1992, cuando Yeltsin anunció la disposición rusa a cooperar con los EE UU en la creación de un sistema de defensa global. Varias explicaciones se han dado a este giro en la política de la FR. Así, se ha señalado que la participación de ésta en un programa conjunto con los EE UU contribuiría a mitigar su

retraso tecnológico, permitiendo a la vez notables ahorros presupuestarios. Hay quien ha apuntado también que el desarrollo de un programa común podría convertirse en un freno para los proyectos norteamericanos, algo innegablemente interesante para la FR. No han faltado análisis, en fin, que han subrayado que el gobierno ruso había asumido la iniciativa ante el temor a un posible uso de las armas nucleares por parte de repúblicas como Ucrania o Kazajstán.

La iniciativa de Yeltsin suscitó, de cualquier modo, muchas contestaciones. Si unas veces se subrayaba la inviabilidad técnica del programa, en otras se apuntaban las escasas posibilidades de que los EE UU compartiesen realmente altas tecnologías. En algún caso se sugirió que el proyecto podía tener efectos claramente negativos, como obstaculizar futuras reducciones en las armas estratégicas y obligar a una reforma del Tratado ABM.

En cuarto lugar, el desmembramiento de la URSS y la disolución del Pacto de Varsovia le restaron vigor a la reducción de fuerzas convencionales pactada en 1990. Por lo pronto, las asignaciones territoriales perdieron el grueso de su sentido: las zonas de ubicación/destrucción de dispositivos que habían sido delimitadas no coincidían con las nuevas fronteras. En los hechos, en 1994 o 1995 todas las fuerzas de la FR se hallarían lejos del «área central» prevista en 1990 (Benelux, Alemania, Polonia, Checoslovaquia y Hungría). Pese a ello, los nuevos estados independientes convinieron en respetar lo acordado en París, previendo acaso que de lo contrario se harían notar graves problemas. Al respecto fueron significativas las concesiones de la FR, cuyas capacidades convencionales no se vieron, sin embargo, sensiblemente mermadas: las medidas adoptadas en su momento y la retirada en la Europa central y oriental provocaron lo que muy probablemente fue un notorio incremento en el número de dispositivos convencionales emplazados allende los Urales. Aun así, en el otoño de 1993 la FR sugirió en más de una ocasión la conveniencia de revisar algunos de los términos

del tratado firmado en París, con la vista puesta, al parecer, en reforzar sus arsenales en el Cáucaso norte.

Junto a los procesos mencionados hay que hacer referencia, también, de los problemas relativos a la eventual pérdida de control sobre algunos dispositivos nucleares, efecto directo del desmembramiento de la URSS. Como se ha apuntado, cuatro repúblicas pasaron a disponer de armas nucleares estratégicas: según una estimación, a finales de 1991 la FR contaba con 9.650 cabezas nucleares de ese tipo, Ucrania con 1.300, Kazajstán con 1.150 y Bielorrusia con 100. En los casos de la FR y Bielorrusia los problemas no parecían ser muchos: si se suponía que la primera, heredera formal de la URSS en muchos terrenos, había hecho suyos viejos compromisos y procedimientos, la segunda había satisfecho plenamente sus promesas de desnuclearización. Más compleja era, sin duda, la situación en Ucrania y Kazajstán, repúblicas que estaban utilizando sus arsenales nucleares como instrumento de presión y negociación tanto con la FR como con las potencias occidentales.

Al margen de las armas estratégicas, no faltaron comentarios sobre la posibilidad de que hubiesen escapado al control de los gobiernos algunas cabezas nucleares tácticas. Esta circunstancia parece haber caído, sin embargo, en el olvido. Una estimación de finales de 1991 identificaba 8.525 de esas armas en la FR, 2.605 en Ucrania, 1.120 en Bielorrusia, 650 en Kazajstán, 325 en Lituania, 320 en Georgia, 295 en Azerbaiyán, 270 en Estonia, 195 en Armenia, 185 en Letonia, 125 en Turkmenistán, 105 en Uzbekistán, 90 en Moldavia, 75 en Kirguizia y otras tantas en Tadzhikistán. En este mismo terreno hay que mencionar otra fuente de efímera atención para los medios de comunicación: la posible exportación de tecnologías nucleares, y la emigración de científicos especializados, casi siempre con destino al Tercer Mundo. Aunque, al parecer, ese horizonte no ha ganado terreno de manera consistente, no puede desdeñarse que en el futuro se hagan sentir noticias al respecto. Conviene reseñar, por ejemplo,

que la mitad de los depósitos y de los centros de procesamiento de uranio de la vieja URSS se encuentran en Kazajstán, Kirguizia, Tadzhikistán y Uzbekistán, y que en la primera de esas repúblicas son varias las instalaciones de pruebas de armas nucleares. Hasta el momento se han identificado casos de contrabando de pequeñas cantidades de uranio enriquecido y de elementos radiactivos no relacionados con armas nucleares. Se han subrayado también los riesgos derivados del hundimiento, en el Ártico y el Pacífico, de los reactores de un buen número de submarinos nucleares.

Pese a que fuentes oficiales le han negado entidad al problema de la «fuga de cerebros», no han faltado informaciones sobre la presencia de expertos nucleares en países como Argelia, la India, Irak, Libia, China o Israel. Problemas burocráticos y financieros han convertido en un relativo fracaso los centros «de ciencia y tecnología» creados, o en proceso de creación, en Moscú y Kíev para acoger a expertos en materias nucleares. A la hora de examinar las aportaciones del «Norte» al despliegue de programas nucleares militares en el «Sur» bueno será que le prestemos también atención, claro es, al papel desempeñado por muchos científicos y técnicos procedentes del mundo occidental.

BIBLIOGRAFÍA

Textos generales sobre los problemas del control de armamentos son los de Albert Carnesale y Richard N. Haass, *Superpower arms control* (Ballinger, Cambridge, 1987); Paul F. Diehl y Loch K. Johnson (dirs.), *Through the straits. Arms control issues and prospects* (University of Georgia, Athens, 1987); Alva Myrdal, *El juego del desarme* (Debate, Madrid, 1982), y Michael J. Sheehan, *Arms control. Theory & practice* (Basil Blackwell, Oxford, 1989). Información indispensable sobre control de armamentos se encuentra en los anuarios que publica el SIPRI de Estocolmo en coedición con Oxford University Press.

Descripciones «oficiales» de la política soviética en materia de control de armamentos durante la *perestroika* son los textos de Mijaíl Gorbachov, *El porvenir pacífico de nuestro planeta* (Plaza y Janés, Barcelona, 1986), *La moratoria* (Nóvosti, Moscú, 1986), *Un mundo sin armas nucleares* (Nóvosti, Moscú, 1987) e *Intervención en la ONU, Nueva York, 7 de diciembre de 1988* (Nóvosti, Moscú, 1988). A estos textos hay que sumar trabajos más elaborados, como los incluidos en los anuarios del IMEMO de Moscú: *Disarmament and security yearbook* (Nóvosti, Moscú, 1987); *Peace and disarmament* (Progress, Moscú, 1987); *Disarmament and security 1987 yearbook* (Nóvosti, Moscú, 1988); *Disarmament and security 1988-89* (Nóvosti, Moscú, 1989)... La versión más reciente de ese anuario ha sido coordinada por Aleksei Arbátov y lleva por título *The security watershed* (Gordon and Breach, Amsterdam, 1993).

De la dinámica negociadora entre la URSS y los EE UU dan cuenta publicaciones coyunturales como *URSS-EE UU Encuentro cumbre, Washington, 7-10 de diciembre de 1987* (Nóvosti, Moscú, 1987); *Sovetsko-amerikánskaya vstrecha na visshem urovne, Moskvá 29 mayá-2 iyunyá 1988 goda* (Politicheskoi literaturi, Moscú, 1988), y *URSS-EE UU Encuentro cumbre, Washington, 30 de mayo-3 de junio de 1990* (Nóvosti, Moscú, 1990). Elemento central de muchas negociaciones lo fueron los programas de defensa estratégicos de las dos grandes potencias. De ellos se ocupan textos como los de Gregory G. Hildebrandt, *SDI and the Soviet defense burden* (RAND, Santa Mónica, 1988); Benjamin S. Lambeth y Kevin N. Lewis, *The Strategic Defense Initiative in Soviet planning and policy* (RAND, Santa Mónica, 1988), y Roald Sagdéev, *Problemas cósmicos, preocupaciones terrestres* (Nóvosti, Moscú, 1987). El entorno de muchas de estas cuestiones se analiza en las obras de Carl Jacobsen (dir.), *The uncertain course* (Oxford University-SIPRI, Oxford, 1987), y Alan B. Sherr, *The*

other side of arms control. Soviet objectives in the Gorbachev era (Unwin Hyman, Boston, 1988).

Por materias de palpitante actualidad se interesan, en suma, los libros de Lev Giltsov, Nikolai Mormul y Leonid Ossipenko, *La tragedia de los submarinos nucleares soviéticos* (Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1993); Aleksandr Putko y Borís Putko, *Silence atomique* (Du rocher, París, 1994), y Gueorguii Vachnadze, *Les mafias militaires du Kremlin* (Ellipses, París, 1994). Un estado de la cuestión nuclear es el libro de William C. Potter, *Nuclear profiles of the Soviet successor states* (Monterey Institute of International Studies, Monterey, 1993).

LA UNIÓN SOVIÉTICA Y LA EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

Una vieja disputa, la que opone a eslavófilos y occidentalistas, ha marcado muchos de los aspectos de la vida del oriente europeo desde el tercer decenio del siglo pasado. Aunque defensores de puntos de vista muy enfrentados, unos y otros mostraron casi siempre cierto desprecio por los derechos de las naciones minoritarias. Incluso pensadores «liberales» como Bakunin o Herzen, que acogían con simpatía la idea de una Polonia independiente, no acababan de ver con buenos ojos los intentos polacos de romper amarras con Rusia.

El triunfo de la revolución de Octubre se saldó con un nuevo capítulo de la vieja polémica, bien es verdad que aderezado entonces con los aditamentos más diversos. Los dirigentes revolucionarios acometieron una provisional y originalísima síntesis de eslavofilia y occidentalismo. Por un lado parecían acatar el «eurocentrismo» de Marx —para quien era el proletariado europeo, y no otro, el que estaba llamado a acabar con el capitalismo— y daban por buena la visión marxiana de Europa, en la que ésta se veía reducida en los hechos a Alemania y a algunos países situados al oeste de ella; por el otro alentaban, sin embargo, un desplazamiento hacia el este de todos los ejes de gravedad y señalaban que sería una vanguardia consciente la que, en Rusia, impulsaría una revolución con efectos mundiales. Lo que aquí llamaremos «Europa central y oriental» (ECyO) no era, a los ojos de Lenin, sino un «obstáculo para nuestra revolución, en la

medida en que separa a la Rusia soviética de la Alemania revolucionaria».[1]

Esta compleja amalgama de contenidos se diluyó, como tantas otras cosas, con el ascenso de Stalin, un eslavófilo para quien Rusia no tenía nada que aprender o importar de Europa (a menudo se olvidan sus perseverantes declaraciones de admiración por la «eficiencia americana»). En esos años cobraba cuerpo, por lo demás, una abierta contestación de la idea leniniana antes enunciada: para Stalin la Unión Soviética no era en modo alguno una simple escala en el proceso de instauración del socialismo en su hogar natural —Alemania—, sino el propio hogar natural, o el escenario principal, por no decir único, de ese proceso.

Hasta 1945 la ECyO apenas había adquirido consistencia en las teorizaciones soviéticas. En ese año, el de la conclusión de una guerra mundial en la que la URSS había desempeñado un decisivo papel, vio la luz un proyecto con dos caras. De acuerdo con la primera, los estados liberados por las tropas soviéticas debían aprestarse a pagar la deuda contraída; con arreglo a la segunda, la URSS debía acometer un ingente esfuerzo para apuntalar sus quebradizos cimientos iniciales. Los territorios radicados entre Alemania y la frontera soviética no sólo serían para la URSS una garantía de su seguridad frente a futuros ataques: en adelante, los problemas y las tensiones locales ya no podrían ser utilizados con el propósito de desestabilizar a la URSS.

La represión de las distintas fórmulas nacionales que siguió a la conclusión de la segunda gran guerra tuvo el efecto subterráneo, en cierta forma paradójico, de fortalecer la idea de comunidad en un conjunto de países que, unas veces de forma velada y otras de manera abierta, mostraban invariablemente su oposición a la política soviética. Con niveles de vida más altos, algunos de ellos eran, por añadidura, un filtro por el que penetraban las corrientes occidentalizantes. En un plano distinto, el de las grandes abstracciones teóricas, esa «Europa del Este» se convertía en el germen de discusiones y disputas, por cuanto en su seno no era tan fácil como en el Tercer Mundo atribuir los problemas o el fracaso del «socialismo» al precario «desarrollo de las fuerzas productivas». Allí, como bien lo apuntó un comentarista de *Izvéstiya*, Aleksandr Bovin, «no sólo estaba en juego la seguridad: también lo estaba la ideología».[2]

[1] *Izvéstiya* (25 de diciembre de 1918).

La Europa central y oriental de la segunda posguerra

El acceso al poder de los partidos comunistas, o de formaciones políticas afines, en la ECyO se produjo en estrecha vinculación con la presencia militar del ejército soviético tras la segunda guerra mundial. El procedimiento fue, sin embargo, diferente según los lugares. Baste con recordar que el control soviético sobre la política de lo que al cabo fue la República Democrática Alemana (RDA) era ya por aquel entonces muy severo, que en Polonia mediaban divergencias de carácter histórico ratificadas por contenciosos recientes —el pacto germano-soviético de 1939, la matanza de Katyn o la insurrección del *ghetto* de Varsovia—, y que en países como Rumania o Hungría los partidos comunistas eran extremadamente débiles y los sentimientos antisoviéticos poderosos. Sólo en Checoslovaquia existía un partido comunista fuerte, con base popular arraigada. En Bulgaria se hacía notar, entre tanto, la singularidad de poderosos lazos históricos con el mundo ruso/soviético.

Por lo general, el acceso al poder de los partidos que nos ocupan se produjo de la mano de la creación de frentes populares, acompañada de procesos electorales más o menos fraudulentos, en un marco general de represión de las otras fuerzas políticas. Quedó abierta entonces una etapa que pro-

[2] Cit. en *The New Yorker* (13 de enero de 1983).

bablemente concluyó en 1956. En ella la URSS controló de manera muy firme la vida de estos estados, al tiempo que intentó resarcirse de las pérdidas ocasionadas por la segunda guerra mundial, expropiando al efecto muchos de los recursos económicos presentes en el área. En 1956 se desarrollaron, sin embargo, dos acontecimientos decisivos de signo parcialmente contrario. Con motivo del XX Congreso del PCUS, Jrushchov pronunció un discurso con el que dio inicio a un período liberalizador, conocido con el nombre de «desestalinización». De manera casi simultánea se hacía notar, sin embargo, la primera de las grandes intervenciones soviéticas en la ECyO: la que tuvo por escenario Hungría. Al poco se abrió una etapa de doce años —los que mediaron entre 1956 y 1968— en la que, al menos en las formas, la URSS renunció, por un lado, a la imagen de un universo satelizado en el que se autoerigía como líder y propició, por el otro, la consolidación de un espacio político de aparente igualdad entre los estados que nos ocupan.

Esa aparente igualdad se truncó en 1968, de la mano de una nueva intervención militar —en este caso no ya de la URSS, sino del Pacto de Varsovia— en Checoslovaquia. La represión de la «primavera de Praga» inauguró una etapa marcada por una concepción, la llamada «doctrina Brézhnev», que postulaba la «soberanía limitada» de los estados. En adelante, y hasta el otoño de 1989, la URSS reconoció sistemas políticos, económicos y sociales diversos, siempre y cuando dieran satisfacción a determinadas reglas que ella misma fijaba. El grado de soberanía de los aliados en el plano de las políticas exterior y militar debía dilucidarse, de cualquier modo, en Moscú, que se reservaba el uso de la fuerza cuando las actitudes de gobiernos o sociedades excedieran ciertos límites.

Este intento de identificar, en lo que a la política soviética respecta, un período homogéneo entre 1968 y 1989 reclama alguna matización. En 1976 vio la luz un documento importante, el Acta Final de la Conferencia de Helsinki, que

si por un lado ratificaba la dominación de la URSS sobre estos países —en la medida en que reconocía las fronteras derivadas de la segunda guerra mundial—, por el otro requería, del lado soviético, el reconocimiento de determinados deberes en materia de derechos humanos y la aceptación del principio de no ingerencia en los asuntos internos. Esta doble y ambigua consecuencia tuvo acaso su más clara plasmación en las incertidumbres que caracterizaron el proceso polaco de los años 1980 y 1981. De por medio, y como es sabido, en 1985 se iniciaba en la Unión Soviética un proceso de reformas que había de conducir, en el otoño de 1989, a un derogamiento explícito de la doctrina de la «soberanía limitada».

Para completar esta descripción es necesario hacer mención de una palabra clave: intervenciones. En la mayoría de estos países se verificaron en los últimos decenios ciclos característicos, en los que en primer lugar se manifestaba cierta liberalización que era zanjada más adelante por una intervención, de naturaleza militar o no. A esa intervención le seguía un intento de forjar un nuevo «contrato» en el que por lo general era un elemento decisivo el concurso de la ayuda económica soviética. Tras las intervenciones de 1956 y 1968, la URSS incrementó de manera sustancial la ayuda a los países afectados en un esfuerzo evidente por reconstruir su clima social. A las intervenciones «externas» hay que agregar, de cualquier modo, el influjo de actuaciones «internas» claramente zanjadoras de efímeros períodos de liberalización. Este fue el caso de las que se produjeron en 1953 en Berlín y en 1956 en la ciudad polaca de Poznan. Por lo demás, las «grandes intervenciones» —Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968 y, de manera indirecta, Polonia en 1981— presentaban elementos de comunidad pero también rasgos específicos. Así, en 1956 y en 1968 se hizo sentir un enfrentamiento que en sustancia afectaba a distintos sectores de los partidos comunistas respectivos. En 1981, en cambio, era evidente la colisión entre un partido comunista en el

poder —el Partido Obrero Unificado Polaco— y un movimiento de protesta que tenía su principal plasmación en el sindicato *Solidarnosc*. El agente de las intervenciones no fue siempre, en fin, el mismo: si en 1956 era el ejército soviético el que actuaba en Hungría, en 1968 era el Pacto de Varsovia —una instancia teóricamente supraestatal— el que asumía el peso de la acción, mientras que en 1981 ya no se trataba de una intervención externa, y sí de una acción del propio ejército polaco.

Sean como sean las cosas, es evidente que la influencia soviética sobre la política de los estados «aliados» fue muy notoria. Un estudio reciente recordaba que la tercera parte de los secretarios generales de los partidos comunistas respectivos accedieron a ese puesto o fueron destituidos como consecuencia de una intervención militar o de una presión directa ejercida por la URSS. Tal grado de influencia sólo tiene un parangón en el planeta: la actividad de los EE UU en el continente americano desde 1945.

Los modelos resultantes

Un dato inicial se impone a la hora de describir, en el plano político, la naturaleza de los regímenes imperantes en la ECyO en los últimos decenios: todos estos países desarrollaron en su momento formas de organización política que tomaban como punto de partida una Constitución, la soviética de 1934, claramente alejada de liberalidades. El producto no fue otro que fórmulas muy represivas asentadas en el papel dirigente, en ocasiones no compartido, del partido comunista local y en una visible supeditación a intereses externos. El hecho de que, a diferencia de la propia URSS, o de países como Albania o Yugoslavia, la instauración de las «democracias populares» se produjese de forma directa como consecuencia de la presencia militar soviética cercenó sensiblemente la posibilidad de manifestación de fórmulas

autóctonas defensoras de visiones opuestas a las de los países limítrofes y, muy particular, a la de la «metrópoli».

De las más diversas formas se hicieron notar, por otra parte, los efectos de la existencia de «sociedades civiles» cuyo grado de evolución exhibía diferencias notorias. Extremadamente débiles en Bulgaria y Rumania, fueron reprimidas de manera evidente en el este de Alemania —donde, sin embargo, pudieron ampararse bajo el manto protector de la Iglesia luterana—, constituyeron el principal objeto de represión de las intervenciones acometidas en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968, y se vieron episódicamente beneficiadas por una relativa tolerancia en Polonia, en el marco de un movimiento opositor muy poderoso.

En el plano económico, en todos estos países se verificó un intento de trasladar un modelo, el soviético, en el que el grueso de las decisiones tenía, como es sabido, un carácter administrativo. Las secuelas del sistema soviético se hicieron sentir también en forma de significativos privilegios para la industria pesada y obstáculos sin cuento para otros sectores económicos, como la industria ligera o la agricultura. A esta situación se agregó el vigor de fórmulas de relación laboral muy semejantes a las presentes en la URSS. Por lo demás, no parece que los modelos imperantes hicieran esfuerzos reales para ajustarse a las condiciones peculiares de cada país. Checoslovaquia y la RDA, zonas industrializadas con anterioridad a la segunda guerra mundial, y cuyos flujos comerciales se desarrollaban preferentemente con el occidente del continente, vieron recortadas muchas de sus posibilidades económicas.

Las relaciones económicas externas de estos estados se materializaron en la constitución de una organización, el Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAEM o Comecon), que propició cierta división interna del trabajo. Sobre el papel, ésta fue perjudicial para países que, como Rumania o Bulgaria, pasaron a desempeñar tareas subalternas en la forma de productores de bienes agrarios para las sociedades

más industrializadas del norte. El CAEM fue siempre una estructura endeble y poco activa, incapaz de superar sus dilemas iniciales y anclada en fórmulas de «crecimiento extensivo» propias de un pasado en que existían recursos que parecían inagotables. De cualquier modo, conviene no dejar en el olvido una imagen equívoca de la relación de la URSS con los países de área: la idea de que esa relación respondió en todo momento al esquema metrópoli-colonias. A partir de 1953, la URSS asumió una relativa financiación de las economías de sus aliados a través de la transferencia, a precios muy bajos, de petróleo y gas natural. Nada, pues, más alejado de la realidad que la imagen —sólo justificada en el período 1946-1953— de una ECyO expoliada en sus recursos por la URSS.

Como quiera que los estados de la ECyO pusieron manos a la tarea de reproducir miméticamente el sistema soviético, no puede sorprender que los términos de la crisis de éste se reprodujeran en ellos con perfiles semejantes. Se hizo notar, así, una progresiva pérdida del control que el centro ejercía sobre la economía, de la mano de empresas que engañaban sobre sus capacidades reales, de ministerios que competían entre sí y de una actividad sumergida cada vez más pujante. Otras características de la crisis del sistema soviético se hicieron presentes en su área de influencia. Es el caso del consumo excesivo de materias primas, de una significativa degradación ambiental o de extraordinarias dificultades a la hora de impulsar la innovación y la difusión de tecnologías. Bien es cierto que había al menos un elemento diferenciador importante entre una crisis y la otra: el endeudamiento externo de los estados que nos ocupan alcanzó niveles significativamente más importantes que los soviéticos. Por cada 100 dólares que se ingresaban en 1986, al pago de la deuda debían destinarse 70 en Polonia, 50 en Hungría y entre 40 y 50 en la RDA, Bulgaria y Rumania.

En el plano militar, en fin, la fórmula organizativa común adoptada por estos estados fue el Pacto de Varsovia.

Aunque producto de un deseo de dar respuesta a una amenaza externa, la constituida por la OTAN, el Pacto fue utilizado en repetidas ocasiones como elemento de control y represión interna. Permitió, en particular, una clara supervisión soviética de la política militar de los países del área a través de mecanismos diversos entre los que se contaban la formación y el adoctrinamiento de los oficiales de los ejércitos respectivos, la facilidad de movimientos para las tropas de la URSS, las limitaciones de que fueron objeto las industrias y los presupuestos de defensa de los estados aliados o, en suma, el hecho de que en estos últimos —con una sola excepción, la rumana— no existiesen doctrinas y previsiones de defensa ante un eventual ataque procedente de otro miembro del Pacto.

Pese a lo que pueda parecer, el Pacto de Varsovia no fue, sin embargo, una estructura homogénea. Hay que distinguir en su seno, por el contrario, un flanco norte y un flanco sur claramente diferenciados. El flanco norte, que incorporaba a la RDA, Polonia, Checoslovaquia y, quizá, Hungría, era el escenario teórico de un enfrentamiento entre los bloques. En esta zona, la URSS hizo gala de pocas liberalidades: estos países fueron el escenario privilegiado de las intervenciones militares antes mencionadas. El flanco sur, en cambio, configuró siempre un área de menor importancia estratégica en la que la URSS se mostró más liberal. Baste con mencionar la ruptura de los lazos con Albania o con Yugoslavia, o la política exterior y militar independiente desplegada por Rumania, un país cuyas singularidades dentro del Pacto fueron muchas: desarrolló una doctrina militar que contemplaba la posibilidad de un ataque soviético, no acogió tropas de la URSS desde 1958, rechazó la realización de maniobras conjuntas y condenó, en 1968, la invasión de Checoslovaquia.

Una descripción como la anterior corre el riesgo de reforzar, siquiera sea marginalmente, la idea de que nos hallábamos ante países y estados extraordinariamente semejantes. Sin embargo, el hecho de que durante cuarenta años hayan

pertenecido a un mismo bloque económico, político y militar no debe hacernos olvidar que se trataba de entidades diferentes, con tradiciones históricas y políticas dispares, «sociedades civiles» en desigual grado de desarrollo, singularidades en cuanto a los procesos de industrialización y urbanización, y peculiaridades derivadas de la propia dinámica, en los casos correspondientes, de las intervenciones externas. Su carácter, cruento o incruento, dejó huellas bien diferentes, y otro tanto puede decirse de su despliegue cronológico: no ejerció los mismos efectos una intervención datada en 1956 que otra desarrollada en 1968.

Desde un punto de vista económico se hacía notar la presencia de dos estados (la RDA y Checoslovaquia) claramente más desarrollados, con dos economías «intermedias» (Polonia y Hungría) y dos países (Rumania y Bulgaria) visiblemente atrasados. Singularidades adicionales eran el hecho de que la RDA se hubiese visto beneficiada por el desarme arancelario y por las transferencias que procedían de la otra Alemania y de la Comunidad Europea, la circunstancia de que Polonia y Rumania disfrutasen de alguna autonomía energética (Polonia gracias a su carbón, Rumania a su petróleo), o la realidad de que en Hungría hubiese adquirido cierto relieve, al menos en el sector agrario, la actividad privada. Otros elementos diferenciadores eran los derivados de la configuración nacional de estos estados: los problemas nacionales no atenazaban únicamente a la URSS. Hay que hacer mención al respecto de la existencia de activas minorías turcas, húngaras y gitanas, presentes, respectivamente, en Bulgaria, Rumania y Hungría; de la presencia de checos y eslovacos en Checoslovaquia, o de las singularidades del trazado de las fronteras occidentales y orientales de Polonia. Es menester agregar, además, el problema de la unificación alemana y los contenciosos entre estados, como los suscitados por la cuestión de Moldavia —entre la URSS y Rumania— o, en su momento, por las reivindicaciones búlgaras sobre la Macedonia yugoslava.

La disgregación del bloque soviético en la ECyO se inició acaso en 1985-1986, cuando hizo su aparición el concepto de «casa común europea». En 1987, liberado ya de su contenido inicial —que probablemente remitía, siquiera fuera indirectamente, al propósito de reducir la influencia norteamericana en Europa—, el concepto que nos ocupa empezó a asociarse con un mayor margen de maniobra para los estados aliados de la URSS. Al tiempo se mitigaba el influjo de otros términos —así, el de «internacionalismo socialista»— otrora comunes en muchas de las teorizaciones soviéticas.

La posición de la URSS en relación con la ECyO seguía marcada, sin embargo, por la ambigüedad. Aunque no faltaban declaraciones que subrayaban la voluntad de respetar las diferencias, lo cierto es que veían la luz mientras se hacían notar otras en las que el espíritu de la doctrina de la «soberanía limitada» era visible. Así, si en abril de 1985 Gorbachov subrayaba la exigencia de lealtad en el seno del Pacto de Varsovia y en junio de 1986 observaba que «las amenazas al orden socialista, los intentos de socavarlo desde fuera o de desgajar a uno u otro país de la comunidad socialista constituyen una agresión, no sólo a la voluntad popular, sino también a todo el orden de posguerra»,[3] en febrero de 1986 el secretario general del PCUS reivindicaba «el derecho de cada pueblo a elegir los caminos y las formas de su desarrollo»[4] y en mayo de 1987 preconizaba un «intercambio de opiniones profundo sobre la cooperación entre los países socialistas aliados».[5]

En 1988 y 1989 algunos hechos parecían reflejar una voluntad de modificar las relaciones tradicionales, tal vez en

[3] Servicio de televisión de Moscú (30 de junio de 1986).
[4] Servicio de televisión de Moscú (25 de febrero de 1986).
[5] Cit. en Thierry Malleret y Murielle Delaporte, *L'Armée Rouge face à la perestroïka* (Complexe, Bruselas, 1991), pág. 273.

la conciencia de que éstas obstaculizaban el reforzamiento de los lazos con los EE UU y con la Europa occidental. A principios de 1988 un comunicado soviético-yugoslavo apuntaba la plena independencia de los partidos y de los estados socialistas, al tiempo que señalaba que el principio de coexistencia pacífica debía aplicarse a las relaciones internas dentro del propio bloque socialista. El discurso de Gorbachov en la ONU en diciembre de 1988 incluía una mención de la libertad de elección política para cada estado, así como un reconocimiento de la variedad de formas de desarrollo socialista. En junio de 1989, la URSS enunciaba su compromiso con el derecho de autodeterminación social y política de cada pueblo, con ocasión de una declaración conjunta suscrita por su gobierno y el de la República Federal de Alemania (RFA). En un discurso ante el Consejo de Europa pronunciado un mes después, Gorbachov calificaba de inadmisibles «cualquier interferencia en los asuntos internos y cualquier intento de restringir la soberanía de los estados, sean amigos, aliados u otros».[6] Si en agosto de 1989, en fin, la URSS daba su visto bueno a la «mesa redonda» en la que el gobierno y la oposición polacos se aprestaban a dirimir sus diferencias, unos meses después, en octubre, se negaba a respaldar la represión de las manifestaciones populares en la RDA.

La política soviética durante 1988 y 1989 partía acaso de la confianza en que una perspectiva de no intervención —las acciones militares estaban descartadas— abriese el camino, en la ECyO, a reformas graduales y controlables. Como es sabido, la realidad fue bien distinta. A principios de 1989, el Partido Socialista Obrero Húngaro admitió la necesidad de convocar elecciones libres, renunció a su papel dirigente e inauguró negociaciones con la oposición. Entre tanto, *Solidarnosc* era objeto de legalización en Polonia y se imponía en unas elecciones semidemocráticas; en agosto, y en virtud

[6] *Soviet news* (12 de julio de 1990).

de un pacto con el gobierno del general Jaruzelski, Mazowiecki, un miembro de *Solidarnosc*, pasaba a encabezar un nuevo gabinete. En noviembre, tres semanas después de la dimisión del presidente germanooriental, Honecker, se abría el muro de Berlín y en el mismo mes el presidente búlgaro, Zhívkov, perdía el poder. El proceso se repetía en Checoslovaquia en diciembre, con la sustitución del presidente Jakes por una figura opositora de gran carisma: Havel. A finales de 1989, en suma, y tras un breve enfrentamiento civil, el presidente rumano, Ceausescu, era ejecutado al tiempo que tomaba el poder en Rumania un Frente de Salvación Nacional. Pese a las declaraciones del en su momento jefe del Estado Mayor soviético, mariscal Ajroméev —«Cuando empezamos a aplicarla [la nueva política exterior] suponíamos que habría cambios en Europa central y, posiblemente, una reunificación alemana. No fueron para nosotros una sorpresa»[7]—, los procesos que nos ocupan siguieron un camino y un ritmo distintos de los deseados por la URSS.

La consecuencia fundamental del camino abierto fue el acceso al poder de formaciones políticas poco proclives a reforzar los lazos tradicionales con la URSS. Los efectos de esta circunstancia se hicieron notar en los meses siguientes en la forma de un aceleradísimo desmantelamiento de las instituciones que garantizaban la presencia soviética —el Pacto de Varsovia y el CAEM—, acompañado de una progresiva retirada de los efectivos militares de la URSS presentes en varios de los estados hasta entonces aliados.

Por lo que al Pacto de Varsovia respecta, probablemente las cosas empezaron a cambiar de manera sensible a mediados de 1989. En julio, una reunión del Comité Político Consultivo celebrada en Bucarest concluyó con un comunicado que repetía una vieja demanda de la retórica del Pacto —la disolución simultánea de los dos grandes bloques militares— y subrayaba que cada estado socialista tenía derecho a desarrollar

[7] *Nóvoe vremia* (nº 5, mayo de 1991).

su propia línea política sin interferencias externas. En sus comentarios sobre la reunión, Gorbachov enunció una idea que en los meses siguientes se hizo común entre los portavoces soviéticos: la de una conversión del Pacto en una organización *político*-militar que diera por buena la diversidad en las relaciones externas de los estados miembros. La de Bucarest fue la última reunión a la que acudieron únicamente representantes de los partidos «comunistas» gobernantes, toda vez que en adelante se haría notar la presencia de miembros de las formaciones políticas que iban accediendo al poder en los distintos países.

Una vez desencadenados los sucesos de finales de 1989 las autoridades soviéticas procuraron mantener en pie, en línea con las intenciones expresadas por Gorbachov, algunas de las estructuras del Pacto (de la misma forma que intentaban hacer otro tanto con el CAEM). En ese esfuerzo se enmarcaban, por ejemplo, las declaraciones del ministro soviético de Asuntos Exteriores, Shevardnadze, en junio de 1990: «Como todo acuerdo, el Pacto de Varsovia no es eterno. Pero debería perdurar, al menos como agrupación política, en tanto responda a las verdaderas necesidades de los países».[8] En el mismo sentido se pronunció el general Lóbov, quien se refirió a la conveniencia de transformar el Pacto, de tal manera que dejara de ser una organización militar-política para convertirse en una organización *político-militar.* Otra idea común entre los portavoces soviéticos era la que subrayaba la importancia adquirida por las nuevas relaciones entre estados iguales, frente a la subordinación característica de las viejas relaciones entre partidos. Este cuerpo de conceptos se abrió un provisional camino en las declaraciones programáticas con ocasión de la reunión celebrada por el Comité Político Consultivo en Moscú a principios de junio de 1990; el Pacto de Varsovia se redefinió como el producto de una alianza de estados soberanos asentada en principios democráticos. Por las mismas fechas, Hungría anunciaba su deseo de abandonar las estructuras militares y de abstenerse de participar en las maniobras correspondientes.

[8] *The Washington Post* (27 de junio de 1990).

Pese a los retóricos intentos del comandante en jefe del Pacto, general Lúshev —quien, entrado 1990, identificaba todavía progresos en la cooperación interna y una pervivencia del «internacionalismo socialista», a la vez que estimaba que la retirada de las tropas soviéticas no alteraba los fundamentos de la alianza—, la trayectoria posterior fue bien distinta: la desaparición del Pacto de Varsovia se produjo en los primeros meses de 1991, sin que ninguna de sus estructuras permaneciese en pie y sin que la organización conservase un papel de relieve en el nuevo sistema europeo de seguridad. El 25 de febrero de 1991 se firmaba en Budapest un protocolo por el que se cancelaban los efectos de los suscritos con anterioridad y desaparecían, a partir del 31 de marzo, las estructuras y cuerpos militares. El 1 de julio se suscribía otro que ponía fin al tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua firmado en mayo de 1955.

Así quedaban truncados muchos de los proyectos soviéticos, que muy probablemente habían apostado, en los últimos años ochenta, por la preservación del Pacto de Varsovia como entidad al servicio de los objetivos estratégicos de la URSS, cuyas tropas estaban llamadas a mantener su presencia en la ECyO durante un período de al menos 5-10 años. Se hundía también una concepción estratégica para la que un conflicto convencional en Europa reclamaba, en lo que a la URSS atañe, un apoyo activo de los estados aliados en la ECyO. Significativas fueron las críticas que, unos días después de la desaparición del Pacto, realizó el general Moiséev —sustituto de Ajroméev a la cabeza del Estado Mayor soviético—, llamando la atención sobre lo que en su opinión era la futilidad de los argumentos empleados por la OTAN para preservarse a sí misma. Para Moiséev, la garantía de la seguridad futura en la ECyO era la firma de acuerdos de cooperación bilateral con los estados del área, de tal manera que el

territorio de ninguno de esos estados pudiese ser empleado en operaciones dirigidas contra la URSS.

Al compás de la desaparición del Pacto de Varsovia, en 1990 y 1991 se verificaban otros dos procesos. El uno era la ya mencionada disolución del CAEM, que no hizo sino acrecentar muchos de los problemas económicos, en la medida en que de su mano se diluyeron también relaciones comerciales que no podían calificarse sino de «naturales». En adelante, los estados de la ECyO volvieron sus miras económicas hacia el oeste del continente, y muy probablemente perdieron ventajas comparativas que en una situación de manifiesta crisis hubieran ayudado a mitigar muchas tensiones; se vieron privados, también, de las materias primas energéticas que la URSS —o la Federación Rusa— proporcionaban con precios inferiores a los de los mercados internacionales. El otro proceso de relieve era la unificación alemana, y ello pese a las cautelas iniciales de la URSS. En febrero de 1990 Gorbachov reconoció que debían ser los propios alemanes quienes decidieran el futuro de su país, en un momento en que todos los portavoces soviéticos, incluido Shevardnadze, estimaban que una hipotética unificación se tomaría su tiempo. En aquellos meses, la URSS se oponía a una Alemania unificada que mantuviese su condición de estado miembro de la OTAN o, lo que es casi lo mismo, propugnaba para Alemania una condición de neutralidad. En mayo, Shevardnadze intentó buscar un compromiso sugiriendo que, en el marco del modelo diseñado por la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE), Alemania se convirtiese en miembro simultáneo de las dos alianzas militares.

Mientras las disputas referidas se desarrollaban, las dos Alemanias firmaban, en mayo de 1990, un tratado de unión monetaria, económica y social. Acaso forzada por los acontecimientos, en el mes siguiente la URSS se avino a reconocer el derecho de la Alemania unificada a decidir libremente sus relaciones con los bloques militares. Alemania optó por mantenerse dentro de la OTAN al tiempo que se fijaba un

plazo de 3-4 años para la retirada de las tropas soviéticas. Las estructuras de la OTAN no se extenderían, sin embargo, al territorio de la antigua RDA, aun cuando las unidades del ejército federal no integradas en la Alianza Atlántica podían estacionarse en él. De manera informal, en suma, se acordaba que en ese mismo espacio geográfico deberían desaparecer armas nucleares y unidades militares extranjeras, y ello aun después de la retirada de las tropas soviéticas. Este acuerdo no tranquilizó al jefe del Estado Mayor soviético, quien subrayó que alteraba de manera fundamental la situación estratégica en Europa y en modo alguno aminoraba el peligro militar que la URSS debía encarar.

En el trasfondo de las concesiones soviéticas se hallaban generosos compromisos de ayuda económica alemana, y entre ellos el que hacía referencia al cubrimiento de los costes de repatriación de las unidades militares de la URSS. También parecían manifestarse algunos cambios en la perspectiva con que la OTAN se avenía a encarar a su enemigo de siempre. La «Declaración de Londres» de la Alianza, de 6 de julio de 1991, incorporaba, según algunos especialistas, cierta voluntad de aminorar las preocupaciones soviéticas e incluía un compromiso de mitigar el peso de las formulaciones doctrinales más agresivas. Pese a ello, unos días después el ministro de Defensa soviético, Yázov, estimaba que la OTAN seguía sin introducir transformaciones de relieve en sus formulaciones teóricas y en su práctica militar.

La desaparición del Pacto de Varsovia se produjo en paralelo, también, con la firma de acuerdos que obligaban a las tropas soviéticas a abandonar, con plazos diversos, los territorios de los estados aliados en que se hallaban presentes. En febrero y marzo de 1990 se ultimaron sendos acuerdos entre la URSS y, respectivamente, Checoslovaquia y Hungría; la Unión Soviética se comprometía a retirar antes de junio de 1991 sus soldados presentes en esos países. A mediados de noviembre de 1990 se anunciaba la conclusión de la retirada de las tropas soviéticas presentes en la Hungría

occidental, mientras que en junio de 1991 concluía la retirada del resto de Hungría y de todo el territorio checoslovaco. En abril de 1991 se alcanzaba otro acuerdo en el caso de Polonia: la URSS debía retirar sus soldados antes del final de 1993. En junio de 1991 —lo acabamos de reseñar— se hacía lo propio en el de la antigua RDA. No existían unidades militares soviéticas en Rumania, y los escasos oficiales del Pacto de Varsovia presentes en Bulgaria habían abandonado este país en el otoño de 1990.

Todas las operaciones de retirada suscitaron polémicas, entre la URSS y los países correspondientes, sobre compensaciones económicas. El argumento principal esgrimido por la Unión Soviética fue el del valor de las instalaciones que se veía obligada a abandonar, mientras que del lado de los estados otrora aliados se invocaban los daños ecológicos causados en los decenios precedentes. Como es fácil suponer, la retirada de las tropas soviéticas suscitó comentarios críticos entre muchos portavoces militares. A decir verdad, los comentarios más frecuentes no cuestionaban el principio de la retirada, sino más bien el carácter precipitado de la misma, «con daños materiales y morales inconmensurables».[9] No faltaron, con todo, opiniones más crudamente contestatarias, como la del general Makashov: «A causa de las autodenominadas victorias de nuestra diplomacia, el ejército ha abandonado sin luchar los países que nuestros padres liberaron del fascismo».[10] Motivo frecuente de queja en las declaraciones de los portavoces militares soviéticos fue también la pervivencia, sin apenas alteraciones y al tiempo que el Pacto de Varsovia desaparecía, de la OTAN. En junio de 1990, el ministro de Defensa, Yázov, afirmaba: «Por un lado, nuestros colegas occidentales están satisfechos con la transformación

[9] Coronel general Vecháev, en *Krásnaya zvezdá* (22 de diciembre de 1990).

[10] Cit. en Harry Gelman, «Gorbachev and the future of the Soviet military institution», en *Adelphi papers* (nº 258, 1991), pág. 41.

del Pacto de Varsovia en una alianza política. Por otro, mantienen su alianza como un bloque político-militar y reservan para ella un papel central».[11]

A mediados de 1991, el mariscal Kulikov subrayaba que la URSS seguía amenazada militarmente,[12] idea a la que se adscribieron otros militares de reconocido prestigio. En abril de 1991 el propio Moiséev echaba mano de un discurso del presidente norteamericano, Bush, en el que las palabras de éste —«La paz y la estabilidad de todo el mundo dependerán, como antes, del poderío y de la determinación de los EE UU, y de nuestra disposición para asegurar una presencia activa allí donde nuestros intereses y los de nuestros aliados estén amenazados»— lo invitaban a subrayar los efectos negativos de la obsesión por la supremacía que guiaba a los Estados Unidos.[13] A principios de 1991, en fin, y aun reconociendo que no existía ya una «amenaza militar directa» y que «el peligro de guerra y la tensión han disminuido de forma considerable», Ajroméev llamaba la atención sobre el hecho de que «la política de los EE UU con respecto a la URSS no puede calificarse de unívoca. Combina la búsqueda de entendimiento, y hasta la cooperación, y la presión sobre nosotros, recurriendo a diversos instrumentos, incluida la fuerza militar». Ajroméev recordaba, por añadidura, que los EE UU mantenían en pie una «estrategia de seguridad nacional» que seguía considerando a la URSS como una potencia militar, al tiempo que preservaban, intacta, una importante red de bases militares y navales y no dudaban en ingerirse en asuntos de la incumbencia estricta de la Unión Soviética, como el futuro de las islas Kuriles o el porvenir de las repúblicas bálticas.[14] El propio Ajroméev criticó con dureza, en septiembre de 1990, uno de los puntos del programa de gobierno presen-

[11] Tass (26 de junio de 1990).

[12] Tass (7 de mayo de 1991).

[13] *Izvéstiya* (6 de abril de 1991).

[14] *Nóvoe vremia* (nº 5, 1991); *Komsomólskaya pravda* (4 de agosto de 1990).

tado por Gorbachov: el que establecía una relación entre la afluencia de capital exterior y las reducciones que debían operarse en las dimensiones y los presupuestos de las fuerzas armadas. Para Ajroméev esa relación remitía a un grave riesgo de ingerencia en asuntos internos: «No deberíamos aceptar que el capital exterior nos dictase los términos de la política exterior o el nivel que la defensa del país debe adoptar».[15]

Por lo demás, la «política de defensa» de los nuevos regímenes instaurados en la ECyO se caracterizó por reivindicaciones generalizadas de retirada de las tropas soviéticas, una extensión de la objeción al servicio en filas acompañada de solicitudes de rebaja en el tiempo de éste, y medidas reductoras en el gasto en defensa. Los «intereses de seguridad nacionales» experimentaron una notoria afirmación, en detrimento de los «intereses comunes» en el seno del Pacto de Varsovia, y ello pese a las primeras tomas de posición de los nuevos gobiernos, respetuosas de los tratados suscritos (Polonia) o reconocedoras del papel de los bloques en el proceso de desarme (Checoslovaquia). El fenómeno reseñado —que se hizo notar en los foros de control de armamentos, y sobre todo en los que se ocupaban de las fuerzas convencionales— se manifestó también en la aparición de doctrinas militares propias en sustitución de las formulaciones «ideológico-militares» impuestas. En algunos casos el proceso abocó en la postulación de una activa neutralidad. Si ésta era una situación que a buen seguro suscitaba inquietud entre los militares soviéticos, convencidos de la necesidad de evitar la repetición de tragedias como la de 1941, no hay que olvidar que otra de las preocupaciones abiertas por el nuevo *statu quo* era la de los efectos que la retirada de la URSS estaba llamada a ejercer sobre la estabilidad de los países del área.

[15] Servicio de televisión de Moscú (18 de septiembre de 1990).

BIBLIOGRAFÍA

Introducciones a los problemas de la política exterior soviética a partir de los sesenta son las de Jonathan R. Adelman y Deborah A. Palmieri, *The dynamics of Soviet foreign policy* (Harper & Row, Nueva York, 1989); Paul Dibb, *The Soviet Union: the incomplete superpower* (University of Illinois, Urbana-Chicago, 1986); Robin Edmonds, *Soviet foreign policy. The Brezhnev years* (Oxford University, Oxford, 1983); Carl G. Jacobsen (dir.), *Soviet foreign policy: new dynamics. New themes* (St. Martin's, Nueva York, 1989); Jacques Levesque, *L'URSS et sa politique internationale de Lénine à Gorbatchev* (Armand Colin, París, 1987); Margot Light, *The Soviet theory of international relations* (Wheatsheaf, Brighton, 1988); Peter J. Mooney, *The Soviet superpower. The Soviet Union, 1945-80* (Heinemann, Londres, 1982); Edwina Moreton y Gerald Segal (dirs.), *Soviet strategy toward Western Europe* (George Allen & Unwin, Londres, 1984); Georges Sokolov (dir.), *La drôle de crise. De Kaboul à Genève, 1979-1985* (Fayard, París, 1986); Jonathan Steele, *The limits of Soviet power* (Penguin, Harmondsworth, 1985); VV AA, *Da Breznev ad Andropov. La politica estera sovietica* (Teti, Milán, 1983); y VV AA, *URSS-EE UU: problemas regionales y globales* (Nauka, Moscú, 1990). Deben agregarse los monográficos «The foreign policy and diplomatic activity of the USSR», monográfico de *International Affairs* (enero de 1990), y «Nuevos y viejos pensamientos. La política exterior de la Unión Soviética», monográfico de *Papeles para la Paz* (nº 35, 1989). Pueden consultarse también los dos libros del durante tantos años ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromiko, traducidos al castellano: *Mis escritos y pensamientos* (Plaza y Janés, Barcelona, 1985) y *Memorias* (El País-Aguilar, Madrid, 1989);

De la política postrera de la URSS en la Europa central y oriental dan cuenta el libro de Hélène Carrère d'Encausse, *Le grand frère* (Flammarion, París, 1983), junto con, en su vertiente económica, los trabajos de Giovanni Graziani, *Comecon, domination et dépendances* (François Maspero, París, 1982), y Françoise Lemoine, *Le Comecon* (PUF, París, 1982), y en su vertiente militar los libros de Gerard Holden, *The WTO and Soviet security policy* (Blackwell, Oxford, 1989), y Christopher D. Jones (dir.), *Soviet influence in Eastern Europe: political autonomy and the Warsaw Pact* (Praeger, Nueva York, 1981). De los cambios operados en la relación bilateral durante la *perestroika* se ocupan Karen Dawisha, *Eastern Europe. Gorbachev and reform* (Cambridge University, Cambridge, 1988); Charles Gati, *The bloc that failed. Soviet-East European relations*

in transition (I.B. Tauris, Londres, 1990); Adriano Guerra, «L'Urss e l'Europa orientale», en *La politica estera della perestrojka* (Riuniti, Roma, 1988); Georges Mink, *L'effet Gorbatchev en Europe de l'Est»* (La documentation française, París, 1989); Libor Roucek, *After the bloc: the new international relations in Eastern Europe* (RIIA, Londres, 1992); el monográfico «El bloque del Este se disuelve», en *Cuadernos del Este* (nº 3, 1991), y el anuario *L'URSS et l'Europe de l'Est* (La documentation française, París).

Textos generales sobre la historia contemporánea de la Europa central y oriental son, por otra parte, los de Henry Bogdan, *Histoire des pays de l'Est* (Perrin, París, 1990); Wlodzimierz Brus, *Histoire économique de l'Europe de l'Est 1945-1985* (La découverte, París, 1985); François Fetjö, *Historia de las democracias populares* (Martínez Roca, Barcelona, 1971); Joseph Held (dir.), *The Columbia history of Eastern Europe in the twentieth century* (Columbia University, Nueva York, 1992); Jerzy Lukaszewski (dir.), *Lás democracias populares después de Praga* (Moneda y crédito, Madrid, 1973); Robin Okey, *Eastern Europe 1740-1985* (Hutchinson, Londres, 1986); George Schöpflin, *Politics in Eastern Europe* (Blackwell, Oxford, 1993); André Sellier y Jean Sellier, *Atlas des peuples de l'Europe centrale* (La découverte, París, 1991); Thomas W. Simons Jr., *Eastern Europe in the postwar world* (Macmillan, Londres, 1993); Geoffrey Swain y Nigel Swain, *Eastern Europe since 1945* (Macmillan, Londres, 1993); David Turnock, *Eastern Europe: an economic and political geography* (Routledge, Londres, 1989) y *The human geography of Eastern Europe* (Routledge, Londres, 1989), y Stephen White (dir.), *Political and economic encyclopaedia of the Soviet Union and Eastern Europe* (Longman, Londres, 1990).

Los acontecimientos más recientes se analizan en Alain Brossat y otros, *En el Este, la memoria recuperada* (Alfons el Magnànim, Valencia, 1992); Ralf Dahrendorf, *Reflections on the revolution in Europe* (Chato & Windus, Londres, 1990); Karen Dawisha y otros, *Change in Eastern Europe: Soviet interests and Western opportunities* (Atlantic Council Policy, Washington, 1989); Robert K. Furtak, *Elections in Socialist states* (Harvester-Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1990); Timothy Garton Ash, *Los frutos de la adversidad* (Planeta, Barcelona, 1992) y *We the people: the revolution of '89* (Granta, Londres, 1990); Misha Glenny, *The rebirth of history* (Penguin, Harmondsworth, 1990); Manuel Leguineche, *La primavera del Este* (Plaza y Janés-Cambio 16, Barcelona, 1990); The Observer, *Tearing down the curtain: the people's revolution in Eastern Europe* (Hodder & Stoughton/New English Library, Londres, 1990); Yves Plasseraud, *Les nouvelles démocraties d'Europe centrale* (Montchrestien, París, 1991); Mariló Ruiz de Elvira y Carlo Pelanda (dirs.), *Europa se reencuentra* (El País-Aguilar, Madrid, 1991); Jacques Rupnik, *L'autre Europe* (Odile Jacob, París, 1990); Américo Saldivar, *El ocaso del socialismo* (Siglo XXI, México, 1990); David Selbourne, *Death of the dark hero: Eastern Europe 1987-1990* (Jonathan Cape, Londres, 1990), y Hermann Tertsch, *La venganza de la historia* (El País-Aguilar, Madrid, 1993). Puede consultarse también el monográfico «La transición en la Europa del Este», en *Cuadernos de historia contemporánea* (Complutense, Madrid, 1993). Por los procesos de reforma se interesan Josef M. van Brabant, *Economic Integration in Eastern Europe* (Harvester Wheatsheaf, Nueva York, 1989); Elemér Hankiss, *East European alternatives* (Oxford University, Oxford, 1990); I. Jeffries, *A guide to the Socialist economies* (Routledge, Londres, 1990); K. Petkov y J.E.M. Thirkell, *Labour relations in Eastern Europe* (Routledge, Londres, 1990), y Stephen White, Judy Batt y Paul G. Lewis, *Developments in East European politics* (Macmillan, Londres, 1993).

LA UNIÓN SOVIÉTICA Y EL TERCER MUNDO

La naturaleza de la política exterior de la Unión Soviética ha suscitado siempre las opiniones más encontradas. Mientras para unos fue en todo momento una política expansionista, para otros eran las tensiones internas y la necesidad de hacer frente a un omnipresente enemigo externo las que guiaban los movimientos soviéticos. Si para unos los objetivos de la URSS eran poco menos que ilimitados y globales, para otros apenas acertaban a ocultar su modestia y contención. Mientras que para unos, en suma, la ideología era el elemento definitorio de sus rasgos más fundamentales, para otros eran intereses mucho más prosaicos, y entre ellos los económicos, los que daban cuenta de la mayor parte de las decisiones de las sucesivas direcciones soviéticas.

A interpretaciones tan dispares se suma hoy la posibilidad de mirar con diferentes ojos, y con diferentes estados de ánimo, los términos de la política exterior soviética de la segunda mitad de los ochenta. Aunque no es difícil identificar su rasgo más básico —un evidente repliegue sobre los problemas internos, a los que pasaron a supeditarse todos los demás—, hay que convenir que las distintas áreas de manifestación del «nuevo pensamiento» permitían aproximaciones diversas. Así, y siempre con respecto al período acotado, las relaciones de la URSS con los estados capitalistas desarrollados exhibieron por parte de la primera una notoria flexibilidad que permitió el florecimiento de lazos más estables y predictibles que los característicos de etapas pasadas. En su

designio de mejorar las relaciones con los EE UU y con las restantes potencias capitalistas, la Unión Soviética alentó la vía del acuerdo y para ello realizó un sinfín de concesiones, de las que las conversaciones sobre control de armamentos y el tratamiento de la crisis del golfo Pérsico, en 1990-1991, fueron buena ilustración.

Si el papel propiciador de la distensión asumido por la URSS en esas relaciones fue innegable, otro tanto se debe decir del carácter concesivo de la política desplegada en lo relativo a los estados miembros de su bloque económico y militar. Al amparo de una conciencia creciente de que los términos de la situación habían cambiado irremisiblemente, la ambigüedad y la indefinición fueron desapareciendo. Bien que a regañadientes, la URSS acabó por aceptar la entronización de gobiernos que, aunque menos fieles, mostraban un mayor grado de legitimación popular, y buscó con vigor la firma de acuerdos internacionales que mitigasen los efectos de una situación no precisamente caracterizada por la estabilidad.

Aunque, a la luz de lo dicho, bien podemos concluir que la Unión Soviética fue la que primero impulsó la distensión entre las grandes potencias y estamos obligados a reconocer su voluntad de encarar con espíritu abierto los problemas de los estados miembros de su bloque, no parece que nuestro juicio sobre sus relaciones con los países más pobres pueda ser, en cambio, complaciente. El Tercer Mundo perdió relieve en una política, la soviética, presta a reducir cargas económicas y a atenuar solidaridades ideológicas. Economización y desideologización son palabras clave para entender el entramado de relaciones que la URSS intentó impulsar en un Tercer Mundo en el que también se estaban diluyendo, de su parte, políticas agresivas y expansionistas. El realismo más crudo y la busca de los beneficios más directos —basta con pensar en la actitud soviética ante la tensiones en el golfo Pérsico— apuntaban de forma visible a una creciente integración de la URSS en las estructuras y en las políticas de los países más ricos del planeta.

Es cualquier cosa menos fácil acometer una descripción de los términos de la relación histórica de la Unión Soviética con el Tercer Mundo. La precariedad de las informaciones constituye, con mucho, la causa fundamental de la debilidad de nuestro conocimiento; pensemos, por ejemplo, que datos esenciales para la comprensión de esa relación, como los que se refieren a ayuda económica y exportaciones de armas, siguen sin ser accesibles, con las consecuencias que cabe suponer.

Sean como sean las cosas, un intento de periodización de la política desarrollada por la URSS en el Tercer Mundo con posterioridad a la segunda guerra mundial invita a identificar una etapa inicial, concluida en 1955, en la que a duras penas se puede hablar de un «diseño estratégico» de esa política. Entre 1945 y 1955, los únicos avatares que sirven a nuestro relato tenían por escenario países fronterizos con la URSS —Corea del Norte, China— que asistían al triunfo de movimientos de liberación desplegados en clave «comunista». A partir de 1955, y por efecto de la aceleración del proceso descolonizador y de la aparición consiguiente de nuevos estados, la Unión Soviética estrechó los lazos con unos pocos países del Tercer Mundo entre los que se encontraban Indonesia, la India —la relación más estable de cuantas mantuvo la URSS—, Irak, Siria, Egipto, Argelia y Ghana. El «mundo socialista» inauguraba una política de apoyo y solidaridad que tenía su manifestación estelar en el proyecto de construcción de la presa de Asuán, en Egipto. Aunque se podía hablar ya de un intento implícito de «romper el cerco» que Occidente había urdido al concluir la segunda guerra mundial, en estos primeros años las relaciones con el Tercer Mundo tenían, en el caso de la URSS como en el de sus aliados de la Europa central y oriental, una importancia menor.

En la primera mitad de los sesenta el panorama cambió de

la mano del triunfo de la revolución cubana y de una política de retórico sostenimiento de las reivindicaciones de los países más pobres, en particular tras la celebración, en 1964, de la reunión inuagural de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (CNUCED o UNCTAD). Entre ese año y 1976 las relaciones de la URSS con el Tercer Mundo experimentaron un notorio auge, impulsadas en particular por el proceso de liberación de las antiguas colonias portuguesas. Bien es cierto que en 1973 la URSS no pudo evitar la defección del que durante mucho tiempo había sido su principal pilar en el Tercer Mundo, el Egipto de Nasser, que acompañó en su «cambio de bando», con unos años de retraso, a Indonesia.

El año 1976 configuró otro momento clave, no en vano tomaron cuerpo entonces de forma evidente, y por vez primera, muchas de las tendencias de las que después nos ocuparemos. En ese año, con motivo de la IV Conferencia de la CNUCED, celebrada en Nairobi, la URSS inició un progresivo alejamiento con respecto a las posturas que reivindicaban un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). Al mismo tiempo se ocupó de establecer claras diferencias entre los «estados socialistas», merecedores de ayuda y jerarquizados conforme a complejos criterios, y los restantes países del Tercer Mundo. A partir de 1976 se inició, en suma, un proceso de «economización» de relaciones que adquirió pleno vigor en 1985, cuando hizo irrupción el «nuevo pensamiento».

El sistema resultante

Al margen de una perspectiva cronológica, y dejando de lado una sola excepción —la de Afganistán—, la política de la URSS en el sur del planeta se caracterizó por una relativa prudencia, sólo traducida en «intervenciones» allí donde éstas apenas originaban problemas, allí donde la «parte

rival» estaba en retirada o allí donde se había hecho sentir una visible llamada de ayuda formulada por un país o un movimiento amigo. El compromiso militar de la URSS siempre fue moderado, hasta el punto de que —de nuevo con la excepción afgana— no es posible documentar acciones de guerra en las que las fuerzas armadas soviéticas hicieran acto de presencia.

La escasa influencia en las decisiones adoptadas por los países y los movimientos amigos es, con mucho, el rasgo más significativo de los lazos establecidos por la URSS en el Tercer Mundo. Los ejemplos al respecto son numerosos: pensemos en las defecciones de Egipto e Indonesia, en las sucesivas intervenciones de Siria en el Líbano, en los ataques asestados por Irak a Irán y Kuwait, en la política independiente desplegada por el gobierno afgano antes de la invasión de 1979 o en la firma de un pacto de no agresión realizada por Mozambique y Suráfrica en 1984. La invasión de Camboya por Vietnam y el envío, relativamente unilateral, de tropas cubanas a Angola son otros ejemplos de actuaciones independientes, poco respetuosas de los criterios e intereses defendidos por la URSS. La precariedad del sistema de bases a disposición de la Unión Soviética es una ilustración más de la desconfianza que ésta suscitaba en muchos gobiernos que los servicios de inteligencia occidentales calificaban de «títeres» de Moscú.

Por lo que se refiere a la economía, en algunos casos se verificó lo que podríamos llamar una «traducción» mimética del sistema soviético —nacionalizaciones, planificación central, desviación de recursos hacia la industria pesada...—, con muy escasa consideración de las condiciones locales. En otros, por el contrario, la URSS exhibió cierto respeto para con formas organizativas que bien poco tenían que ver con su modelo y menos aún con la instauración de un «sistema socialista». Los aliados de la URSS importaron, de cualquier modo, muchos de los problemas característicos de la economía soviética, en forma de burocratización, ineficacia,

despilfarro... Bien es cierto, naturalmente, que este proceso se vio acelerado y consolidado por agresiones externas y sangrientas guerras civiles. Tuvo como escenario, por lo demás, países que debían encarar gravísimos obstáculos derivados de la dependencia exterior, la debilidad de las estructuras estatales, la ausencia de fuentes internas de acumulación o la existencia de problemas nacionales irresueltos. Todo ello multiplicó las dificultades para competir con el mundo capitalista en el terreno comercial y para desarrollar, en suma, un sistema económico supraestatal con perspectivas de futuro.

A estas consideraciones generales hay que agregar una de carácter más particular: la que nos invita a recordar que en sus relaciones con el Tercer Mundo la Unión Soviética siempre estableció ciertas jerarquías y privilegios. Así, Cuba, Vietnam y Mongolia, miembros todos del Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAEM o Comecon), disfrutaron de ventajas diversas. En un segundo estadio, unos pocos países —Afganistán, Angola, Etiopía, Mozambique y Yemen del Sur— algún partido le sacaron a su condición de observadores en el seno del CAEM. Las facilidades de que dispusieron, en un tercer escalón, otros «estados revolucionarios», como Nicaragua o Laos, fueron sensiblemente menores. En los tres grados de esta jerarquía, la percepción soviética de la naturaleza de las relaciones desarrolladas no parecía hacer, sin embargo, demasiados distingos: en todos los casos los lazos generaron una poderosa rémora económica para la URSS que, como decíamos antes, apenas extrajo beneficios en el ámbito de la influencia política o en el de la presencia militar.

Un nuevo enfoque teórico

A partir de los primeros años setenta se hizo notar en la Unión Soviética una nueva percepción de la naturaleza del Tercer Mundo y, con ella, la reivindicación, inicialmente

soterrada, de un cambio en las relaciones que la URSS debía mantener con los países más pobres. El cuestionamiento de la política desplegada desde la segunda guerra mundial fue, por consiguiente, bastante anterior —un decenio— a la llegada al poder de una dirección reformista en la Unión Soviética.

El Tercer Mundo perdió visiblemente relieve en el nuevo enfoque teórico de las relaciones internacionales. Los textos oficiales le prestaban una atención cada vez menor, y otro tanto sucedía con las referencias a los movimientos revolucionarios y los estados radicales. Por todas partes ganaba terreno la idea de un mundo interdependiente en el que la resolución de los grandes problemas (desarrollo económico, ecología, urbanización...) reclamaba la adopción de un enfoque de cooperación; como consecuencia de éste, los bloques otrora enfrentados estaban llamados, si no a diluirse, sí al menos a mitigar sus tensiones. En todos los ámbitos se hacía sentir un esfuerzo de reducción de diferencias que se traducía, por ejemplo, en la reivindicación de una división internacional del trabajo sin adjetivos frente a las postulaciones tradicionales, que reclamaban una «división *socialista* internacional del trabajo».

Los textos soviéticos exhibían, por otra parte, una menor confianza en las posibilidades de instauración de sistemas «socialistas» en el Tercer Mundo. Uno de los *leitmotive* de la reflexión de Karen Brutents, cabeza visible de muchas de estas teorizaciones, era el escepticismo ante la posibilidad de identificar instituciones socialistas genuinas en los estados más pobres. En paralelo, los estudiosos parecían atribuirle al capitalismo una menor responsabilidad en la gestación y consolidación de los problemas del Tercer Mundo, en adelante más relacionados con fuentes locales de tensión y factores de cariz nacional o religioso. Los procesos de cambio en un buen número de antiguas colonias no eran ya, como en el pasado, el reflejo de un irresistible ascenso socialista, y sí el producto de una mucho más neutra e «imparable transformación económica».

Si en una primera instancia se había impuesto la reivindicación de un único modelo de desarrollo —el «socialista»—, a partir de los setenta se abrió camino la postulación de modelos diversos. Iniciada ya una era de reformas, el programa del PCUS aprobado en 1986 asumió explícitamente que no todos los estados «en vías de desarrollo» debían seguir el camino socialista, al tiempo que empleaba el término «países liberados» en lo que parecía una mención a un período clausurado. Los textos oficiales subrayaban, por lo demás, la existencia de perspectivas de acción común —sobre la base de los principios de «igualdad» y «ventaja mutua»— con los estados del Tercer Mundo que discurrían por la vía capitalista y exhibían modelos económicos mixtos y «economías multiestructurales»; en éstas parecían llamadas a desempeñar un papel de relieve no sólo la propiedad privada y el mercado, sino, eventualmente, las propias corporaciones transnacionales.

La distinción entre un capitalismo «nacional», benigno, y otro «dependiente», aderezado con todos los estigmas de las teorizaciones del pasado, permitía afrontar el que en un terreno más prosaico era, en último término, el objetivo de los cambios de percepción descritos. Con el designio de acometer un repliegue sobre sus problemas internos, en adelante la URSS puso el acento en su precaria situación económica, subrayó que la mejor ayuda que podía dispensar a los países pobres no era otra que la que se derivaba de la modernización de su propia economía y sustituyó la solidaridad económica y militar del pasado, nunca excesiva, por muestras de «profunda simpatía».

En 1983 esta forma de ver las cosas se hizo manifiesta por vez primera no ya en textos de especialistas, sino en los labios del propio secretario general del PCUS, Yurii Andrópov, quien señalaba: «Colaboraremos en el desarrollo económico de los estados progresistas en la medida de nuestras posibilidades. Pero en lo sustancial ese desarrollo, como el progreso social de esos países, sólo puede ser el resultado del

trabajo de sus pueblos y de una política correcta por parte de sus líderes».[1] La misma perspectiva se hizo sentir en junio de 1985 en un discurso de Gorbachov ante el Comité Central del PCUS; el secretario general se apoyó entonces en Lenin, quien, según su punto de vista, había sostenido que el socialismo debía ejercer influencia en el resto del mundo a través de sus logros económicos. El programa aprobado por el Congreso del PCUS celebrado en 1986 apuntaba, en suma, que «cada pueblo crea su base material y técnica para construir una nueva sociedad principalmente a través de sus propios esfuerzos».[2]

La era de Gorbachov

Como ya dijimos, la primera consecuencia de los cambios en la política exterior soviética en lo que respecta al Tercer Mundo fue una creciente economización de todas las relaciones, que hundía sus raíces en los años postreros de la era brezhneviana. En adelante, y al amparo del escudo retórico configurado por los principios de «igualdad» y «ventaja mutua», la URSS procedió a establecer, con carácter universal, un régimen de relaciones comerciales más duro. Los tipos de interés de los créditos concedidos no dejaron de crecer al tiempo que se reducían los períodos de gracia y devolución, se multiplicaban las dificultades para firmar acuerdos de compensación o se apremiaba el pago en divisas fuertes. La URSS impuso, por otra parte, significativas restricciones al envío de bienes y materias primas de cotización internacional —muy en particular petróleo— y mostró algunas reticencias en lo relativo a la adquisición de determinados

[1] Cit. en Fred Halliday y Maxine Molyneux, «The Soviet Union and the Ethiopian revolution», en *Third World Affairs 1986* (Third World Foundation, Londres, 1986), pág. 187.

[2] «Programa del Partido Comunista de la Unión Soviética», en *Paz y socialismo* (nº 9, 553, Praga, 1986), pág. 69.

productos —el azúcar cubano, por ejemplo— con precios superiores a los vigentes en los mercados mundiales.

El efecto final de estas medidas fue, naturalmente, una reducción en la ayuda de la URSS a los estados más pobres. En el pasado el volumen de esa ayuda había sido objeto de estimaciones diversas. Así, mientras las fuentes oficiales soviéticas la evaluaban en un 1,3% del producto interior bruto, cálculos occidentales rebajaban su valor porcentual a un 0,09-0,16 de esa misma magnitud. Dada la penuria de información y la relativa complejidad del asunto —la asistencia técnica era sin duda significativa, las subvenciones y rebajas en los precios de productos importados y exportados ocasionaban problemas adicionales, la ayuda militar era las más de las veces incalculable—, la estimación de los flujos resultaba, como puede suponerse, difícil. Como quiera que fueren las cosas, la ayuda soviética no estuvo exenta de trabas: orientada exclusivamente a empresas públicas, su foco de concentración parecen haberlo sido las actividades extractivas y de transportes, y no el sector industrial (esta circunstancia bien puede invitarnos a concluir que la URSS procuró satisfacer, por encima de todo, sus propios intereses, y no los del país objeto de la cooperación). Otros factores, como las dificultades de adaptación a economías anteriormente dependientes de tecnología nipona o norteamericana, la ausencia de mecanismos de ayuda no estatal —en la URSS no existía equivalente alguno de las organizaciones no gubernamentales— y la desaceleración económica interna, ejercieron también, con certeza, una presión obstructora. Aspecto de relieve fue, por último, la extrema concentración de los flujos que nos ocupan, orientados visiblemente hacia los estados miembros del CAEM, los países vecinos y algunos productores de materias primas. En los primeros años 80, el 85% de la ayuda económica soviética se concentraba en seis países: Mongolia, Vietnam, Laos, Camboya, Afganistán y Cuba. La URSS, que no proporcionaba asistencia a estados políticamente no afectos, tampoco participaba, por lo demás, en programas internacionales de ayuda.

Las características del nuevo régimen de relaciones económicas con el Tercer Mundo que la URSS se ocupaba en instaurar eran, en resumen, las siguientes: (i) sin que pueda hablarse de un abandono abierto de los estados aliados, sí que hay que hacerlo de una reducción de los vínculos, acompañada por lo general de cierta presión para que los fondos de ayuda fuesen utilizados con un mayor criterio económico. Aunque los países más solventes en los pagos, y los poseedores de materias primas y divisas fuertes, disfrutaban de mayores privilegios, la jerarquía de relaciones a la que antes nos referimos parecía conservar parte de su peso; (ii) las posibilidades de admisión de nuevos aliados comerciales en el seno de un moribundo CAEM estaban cerradas desde hacía más de un decenio (en 1978 le había sido denegada a Mozambique su solicitud de admisión en el citado organismo); (iii) la URSS buscaba de manera evidente la apertura a mercados «desideologizados», y en particular al configurado por los «nuevos países industrializados». Estos últimos ofrecían perspectivas muy halagüeñas para el comercio soviético: no eran una carga económica, disponían de tecnologías, materias primas o divisas fuertes, y difícilmente podían convertirse en causa de conflicto con los EE UU u otras potencias capitalistas. Los que en la jerga soviética antes eran «centros subimperialistas» también estaban interesados en las posibilidades comerciales que se abrían con las reformas en la URSS (eran, de hecho, los únicos países del «Tercer Mundo» que habían acometido operaciones de inversión y de constitución de empresas mixtas); (iv) en el caso de la URSS era visible el alejamiento con respecto a las tesis que, impulsadas por algunos miembros del «movimiento de no alineados», reclamaban la instauración de un NOEI. Al margen de las declaraciones retóricas —como las que periódicamente se ocupaban del problema de la deuda—, las discrepancias soviéticas no remitían, como en el pasado, a un recelo suscitado por unas demandas que también tenían por destinataria a la URSS: había que hablar, antes bien, de

una progresiva aceptación de las posiciones defendidas por el Norte desarrollado en perjuicio del Sur subdesarrollado; (v) en estrecha relación con lo anterior, la URSS se aprestaba a aceptar en muy diversos foros las reglas de juego características de los mercados internacionales. Buena cuenta de ello la daban sus reforzados vínculos con instancias de decisión económica (la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por ejemplo) y su evidente aproximación al Fondo Monetario Internacional o al GATT.

En otro ámbito, aunque las relaciones militares entre la URSS y un buen número de países del Tercer Mundo en modo alguno pueden reducirse a las exportaciones de armas por parte de la primera —pensemos en el arrendamiento de bases, el envío de asesores o la firma de pactos de defensa mutua—, habrá que convenir que aquéllas tenían una importancia crucial para vendedor y adquirentes. Conviene recordar que en la etapa de *perestroika* no faltaron propuestas soviéticas, y alguna medida de carácter unilateral, que apuntaban a una reducción de la presencia militar de la URSS en el Tercer Mundo.

En 1989 el primer exportador de armas del planeta era la Unión Soviética, que corría a cargo de un 36,6% del volumen mundial de transacciones (a los EE UU le correspondía un 33,8%). En ese mismo año, su cuota de mercado en lo que respecta a las exportaciones que tenían por destino el Tercer Mundo era todavía mayor: un 51,8%. Es verdad, sin embargo, que en 1990 y 1991 la crisis del Golfo benefició relativamente a los Estados Unidos en este terreno, como en tantos otros. De cualquier forma, y según una estimación, un 15% del total de las exportaciones soviéticas, y un 50% de las dirigidas al Tercer Mundo, correspondía a armas, que, por efecto del descenso operado en los precios del petróleo, ejercían un papel de primera importancia. En la segunda mitad de los ochenta las armas proporcionaban entre un 10 y un 15% de las divisas fuertes ingresadas por la economía soviética, frente al 3% registrado en los primeros años setenta.

También en lo que atañe a las exportaciones de armas se verificó durante la *perestroika* un ostensible endurecimiento en las condiciones de pago —casi un 80% de las transacciones pasaron a realizarse en divisas fuertes—, acompañado por lo general de un apremio creciente para que aquél se hiciese efectivo. No faltó tampoco una progresiva apertura a nuevos y «desideologizados» mercados, en los que llegado el caso se aspiraba a colocar dispositivos que incorporaban tecnologías más avanzadas que las entregadas a los propios aliados. El ejemplo de la India, que en 1988 arrendó —lo mencionamos en su momento— un submarino soviético de propulsión nuclear, es uno entre otros. Kuwait, Jordania e Irán, países nada sospechosos de afinidades ideológicas con Moscú, suscribieron importantes contratos de adquisición de armas, y no fueron pocos los estados del Tercer Mundo que consiguieron misiles balísticos de fabricación soviética. En esta misma rúbrica hay que incluir las frecuentes exhibiciones públicas del caza MiG-29 en certámenes celebrados en países como Francia y el Reino Unido. Debe hablarse, en resumen, de una extensión al comercio de armas del principio de economización de relaciones al que varias veces se ha hecho mención. A esa extensión no eran ajenas, naturalmente, las dificultades que la URSS encontraba para garantizar el pago de las deudas contraídas por países como Libia o Siria.

El nuevo marco político

El durante varios años ministro de Asuntos Exteriores soviético, Edvard Shevardnadze, recurrió en repetidas ocasiones a una fórmula para describir el régimen de vínculos interestatales que la URSS pareció alentar durante la *perestroika*: «Separar cuidadosamente las diferencias ideológicas de las relaciones entre estados».[3] Efectos inmediatos de esta

[3] *Pravda* (31 de julio de 1985).

toma de posición fueron la aceptación del principio de no ingerencia y el rechazo del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales («Estamos firmemente convencidos de que es inútil e inadmisible alentar la revolución desde el exterior, y mucho menos por medios militares», en palabras de Gorbachov[4]).

Uno de los primeros signos de esta forma de encarar los problemas fue, sin duda, la presión que la URSS ejerció para acelerar la resolución de algunos conflictos regionales. Baste con citar al respecto los nombres de Afganistán, Camboya o el África austral. Si por un lado la nueva actitud soviética reflejaba una conciencia creciente en lo relativo al hecho de que los instrumentos militares no proporcionaban unas relaciones estables y duraderas, por el otro no era difícil adivinar en los movimientos de la URSS una secuencia de prioridades en la que la mejora de las relaciones con potencias rivales —los Estados Unidos, China— primaba sobre la resolución de los elementos «locales», por lo general los más profundos, de los conflictos. Llegada la hora de encarar el sinfín de enfrentamientos que tenían por escenario el sur del continente africano, por ejemplo, la URSS parecía haber puesto todo lo que estaba en su mano para tranquilizar a los EE UU, de tal suerte que su presión a la hora de acelerar la retirada del contingente cubano presente en Angola fue significativamente mayor que la ejercida para resolver el problema de fondo que explicaba todas las tensiones presentes en la área: la política de *apartheid* desarrollada por el gobierno surafricano.

Acaso es lo anterior lo que explica que los acuerdos alcanzados presentasen numerosas quiebras —partes marginadas, flecos sin completar, precariedad de los planes económicos de reconstrucción, ausencia de restricciones significativas al envío de armas...— que por fuerza condicionaban

[4] Mijaíl Gorbachov, *Informe político del Comité Central del PCUS al XXVII Congreso del Partido* (Nóvosti, Moscú, 1986), pág. 15.

sus resultados. En un buen número de casos, y en particular en el de Afganistán, parecía más adecuado hablar de «reconversión» de los conflictos que de una genuina «resolución». Naturalmente que para dar cuenta de estas limitaciones es obligado recordar que las mayores responsabilidades al respecto no recaían sobre la Unión Soviética, y sí sobre unos Estados Unidos empeñados en llevar adelante por medios diversos un designio expansionista.

En estrecha relación con los procesos de resolución de conflictos, en la etapa de *perestroika* la URSS reforzó ostensiblemente el papel de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, en lo que con frecuencia fue interpretado como el triunfo de un enfoque multilateral, opuesto al unilateralismo característico de tiempos pasados. Es obligado llamar la atención de nuevo, sin embargo, sobre la inevitable carga retórica de la mayoría de los movimientos soviéticos; así, la posición adoptada en relación con el conflicto del Golfo no hacía sino poner de manifiesto la extrema debilidad de la URSS y su renuncia a asumir actitudes contestatarias frente al «señor de la guerra» norteamericano. Aparte lo anterior, y al tiempo que la Unión Soviética procuraba ampliar sus relaciones diplomáticas (y comerciales) con un buen número de países antes proscritos, era evidente el debilitamiento de los vínculos con «partidos de vanguardia», movimientos de liberación nacional y otras formaciones de carácter radical. La busca de una homologación internacional se revelaba, por lo demás, a través de medidas diversas, como el pago de las cuotas adeudadas a Naciones Unidas, la firma de acuerdos de represión del narcotráfico o la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica tras el accidente de la central nuclear de Chernóbil.

Los cambios en la política de la URSS con respecto al Tercer Mundo, y en la propia percepción soviética de lo que este último significaba, fueron tan rápidos que no es fácil discernir, en ellos, lo provisional y lo definitivo. Sean como sean las cosas, no parece precipitado afirmar que en el

momento de su disolución la Unión Soviética estaba lejos de ser una potencia agresiva y expansionista. Vistas las cosas, sin embargo, desde otra atalaya, hay que convenir que eran muchos los datos que ilustraban una progresiva homologación y connivencia de la URSS con los países capitalistas desarrollados. Aunque la política postrera de la Unión Soviética era probablemente más realista que la de tiempos pasados, también reflejaba de manera inequívoca un interés cada vez menor por los problemas y las miserias de los más pobres de los habitantes del planeta.

BIBLIOGRAFÍA

Son muchas las monografías que se ocupan, con carácter general, de la relación de la Unión Soviética con el Tercer Mundo. Citemos entre ellas los libros de Roy Allison, *The Soviet Union and the strategy of non-alignment in the Third World* (Cambridge University, Cambridge, 1988); Robert Cassen (dir.), *Soviet interests in the Third World* (SAGE, Londres, 1985); J. Feuchtwanger (dir.), *The Soviet Union and the Third World* (Macmillan, Londres, 1981); Mark N. Katz, *The Soviets and Third World marxism* (Cambridge University, Cambridge, 1990); Mark N. Katz, Andrzej Korbonski y Francis Fukuyama (dirs.), *The Soviet Union and the Third World* (Cornell University, Ithaca-Londres, 1987); Zaki Laïdi, *L'URSS vue du Tiers Monde* (Karthala, París, 1984); Rajan Menon, *Soviet power and the Third World* (Yale University, New Haven-Londres, 1986), y Carol R. Saivetz y Sylvia Woodby, *Soviet-Third World relations* (Westview, Boulder, 1985).

Más centrados en los conflictos bélicos están los trabajos de Hélène Carrère d'Encausse, *Ni paix ni guerre* (Flammarion, París, 1986); Galia Golan, *The Soviet Union and national liberation movements in the Third World* (Unwin Hyman, Boston, 1988); Stephen T. Hosmer y Thomas W. Wolfe, *Soviet policy and practice toward Third World conflicts* (Lexington, Lexington, 1983), y Bruce D. Porter,. *The USSR in Third World conflicts* (Cambridge University, Nueva York, 1984). Por las relaciones estrictamente económicas y su tratamiento se interesan las obras de Quintin V.S. Bach, *Soviet economic assistance to the less developed countries* (Clarendon, Oxford, 1987); Marie Lavigne (dir.), *Les rélations Est-Sud dans l'économie mondiale* (Economica, París, 1986); Brigitte H. Schulz y William W. Hansen, *The Soviet bloc and the Third World: the political economy of East-South relations* (Westview, Boulder, 1989), y Elizabeth K. Valkenier, *The Soviet Union and the Third World: an economic bind* (Praeger, Nueva York, 1993).

Algunos estudios sobre escenarios concretos son los de Robert O. Freedman, *Soviet policy toward Israel under Gorbachev* (Praeger, Nueva York, 1991); Fred Halliday, *Threat from the East? Soviet policy from Afghanistan and Iran to the horn of Africa* (Penguin, Harmondsworth, 1982); Zaki Laïdi, *Les contraintes d'une rivalité. Les superpuissances et l'Afrique (1960-1985)* (La découverte, París, 1986); Jacques Levesque, *L'URSS en Afghanistan* (Complexe, Bruselas, 1990); Dominique Meurs y Pascal Charpentier, *Projection économique de l'URSS en Asie du Sud-Ouest* (CIRPES, París, 1985); Nicola Miller, *Soviet relations with*

Latin America, 1959-1987 (Cambridge University, Cambridge, 1989); Amin Saikal y William Maley (dirs.), *The Soviet withdrawal from Afghanistan* (Cambridge University, Cambridge, 1989), y Gerald Segal, *The Soviet Union in East Asia* (Heinemann, Londres, 1983).

LA CRISIS ECOLÓGICA CONTEMPORÁNEA

La Europa central y oriental está bien lejos de Río y del espíritu que la humanidad más consciente intentó hacer valer, mediado 1992 y con escaso éxito, en la ciudad brasileña. Las fuerzas políticas en ascenso en esa área del planeta parecen haber decidido una vez más que los ingentes problemas que atenazan a sus países reclaman de un nuevo esfuerzo productivista y depredador. Sus proyectos presentes, y los augurios para el futuro, hablan de una peculiarísima combinación entre una creciente dependencia externa y la preservación de la miseria y de las escisiones sociales legadas por los viejos sistemas burocráticos. Con un capitalismo hipersalvaje que se extiende por doquier, las agresiones ambientales iniciadas decenios atrás están recibiendo una formidable ratificación por parte de los nuevos gobernantes, poco preocupados por el legado que se aprestan a entregar a las generaciones venideras.

Entre tanto el «mercado», o al menos lo que por tal se entiende en las calles y se vislumbra en el horizonte, no parece el instrumento más adecuado para resolver los problemas, inmediatos o lejanos. Con su búsqueda indiscriminada de mayores beneficios, idolatrando siempre el «crecimiento» y separando lo «económico» de lo «político», el mercado congenia difícilmente con la ecología. Aparte de no constituir en modo alguno una garantía de vigor democrático y de alentar situaciones de alarmante desigualdad, el crecimiento económico, que es a la postre el único objetivo de las reformas en

curso —poco atentas a externalidades y calidades de vida—, debe acelerar los procesos de degradación.

Por añadidura, en un futuro inmediato la Europa central y oriental puede convertirse en el escenario de un nuevo imperialismo ecológico cuyos efectos vendrían a sumarse a los de varias décadas de agresiones. La avanzadilla de industrias contaminantes y almacenes de residuos está haciendo sentir ya su presencia de la mano de sutiles procedimientos de exportación de las tensiones ambientales. Éstos y otros factores hacen difícil comprender la situación ecológica de un espacio en el que gigantescos complejos contaminantes y formidables esquilmamientos de recursos se dan la mano con un proceso de activa «tercermundización» de la mayoría de las relaciones.

Sistemas de tipo soviético e idealización del «desarrollo de las fuerzas productivas»

Las concepciones tradicionales de Marx habían conducido casi siempre a una descripción del capitalismo como inequívoca fuente de progreso y se habían traducido, en consecuencia, en el rechazo de cualquier vía de transformación que no transcurriese por el «desarrollo de las fuerzas productivas» en clave capitalista. El grueso de la reflexión del «Marx maduro» señalaba que una «revolución socialista» sólo podía tener por escenario países que habían alcanzado cierto desarrollo de las fuerzas productivas y que exhibían, por tanto, una presencia vigorosa de burgueses y proletarios. Cuanto menos se hiciese sentir el influjo de estos factores, menores serían también las posibilidades de instauración del socialismo. En toda la crítica de la economía política de Marx rezumaba el legado de una ciencia económica que tan sólo le prestaba atención a la producción, sin ocuparse de la forma en que ésta se desarrollaba, y al trabajo, con independencia de la actividad en que se plasmaba. Marx consideraba

«buenos en sí el desarrollo de las fuerzas productivas y la concentración económica originados por el capitalismo, con el reverso de esta última: una mayor concentración de poder y un reforzamiento de la autoridad y del estado».[1]

De ajustarnos a las percepciones «desarrollistas» del Marx maduro, obligado es reconocer que la Rusia de la segunda década del siglo XX no era el teatro adecuado para la construcción de una sociedad socialista. Y ello tanto más cuanto que, si se trata de reforzar las relaciones de los revolucionarios rusos con el pensamiento de Marx, hay que recordar que ignoraban una buena parte de las concepciones postreras de este último, propicias a aceptar otras vías de desarrollo, menos «industrialistas» y «productivistas», en el caso ruso. Los dirigentes bolcheviques tampoco fueron extremadamente cautelosos, por cierto, a la hora de trasladar a un nuevo escenario las reflexiones marxianas, centradas en los capitalismos británico y alemán de la segunda mitad del siglo pasado; muy al contrario, las acataron de manera cuasiliteral, descartando relecturas o adaptaciones. Conscientes del atraso de su país, y de las rémoras que para un proyecto socialista de él se derivaban, acabaron por poner en práctica una estrategia en la que, de forma premeditada o no, la disciplina férrea de un partido se propuso acelerar de manera artificial el desarrollo y crear rápidamente las condiciones «productivas» para la aparición de un sistema socialista.

Así las cosas —y nunca está de más recordar que la presión exterior fortaleció este proceso—, las fórmulas de organización jerarquizada propias de la clandestinidad recibieron en 1917 un nuevo respaldo, esta vez al amparo de un reto industrializador que reclamaba la consolidación de un estado no menos autoritario. La triunfante opción leniniana no sólo truncó las perspectivas de asentamiento de un modelo «burgués-capitalista», que hubiera permitido un «desarrollo natural» de

[1] Aulo Casamayor, «Sobre el significado actual de ciencia marxista y la ética bakuniniana de la revolución», en *Archipiélago* (nº 4, 1990), pág. 27.

tria pesada y por un hiperdesarrollado sector
ıtraban su contrapeso en el bajísimo nivel de
oblación pauperizada que no podía por menos
su descontento. El significativo y rápido creci-
ómico se veía acompañado de un uso irracional
que con el tiempo se demostraron escasos. La
de nuevas tecnologías se hizo cada vez más
ɔ hasta el punto de que la URSS vio cómo se
desfase tecnológico con respecto a los países
lados. En los hechos, parece que la experiencia
sistema soviético invita a modificar la formula-
lerivada del pensamiento del «Marx maduro»: a
n tradicional —la instauración del socialismo
anterioridad cierto grado de desarrollo de las
uctivas— se le opone la que viene a subrayar
guración de una sociedad justa, libre, igual y
ge, antes bien, un autocontrolado refrenamiento
llo de esas fuerzas.

lógica contemporánea

legado más dramático de los sistemas burocrá-
onfigurado por un conjunto de agresiones am-
ɔbablemente irreversibles. El sistema soviético
ıácter centralizador, apostó por un crecimiento
uantitativo, privilegió un desmesurado y despil-
ırrollo industrial y, en fin, alentó algunas de las
órmulas de producción por la producción que ha
planeta. Quienes, entre tanto, llamaban la aten-
a gigantesca agresión ambiental en curso eran
os como «burgueses reaccionarios» alejados del
ɔlucionario de las masas. En palabras de Istvan
:emas burocráticos «se propusieron aplastar la
ara construir sobre sus ruinas una segunda natu-
cto de la acción consciente de los hombres del

BIBLIOGRAFÍA

Reflexiones de carácter general sobre el significado de lo ocurrido en los últimos años en la Europa central y oriental son los libros de Robin Blackburn (dir.), *Después de la caída* (Crítica, Barcelona, 1993); Alex Callinicos, *The revenge of history* (Polity, Cambridge, 1991); Frederic J. Fleron, Jr. y Erik P. Hoffmann (dirs.), *Methodology and empirical theory in sovietology* (Westview, Boulder, 1993); Jeffrey C. Goldfarb, *Beyond glasnost. The Post-totalitarian mind* (University of Chicago, Chicago, 1989) y *After the fall* (Basic, Nueva York, 1992); Agnes Heller y Ferenc Fehér, *El péndulo de la modernidad* (Península, Barcelona, 1994), y Jacques Lesourne y Bernard Lecomte, *Después del comunismo* (Arias Montano, Madrid, 1991). Las repercusiones de la crisis sobre una parte de la izquierda occidental se estudian en las monografías de Joan Barth Urban (dir.), *Moscow and the global left in the Gorbachev era* (Cornell University, Ithaca-Londres, 1992); D.S. Bell (dir.), *Western European communists and the collapse of communism* (Berg, Oxford, 1993), y G. Vacca, *Gorbaciov e la sinistra europea* (Riuniti, Roma, 1989).

El peso de la herencia histórica se estudia en libros como los de Jacques Baynac, *La révolution gorbatchévienne* (Gallimard, París, 1988); Hélène Carrère d'Encausse, *La malheur russe* (Fayard, París, 1988); Geoffrey Hosking, *The awakening of the Soviet Union* (Heinemann, Londres, 1990); Moshe Lewin, *The Gorbachev phenomenon* (University of California, Berkeley, 1988); Catherine Merridale y Chris Ward (dirs.), *The historical perspective. Perestroika* (Edward Arnold, Londres, 1991), y VV AA, *Problemas centrales de la historia rusa y soviética* (Nauka, Moscú, 1990).

Algunas prospecciones sobre el futuro se encontrarán en los textos de Benjamín Bastida, *La revolución del Este* (Cristianisme i Justícia, Barcelona, 1991); Alain Gélédan (dir.), *Quel avenir économique à l'Est?* (Le monde, París, 1992); Roland Lew (dir.), *Une dernière chance à l'Est?* (Vie ouvrière-L'Harmattan, Bruselas, 1989); Marie Lavigne (dir.), *Capitalismes à l'Est* (Economica, París, 1994); Jacques Nagels, *Du socialisme perverti au capitalisme sauvage* (Université de Bruxelles, Bruselas, 1991) y *La tiersmondisation de l'ex-URSS* (Université de Bruxelles, Bruselas, 1993), y Jacques Sapir, *Adiós al sistema soviético* (Acento, Madrid, 1993).

PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS

ABM: *anti ballistic missile* (sistema de protección frente a misiles balísticos)
CAEM: Consejo de Ayuda Económica Mutua
CC: Comité Central
CDP: Congreso de Diputados Populares
CE: Comunidad Europea
CEI: Comunidad de Estados Independientes
ECyO: Europa central y oriental
FNI: fuerzas nucleares de alcance intermedio
FR: Federación Rusa
ICBM: *intercontinental ballistic missile* (misil balístico intercontinental)
I&D: investigación y desarrollo
IDE: Iniciativa de Defensa Estratégica
KGB: *Komitet Gosudárstvenni Bezopásnosti* (Comité de Seguridad del Estado
MIRV: *multiple independent reentry vehicles* (vehículos de reentrada múltiple con blancos independientes)
NOEI: Nuevo Orden Económico Internacional
NP: Nuevo pensamiento
PCUS: Partido Comunista de la Unión Soviética
RDA: República Democrática Alemana
RFA: República Federal de Alemania
SALT: *Strategic Arms Limitation Talks* (Conversaciones de limitación de armas estratégicas)

SLCM: *submarine launched cruise missile* (misil de crucero de lanzamiento submarino)
SS: Soviet Supremo
START: *Strategic Arms Reduction Talks* (Conversaciones de reducción de armas estratégicas)
TNP: Tratado de No Proliferación Nuclear
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Nota introductoria 9
Cronología 13

I PARTE 21
La crisis del sistema soviético 23
Los primeros años de la *perestroika* (1985-1989) 75
La quiebra de la alquimia gorbachoviana (1990-1991) 111
El golpe de agosto de 1991 y sus consecuencias 151
La Federación Rusa como estado independiente ... 173
La desintegración de la URSS: política exterior y fuerzas armadas 213

II PARTE 253
¿Qué fue el «nuevo pensamiento»? 255
El control de armamentos y sus mitos 275
La Unión Soviética y la Europa central y oriental .. 295
La Unión Soviética y el Tercer Mundo 319
La crisis ecológica contemporánea 337

III PARTE 355
Una conclusión general 357

Principales abreviaturas utilizadas 375